



UNIVERSIDAD DE CUENCA

**Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales**

**Carrera de Derecho**

**Los argumentos interpretativos utilizados en las reglas  
jurisprudenciales emitidas por la primera Corte  
Constitucional del Ecuador**

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  
Abogado de los Tribunales de Justicia de la República y  
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales

**Autor:**

Sebastián Santiago Cañizares Cevallos

CI: 0105672596

Correo electrónico: sebas\_cani2604@hotmail.com

**Director:**

PhD. Julio Teodoro Verdugo Silva

CI: 0301697280

**Cuenca - Ecuador**

**17 de Agosto de 2020**

## RESUMEN

La motivación de las decisiones judiciales ha adquirido especial relevancia en las sociedades democráticas modernas. Al motivar sus fallos, los órganos judiciales interpretan las disposiciones jurídicas en las cuales sustentan su decisión y justifican esta interpretación mediante argumentos que, debido a esta utilidad, se denominan interpretativos. A causa de tal relevancia, la Constitución del 2008 dispuso que los jueces están obligados a motivar sus decisiones.

Por otra parte, dicho cuerpo normativo también creó la Corte Constitucional, máximo órgano de control e interpretación de la Constitución facultado a expedir, mediante sentencias, reglas jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento. En un país de tradición jurídica civilista como el Ecuador, esta atribución generó una transformación de las fuentes del ordenamiento jurídico sin precedente.

En virtud de lo expuesto, la presente investigación identifica los argumentos interpretativos que la primera Corte Constitucional del Ecuador utilizó en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales. Para ello, se exponen las concepciones y tipologías sobre los argumentos interpretativos de Robert Alexy, Neil MacCormick y Giovanni Tarello; se registran los argumentos interpretativos expresados por el citado órgano jurisdiccional en las sentencias señaladas según la concepción y tipología formulada por Tarello; y, finalmente, se determina la frecuencia con que fueron utilizados los diferentes argumentos interpretativos.

En general, esta investigación halló que, en las sentencias objeto de examen, la primera Corte Constitucional utilizó un total de 263 argumentos interpretativos para motivar sus atribuciones de significado a disposiciones jurídicas, siendo los argumentos sistemático, autoritativo y a partir de los principios los empleados con mayor frecuencia.

**Palabras clave:** Argumentos interpretativos. Corte Constitucional del Ecuador. Reglas jurisprudenciales. Interpretación jurídica.

## ABSTRACT

The motivation of judicial decisions in modern democratic societies has acquired special relevance. Motivating their judgements, the judges interpret the legal texts (sentences) that support their decision and justify this interpretation by arguments called interpretative for this utility. Because of such relevance, the Constitution of 2008 established that judges are obligated to motivate their decisions.

On the other hand, the Constitution of 2008 also created the Constitutional Court, the highest body for the control and interpretation of the Constitution, which is allowed to issue, by judgments, jurisprudential rules. In a country with a civil law tradition such as Ecuador, this faculty generated an unprecedented transformation of the sources of the legal system.

Therefore, this research identifies the interpretative arguments that the first Constitutional Court of Ecuador used in the judgments that contain jurisprudential rules. In consequence, the author exposes the conceptions and typologies of the interpretative arguments formulated by the law philosophers Robert Alexy, Neil MacCormick and Giovanni Tarello; registers the interpretative arguments expressed by the Constitutional Court in the indicated sentences according to the conception and typology formulated by Tarello; and, finally, determines the uses frequency of the interpretative arguments.

In general, this research found that, in the judgments under review, the first Constitutional Court of Ecuador employed 263 interpretive arguments to motivate its attributions of meaning to legal texts, and the most used arguments were the systematic argument, authoritative argument and argument from principles.

**Key words:** Interpretative arguments. Constitutional Court of Ecuador. Jurisprudential rules. Legal interpretation.



## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I: ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS.....	13
1.1 Argumentos interpretativos: Introducción.....	13
1.2 Alexy y los argumentos interpretativos .....	14
1.2.1 Argumento semántico .....	16
1.2.2 Argumento genético .....	17
1.2.3 Argumento histórico .....	18
1.2.4 Argumentos comparativos .....	18
1.2.5 Argumento sistemático.....	18
1.2.6 Argumento teleológico .....	19
1.2.7 Jerarquía entre argumentos .....	19
1.3 MacCormick y los argumentos interpretativos .....	20
1.3.1 Argumentos lingüísticos .....	22
1.3.2 Argumentos sistémicos .....	23
1.3.3 Argumentos teleológicos/deontológicos .....	25
1.3.4 Conflictos entre argumentos interpretativos .....	26
1.4 Tarello y los argumentos interpretativos .....	27
1.4.1 Introducción: derecho y lenguaje .....	28
1.4.2 Interpretación jurídica («interpretación en el derecho»).....	33
1.4.3 Disposición vs. Norma .....	39
1.4.4 Variedad de intérpretes.....	41
1.4.5 Interpretación y argumentación .....	43
1.4.6 Argumentos interpretativos .....	43
1.4.6.1 Argumento <i>a contrario</i> .....	44
1.4.6.2 Argumento analógico.....	45
1.4.6.3 Argumento <i>a fortiori</i> .....	46
1.4.6.4 Argumento de la completitud de la disciplina jurídica.....	47
1.4.6.5 Argumento de la coherencia de la disciplina jurídica .....	47
1.4.6.6 Argumento psicológico .....	48
1.4.6.7 Argumento histórico.....	49
1.4.6.8 Argumento apagógico .....	50



1.4.6.9 Argumento teleológico .....	51
1.4.6.10 Argumento económico .....	51
1.4.6.11 Argumento autoritativo.....	52
1.4.6.12 Argumento sistemático .....	52
1.4.6.13 Argumento naturalista .....	54
1.4.6.14 Argumento equitativo.....	55
1.4.6.15 Argumento a partir de los principios .....	55
1.5 Semejanzas y diferencias entre las concepciones y tipologías de argumentos interpretativos examinadas.....	56
<b>CAPÍTULO II: REGLAS JURISPRUDENCIALES Y ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS .....</b>	<b>58</b>
2.1 Constitución y reglas jurisprudenciales.....	58
2.2 Reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional .....	60
2.3 Análisis de sentencias e identificación de argumentos interpretativos .....	61
2.3.1 Acción extraordinaria de protección .....	62
2.3.1.1 Sentencia N.° 0016-13-SEP-CC .....	62
2.3.1.2 Sentencia N.° 045-13-SEP-CC .....	67
2.3.1.3 Sentencia N.° 080-13-SEP-CC .....	70
2.3.1.4 Sentencia N.° 102-13-SEP-CC .....	74
2.3.1.5 Sentencia N.° 029-14-SEP-CC .....	78
2.3.1.6 Sentencia N.° 110-14-SEP-CC .....	80
2.3.1.7 Sentencia N.° 113-14-SEP-CC .....	84
2.3.1.8 Sentencia N.° 071-15-SEP-CC .....	87
2.3.1.9 Sentencia N.° 182-15-SEP-CC .....	90
2.3.1.10 Sentencia N.° 239-15-SEP-CC .....	94
2.3.1.11 Sentencia N.° 265-15-SEP-CC .....	98
2.3.2 Acción por incumplimiento .....	101
2.3.2.1 Sentencia N.° 004-13-SAN-CC.....	101
2.3.3 Acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales	103
2.3.3.1 Sentencia N.° 024-15-SIS-CC .....	103
2.3.4 Consulta popular .....	104
2.3.4.1 Dictamen N.° 001-13-DCP-CC .....	104
2.3.5 Consulta de norma.....	105



2.3.5.1 Sentencia N.º 001-13-SCN-CC.....	105
2.3.5.2 Sentencia N.º 034-13-SCN-CC.....	106
2.3.5.3 Sentencia N.º 002-14-SCN-CC.....	111
2.3.5.4 Sentencia N.º 003-15-SCN-CC.....	112
2.3.6 Precedente jurisprudencial obligatorio .....	117
2.3.6.1 Sentencia N.º 001-14-PJO-CC .....	117
CAPÍTULO III: ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS: FRECUENCIA Y SIMILITUDES .....	121
3.1 Sentencias que contienen reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional y sus argumentos interpretativos.....	121
3.2 Frecuencia de uso de los argumentos interpretativos.....	127
3.3 Promedios sobre el uso de los argumentos interpretativos.....	131
3.4 Similitudes entre las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales según los argumentos interpretativos usados .....	136
CONCLUSIONES .....	138
BIBLIOGRAFÍA.....	141





### Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

---

Sebastián Santiago Cañizares Cevallos, en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Los argumentos interpretativos utilizados en las reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional del Ecuador”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 17 de agosto de 2020

Sebastián Santiago Cañizares Cevallos

C.I.: 0105672596



### Cláusula de Propiedad Intelectual

---

Sebastián Santiago Cañizares Cevallos, autor del trabajo de titulación "Los argumentos interpretativos utilizados en las reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional del Ecuador", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 17 de agosto de 2020

---

Sebastián Santiago Cañizares Cevallos

C.I.: 0105672596





## **DEDICATORIA**

*A mis padres, por su inacabable apoyo y amor sin los cuales no existiría, por su paciencia y ternura con que me han formado, por ser los guías de mi camino. Quien soy es por ustedes.*

*A mi hermana y mis sobrinos, por alegrarme los días y mostrarme lo hermoso de las pequeñas cosas de la vida.*

*A toda mi familia, por estar presentes y ofrecer su cariño en cada etapa de mi vida. Yo vengo de ustedes.*

*Al amor de mi vida, por ser el sustento, la inspiración y la felicidad de mis días.*



## **AGRADECIMIENTOS**

*A Flavia Deidán, amor de mi vida, por su apoyo emocional y técnico en el curso de mi carrera universitaria y, especialmente, en la elaboración de esta investigación.  
Sin su ayuda no lo habría logrado.*

*Al Doctor Teodoro Verdugo, por su conocimiento compartido, por la confianza ofrecida, por su guía académica constante, en fin, por ser mi maestro y amigo a lo largo de mi carrera universitaria.*

*A mi querida Universidad de Cuenca y a mis maestros, por formarme como profesional y persona.*

*A mis compañeros de clase y a mis amigos Patricio Moncayo, Miguel Ángel Lascano y Guillermo Andrade, por apoyarme y brindarme alegría cada día en la facultad.*

## INTRODUCCIÓN

A partir de la Constitución del 2008, la Corte Constitucional del Ecuador se convirtió en el máximo órgano de control e interpretación de la *norma normarum* ecuatoriana. Según el artículo 436, numerales 1 y 6, de dicho cuerpo normativo, es facultad del mencionado órgano jurisdiccional expedir reglas jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento respecto de las diversas garantías jurisdiccionales y procedimientos constitucionales sometidos a su conocimiento. Esta atribución generó una transformación de las fuentes del ordenamiento jurídico ecuatoriano sin precedente pues la potestad de regular conductas, en países de tradición jurídica civilista como el nuestro, podía ser ejercida exclusivamente por el órgano legislativo. En ejercicio de tal facultad, la primera Corte Constitucional (cuyo período fue noviembre 2012 – noviembre 2015) emitió 20 sentencias que contienen reglas jurisprudenciales.

Por otro lado, el artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución impone a los órganos jurisdiccionales y servidores públicos en general la obligación de motivar sus resoluciones. En consecuencia, la Corte Constitucional, al emitir reglas jurisprudenciales, debe expresar los motivos que justifican su decisión. En efecto, dicho órgano resuelve conflictos y proporciona argumentos que sustentan su fallo y son expuestos en el producto de su actividad decisoria (sea una sentencia, resolución, dictamen, etc.). En el desarrollo de dicha actividad, la Corte Constitucional interpreta las disposiciones jurídicas y atribuye a ellas un significado que justifique su decisión del caso. Esta justificación se efectúa a través de una diversidad de argumentos denominados interpretativos, los cuales han sido objeto de la reflexión iusfilosófica contemporánea ya que presentan similitudes formales que permiten registrarlos, clasificarlos y analizarlos. Así, los argumentos interpretativos son los razonamientos formulados por los intérpretes para motivar las atribuciones de significado a disposiciones jurídicas.

En virtud de lo expuesto, la presente investigación pretende identificar cuáles fueron los argumentos interpretativos que la primera Corte Constitucional utilizó al expedir sus reglas jurisprudenciales, es decir, registrar los diversos tipos de razonamientos que dicho órgano jurisdiccional expresó para justificar los significados que otorgó a las disposiciones jurídicas en los cuales fundamentó su decisión del caso en aquellas sentencias y dictámenes que contienen reglas jurisprudenciales.

Para la consecución del citado objetivo, primeramente se exponen las concepciones y tipologías sobre los argumentos interpretativos de los iusfilósofos Robert Alexy, Neil MacCormick y Giovanni Tarello. Así, se identifican brevemente las teorías de la interpretación jurídica formuladas por dichos juristas pues estas son el fundamento de sus respectivas concepciones sobre los argumentos interpretativos, y, posteriormente, se detalla cada uno de los argumentos que dichos iusfilósofos consideran que son empleados por los operadores jurídicos para justificar las interpretaciones de las disposiciones jurídicas.

En segundo lugar, se registran los argumentos interpretativos expresados por la primera Corte Constitucional en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales. Para ello, se adopta como marco teórico la concepción y tipología de argumentos interpretativos enunciada por Tarello, se delimita el citado grupo de sentencias a examinar, se elabora un breve resumen de cada caso, se identifica la disposición o disposiciones interpretadas en la resolución de los problemas jurídicos determinados por la Corte Constitucional para decidir el caso y la correspondiente



atribución de significado a dichas disposiciones, y, finalmente, se registran los argumentos interpretativos utilizados para motivar dicha atribución de significado.

Finalmente, se determina la frecuencia con la que fueron utilizados los argumentos interpretativos por la primera Corte Constitucional en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales. Así, se muestran los argumentos identificados en cada sentencia examinada, se establecen los argumentos mayormente usados por el órgano jurisdiccional citado, y, posteriormente, se señalan las similitudes entre las distintas sentencias según los argumentos interpretativos empleados en cada una de ellas.

## CAPÍTULO I: ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS

### 1.1 Argumentos interpretativos: Introducción

En las sociedades democráticas modernas ha adquirido especial relevancia la motivación de las decisiones judiciales y las resoluciones de los poderes públicos. La motivación es considerada una garantía fundamental cuyo propósito es asegurar a las personas que, en cualquier proceso (sea judicial o administrativo) en que estén involucradas, las autoridades emplearán argumentos que conduzcan a una decisión fundamentada en el derecho y no en su arbitrariedad.

En consecuencia, motivar consiste en ofrecer argumentos que justifiquen<sup>1</sup> lo manifestado. En este sentido, los órganos jurisdiccionales y administrativos resuelven conflictos en base a disposiciones del derecho y proporcionan argumentos que sustentan su fallo o resolución, los cuales son expuestos en el producto de su actividad decisoria (sea una sentencia, resolución, dictamen, etc.).

En el ejercicio de tales actividades, los órganos mencionados interpretan las disposiciones jurídicas que consideran aplicables al caso y en las que sustentan su decisión. La motivación, precisamente, se caracteriza por estar fundamentada en el derecho. Para justificar esta interpretación, las autoridades emplean argumentos que, debido a esta utilidad, se denominan interpretativos. En suma, las autoridades ofrecen razonamientos cuyo propósito es acreditar una determinada interpretación de una disposición que fundamenta su decisión del conflicto jurídico sometido a su conocimiento.

Por esta importancia en la motivación, los argumentos interpretativos han sido objeto de estudio por diversos juristas. Entre los principales resaltan Robert Alexy, Neil MacCormick y Giovanni Tarello. Los dos primeros estudiosos son destacados exponentes de la teoría estándar de la argumentación jurídica y sus concepciones de los argumentos interpretativos, así como sus planteamientos filosófico-jurídicos en general, han dominado el debate iusfilosófico en Occidente desde finales del siglo XX. Por su parte, Tarello es considerado el fundador de la reconocida «Escuela de Génova»<sup>2</sup> y su concepción y tipología de los argumentos interpretativos ha tenido considerable influencia en diversos filósofos del derecho como Perelman<sup>3</sup>, Ezquiaga<sup>4</sup>, Casanovas y Moreso<sup>5</sup>, entre otros (Atienza, 2013).

---

<sup>1</sup> Ello debido a que las decisiones jurídicas no deben ser explicadas (indicar cuales han sido las causas – psicológicas, sociológicas, etc.- que han conducido a un juzgador a determinada decisión) sino justificadas (manifestar las razones o argumentos que facultan considerar a una decisión como aceptable o justificada, ya sea formal o materialmente) (Atienza, 2007)

<sup>2</sup> A esta escuela pertenecen filósofos del derecho importantes como Riccardo Guastini, Silvana Castignone, Paolo Comanducci, Pierluigi Chiassoni, Mauro Barberis, entre otros.

<sup>3</sup> Véase Perelman, C. (1979). *La lógica jurídica y la nueva retórica*. Madrid: Editorial Civitas. En esta obra Perelman recoge a cabalidad el análisis de los argumentos interpretativos efectuado por Tarello. Cabe recalcar que Perelman es considerado uno de los más grandes teóricos modernos de la argumentación.

<sup>4</sup> Véase Ezquiaga, J. (2006). *La argumentación en la justicia constitucional y otros problemas de aplicación e interpretación del derecho*. Ciudad de México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

<sup>5</sup> Véase Casanovas, P., & Moreso, J. (1998). *Argumentación y Pragmática del Derecho*. Barcelona: EDIUOC. Así también Moreso, J. (2006). *Lógica, argumentación e interpretación en el derecho*. Barcelona: EDIUOC.



## 1.2 Alexy y los argumentos interpretativos

Para comprender la concepción sobre los argumentos interpretativos de Robert Alexy es conveniente identificar previamente los aspectos claves de su teoría de la interpretación jurídica.

Alexy parte de la distinción entre tres sentidos del término interpretación: amplísimo, amplio y estricto. El primero hace referencia a la comprensión general de los objetos vinculados a un sentido. El segundo consiste únicamente en el entendimiento de expresiones lingüísticas, el cual puede ser directo, cuando dichas expresiones son comprendidas sin dudas ni cuestionamientos, o indirecto, cuando en el proceso de entendimiento surgen dudas y preguntas a resolver. El tercero se refiere a la existencia de diversas lecturas de una expresión lingüística y a la resolución de la incertidumbre sobre cuál de ellas es la correcta. (como se cita en Klatt, 2017)

De estas tres acepciones, la interpretación en sentido estricto es la clave de la interpretación jurídica pues esta última radica en resolver las dudas sobre el significado de una norma jurídica mediante argumentos que fundamenten<sup>6</sup> la elección de uno de sus posibles significados (como se cita en Klatt, 2017). Por tanto, el intérprete, en primer momento, determina la existencia de vacilaciones sobre el significado de una norma jurídica por la pluralidad de comprensiones que esta permite y, en segundo lugar, solventa dichas incertidumbres por medio de razones que justifiquen la preferencia de un significado sobre los demás. El elemento característico de la interpretación jurídica es la aparición de diversas lecturas de una misma norma jurídica.

Esta concepción de la interpretación jurídica está íntimamente relacionada con la distinción entre casos simples y complicados. Los primeros son aquellos en que es suficiente recurrir a un silogismo jurídico para justificar una decisión o cuestión jurídica. Este silogismo consiste en subsumir una situación fáctica (premisa menor o fáctica) en el supuesto de hecho de una norma jurídica (premisa mayor o normativa) para obtener de esta la consecuencia jurídica (conclusión) aplicable al caso.<sup>7</sup> Verbigracia, los ecuatorianos deben promover el bien común (premisa mayor); el señor X es ecuatoriano (premisa menor); el señor X debe promover el bien común (conclusión). En este tipo de casos no existen dudas o controversias que cuestionen las premisas usadas para inferir la conclusión; y, en consecuencia, se resuelven en el ámbito de la justificación interna. Esta última constituye la exigencia de que la decisión de un caso se siga lógicamente de las premisas que se alegan como

---

<sup>6</sup> Alexy (2007) usa como sinónimos los términos justificar y fundamentar. Ambos significan ofrecer razones frente a una duda u objeción. Además, en cada fundamentación o justificación de un hablante está inmersa una pretensión de corrección, es decir, la consideración de que lo que afirma es correcto, o, en otras palabras, la intención de que el juicio que expresa es necesariamente válido para cualquiera.

<sup>7</sup> Según Alexy (2007), la forma lógica del silogismo es: · (1) (x) (Tx → ORx); · (2) Ta; (3) ORa. «x» representa una variable de individuo que puede ser una persona natural o jurídica; «a» es una constante de individuo, por ejemplo, un nombre propio; «T» constituye un predicado que representa el supuesto de hecho de la norma en cuanto propiedad de personas; «R» representa un predicado que expresa lo que debe hacer el destinatario de la norma, «O» es un operador deóntico que significa es “obligatorio que...”; «1» es la premisa mayor; «2» representa la premisa menor; «3» constituye la conclusión del silogismo; «·» indica que se trata de una premisa. Por tanto, la notación lógica debe leerse: (premisa mayor) si un individuo, sea persona natural o jurídica, presenta la propiedad y entonces debe hacer la acción z; (premisa menor) Juan es un individuo que presenta la propiedad y; (conclusión) Juan debe hacer la acción z.

fundamentación.<sup>8</sup> Por tanto, si la consecuencia ha sido inferida en forma lógica y válida<sup>9</sup> de las premisas, como en el ejemplo citado, la decisión estaría justificada internamente. (Alexy, 2007)

Por otra parte, los casos complicados son aquellos en que: (a) la formulación de la norma aplicable al asunto admite diversas interpretaciones, (b) el supuesto de hecho de la norma contiene varias propiedades alternativas, (c) la aplicación de la norma requiere de otras que sean aclarativas, limitativas o extensivas, o (d) las consecuencias jurídicas posibles de una norma son diversas. En este tipo de casos existen dudas y discusiones sobre las premisas que han de intervenir en el silogismo jurídico y, por ello, no cabe efectuarlo directamente sino recurrir previamente a la justificación externa. Esta última consiste en la fundamentación de dichas premisas, esto es, proponer razones para que las premisas ya no sean (o sean en el menor grado posible) discutibles. (Alexy, 2007)

Una muestra de caso complicado es la siguiente: X inicia un proceso penal contra Z ya que, presuntamente, este ha matado a su propia esposa mientras ella dormía. El juez del caso considera que la norma «El asesino será sancionado con pena de cadena perpetua» es aplicable por las siguientes razones: (a) según la misma norma, es asesino quien ha matado alevosamente a otra persona; (b) con arreglo a la jurisprudencia, mata alevosamente quien se aprovecha conscientemente de la buena fe de la víctima para matarla; (c) esto último, según la jurisprudencia, ocurre si el autor del delito mata a una persona que no espera ser atacada y tiene escasas probabilidades de defenderse; (d) una persona que está dormida no espera ser atacada y tiene escasas probabilidades de defenderse. En relación con los hechos del caso, las pruebas practicadas demuestran que Z mató a su cónyuge cuando ella dormía. Finalmente, el juez concluye que Z será sancionado con pena de cadena perpetua. (Alexy, 2007)

En este ejemplo es posible advertir que la aplicación del silogismo jurídico es útil para resolver el caso aunque insuficiente<sup>10</sup>. Es útil ya que exhibe, de forma sintetizada, que la conclusión a la que el juez ha arribado se deduce válidamente de las premisas. Sin embargo, por sí sola es insuficiente pues no demuestra las consideraciones del juez bajo las cuales ha establecido las premisas utilizadas en el silogismo. Por ello, antes de aplicar este último el juez tuvo que fundamentar el uso de la norma «El asesino será sancionado con pena de cadena perpetua» como premisa mayor o normativa mediante un conjunto de razones (a, b, c y d) que permitan considerar como asesino a quien mata a una persona dormida. Solo tras efectuar tal justificación y comprobar los hechos del caso (premisa menor o fáctica), el juez pudo inferir válidamente como

---

<sup>8</sup> La justificación interna es la aplicación al campo jurídico del principio de universalidad y el principio de justicia formal. El primero consiste en que toda persona únicamente puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que, habiéndolos afirmado en determinadas situaciones, también afirmaría en todas las situaciones que sean iguales en todos los aspectos relevantes. El segundo es una concreción del primero y prescribe tratar de la misma manera a todos los seres de una misma categoría, es decir, tratar igual a lo igual. (Alexy, 2007)

<sup>9</sup> El criterio para determinar la validez de una conclusión es el *modus ponendo ponens* (modo que afirma afirmando): regla de inferencia según la cual si un condicional (Si *p*, entonces *q*) y su antecedente (*p*) son tomados como premisas, el consecuente (*q*) puede ser inferido como conclusión (Ferrater Mora, 1965).

<sup>10</sup> La aplicación de un simple silogismo jurídico sería el siguiente: (premisa mayor) el asesino será sancionado con la pena de cadena perpetua; (premisa menor) Z es asesino; (conclusión) Z será sancionado con la pena de cadena perpetua.

conclusión que Z debía ser sancionado con la pena prevista por la norma. Sin explicitar tales consideraciones, el paso de las premisas a la conclusión habría sido lógicamente inválido<sup>11</sup>.

En este contexto aparecen los cánones de la interpretación (o argumentos interpretativos). Estos constituyen recursos a disponibilidad del intérprete para justificar la premisa mayor del silogismo y su función consiste en fundamentar una determinada interpretación de una norma<sup>12</sup>. Como se señaló *ut supra*, en los casos complicados se presentan diversas interpretaciones de una norma. Estas controversias sobre el significado de una expresión jurídica se solucionan por medio de los argumentos interpretativos pues estos permiten al intérprete ofrecer razones que sustentan la interpretación que considera correcta. Existen seis tipos de argumentos interpretativos: semántico, genético, teleológico, histórico, comparativo y sistemático. (Alexy, 2007)

### 1.2.1 Argumento semántico

El argumento semántico es utilizado para justificar, criticar o afirmar como posible, con referencia al uso del lenguaje, una interpretación de una norma (Alexy, 2007). El intérprete apela al significado de las palabras que componen una norma jurídica con el objetivo de proponer un determinado significado de esta última; y utiliza como medio para tal finalidad las reglas de uso de las palabras que rigen en una comunidad lingüística.

Las reglas de uso de las palabras son aquellas que versan sobre el significado de tales expresiones y la forma en que estas son utilizadas en un entorno específico. Dichas reglas pueden entenderse como especificaciones o determinaciones de un lenguaje (Alexy, 2007). La especificación de un lenguaje o su determinación son actividades completamente distintas: mientras la primera consiste en identificar empíricamente (en los hechos) el significado de una expresión en consideración de cómo esta última es efectivamente empleada; la segunda radica en establecer el significado de una expresión (Klatt, 2017).

En el argumento semántico, las reglas de uso de las palabras deben entenderse únicamente como especificaciones del lenguaje natural o de un lenguaje técnico, especialmente el de la jurisprudencia. Muestras de ello son las razones (b) y (c) del ejemplo de caso complicado detallado en el apartado anterior. En consecuencia, no existe ningún argumento semántico si dichas reglas suponen una determinación de los lenguajes mencionados ya que tal determinación no se fundamenta en un uso existente. (Alexy, 2007)

---

<sup>11</sup> Así: (premisa mayor) El asesino será sancionado con la pena de cadena perpetua; (premisa menor) Z ha matado a su cónyuge mientras ella dormía; (conclusión) Z será sancionado con la pena de cadena perpetua. Como es posible advertir, la premisa menor no puede subsumirse en el supuesto de hecho de la premisa mayor porque esta última, tal como está formulada, nada dice sobre una persona que mata a otra mientras duerme.

<sup>12</sup> Alexy (2007) propone la siguiente forma básica de justificación interna para discutir la estructura lógica de los cánones de la interpretación (o argumentos interpretativos): · (1)  $(Tx \rightarrow ORx) (R)$ ; · (2)  $(Mx \rightarrow Tx) (W)$ ; · (3)  $Ma$ ; (4)  $ORa$ . R es la norma jurídica a interpretar, W es la regla de uso de las palabras y «M» representa una característica del predicado «T». A partir de R y W se sigue la norma concreta  $R': (2') (x) (Mx \rightarrow ORx)$ . Por tanto, R' puede designarse como «Interpretación de R a través de W».

Los argumentos semánticos poseen tres usos y, por ende, tres formas: (a) para la justificación de una interpretación se emplea la forma: la interpretación A de una norma N debe aceptarse en base a la regla de uso W; (b) para la crítica de una interpretación, se utiliza la forma: la interpretación A de una norma N debe rechazarse en base a la regla de uso X; y, (c) para la exposición de las posibilidades de interpretación, se recurre a la forma: la interpretación A de una norma N puede ser aceptada, según la regla de uso W, o rechazada, de conformidad con la regla de uso X, pues no rigen ninguna de las dos reglas. (Alexy, 2007)

Las formas (a) y (b) son suficientes para justificar una decisión jurídica si, al reconocer la validez de las reglas de uso W o X respectivamente, se establece que la norma N es o no aplicable a un individuo. Para fundamentar la validez de las reglas de uso de las palabras, el intérprete puede recurrir a la autoridad de los diccionarios, invocar sus propias competencias lingüísticas, apelar a estudios empíricos sobre el uso del lenguaje. Por su parte, la forma (c) es insuficiente para justificar por sí sola una decisión pues la interpretación semántica admite dos interpretaciones opuestas e incapaces de prevalecer sobre la otra. Este inconveniente no puede ser resuelto mediante una especificación del lenguaje, sino por medio de una determinación fundamentada en otros argumentos interpretativos. (Alexy, 2007)

### 1.2.2 Argumento genético

El argumento genético permite justificar una determinada interpretación de una norma jurídica mediante la apelación a la voluntad del legislador histórico (Alexy, 1995). Para determinar dicha voluntad, el intérprete puede acudir a documentos preparatorios (como actas de debate de una ley) e inferir de ellos la intención del legislador o atribuir a este último ciertos propósitos que pretendió satisfacer al promulgar una norma.

Existen dos formas fundamentales de este argumento. La primera se presenta cuando el intérprete manifiesta que su interpretación de la norma constituye el objeto directo de la voluntad del legislador. El fundamento de tal afirmación es que el intérprete considera que su propuesta de interpretación es válida pues es el deseo del legislador que la norma jurídica en cuestión se interprete en esa particular manera. En otros términos, el intérprete justifica su interpretación en que esta es la realización de lo querido por el legislador. (Alexy, 2007)

La segunda existe cuando el intérprete afirma que su interpretación de una norma jurídica es condición necesaria para la realización de ciertos fines que el legislador persiguió al promulgar dicha norma. Tal aseveración se apoya en la consideración de que es obligatorio satisfacer las finalidades pretendidas por el legislador<sup>13</sup> y, en consecuencia, si se niega un medio que permita alcanzar dichos objetivos, entonces se niega la consecución misma de estos últimos. Por tales motivos, el intérprete justifica su propuesta interpretativa en que negar una interpretación de una norma jurídica que realiza los objetivos procurados por el legislador implica transgredir la obligación de cumplir dichos propósitos. Esta forma es una variante del argumento teleológico. (Alexy, 2007)

A pesar de lo indicado, los argumentos genéticos presentan dificultades al ser empleados. Esto se debe a que la “voluntad del legislador” no es comprobable o es

---

<sup>13</sup> La principal razón para fundamentar dicha obligatoriedad es la legitimidad democrática de la que goza el legislador para promulgar normas que regulen las conductas de las personas y satisfagan ciertos objetivos considerados socialmente relevantes.

demasiado indeterminada, a saber, frecuentemente no es fácil distinguir a quién se debe considerar como sujeto de dicha voluntad ni es posible establecer con precisión el contenido de tal voluntad. Por ello, su eficacia es cuestionable. (Alexy, 1995)

### **1.2.3 Argumento histórico**

Existe un argumento histórico cuando el intérprete censura o fundamenta una determinada interpretación de una norma jurídica en base a hechos que se refieren a la historia del problema jurídico discutido (Alexy, 2007). Por tanto, existen dos formas, al menos, de este tipo de argumento: una negativa y otra positiva.

En la primera forma, el intérprete aduce, en primer lugar, que anteriormente ya se practicó una solución<sup>14</sup> al problema en cuestión y esta produjo cierto resultado indeseable; en segundo término, expone que las circunstancias del inconveniente actual con el previamente resuelto presentan similitudes que hacen probable que nuevamente se produzcan dichas consecuencias indeseables; y, en consecuencia, concluye que la solución ya practicada no debe aplicarse al problema actual (Alexy, 2007). En la segunda forma, el intérprete efectúa una argumentación similar con la diferencia que el resultado de la solución aplicada con antelación es considerado deseable y, por ende, colige que esta última si se tiene que emplear en el inconveniente presente.

Ambas formas descritas se tratan de casos de aprendizaje de la historia pues presuponen conocimientos históricos, sociológicos y económicos por parte del intérprete. Lo relevante de dichas formas es que incluyen una premisa normativa (la consecuencia derivada de la solución aplicada es, respectivamente, deseable o indeseable) que requiere ser justificada. (Alexy, 2007)

### **1.2.4 Argumentos comparativos**

Este tipo de argumentos permiten al intérprete fundamentar o excluir una interpretación de una norma jurídica en virtud de un estado de cosas jurídico de otra sociedad (Alexy, 2007). Puede presentar, siquiera, dos formas: una positiva y otra negativa.

Ambas formas siguen la misma línea de razonamiento detallado en las formas del argumento histórico y únicamente se diferencian en el ámbito espacial de aplicación de la solución: mientras en los argumentos históricos la solución al problema jurídico discutido se aplicó con anterioridad en la misma sociedad; en los argumentos comparativos la solución se empleó previamente en una sociedad distinta a aquella en la que se discute el inconveniente. (Alexy, 2007)

### **1.2.5 Argumento sistemático**

El argumento sistemático faculta al intérprete a justificar su interpretación de una norma jurídica con referencia al contexto de esta última en el texto legal o a su relación lógica o teleológica con otras normas, fines o principios (Alexy, 2007). El fundamento de este argumento es la idea de unidad o coherencia del sistema jurídico (Alexy, 1995).

---

<sup>14</sup> Entiéndase como solución una interpretación de una norma jurídica que resolvió un conflicto en el cual existió dudas sobre el significado de dicha norma.



La forma de argumento sistemático más importante es la indicación de una contradicción normativa. En esta, el intérprete afirma que debe abandonarse aquella interpretación de una norma jurídica que contradice a otra norma que debe reconocerse como válida. Por tanto, la función de esta forma es excluyente: descarta una interpretación que entra en conflicto con cualquier otra norma perteneciente al mismo sistema jurídico. La indicación de una contradicción lleva a una solución si solamente una de todas las posibles interpretaciones de una norma jurídica no está excluida por otras normas pertenecientes al mismo sistema jurídico. (Alexy, 2007)

### 1.2.6 Argumento teleológico

Existe un argumento teleológico cuando el intérprete fundamenta su interpretación de una norma jurídica según objetivos racionales o prescritos objetivamente en el contexto del sistema jurídico vigente. Para diferenciarlos de la segunda forma de argumentación genética, la cual apela a los fines perseguidos por el legislador histórico, es preferible denominar a este tipo de argumento como teleológico-objetivo<sup>15</sup> pues este no se refiere a finalidades de personas existentes en el pasado o el presente. (Alexy, 2007)

Dichos fines racionales u objetivos son aquellos que, a partir de la argumentación racional, establecerían quienes están obligados a decidir en el marco del sistema jurídico vigente. El sujeto hipotético de los fines propuestos en este tipo de argumento es la comunidad de decisores establecida en un determinado ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, las afirmaciones de los intérpretes al emplear este argumento son suposiciones sobre los fines pretendidos por dicho sujeto hipotético que deben fundamentarse en la argumentación racional. (Alexy, 2007)

Para justificar su propuesta de interpretación, el intérprete afirma, en primer lugar, que una norma jurídica o un grupo de estas prescriben como obligatorio el objetivo de alcanzar un determinado estado de cosas (por ejemplo, que una sociedad sea justa) o un suceso (verbigracia, que el Estado respete los derechos de las personas)<sup>16</sup>; en segundo término, asevera que descartar su sugerencia interpretativa de una norma jurídica implica negar la satisfacción de dicha finalidad; y, finalmente, concluye que debe aceptarse su proposición sobre el significado de la norma jurídica en cuestión. Así, la validez de esta última constituye un medio para la realización del propósito descrito. Cabe recalcar que el fin en este tipo de argumento no es querido por legislador histórico, como en la forma del argumento genético, sino inferido por el intérprete a partir de una o varias normas del ordenamiento jurídico vigente. (Alexy, 2007)

### 1.2.7 Jerarquía entre argumentos

Cada argumento descrito ut supra cumple una función específica: el argumento semántico vincula a los órganos jurisdiccionales con el tenor literal de la ley; el

---

<sup>15</sup> Esta denominación es propia de Karl Larenz (1980), quien considera que son criterios de interpretación (o argumentos interpretativos) teleológico-objetivos porque versan sobre fines objetivos del Derecho (como el aseguramiento de la paz o un procedimiento judicial justo) que condicionan la regulación en conjunto de un ordenamiento jurídico.

<sup>16</sup> Según Von Wright (1970), un estado de cosas es un tipo de hecho que responde y hace verdaderas a proposiciones que indican la existencia (ser) o la situación en que se encuentra (estar) algo, como “la población de Inglaterra es mayor que Francia”; mientras un suceso es un tipo de hecho que responde y hace verdaderas a proposiciones que versan sobre algo que tiene, tuvo o tendrá lugar, como “Bruto mató a Cesar”.

argumento genético liga a los órganos decisores con la voluntad del legislador; el argumento histórico incorpora las experiencias jurídicas del pasado; el argumento comparativo integra las vivencias de otras sociedades; el argumento sistemático sirve para resolver las incompatibilidades del sistema jurídico; y, el argumento teleológico permite el uso de argumentos prácticos racionales de tipo general. (Alexy, 2007)

En virtud de las distintas funciones, cada argumento permite justificar interpretaciones que ofrecen soluciones completamente diferentes a un mismo problema jurídico, lo cual origina el inconveniente de determinar la prevalencia de un argumento sobre otro. Este tema ha sido ampliamente debatido en la doctrina y, si bien se han propuesto diversas jerarquizaciones, ninguna de ellas es generalmente reconocida. El motivo de tal situación es que no es posible establecer un orden de prevalencia de los argumentos *a priori* y definitivo que sea aplicable a todos los casos sin conocer y examinar las particularidades de cada uno de ellos. Entonces, lo único factible es ofrecer una jerarquización provisional que aumente las posibilidades de alcanzar una decisión racional.

Con el propósito de asegurar la conexión entre las disputas interpretativas y el derecho vigente, los argumentos semánticos y genéticos deben ser *prime facie* jerárquicamente superiores y, por ende, prevalecer sobre los demás. Si un intérprete X fundamenta su interpretación de una norma jurídica en el tenor literal de esta o en la voluntad del legislador histórico, y el intérprete Y justifica su propuesta de interpretación opuesta en un estado de cosas jurídico anterior o de otra sociedad, entonces los argumentos de X deben imponerse a los de Y, a menos que este último ofrezca buenas razones que permitan considerar sus argumentos como más fuertes.<sup>17</sup> Si existe duda, los argumentos de X han de prevalecer. Finalmente, en la motivación para asignar un menor peso a los argumentos semánticos y genéticos son decisivos los argumentos prácticos de tipo general ya que los argumentos jurídicos sobre los que se discute no solucionan por sí mismos la controversia sobre la interpretación correcta de una norma jurídica. (Alexy, 2007)

### 1.3 MacCormick y los argumentos interpretativos

La concepción de Neil MacCormick sobre los argumentos interpretativos está inmersa en su teoría de la interpretación jurídica que se caracteriza por dos distinciones fundamentales que versan, respectivamente, sobre las concepciones de la interpretación y las peculiaridades de un caso.

La primera discriminación es entre “interpretación en sentido amplio” e “interpretación en sentido estricto”. La primera consiste en la aprehensión o comprensión inmediata del significado de un texto. Este acto de interpretación es la condición previa e indispensable para aplicar el Derecho. Por ejemplo, si una persona entra a un lugar, mira un letrero que dice “No smoking” y, como respuesta, apaga su cigarrillo, ella demuestra un entendimiento simple de la idea que transmite el cartel y un cumplimiento del mismo. En este caso, no se presenta duda alguna, sino que simplemente la persona aprehende el significado del texto y lo aplica. (MacCormick, 2016)

---

<sup>17</sup> Alexy (2007) sintetiza lo expuesto en la siguiente regla: “Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o a la voluntad del legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no ser que puedan aducirse motivos racionales que concedan prioridad a los otros argumentos.” (p. 342).

La “interpretación en sentido estricto” se refiere a la “consideración de alguna duda sobre el significado o la aplicación apropiada de alguna información, y a la formación de un juicio para resolver la duda escogiendo un significado que parezca el más razonable en el contexto” (MacCormick, 2016, p. 216). Así, el intérprete, en primer lugar, identifica un elemento de duda sobre el sentido o el cumplimiento adecuado de un enunciado normativo y, en segundo término, resuelve tal incertidumbre al emitir un juicio en el cual manifiesta su elección sobre el significado que, según el contexto, le parece mayormente justificado. Verbigracia, una persona ingresa a una reunión, mira un cartel que indica “No smoking” mientras ella lleva puesta un traje formal de noche (smoking en francés), surge en ella la duda sobre si el letrado prohíbe el uso de dicha vestimenta o fumar cigarrillos y, finalmente, solventa su incertidumbre al decidir que el significado del cartel es proscribir el consumo de cigarros (MacCormick, 2010).

Por tanto, el elemento distintivo entre ambas concepciones es el surgimiento de una duda sobre el significado de un texto y la resolución de esta pues existen dos o más posibles significados que pueden atribuirse a una o más palabras de una expresión.

A decir de MacCormick (2010), la “interpretación en sentido estricto” es la concepción más útil y pertinente para el estudio del razonamiento jurídico pues esta clase de interpretación es omnipresente en el derecho, especialmente en contextos de aplicación y toma de decisiones para la resolución de conflictos, como los procesos judiciales, en los cuales las partes que intervienen poseen intereses contrapuestos que buscan proteger mediante interpretaciones o lecturas rivales de un mismo texto jurídico.

La segunda distinción es entre casos claros y casos difíciles.<sup>18</sup> Los primeros son aquellos en los que la justificación de la decisión se efectúa mediante una deducción simple a partir de reglas claras. Dicha deducción es lo que comúnmente se denomina silogismo jurídico, esto es, el razonamiento que consiste en inferir una conclusión lógica a partir de una premisa mayor (o normativa) y una premisa menor (o fáctica). El ejemplo clásico es: en todo caso, si se da el supuesto de hecho  $p$ , entonces deben seguirse las consecuencias jurídicas  $q$  (premisa mayor); en el caso actual se presentan el supuesto de hecho  $p$  (premisa menor); por tanto, en el caso actual deben seguirse las consecuencias jurídicas  $q$  (conclusión). Por tanto, todo este proceso parte de una regla jurídica que requiere ser comprendida para su aplicación. En este tipo de casos interviene como premisa mayor del silogismo las llamadas reglas claras, es decir, aquellas que no generan inconvenientes al aplicarlas al caso concreto pues presentan un significado obvio<sup>19</sup>. (MacCormick, 2018)

---

<sup>18</sup> Si bien MacCormick (2018) diferencia entre casos claros y difíciles, también es enfático al señalar que no existe una línea divisoria nítida entre uno y otro y, por ello, manifiesta que es mejor considerar un espectro que va de lo obviamente simple a lo muy discutible en el que únicamente puede juzgarse vagamente sobre el punto en el cual colocar una duda sobre la interpretación, relevancia o clasificación de un caso.

<sup>19</sup> Según MacCormick (2018), las palabras tienen significados que dependen de reglas convencionales semánticas de uso lingüístico “normal” o “común”, lo cual permite atribuir a una palabra un significado “obvio” en determinado contexto. Por ejemplo, el art. 66, numeral 1, de la Constitución ecuatoriana, en adelante CRE, dispone que “no habrá pena de muerte”, expresión que posee un significado independiente (una persona no puede ser sancionada con su muerte por cometer una infracción) del uso que el constituyente efectuó de esas palabras en dicho cuerpo normativo, y es ese precisamente ese carácter independiente lo que las hace apropiadas para ser utilizadas en dicha disposición constitucional.

Los casos difíciles son aquellos en los que la justificación de la decisión presenta problemas de interpretación, clasificación<sup>20</sup> o relevancia<sup>21</sup>. Los problemas de interpretación, relacionados con el tema sub examine, surgen con la aparición de alguna duda (o dudas) sobre el significado de una regla aplicable al caso sometido a decisión de un tribunal. En un proceso judicial, por ejemplo, el demandante pretende conseguir una reparación por parte del demandado y fundamenta su petición en la regla X; sin embargo, la defensa del requerido plantea una duda sobre el significado de la regla X propuesto por el actor. Entonces, existen dos lecturas distintas sobre una misma disposición jurídica y el tribunal debe resolver esta controversia interpretativa para poder aplicar la regla X como premisa mayor del silogismo que justificará su sentencia<sup>22</sup>. (MacCormick, 2018)

Las dos diferenciaciones expuestas ut supra son relevantes ya que a partir de ellas es posible advertir que la “interpretación en sentido estricto” y los casos difíciles presentan un elemento común que los vincula: la existencia de una disputa sobre el significado de un texto jurídico. Por tanto, para resolver un caso difícil es necesario aplicar la concepción estricta de la interpretación, es decir, ante un caso en el que existen dudas sobre el sentido de una expresión jurídica se requiere formular un juicio que resuelva dicha incertidumbre.

En este contexto aparecen los argumentos interpretativos pues ellos son los juicios que permiten resolver las disputas sobre el significado de una disposición jurídica en los casos difíciles. Estos argumentos expresan, en una situación de duda, las razones que justifican la interpretación preferida de un intérprete. Su función es respaldar u oponerse a una determinada interpretación de un texto jurídico que ha sido desplegada para fundamentar una decisión. Existen tres categorías principales de argumentos interpretativos: lingüísticos, sistémicos y teleológicos/deontológicos; y cada una de ellas abarca diferentes tipos de argumentos. (MacCormick, 2010)

A más de las categorías señaladas, existe otro argumento interpretativo que consiste en apelar a la intención del autor del documento jurídico (legislador) para esclarecer su significado. El problema con la intención es su carácter ambiguo ya que puede significar o una intención objetiva atribuida a un autor, o una intención subjetiva inferida de afirmaciones de un autor. Además, en ciertas ocasiones la intención del autor puede estar ligada a referencias sobre el empleo del lenguaje, el uso de un vocablo o un enunciado en el contexto del sistema jurídico, o a los objetivos y valores perseguidos por la legislatura. Por tales motivos, la intención debe ser considerada como un elemento indeterminado que fluctúa entre las diferentes categorías de argumentos interpretativos. (MacCormick, 2016)

### 1.3.1 Argumentos lingüísticos

Son aquellos que recurren al lenguaje mismo para favorecer una de las posibles interpretaciones de un texto jurídico. Cabe señalar que este requerimiento se debe a

---

<sup>20</sup> Son aquellos que surgen cuando se discute si los hechos del caso (de los cuales no existen dudas sobre su existencia) pueden subsumirse en el supuesto de hecho de una norma jurídica (Atienza, 2005).

<sup>21</sup> Son aquellos que se refieren a la existencia de una norma jurídica aplicable al caso. Estos problemas son previos a la interpretación pues el intérprete no se plantea si se presentan dudas sobre el significado de una disposición jurídica sino si en el sistema jurídico hay una norma jurídica que regule el asunto sometido a decisión de un tribunal. (Atienza, 2005)

<sup>22</sup> Siempre y cuando el juez considere que la regla X es aplicable al caso sometido a su conocimiento.

que los distintos materiales jurídicos están escritos en un lenguaje específico (por ejemplo, las leyes ecuatorianas están redactadas en lengua española) y en los lenguajes ordinarios (naturales) las palabras son utilizadas para elaborar oraciones y textos, en este caso, jurídicos. Así, cada palabra contribuye con algo de su repertorio disponible de significados posibles a dar sentido completo a lo que se expresa (de forma oral o escrita) y, en consecuencia, el usuario de un lenguaje (o el intérprete en el campo del Derecho) infiere el significado de una oración a partir de la contribución que ofrecen todas las palabras al ser tomadas en conjunto. En este sentido, el significado de una expresión es siempre contextual y los intérpretes lo consideran al atribuir significado a términos o expresiones jurídicas. (MacCormick, 2016)

Se subdividen en: argumento del significado ordinario y argumento del significado técnico. El primero sostiene que si una disposición jurídica posee un significado obvio e inteligible, se debe interpretar aquella según el uso común del lenguaje empleado y atribuirle dicho significado. El segundo asevera que si un texto jurídico se ocupa de un tema técnico con un vocabulario especializado propio y, en este contexto, existen términos que poseen un significado ordinario y uno técnico, estos deben ser entendidos en su sentido técnico. (MacCormick, 2010)

Una muestra de lo anotado es el vocablo “tradición”, el cual en su acepción ordinaria significa una costumbre conservada por un pueblo de generación en generación, en cuanto que en su acepción técnica y jurídica significa un modo de adquirir el dominio que consiste en la entrega de una cosa por parte del tradente al adquirente. De esa manera, en la legislación ecuatoriana, especialmente civil, el término mencionado debería ser comprendido en su sentido técnico, mientras que en una charla coloquial o en cualquier documento no jurídico el significado que debería prevalecer es el ordinario.

Los argumentos de esta categoría son eficaces en discusiones interpretativas ya que, como parte del respeto que los ciudadanos deben a las autoridades legislativas, los términos utilizados por estas al emitir normas deben ser interpretados según las convenciones sintácticas y semánticas del lenguaje que ha sido empleado. Además, la utilización de argumentos lingüísticos se justifica al recurrir al principio de que el legislador debe usar el lenguaje y el ciudadano entenderlo en una forma directa y sin ambigüedades con el fin de evitar que los jueces otorguen retrospectivamente nuevos significados a los textos jurídicos en perjuicio de los ciudadanos. (MacCormick, 2016)

### **1.3.2 Argumentos sistémicos**

Son aquellos que procuran una comprensión aceptable de un texto jurídico a partir de la consideración de su contexto como parte de un sistema jurídico (MacCormick, 2016). Por tanto, el intérprete hace uso de esta clase de argumentos cuando determina el sentido de una expresión jurídica según su contexto y relación con otras disposiciones que pertenecen a un mismo sistema de normas jurídicas. Estos se subdividen en seis:

- a) El argumento de la armonización contextual consiste en que una disposición jurídica perteneciente a un esquema mayor, ya sea un cuerpo normativo o un conjunto de textos jurídicos relacionados, debe interpretarse de acuerdo a todo el esquema en que aparece. Así, las disposiciones deben ser interpretadas a la luz de otras, bien pertenezcan al mismo cuerpo normativo o a otros de la misma materia, que estén en relación más próxima, y el significado ordinario o técnico



más o menos obvio de un término tiene que interpretarse según aquello. (MacCormick, 2010)

- b) El argumento del precedente sostiene que a una disposición jurídica ya interpretada judicialmente se le debe atribuir el mismo significado que otros tribunales le han concedido anteriormente. Sin embargo, este argumento debe interpretarse de conformidad con la doctrina del precedente judicial dominante en el sistema jurídico de que se trate. (MacCormick, 2016) En el derecho anglosajón, por ejemplo, rige la doctrina del stare decisis que otorga carácter vinculante a la ratio decidendi<sup>23</sup> de las decisiones de los tribunales dictadas con anterioridad, por ellos mismos o por otros de igual o superior rango de jerarquía, que versen sobre la misma cuestión de Derecho. Por ello, en dicho sistema el argumento sub examine es más eficaz para resolver problemas interpretativos que en países de tradición jurídica romano-germánica en los que, generalmente, las decisiones judiciales tienen únicamente carácter persuasivo cuando varias de ellas forman un cuerpo permanente que sigue una misma línea interpretativa, aunque suelen poseer carácter obligatorio cuando las sentencias de los tribunales más altos reiteran una interpretación sobre un mismo punto de Derecho por determinadas ocasiones (habitualmente tres).
- c) El argumento de analogía<sup>24</sup> expresa que si una disposición jurídica es significativamente análoga a otras similares contenidas en alguna parte del mismo documento jurídico o en otros (sean leyes, códigos, etc.), debe ser interpretada de forma que asegure la similitud de sentido con la disposición análoga, ya sea que ello conlleve una extensión de su significado, la conservación de su significado ordinario o el abandono de este último. Esta interpretación puede ser de la disposición en sí misma o derivada de una interpretación judicial previa. (MacCormick, 2010)
- d) El argumento lógico-conceptual consta en interpretar un concepto jurídico general, de reconocimiento y elaboración doctrinal, que ha sido utilizado al formular una disposición jurídica de manera que se mantenga un uso consistente del mismo a lo largo del sistema jurídico en su integridad o en una o varias de sus ramas especializadas (MacCormick, 2016).
- e) El argumento de los principios generales del derecho<sup>25</sup> sostiene que se debe interpretar una disposición jurídica de conformidad con el o los principios generales que son aplicables al asunto que esta regula (MacCormick, 2010). En consecuencia, si se presentan diversas interpretaciones de una expresión jurídica, debe favorecerse aquella que satisfaga en mayor medida el o los principios. Cuando estos se contraponen o su aplicación genera decisiones diferentes, el inconveniente debe resolverse mediante la búsqueda de razones

---

<sup>23</sup> A decir de Rupert Cross, la ratio decidendi de un caso es “cualquier regla del derecho tratada explícita o implícitamente por un juez como un paso necesario para llegar a su conclusión, teniendo en cuenta la línea de razonamiento adoptada por ese juez” (como se cita en MacCormick, 2018, p. 268).

<sup>24</sup> Para MacCormick (2018) el sentido de los argumentos de analogía es que una disposición jurídica puede contribuir a decidir situaciones a las que no es directamente aplicable por la relación de similitud que mantiene con la norma sometida a interpretación.

<sup>25</sup> MacCormick (2018) entiende que un principio del derecho es una norma relativamente general que expresa un valor positivo y cuya función es explicar y justificar las reglas de un sistema jurídico. Verbigracia, el principio de igualdad y no discriminación (art. 11 de la CRE) expresa el valor de la igualdad y permite justificar la existencia de la regla penal que sanciona con pena privativa de la libertad de uno a tres años a la persona que discrimine a otra por razones de nacionalidad, etnia, sexo, etc. (art. 176 del Código Orgánico Integral Penal).

que justifiquen la preferencia de uno sobre otro según las circunstancias particulares del caso.

- f) El argumento de la historia dice que cualquier disposición perteneciente a una ley (o de un grupo de leyes) que ha sido interpretada con el tiempo según un entendimiento históricamente desarrollado de su objeto y finalidad debe interpretarse de forma que su aplicación a casos concretos sea compatible con dicha comprensión histórica (MacCormick, 2016).

Esta categoría de argumentos son eficaces para resolver dilemas interpretativos pues existe un ideal de coherencia global que rige la forma en que las personas aprecian un sistema jurídico. Los sistemas jurídicos abarcan una pluralidad de principios u objetivos políticos, los cuales se expresan en una multiplicidad de normas de distintos tipos que interactúan entre sí y son utilizadas de modo que todas ellas, consideradas en conjunto y como un todo, ofrezcan el mayor sentido posible. Además, ninguna comunicación lingüística puede ser entendida en su totalidad salvo que se considere el contexto de su emisión y los materiales jurídicos no son una excepción. Estos se emiten en el ámbito del sistema jurídico en general y de diversas circunstancias fácticas, políticas y sociales. Por ello, una interpretación adecuada de una disposición jurídica debe estimar tanto su aspecto lingüístico como, especialmente, su contexto sistémico. (MacCormick, 2016)

### 1.3.3 Argumentos teleológicos/deontológicos

Son aquellos que facultan a interpretar un texto jurídico en el sentido que satisfaga en mayor medida o el objetivo de aquel o un valor estimado fundamental por el sistema jurídico. Estos argumentos son aplicaciones al escenario institucional del Derecho de lo que MacCormick (2010) denomina la argumentación práctica pura, esto es, la actividad de formular argumentos para favorecer o censurar un determinado modo de actuar o para sustentar una opinión sobre lo que debe, puede o podría hacerse.

El argumento interpretativo teleológico consiste en interpretar una disposición jurídica según el propósito o finalidad que se le atribuye sobre la presunción de que ha sido promulgada por un órgano legislativo racional en un contexto histórico concreto. La idea tras este argumento es considerar a la legislatura como una empresa teleológica y racional<sup>26</sup> donde el *telos* u objetivo es independiente de las palabras empleadas en el texto jurídico y, por ello, proporciona una pauta para su interpretación. (MacCormick, 2010) Por ejemplo, el capítulo X del Código de Trabajo ecuatoriano trata el despido de los trabajadores y establece sanciones cuando el empleador lo efectúa. Entonces, es plausible atribuir a la legislatura el objetivo de impedir que el empleador deje arbitrariamente sin trabajo a sus empleados y, por ende, las disposiciones de dicha sección deben interpretarse a la luz de esta finalidad, aun a expensas de la interpretación literal de sus términos en su significado ordinario.

El argumento interpretativo deontológico radica en interpretar un fragmento de un texto jurídico de acuerdo a principios de rectitud o justicia. Estos principios expresan valores que el intérprete estima esenciales para el Derecho y, por ello, los expone como justificación de su preferencia interpretativa. Este argumento se fundamenta en que la legislación (y cualquier texto jurídico) incorpora valores que se consideran socialmente relevantes y se manifiestan a través de principios de justicia que guían a

---

<sup>26</sup> Esta es una suposición según la cual quienes participan en el proceso de creación y promulgación de un cuerpo normativo (leyes, códigos, etc.) consideran que algún fin se realizará al implementar el texto jurídico promulgado (MacCormick, 2016).

la legislatura, la cual, considerada como entidad creadora de derecho idealmente racional, siempre tiene la intención de actuar justamente (MacCormick, 2010).

Para hacer uso de los argumentos señalados, el intérprete debe preguntarse: ¿qué fin es aceptable atribuir al texto jurídico sometido a interpretación? (si pretende emplear un argumento teleológico), o bien ¿qué máxima enuncia mejor el objetivo que subyace al texto? (si intenta utilizar un argumento deontológico). Estas preguntas han de realizarse en consideración del contexto histórico y sistémico en el que se emiten. (MacCormick, 2010)

Cuando existen problemas interpretativos a solucionar, estos argumentos son útiles porque la creación y emisión de textos jurídicos, en cuanto actividad humana, está siempre orientada por finalidades que pretende conseguir (asegurar que la vida en sociedad sea, por ejemplo, segura, pacífica, etc.) y principios que busca garantizar (verbigracia, el respeto de la dignidad humana), los cuales son inferidos por los intérpretes (ya sean abogados de las partes en un proceso judicial, tribunales que dictan una sentencia, etc.) para persuadir a sus receptores de que su propuesta de interpretación de una disposición jurídica es adecuada.

### **1.3.4 Conflictos entre argumentos interpretativos**

Es muy usual que en la práctica del Derecho se presenten interpretaciones rivales sobre una misma disposición jurídica. La muestra más clara de ello es un proceso judicial, en el cual, generalmente, cada una de las partes presenta ante el juez una propuesta de interpretación distinta (y antagónica) sobre el precepto jurídico que regula la situación fáctica que genera la controversia sometida a decisión.

La razón de tal pluralidad de interpretaciones contrapuestas es la amplia variedad de argumentos interpretativos que existen y, por ende, a que con cada uno de estos es posible atribuir un significado diferente un mismo texto jurídico. En efecto, para cualquier conjunto de interpretaciones rivales, si en realidad eran viables como alternativas opuestas, habrá algunos argumentos de uno u otro tipo que favorezcan una u otra interpretación rival. Tal es la posibilidad de que surjan disputas entre argumentos interpretativos que, a más de intercategóricas (entre argumentos de diferentes categorías), estas pueden ser intracategóricas (cuando argumentos de una misma categoría apuntan en direcciones distintas). Así, los precedentes pueden, por ejemplo, contraponerse a la lógica conceptual (conflicto intracategórico) o al significado ordinario (conflicto intercategórico). (MacCormick, 2016)

En las pugnas jurídicas, la diversidad de argumentos examinados constituye un conjunto de materiales a disposición de los intérpretes que pretenden discutir el significado de un texto jurídico. Esta discusión es resuelta cuando el tribunal competente decide, entre las diferentes propuestas, la interpretación que debe prevalecer. Por tanto, debe existir una fase de la argumentación que jerarquice los argumentos (o conjuntos de argumentos) cuando las interpretaciones que ellos suscitan sean disímiles y entren en disputa. (MacCormick, 2016)

Un modelo de jerarquización de argumentos generalmente reconocido es la denominada “regla de oro”, la cual prescribe: los textos jurídicos se deben interpretar de acuerdo a su significado ordinario (argumentos lingüísticos) y a su contexto sistémico (argumentos sistémicos), a menos que tal interpretación genere un absurdo, inconsistencia o injusticia que permita modificar su significado ordinario y contextual para apelar al objetivo que este persigue o a algún valor fundamental del sistema

jurídico (argumentos teleológicos/deontológicos). A pesar de ser interesante y sugestivo, este modelo presenta dificultades ya que en la práctica se presentan, y muy frecuentemente, circunstancias en las que el uso de argumentos teleológicos/deontológicos descarta conclusiones *prime facie* vinculantes sobre el significado ordinario y contextualizado de una disposición jurídica. (MacCormick, 2010)

Ello demuestra que un modelo de jerarquías entre argumentos, aunque sea muy persuasivo, no puede ofrecer una solución definitiva a un conflicto interpretativo sino apenas una aproximación a la resolución de dicho problema ya que la elección de la interpretación “correcta” o del argumento “adecuado” depende de los valores y principios que gobiernan la voluntad de cada intérprete.

#### 1.4 Tarello y los argumentos interpretativos

Previo a examinar la concepción de los argumentos interpretativos de Giovanni Tarello conviene precisar algunos elementos de su teoría de la interpretación en los cuales dicha concepción se sostiene.

Tarello (2011) formula su teoría de la interpretación a partir de una constatación básica: el problema de la interpretación (que responde a la pregunta: ¿qué es la interpretación jurídica? o ¿qué es la interpretación de la norma jurídica?) ha sido considerado tradicionalmente como un problema unitario. Así, la solución a dicho inconveniente ha sido entender a la interpretación como una actividad de conocimiento, es decir, un proceso intelectual mediante el cual se comprende o esclarece el significado de una norma jurídica (de la que se conoce o se postula su validez). Esta comprensión o esclarecimiento se logra por medio del uso de cánones que aseguran alcanzar una interpretación verdadera, adecuada, correcta o exacta. Entonces, una vez conocido el significado verdadero o correcto de la norma es posible aplicarla.

Esta forma de afrontar el problema implica: (a) las normas jurídicas son el objeto de la interpretación; (b) la existencia de un significado preconstituido o propio de la norma que es independiente al empleo de estas últimas por los operadores jurídicos; (c) la imposición de ciertos cánones para el descubrimiento de dicho significado por parte de la naturaleza misma de la norma, los cuales permiten distinguir la verdad o falsedad de una interpretación. No obstante, ambos presupuestos han sido criticados en la doctrina en virtud de que: (a) no es posible afirmar que la norma tiene ya un significado porque ella misma no es más que el significado atribuido a los enunciados lingüísticos que constan en los documentos (leyes, códigos, sentencias, etc.), razón por la cual el proceso interpretativo (o interpretación) se practica no sobre normas sino sobre enunciados; (b) los enunciados preceptivos contenidos en documentos admiten tantas y diversas interpretaciones como tantas sean las combinaciones posibles de los significados atribuibles (en un determinado contexto histórico-cultural) a los términos (tanto técnicos como del lenguaje ordinario) que componen dicho enunciado; (c) las interpretaciones de los enunciados preceptivos, en cuanto segmentos del lenguaje en uso preceptivo, no pueden ser ni verdaderas ni falsas ya que estas son el resultado de una atribución de significado del intérprete, es decir, de

una elección de este entre los distintos significados posibles<sup>27</sup> que está condicionada por sus opciones morales, políticas e ideológicas. (Tarello, 2011)

Por dichas razones, el tradicional problema de la interpretación ha de escindirse en dos: (a) ¿Qué técnica de uso de los documentos preceptivos es mejor (o bueno) emplear, recomendar, publicitar y elogiar?; y, (b) ¿Cómo, de hecho, los operadores jurídicos usan los documentos preceptivos en un ambiente institucional determinado cuando ejecutan procesos que, en ese mismo ambiente, se consideran aplicación de normas expresadas por dichos documentos? El primer problema es de naturaleza práctica, versa sobre cómo *debe ser* la interpretación y origina conflictos entre los juristas que dependen de sus intereses y concepciones relativas a la ideología, la moral y la política. El segundo problema es de naturaleza teórica, alude a *qué es y cómo es* efectivamente la interpretación jurídica y suscita controversias sobre la existencia y la descripción de hechos. (Tarello, 2011)

La teoría de la interpretación de Tarello pretende responder a la segunda interrogante, esto es, formular una teoría de carácter descriptivo que proporcione conocimiento empírico sobre cómo los operadores jurídicos (jueces, juristas, etc.) proceden cuando interpretan los documentos preceptivos, qué herramientas utilizan para tal efecto, qué teorías o ideologías presuponen en sus actividades de interpretación, etc. (Chiassoni, 2016)

### 1.4.1 Introducción: derecho y lenguaje

Todas las comunidades sociales modernas poseen, en sus respectivas lenguas, un vocablo o conjunto de vocablos con los cuales referirse al fenómeno designado por el vocablo «derecho»<sup>28</sup>, lo cual indica que este fenómeno está presente en todas las sociedades modernas. Tal fenómeno u objeto está constituido por el conjunto de reglas preceptivas (normas) que, en cada sociedad determinada, cumplen la función de disciplinar: a) la asignación de bienes y servicios a individuos y colectivos; b) la institución y la asignación de los poderes públicos; c) la represión de las conductas consideradas socialmente peligrosas.<sup>29</sup> Así, el derecho aparece con el propósito de

---

<sup>27</sup> Esta tesis fue ampliamente difundida por uno de los juristas más importantes (sino el más) del siglo XX: Hans Kelsen. Según este jurista (1982), cuando el órgano de aplicación procede a interpretar, elige una de las posibilidades significativas de una norma jurídica de entre aquellas posibles y crea derecho para el caso concreto, lo cual constituye un acto de voluntad. Esta elección, como acto de creación jurídica, está guiada por los motivos políticos del intérprete y, por ello, las autoridades jurídicas competentes escogen aquella interpretación que consideran preferible por razones políticas (Kelsen, 2012).

<sup>28</sup> El vocablo italiano *diritto*, “...los vocablos de las lenguas romances (que tienen el mismo étimo), como el francés *droit*, el castellano *derecho*, el portugués *direito*, el rumano *dreptul*; como a los vocablos de las lenguas germánicas (que tal vez son derivados etimológicamente), como el alemán *Recht*, el sueco *ratt*, el inglés con sus dos vocablos *right* (que traduce *diritto* en contextos referidos a posiciones de individuos, como «tengo derecho») y *law* (que traduce *diritto* en contextos referidos a reglas o normas, como «el derecho está de mi parte»); como a los vocablos de las lenguas eslavas, como el ruso *pravo*; como a los vocablos de las lenguas ugrofinesas, como el estonio *oigus* o el finlandés *oikeus*; como el griego *dikaion*.” (Tarello, 2002, p. 159)

<sup>29</sup> Estas tres funciones corresponden, aunque no de manera exacta, con los núcleos centrales de los sectores en que el derecho es usualmente dividido: a) a la función asignativa de bienes y servicios concierne el núcleo del derecho civil; b) a la función institutiva de poderes públicos corresponde una parte importante del derecho constitucional, procesal, administrativo y tributario; c) a la función represiva de conductas concierne el núcleo del derecho penal. (Tarello, 2002)



organizar la vida social de las comunidades modernas, razón por la cual estas últimas se denominan generalmente organizaciones jurídicas. (Tarello, 2002)

Ahora bien, en estas organizaciones jurídicas modernas, el conjunto de reglas preceptivas o normativas que constituyen el derecho son deliberadas e impuestas, según procedimientos formales, por colegios de personas y toman la forma de mensajes lingüísticos aptos para llegar a los destinatarios de tales reglas. Estos mensajes se denominan enunciados y, al estar dirigidos a una pluralidad de personas distantes en el espacio y en el tiempo, asumen la forma escrita y se plasman en documentos, los cuales conservan y certifican tales mensajes y son denominados jurídicos. (Tarello, 2002)

En consecuencia, cabe afirmar que el derecho está compuesto por un conjunto de documentos (textos escritos) que se caracterizan por: (a) contener normas o preceptos, sustanciados en mensajes lingüísticos (enunciados) escritos, que cumplen las tres funciones anteriormente descritas; (b) haber sido expedidos por una autoridad competente en aplicación de un procedimiento formal preestablecido. A partir de tal afirmación es posible concluir que el derecho es de naturaleza lingüística y, por ello, concierne aclarar determinadas nociones relacionadas al lenguaje.

Por «lenguaje» se entiende la comunicación, y específicamente, la comunicación entre seres humanos. Es posible distinguir tres funciones del lenguaje: a) formular y transmitir información o conocimiento; b) dirigir o influir el comportamiento de seres humanos (o, eventualmente, de animales o cosas); c) expresar o suscitar emociones o estados de ánimo. En correspondencia a tales funciones, se puede diferenciar tres usos, modos o tipos de lenguaje: a) lenguaje cognoscitivo (o descriptivo); b) lenguaje preceptivo (o normativo); c) lenguaje expresivo. (Tarello, 1974)

Cada uno de estos tipos de lenguaje o formas de comunicación tiene lugar a través de un medio físico como la emisión de sonidos o la formación de signos convencionales o imágenes representativas. La comunicación por medio de sonidos articulados se institucionaliza en sistemas lingüísticos (de comunicación) llamados lenguas habladas, las cuales generalmente desarrollan una correspondiente lengua escrita en las comunidades humanas evolucionadas.<sup>30</sup> Así, el sistema de comunicación constituido por una lengua hablada y su lengua escrita se denomina «lengua» o «lengua natural». Las lenguas son el tipo de lenguaje más importante y completo. (Tarello, 1965)

En las diversas lenguas existen mínimas unidades lingüísticas portadoras de sentido completo llamadas enunciados. Un «enunciado» es una expresión<sup>31</sup> en lengua (un vocablo<sup>32</sup> o secuencia de vocablos) caracterizada por una forma gramaticalmente completa que permite la comunicación entre seres humanos (Tarello, 1965). En un grupo importante de lenguas (que incluye la lengua española, italiana, inglesa, etc.),

---

<sup>30</sup> Es importante destacar que las lenguas son tan solo un tipo de lenguaje o sistema de comunicación. Existen otros tipos como los lenguajes formales (lógica de predicados, lenguajes de programación informáticos, etc.) o el lenguaje animal.

<sup>31</sup> Según Tarello (1974), «expresión» es un término genérico utilizado para indicar cualquier manifestación del lenguaje, es decir, del comunicar: una palabra, una serie de palabras que es o no gramaticalmente completa, una sinfonía, un cuadro, una señal de humo, etc. Todas estas expresiones son manifestaciones de la comunicación.

<sup>32</sup> Por «vocablo» se entiende el elemento estructural más simple de una lengua que expresa un significado. Un vocablo también se denomina «palabra». (Tarello, 1974)

una forma gramaticalmente completa es aquella forma que puede estar sola y agotar por sí misma un discurso; o, en otras palabras:

...aquella en que comparece al menos un sujeto y un predicado (en sentido gramatical: debe incluir al menos una forma verbal); el sujeto puede estar implícito cuando está suficientemente indicado por la conjugación del verbo en una persona, modo y tiempo determinados. La presencia de verbos que no pueden ser usados en modo absoluto (esto es, sin complemento) torna gramaticalmente incompleta a la expresión en que el complemento falte. La presencia de adverbios y de preposiciones torna gramaticalmente incompleta a la expresión en que falte aquello que el adverbio o la preposición rige. (Tarello, 1974, p. 143)

Las comunicaciones humanas lingüísticas en general son procesos interpersonales en el que un emisor efectúa o realiza una emisión dirigida a un receptor.<sup>33</sup> Tal emisión se produce mediante (enunciaciones<sup>34</sup> de) enunciados, es decir, el emisor formula una comunicación lingüística en forma de enunciado en lengua que la recibe el receptor (Tarello, 2013).<sup>35</sup>

Tras recibir el enunciado, el receptor realiza la actividad mental de buscar el significado de aquel pues, caso contrario, no podría existir comunicación alguna. Por «significado» de un segmento de lenguaje se entiende “el *quantum* de comunicación que en él se expresa, se realiza, se transmite” (Tarello, 1974, p. 146), esto es, la comunicación transmitida o realizada por medio de una expresión. Cabe recalcar que el significado de un enunciado no es la suma de los significados de los vocablos (i.e. palabras) que lo componen pues los vocablos carecen de significado independiente y únicamente poseen un significado abstraído de los enunciados en que aparecen; motivo por el cual el enunciado, en cuanto unidad lingüística mínima, constituye el punto de partida para determinar su significado (Ross, 1994).<sup>36</sup> Por tanto, la operación

<sup>33</sup> Tarello (1974) define a los tres elementos del proceso comunicativo de la siguiente manera: a) emisor es aquel que realiza el acto que origina la comunicación; b) emisión es el medio en el que se concreta y objetiva el acto del emisor; y, c) receptor es aquel que recibe la emisión y mediante esta una comunicación.

<sup>34</sup> Según Tarello (1974), «enunciado» es el tipo o clase de cada expresión en lengua (independientemente de que sea dicha o escrita en alguna situación determinada en el espacio y en el tiempo) y «enunciación» es cada caso particular y concreto de una expresión en lengua. Por ejemplo, Juan dice a Pedro: «Cuenca es una ciudad patrimonial». «Cuenca es una ciudad patrimonial», en cuanto clase de expresión que contiene toda concreta expresión dicha o escrita que suene o se lea «Cuenca es una ciudad patrimonial», es un enunciado; «Cuenca es una ciudad patrimonial», en cuanto expresión concreta emitida por Juan y dirigida a Pedro el 01 de enero de 2020 mientras recorren la calle Simón Bolívar, es una enunciación.

A decir de Guastini (2016), “un enunciado es una clase de expresiones lingüísticas con forma completa; una enunciación es una instancia de tal clase (i. e. una expresión lingüística efectivamente usada o proferida por alguien en un determinado momento y lugar)” (p. 43).

<sup>35</sup> La formulación o enunciación de un enunciado puede ser oral o escrita.

<sup>36</sup> En la misma línea de pensamiento, John L. Austin (1975) afirma que “...el sentido en que una palabra o una expresión 'tienen un significado' es derivativo del sentido en que una oración 'tiene un significado': decir que una palabra o una expresión 'tienen un significado' es decir que hay oraciones en las que ocurren que 'tienen significado'; y conocer el significado que la palabra o expresión tiene es conocer los significados de las oraciones en las que ocurren. Todo lo que el diccionario puede hacer cuando 'consultamos el significado de una palabra' es sugerir ayudas para la comprensión de las oraciones en las que ocurre. De aquí que parezca correcto que decir que lo que 'tiene significado' en sentido primario es la oración” (p. 72). Así, por ejemplo, si una persona pronuncia aisladamente el vocablo «computador», esto nada significa a menos que el vocablo, según el contexto y la situación, pueda ser interpretado como una forma abreviada de un enunciado como: «Este es un computador».

mental que realiza el receptor con el enunciado es determinar o individuar la comunicación expresada o transmitida por el emisor en dicho enunciado. Esta operación se denomina «interpretación».

Una vez ha llevado a cabo la interpretación del enunciado, el receptor obtiene como resultado una proposición. Por «proposición» se entiende “un segmento de lenguaje dotado de autonomía e individuado solo por la autonomía de la comunicación que constituye” (Tarello, 1974, p. 175). En términos similares, la proposición es la comunicación autónoma expresada por medio de un enunciado. «Autónoma» indica que la comunicación es capaz de comunicar algo por sí sola ya que es completa, es decir, está dotada de sentido completo. La proposición también es denominada «significado-proposición» ya que aquella no es más que el significado dado a un enunciado mediante interpretación.<sup>37</sup> Así, la interpretación que efectúa el receptor consiste en individuar la proposición expresada por un enunciado.

Según esta concepción<sup>38</sup>, la proposición es un pensamiento<sup>39</sup> que constituye el resultado de la interpretación de un enunciado. Así, una misma proposición (esto es, el mismo pensamiento) puede ser expresada por diversos enunciados; por ejemplo, el enunciado (1) «El sol está saliendo» expresa la misma proposición que el enunciado (1a) «The sun is rising» y el enunciado (1b) «Está saliendo el sol». (Tarello, 1974)

Asimismo, un solo enunciado puede expresar diversas proposiciones (pensamientos). Esto se debe principalmente a dos fenómenos lingüísticos que afectan a las lenguas naturales (y a la gran mayoría de sus vocablos) en que se expresan los enunciados: a) ambigüedad: se presenta cuando un solo vocablo es utilizado para referir o denotar<sup>40</sup> (i.e. designar, aludir, indicar) varios y distintos objetos, hechos o

---

<sup>37</sup> Esta consideración de la proposición como significado de un enunciado es similar a lo planteado por G. H. von Wright (1970), para quien “las proposiciones puede decirse que son el significado o sentido de las sentencias” (p. 37).

<sup>38</sup> Esta concepción de la proposición es distinta a la tradicional. Según esta última, cuyo origen se remonta a Aristóteles en su obra “De la interpretación”, la proposición es un enunciado declarativo y su significado, esto es, un enunciado que afirma o niega algo de algo y es susceptible de verdad o falsedad; concepción que se mantuvo en los lógicos ingleses del siglo XIX e inicios del XX (García Suárez, 1997). Esta concepción tradicional también ha sido preponderante en el ámbito jurídico, especialmente en lógica deóntica. Por ejemplo, Alchourrón y Bulygin (1998) sostienen que las proposiciones son enunciados descriptivos cuyo propósito es informar acerca de algo y que pueden ser verdaderos o falsos, los cuales se denominan proposiciones normativas al informar sobre las normas; así como Guastini (2016), quien afirma que una proposición es “un enunciado dotado de uno de los dos valores de verdad, es decir, que puede ser considerado verdadero o falso” (p. 64).

<sup>39</sup> Con mayor precisión, Tarello (1974) define a la proposición como “el contenido de pensamiento del enunciado que constituye o puede constituir el resultado de su interpretación” (p. 154). Esta definición es similar a la formulada por Frege (1973) sobre el pensamiento en cuanto sentido de un enunciado asertivo: un pensamiento es el “contenido objetivo” del acto (subjetivo) de pensar que es capaz de ser propiedad común de muchos. Esta similitud sobre el pensamiento como contenido objetivo del acto de pensar lleva a considerar que para Tarello la naturaleza de una proposición es abstracta, es decir, esta es una entidad abstracta (como los números) y, por ello, la misma proposición (i.e. pensamiento o, de forma más precisa, el contenido objetivo de la actividad de pensar) puede ser expresada por distintos enunciados.

<sup>40</sup> La denotación, a partir de J. S. Mill, es el objeto u objetos a los cuales se aplica el nombre, término o símbolo (Ferrater Mora, 1965). Por su parte, la referencia, a partir de Frege, es, en el caso de un nombre propio (palabra, signo, conjunto de signos o expresión), el objeto designado o aludido por este, y, en el caso de un enunciado asertivo, su valor veritativo (lo verdadero o lo falso según la circunstancia de que tal enunciado sea verdadero o falso) (Frege, 1973). Tarello (1974) considera que, si bien denotación y referencia pertenecen a distintas tradiciones en el estudio de la lógica, ambos términos

propiedades en diferentes contextos y situaciones<sup>41</sup>, o, en términos similares, aparece cuando un vocablo tiene diversos significados, sentidos o acepciones; b) vaguedad: surge cuando el campo de aplicación de un vocablo (los objetos, hechos o propiedades por él designado) es indeterminado, es decir, existen casos típicos, en los que no existen dudas de que un vocablo es aplicable, y atípicos, en los que el uso o aplicación de un vocablo genera incertidumbre (Carrió, 1986). Verbigracia, el enunciado (2) «El perro persigue al gato», al ser ambiguo, puede expresar distintas proposiciones: (2a) el particular perro al que me refiero está persiguiendo, en este momento, al particular gato al que me refiero; y (2b) el perro, en cuanto especie, tiene el hábito de perseguir al gato, también considerado en cuanto especie (Tarello, 1965).

La proposición puede ser cognoscitiva o preceptiva. La primera recibe el nombre de «aserción» y es una comunicación autónoma relativa a un estado de hecho que cumple la función lingüística de transmitir conocimiento y que coloca al receptor o destinatario de tal comunicación, en cuanto recibida y comprendida, ante la posibilidad de: a) creer que es verdadera; b) creer que es falsa; c) no estar seguro sobre su (o el grado de probabilidad de su) verdad (Tarello, 1974). Por ejemplo, el enunciado «La vigente Constitución del Ecuador tiene 444 artículos» expresa la aserción de que tal documento jurídico está compuesto por un número determinado (444) de artículos.

La proposición preceptiva también se denomina «precepto» y es una comunicación autónoma caracterizada por la función lingüística de dirigir o influir la conducta humana que sitúa al destinatario o receptor de tal comunicación, en cuanto receptada y entendida, frente a la posibilidad de: a) actuar de modo conforme; b) actuar de modo disconforme; c) dudar acerca de cómo actuar (Tarello, 1974). Generalmente, se trata de proposiciones que: a) imponen obligaciones, prohibiciones y sanciones (la acción W es prohibida); b) contienen una petición de hacer o no hacer (la acción X es requerida); c) predicen un valor distinto de la verdad de una acción (la acción Y es útil); d) califican una acción con relación a obligaciones, prohibiciones, peticiones, valores (la acción Z es recomendable) (Tarello, 2011). Verbigracia, el enunciado «Quienes adeuden pensiones alimenticias no podrán ser candidatos de elección popular» (Art. 113 de la CRE) expresa el precepto que instituye el deber de comportamiento de no adeudar pensiones y la sanción de no poder ser candidato de elección popular en caso de transgresión del mentado deber.

Ahora bien, establecido lo que se entiende por proposición y sus clases, cabe señalar que los enunciados pueden ser asertivos o preceptivos. Un «enunciado asertivo» (i.e. descriptivo) es aquel que expresa y con el cual se expresa una aserción, mientras un «enunciado preceptivo» (i.e. prescriptivo, normativo) es aquel que expresa y con el cual se expresa un precepto (Tarello, 1974). Al ser formulados de forma escrita, los enunciados se plasman, como se manifestó *ut supra*, en documentos, los cuales no

---

cumplen los mismos propósitos en sede teórica, esto es, indicar lo designado por un vocablo (i.e. palabra, término, expresión)

<sup>41</sup> Según Alf Ross (1994), el contexto es la conexión lingüística que determina el significado de un vocablo según la presencia de este en un determinado enunciado, por ejemplo, el vocablo «radio» tiene un significado distinto en el contexto del enunciado «La radio del carro está encendida» que en el del enunciado «El radio de esta circunferencia es 2 centímetros»; mientras la situación es la conexión no lingüística que «abarca todos los hechos y circunstancias que pueden indicar cuál era la intención del autor» (p. 113), tales como la ideología de este, los motivos que influyeron en él al formular el enunciado, sus expresiones fáciles, etc. La importancia del contexto y de la situación radica en que ambas conexiones cumplen una función determinativa de significado de los enunciados y sus vocablos.



son más que conjuntos de enunciados. Según el tipo de enunciados que contienen, los documentos pueden ser asertivos (p.ej. un artículo científico) o preceptivos (v. gr. un documento jurídico como la ley). En las sociedades actuales, estos documentos son sumamente importantes para transmitir comunicaciones a personas distantes en el espacio o el tiempo, como ocurre en el derecho según se mencionó previamente.

Los párrafos anteriores son relevantes para la presente investigación pues la teoría de la interpretación y la concepción de los argumentos interpretativos de Tarello se fundamenta en su concepción lingüística del derecho aquí expuesta.

### 1.4.2 Interpretación jurídica («interpretación en el derecho»)

El vocablo «interpretar» posee un área semántica común en las distintas lenguas modernas<sup>42</sup> y es usado para referirse a los procesos por medio de los que alguien atribuye un significado a un ente considerado susceptible de tal atribución, o, como se señaló en la sección anterior, a la operación mediante la cual una persona individúa una proposición expresada por un enunciado. Este uso es válido para el lenguaje ordinario como para el tecnicado (ya sea el lenguaje jurídico, crítico-artístico, lógico-matemático u otros en los que dicho uso no se distorsiona sino únicamente se especializa). (Tarello, 2013)

Este uso moderno de «interpretar» presenta diversas especializaciones en el campo del derecho. De la interpretación en la experiencia jurídica, o «interpretación en el derecho», dos locuciones son las principalmente empleadas: «interpretación del derecho» e «interpretación de la ley». La primera está más relacionada a usos y concepciones pre-modernas, predominantes hasta el siglo XVIII entre los juristas del Derecho común (Lifante, 2015). Esta locución designa a la acción de identificar o descubrir la disciplina (i.e. regulación, reglamentación) jurídica de un determinado comportamiento o conflicto. Tras este uso lingüístico está la concepción según la cual: (a) el derecho es una entidad en sí, distinta y separada del documento de la ley que es, precisamente, fuente de conocimiento; (b) no surgen diversas interpretaciones conflictivas que compiten entre sí sino una sola interpretación verdadera para cada caso. (Tarello, 2013)

La segunda locución ha sido ampliamente utilizada en los códigos modernos<sup>43</sup> y está vinculada a usos de «interpretar» en la época moderna, la cual inicia en el siglo XIX con el desarrollo de la nueva ciencia jurídica a partir de Savigny (Lifante, 2015). La «interpretación de la ley» tiene dos usos: uno estricto y otro amplio. El primero se refiere a la atribución de significado a un documento (o a un conjunto de estos) del cual se postula o se conoce que expresa una norma jurídica (o un conjunto de estas) (Tarello, 2013). En términos similares y en relación con lo señalado en 1.4.1, la «interpretación de la ley» consiste en la individuación de un precepto expresado por un enunciado preceptivo que compone un documento jurídico.

---

<sup>42</sup> El vocablo *interpretare* en lengua italiana, *interpréter* en francés, *interpretar* en portugués, *to interpret* en inglés, *interpretieren* en alemán; en las lenguas eslavas modernas (ruso, checo, croata, etc.) también existen vocablos que constituyen traducción casi perfecta del vocablo *interpretar* (Tarello, 2013). Al igual que se mencionó anteriormente con el vocablo *derecho*, esta existencia de diversos vocablos utilizados para designar un fenómeno en las lenguas modernas indica que tal fenómeno está presente en todas las sociedades modernas.

<sup>43</sup> Por ejemplo: el parágrafo cuarto del Título preliminar del Código Civil ecuatoriano; el capítulo IV del Preliminar del Código Civil de Colombia; el art. 2 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación argentino; el art. 12 del Código Civil de Italia, entre otros.

El vocablo «ley» en dicha locución designa no solo la ley en sentido formal, sino también la ley en sentido material (verbigracia, la constitución, códigos, reglamentos, etc.). A decir de Lifante (2015), el término «ley» en esta locución identificada por Tarello indica cualquier fuente del derecho producida por una autoridad política, o, lo que es lo mismo, cualquier documento jurídico (en el sentido indicado en 1.4.1). La naturaleza y las características de estos documentos dependen de las instituciones históricas y en las sociedades modernas aparecen, generalmente, como mensajes (enunciados) escritos elaborados por medio de procedimientos formales y, solo ocasionalmente, como prácticas de comportamientos generalizadas y reiteradas (Tarello, 2013).

En consecuencia, la atribución de significado designada por la locución sub examine ocurre sobre objetos que, en la experiencia jurídica, son diversos tipos de documentos jurídicos a más de la ley: las sentencias de órganos jurisdiccionales, los tratados internacionales, los contratos, los testamentos, los convenios colectivos, etc. Si bien cada uno de los objetos de interpretación en el derecho posee sus particularidades, también estos presentan similitudes en relación con la ley pues todos son, como se indicó anteriormente, documentos jurídicos. El principal criterio de semejanza y diferenciación entre estos documentos es su carácter autónomo o heterónomo, lo cual permite distinguir entre aquellos que son objeto directo de interpretación y aquellos que constituyen el resultado de la interpretación de otras entidades jurídicas documentadas y son de índole aplicativa y ejecutiva. Así, en el grupo de documentos autónomos estarían las leyes, los tratados internacionales, los contratos, los testamentos, los acuerdos, los convenios colectivos; mientras en el conjunto de textos heterónomos se colocarían las sentencias de la Corte Constitucional, en cuanto interpretativas y aplicativas de la Constitución, y de cualquier otro órgano jurisdiccional, los actos administrativos y resoluciones de los poderes públicos que versan sobre un punto de derecho, etc. No obstante estas semejanzas y diferencias, cabe advertir que la teoría y el análisis de la interpretación de la ley se han de aplicar a otros tipos de documentos jurídicos con cautela, es decir, únicamente cuando consideren las similitudes entre la ley y los otros documentos. (Tarello, 2013)

Por otra parte, la locución «interpretación de la ley», en su uso más extenso o amplio, designa no solo la atribución de significado a un documento jurídico sino el conjunto de todas las actividades efectuadas y de todos los resultados obtenidos por los operadores jurídicos al aprehender y usar un determinado derecho (en el sentido objetivo del vocablo<sup>44</sup>) vigente o histórico. Varias de estas operaciones están condicionadas por las ideologías que los intérpretes asumen sobre el derecho, las cuales constituyen fuentes extra-legislativas que influyen considerablemente en el desarrollo de la práctica jurídica. Las actividades (y las ideologías que las condicionan) designadas por la locución sub examine son:

- a) Determinación del significado de los términos indefinidos que componen las leyes mediante el recurso a factores de integración extra-legislativos como el lenguaje ordinario (lengua natural) o la intención del legislador. (Tarello, 2013)
- b) Fragmentación y recomposición del conjunto de todas las leyes para extraer de este un segmento (constituido por uno o más enunciados de una misma ley o de distintas leyes) al que el intérprete sea capaz de atribuir un significado con el cual

---

<sup>44</sup> El sentido objetivo de «derecho» es el empleado para aludir al conjunto de normas o reglas de conducta que regulan la vida social y están dotadas de existencia objetiva (Tarello, 2002). En adelante se utilizará «derecho objetivo» para aludir a este uso del vocablo «derecho».



cualificar el comportamiento o situación objeto de controversia jurídica, actividad que el operador jurídico efectúa en virtud de la ideología<sup>45</sup> que considera al derecho objetivo como un sistema. (Tarello, 2013)

Esta ideología se extendió en la cultura jurídica<sup>46</sup> europea entre finales del siglo XVII y finales del XVIII. Sus principales exponentes fueron Leibniz y Wolff. Según aquella, el derecho (en sentido objetivo) consiste en un conjunto de proposiciones (predicaciones de una cualidad jurídica de un sujeto) verdaderas que se disponen, según las reglas (deductivas) de la lógica, en un orden (sistema) que deriva las proposiciones más particulares de los axiomas y conceptos generales y fundamentales (Tarello, 2002). Posteriormente, durante el siglo XIX, dicha ideología fue difundida por uno de los juristas más destacados de entonces: Savigny. Este doctrinario alemán postuló que la característica esencial del derecho objetivo es su organicidad: entre sus diversos componentes (instituciones, relaciones, normas, leyes, costumbres, sentencias, etc.) existen relaciones íntimas que hacen de este derecho un sistema, esto es, un todo ordenado que presenta una “unidad orgánica” (Chiassoni, 2018).

- c) Resolución de antinomias o conflictos entre leyes<sup>47</sup>, con referencia a la ideología según la cual tales colisiones se solucionan en el ámbito del derecho objetivo y, en consecuencia, este posee la cualidad de ser coherente. (Tarello, 2013)

Esta ideología también tuvo su génesis en Leibniz. A decir de este autor, el derecho objetivo es coherente pues al estar conformado por proposiciones verdaderas, estas no pueden contradecirse (Tarello, 2002). Al igual que en la difusión de la ideología descrita ut supra, la doctrina de Savigny fue sumamente relevante en la divulgación de la idea de que el derecho objetivo es coherente entre la cultura jurídica europea del siglo XIX. Según este autor, el conjunto de las fuentes del derecho forman un todo que ostenta el rasgo de la coherencia<sup>48</sup>, en el cual las contradicciones (antinomias) son aparentes y se resuelven, en este orden, mediante interpretación correctiva<sup>49</sup>, criterio de especialidad<sup>50</sup>, criterio

---

<sup>45</sup> Según Tarello (2002), el vocablo «ideología» es utilizado por él para aludir a “filosofías, teorías, complejos doctrinales, en cuanto considerados en su función de instrumentos de políticas culturales en general y de políticas del derecho en especial” (p. 44). En otros términos, «ideología» indica un modo o forma de pensar y concebir el derecho cuya función entre los operadores jurídicos es ofrecer orientaciones, directrices, recomendaciones o criterios de valoración del derecho que guían su actividad.

<sup>46</sup> Para Tarello (2002), cultura jurídica es el conjunto de opiniones, valores, ideologías que se refieren al derecho en un ambiente delimitado espacial (como la cultura jurídica europea) y/o temporalmente (como la cultura jurídica ecuatoriana del siglo XXI). Según Guastini y Rebuffa (2002), la noción tarelliana de cultura jurídica es empleada para referirse al conjunto de: (i) técnicas expositivas y técnicas interpretativas de teóricos y prácticos que se ocupan del derecho; (ii) ideologías sobre la función del derecho que dichas técnicas sobreentienden.

<sup>47</sup> En la cultura jurídica europea, durante la edad de los códigos, se consolidaron tres criterios para resolver los conflictos entre leyes: (a) el de jerarquía (lex superior derogat inferiori); (b) el de especialidad (lex specialis derogat generali); y, (c) el de posterioridad (lex posterior derogat priori) (Tarello, 2013).

<sup>48</sup> El vocablo exacto utilizado por Savigny es “unidad”. No obstante, ambos vocablos indican lo mismo. (Bobbio, 1993)

<sup>49</sup> Actividad que consiste en reducir la antinomia a una contradicción aparente mediante el descubrimiento del lazo oculto que concilia los textos contradictorios (Savigny, 1878).

<sup>50</sup> Según Savigny (1878), se debe considerar las dos fuentes (superficialmente) contradictorias “...como dos partes de un todo destinadas a completarse mutuamente; así la generalidad aparente del uno se encuentra restringida y precisada por el otro” (p. 187).

cronológico<sup>51</sup> y criterio axiológico<sup>52</sup> (Chiassoni, 2018). También durante el siglo XIX, la doctrina alemana de la *Allgemeine Rechtslehre* (“doctrina o teoría general del derecho”)<sup>53</sup>, de considerable influencia, consideró que el derecho objetivo es un sistema coherente de normas unívocamente válidas (Tarello, 2002).

- d) Completación de la disciplina de la ley mediante técnicas de integración (por ejemplo, el recurso a la analogía o a los principios generales del derecho), cuando el intérprete asume la ideología de la completitud del derecho objetivo, o de búsqueda del derecho (verbigracia, la consideración de las necesidades sociales o de la naturaleza de las cosas), cuando el intérprete acepta la ideología de la incompletitud del derecho objetivo. (Tarello, 2013)

Por un lado, la ideología de la completitud tiene también su origen más remoto en Leibniz, quien postuló que el derecho (en sentido objetivo) es un sistema completo pues todas las soluciones a los conflictos se pueden obtener mediante deducción lógica a partir de las proposiciones jurídicas conocidas (Chiassoni, 2018). Ulteriormente, esta ideología fue difundida en la cultura jurídica europea durante el siglo XIX por: (i) la Escuela de la Exégesis francesa, la cual se caracterizó por considerar que el derecho objetivo es todo creado por el legislador, cuya máxima expresión documental es el código; el cual, a decir de esta escuela, disciplina satisfactoriamente toda posible controversia jurídica; consideración que se originó por el art. 4 del Código de Napoleón que prohibía al juez denegar justicia, disposición que mantienen algunos códigos hasta la actualidad<sup>54</sup> (Tarello, 2002); (ii) Savigny (1878), quien sostuvo que el conjunto de todas las fuentes del derecho constituye una “vasta unidad destinada a regular todos los hechos que se verifican en el dominio del derecho” (p. 179).

Por otro lado, la ideología de la incompletitud fue ampliamente defendida por la Doctrina del Derecho Libre (finales del siglo XIX e inicios del XX) que postuló la existencia de lagunas en el derecho objetivo, las cuales el jurista colma mediante una libre búsqueda del derecho aplicable al caso (Tarello, 2013). Según Ross (2007), esta doctrina afirma que: (a) a más de la ley, hay otras fuentes de las cuales el juez puede extraer el derecho libre o vivo; (b) estas fuentes son no positivas, de origen no estatal y se determinan a través de medios sociológicos que dan cuenta de las necesidades reales de la vida de las personas; (c) el método de interpretación debe ser de carácter sociologista, es decir, ha de considerar los aspectos sociales y económicos de la ley que permitan alcanzar un resultado justo; (d) la personalidad del juez es determinante en su labor. Tal fue la influencia de esta doctrina que el art. 2 del código civil suizo permite al juez tratar al derecho suizo como incompleto y colmar sus lagunas.

- e) Descripción de los supuestos de hecho (comportamientos o situaciones) cualificados por las leyes. (Tarello, 2013)

Estas actividades descritas mediante las cuales los operadores jurídicos emplean las leyes implican decisiones de estos últimos. En la operación b), el intérprete, en primer

<sup>51</sup> Lex posterior derogat legi priori, es decir, “la fuente más moderna se sobrepone a la más antigua” (Savigny, p. 180).

<sup>52</sup> “Pero ¿qué deberá hacerse cuando la antinomia, por otra parte incontestable, resiste a toda especie de conciliación? No hay otro recurso que adoptar el texto más en armonía con los principios generales de la legislación” (Savigny, 1878, p. 194)

<sup>53</sup> A decir de Fassò (1996), la *Allgemeine Rechtslehre* tenía por objetivo “la determinación y la sistematización de los «conceptos jurídicos fundamentales» (juristische Grundbegriffe) obtenidos mediante el análisis de los principios de las distintas áreas del ordenamiento jurídico positivo” (p. 157).

<sup>54</sup> Por ejemplo, el art. 18 del Código Civil ecuatoriano.

lugar, decide (conscientemente o no) que el derecho objetivo es un sistema; y, en segundo término y como consecuencia de su adhesión a tal ideología, elige entre la diversidad de los enunciados de las leyes cuáles de ellos son útiles para formar un conjunto de enunciados que se adapte al caso particular a resolver. En la actividad c), el operador, primeramente, resuelve (conscientemente o no) que el derecho objetivo es coherente; y, segundamente y a causa de la adopción de tal forma de concebir el derecho, escoge alguno de los criterios de solución de incompatibilidad entre leyes. En el caso de d), el intérprete, en primer término, decide (conscientemente o no) que se han de considerar reguladas por el derecho objetivo (i) todas las relaciones sociales o (ii) no todas ellas; y, en segundo lugar y como consecuencia de su adhesión a la ideología de la (i) completitud o (ii) incompletitud del derecho objetivo, elige completar la ley por medio de la aplicación de técnicas de (i) integración o (ii) búsqueda del derecho.

Asimismo, en el caso de a), el intérprete elige cuál de los posibles significados atribuye a los enunciados y vocablos que componen las leyes. Además, las disposiciones sobre la interpretación generalmente reenvían no sólo al lenguaje ordinario (lengua natural) como criterio interpretativo sino también a la intención del legislador, al espíritu de la ley, etc., lo cual exige al operador preferir el uso de un criterio sobre otro (Tarello, 2013). Esta posibilidad de diversos significados atribuibles a los enunciados y vocablos se debe principalmente a:

- a) La ambigüedad de los vocablos del lenguaje ordinario (lengua natural) que conforman los enunciados contenidos en las leyes y demás documentos jurídicos.
- b) Problemas semánticos de interpretación: Los vocablos y expresiones<sup>55</sup> de la ley (y cualquier otro documento jurídico) pueden ser del uso ordinario, técnicos o tecnicados.<sup>56</sup> Ello genera inconvenientes como los siguientes: cuando en la ley aparece un vocablo que al tiempo de ser expedida aquella era del uso ordinario pero se ha tecnicado sucesivamente, el intérprete decide si asumir el vocablo en su acepción ordinaria o tecnicada; cuando en la ley aparece, al momento de ser esta expedida, un vocablo técnico que posteriormente se ha difundido en el uso ordinario y ha adquirido nuevas acepciones, el intérprete decide si asumir el vocablo en su acepción técnica u ordinaria; entre otros. (Tarello, 2013)
- c) Problemas sintácticos de interpretación: Se originan en el modo o forma en que los vocablos se conectan entre sí dentro de la estructura total del enunciado. Por ejemplo, el art. 53 de la CRE dispone: «Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras»; la frase adjetival «que presten servicios públicos» puede referirse, por un lado, a las empresas,

---

<sup>55</sup> Aquí se entiende por «expresión» un conjunto de vocablos, como «empresas públicas», «masa de acreedores», etc.

<sup>56</sup> Son de «uso ordinario» los vocablos o expresiones que son propios de la lengua en que están formulados los documentos jurídicos y, por ende, aparecen en enunciados de uso común (p.ej. «agua», «ambiente», «educación», etc.). Son «técnicos» los vocablos o expresiones que no son de uso común y, en consecuencia, aparecen en enunciados propios de una determinada ciencia o técnica (v.gr. «semoviente», «debido proceso», etc.). Son «tecnicados» los vocablos o expresiones que son de uso ordinario pero que en una determinada ciencia o técnica se especializan, ya sea que conservan una sola acepción de las diversas en el uso común o que adoptan un sentido más preciso y restringido respecto del uso ordinario (p.ej. «posesión», «niño», etc.). (Tarello, 2013)

instituciones y organismos, o, por otro, calificar solamente a organismos; esta ambigüedad es resuelta mediante una decisión del intérprete.<sup>57</sup>

- d) Problemas paralógicos de interpretación: En la ley (y cualquier otro documento jurídico) existen frases atributivas absolutas y enumeraciones.<sup>58</sup> Ello origina situaciones problemáticas como: cuando el art. 141 de la CRE dice: «La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva», pueden surgir dudas en el intérprete sobre si en la frase atributiva el ejercicio de tal función es una facultad (¿puede ejercer?) o una obligación (¿debe ejercer?), o también si la o el Presidente ejerce solo esa función o también otras, dudas que son resueltas generalmente mediante el recurso a otros enunciados de documentos jurídicos o a interpretaciones precedentes (especialmente de órganos jurisdiccionales); cuando no es posible determinar si las enumeraciones son taxativas o no (por ejemplo el art. 225 de la CRE), en cuyo caso el intérprete resuelve tal incertidumbre mediante una decisión; entre otras.
- e) Problemas derivados de la pluralidad de enunciados legislativos: La ley (y cualquier otro documento jurídico) está compuesta por una multiplicidad de enunciados. En este sentido, un singular enunciado no es una entidad aislada sino que se ubica junto con otros enunciados dentro del contexto de una unidad más grande, que es la ley u documento jurídico en que aparece; la cual, a su vez, se inserta en una unidad todavía mayor, que es el conjunto total de documentos jurídicos que componen el derecho de cierta comunidad social. Esta presencia plural y simultánea de enunciados genera inconvenientes de: (i) presuposición, cuando un enunciado reenvía, de forma explícita o implícita, al intérprete a otros enunciados, lo cual implica que aquel, al atribuir significado al enunciado que reenvía, es forzado a previamente atribuir significado al enunciado objeto de reenvío; (ii); incompatibilidad, cuando dos normas (i.e. las interpretaciones de enunciados de la ley u otro documento jurídico) vinculan efectos jurídicos diferentes y conflictivos a un mismo supuesto de hecho, colisión que el intérprete soluciona mediante la aplicación del criterio jerárquico, cronológico o de especialidad; (iii) redundancia, cuando dos enunciados pueden ser interpretados de tal forma que vinculen un mismo efecto jurídico a un mismo

<sup>57</sup> A más de las frases adjetivales, los problemas sintácticos pueden originarse en la puntuación (como cuando tras una enumeración se desconoce si la coma tras cada término tiene valor de «y» u «o»); los pronombres relativos, demostrativos y posesivos (p.ej. en el enunciado «El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual...» (art. 375 CRE), no se sabe si el pronombre «lo cual» se refiere a ambos derechos o solo a uno de ellos); expresiones condicionales o de excepción (v.gr. en el enunciado «La correspondencia no podrá ser retenida, abierta, ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley» (art. 66, numeral 21, de la CRE, la estructura no permite determinar claramente si la excepción que faculta al legislador se refiere a la retención, a la apertura o al examen, solo a uno o dos de ellos, o a todos). (Tarello, 2013)

<sup>58</sup> Son «frases atributivas absolutas» aquellas que «atribuyen una cualidad, un derecho, un poder, una obligación, en suma una posición jurídica en general, sin especificar si la atribución es a título exclusivo o si es a título inclusivo» (Tarello, 2013, p. 130). Por su parte las enumeraciones pueden ser: a) acumulativas (sus miembros están conceptualmente unidos por una «y»), las cuales generan problemas relativos a si el supuesto de hecho se da si concurren otros miembros no explícitamente enumerados (p.ej. si para que una resolución esté motivada se requiere únicamente el cumplimiento de los supuestos señalados en el art. 76, numeral I, de la CRE o también otros como que la motivación se formule en un lenguaje que permita el entendimiento y comprensión de la decisión no solo a operadores jurídico sino a la ciudadanía en general); b) disyuntivas (sus miembros están conceptualmente unidos por una «o»), las cuales originan problemas relativos a si estas son «taxativas» (el intérprete no puede añadir nuevos miembros a la enumeración) o «ejemplificativas» (el intérprete puede añadir nuevos miembros a la enumeración), como la enumeración del art. 134 de la CRE sobre quienes pueden presentar un proyecto de ley (Tarello, 2013).



supuesto de hecho, situación que el intérprete resuelve por medio de una atribución de significado diferente y no redundante a cada enunciado. (Tarello, 2013)

Estas razones brevemente señaladas, junto con la existencia de diversas doctrinas de la interpretación<sup>59</sup> (asumidas conscientemente o no por los intérpretes) y de pluralidad de métodos o criterios interpretativos<sup>60</sup> vigentes (i.e. aceptados) en una determinada cultura y organización jurídica, son motivos por los cuales un mismo enunciado preceptivo que compone un documento jurídico habitualmente admite (y en los hechos existen) diversas y alternativas interpretaciones. Estas últimas, sin embargo, cabe advertir que no son ilimitadas sino que están condicionadas por las reglas sobre el «correcto» razonar al atribuir significado a enunciados preceptivos que se consideran aceptables o corrientes en una singular y específica cultura y organización jurídica (Tarello, 2013).<sup>61</sup> En suma, no existe una correspondencia biunívoca entre los enunciados y sus significados. Por ello, y como se verá a continuación, es necesario distinguir entre los unos y los otros.

### 1.4.3 Disposición vs. Norma

El vocablo «interpretación» posee dos acepciones. La primera se refiere al fenómeno mental que consiste en atribuir significado a un documento y se denomina «interpretación-actividad» ya que el vocablo «interpretación» es utilizado como nombre de la actividad designada por el verbo «interpretar» (Tarello, 2013). Por ejemplo, el enunciado «El art. 11 de la Constitución ecuatoriana requiere interpretación» expresa que tal disposición constitucional necesita de una operación mediante la cual el intérprete atribuya significado a los vocablos que la conforman y al contexto en relación a otros artículos constitucionales.

La segunda acepción hace referencia al resultado de la operación mental de atribuir significado a un documento y se designa «interpretación-producto» pues el vocablo «interpretación» es empleado como nombre del producto de la actividad designada

---

<sup>59</sup> Por «doctrina de la interpretación» se entiende un conjunto de enunciados (aparentemente asertivos o descriptivos) que expresan una particular ideología sobre la interpretación, esto es, un modo específico de concebir la interpretación que proporciona orientaciones, directrices, propuestas, métodos o criterios de valoración que guían la actividad de los intérpretes y permiten determinar la interpretación correcta (o buena, o justa, o verdadera). Según Guastini (2014), las principales doctrinas son la literalista (se deben entender los documentos jurídicos y sus enunciados según las reglas semánticas y sintácticas de la lengua en que son formulados) y la intencionalista (los documentos jurídicos y sus enunciados se deben comprender según la intención o voluntad de la autoridad que lo emitió, como el legislador, el constituyente, etc.). La importancia de las doctrinas de la interpretación radica en que, al ser aceptadas en una determinada cultura jurídica, son enseñadas en las facultades de derecho y, por ende, condicionan al intérprete, quien, al atribuir significado a los documentos jurídicos, tomará una decisión doctrinal e ideológica basada en su educación (Tarello, 2011).

<sup>60</sup> Por citar los más comunes, el método del tenor literal de las palabras (interpretación literal), la intención del legislador (interpretación intencional), la voluntad de la ley (interpretación teleológica), el derecho como sistema (interpretación sistemática). Cada uno de estos métodos o criterios produce generalmente una interpretación distinta a la ofrecida por otro, lo cual exige que el intérprete decida cuál método utilizar.

<sup>61</sup> Por ejemplo, en la cultura y organización jurídica ecuatoriana, en relación con los problemas semánticos de interpretación, es generalizada la regla según la cual un vocablo técnico (como «reivindicación», proveniente del derecho civil), que ha sido difundido en el uso común y ha adquirido nuevas acepciones, debe entenderse, al interpretar un enunciado de un documento jurídico, en su significado técnico originario. Ello se debe principalmente a la obediencia extendida de lo dispuesto por el art. 18 del Código Civil ecuatoriano, el cual prescribe que las palabras definidas por el legislador deben entenderse en el significado por él dado.

por el verbo «interpretar» (Tarello, 2013). Verbigracia, el enunciado «En la doctrina, el art. 11 de la Constitución ecuatoriana presenta diversas interpretaciones» expresa que los juristas (intérpretes) han atribuido diferentes significados a tal disposición, esto es, que existen distintos resultados o productos de las actividades de atribución de significado que los juristas han desarrollado.

Esta distinción es relevante en sede de teoría ya que la denotación o referencia de cada ejemplo mencionado es distinta. Mientras lo denotado o referido (i.e. la entidad designada) por el primer ejemplo es la actividad interpretativa, lo denotado o referido por el segundo es el producto de la interpretación. Con esta diferenciación se puede distinguir entre los discursos jurídicos ideológicos y persuasivos (que responden a la interrogante «¿cómo se debe interpretar un documento?»), los cuales generalmente tienen por objeto la actividad interpretativa, y los discursos jurídicos descriptivos (que contestan a la pregunta «¿cómo se ha interpretado un documento?»), los cuales habitualmente versan sobre los documentos que contienen los productos de la interpretación. (Tarello, 2013)

Establecida tal diferenciación, resulta posible afirmar que la interpretación, en cuanto actividad, no se efectúa sobre normas, como es ampliamente considerado (al menos) en la cultura jurídica occidental, sino sobre disposiciones pues las normas son el producto o resultado de dicha actividad. Tal afirmación exige explicación.

En 1.4.1 se sostuvo que: a) la interpretación es la operación que consiste en determinar el significado de un enunciado, esto es, individuar la proposición o comunicación autónoma expresada por aquel; b) los documentos, entre ellos los jurídicos, están compuestos por enunciados. En 1.4.2 se manifestó que la interpretación, en el uso moderno del vocablo, es el proceso a través del cual se atribuye significado a un ente que en el derecho (o más bien, en la experiencia jurídica) es un documento (denominado jurídico) que expresa normas.

En consideración de aquello, cabe indicar que:

- a) Las disposiciones son los enunciados preceptivos que componen los documentos jurídicos autónomos emitidos por autoridades políticas, es decir, leyes en sentido material (constitución, ley, código, reglamento, etc.). Ahora bien, las disposiciones no siempre tienen una relación biunívoca con un solo enunciado de un documento jurídico, es decir, una disposición no se corresponde exactamente con un fragmento de artículo o un determinado artículo completo de un documento jurídico. Anteriormente se señaló que una de las actividades que los operadores jurídicos realizan al interpretar es fragmentar y recomponer el conjunto de las leyes para obtener un segmento conformado por enunciados de la misma ley o de distintas. En consecuencia, una disposición es generalmente dicho segmento de enunciados preceptivos, aunque en ciertas ocasiones, una disposición es un singular enunciado preceptivo.

En suma, el vocablo «disposición» puede ser utilizado para referirse a: (i) un singular enunciado preceptivo (p.ej. el art. 1 de la CRE); (ii) un segmento de enunciados preceptivos (v.gr. «Todos los ecuatorianos tienen derecho a participar en todos los asuntos de interés público», enunciado que resulta de combinar los arts. 6 y 95 de la CRE).

- b) Las normas son las proposiciones preceptivas (preceptos) expresados por las disposiciones. En términos similares, una norma es un significado-proposición o comunicación autónoma caracterizada por la función preceptiva del lenguaje.



Además, las normas son el resultado de la interpretación-actividad y, por tanto, son la interpretación-producto (Tarello, 2013). En suma, las normas son los significados atribuidos por los intérpretes a las disposiciones (enunciados preceptivos documentados) mediante la actividad interpretativa.

Al ser proposiciones cuya función es dirigir el comportamiento humano, las normas especifican las conductas que son debidas, prohibidas o permitidas por determinados agentes. En el caso del derecho, las normas también regulan la represión de los comportamientos considerados socialmente peligrosos, la institución y la asignación de los poderes públicos, y la asignación de bienes y servicios a individuos y colectivos.

- c) En virtud de a) y b), la interpretación-actividad en el derecho es el proceso mediante el cual el intérprete atribuye significado a una disposición y obtiene una interpretación-producto, es decir, la operación por medio de la cual el receptor de un enunciado preceptivo (plasmado en un documento jurídico) individúa una norma expresada por tal enunciado.

#### 1.4.4 Variedad de intérpretes

Anteriormente se ha entendido indistintamente por «intérprete» un sujeto u operador jurídico cualquiera que, en las sociedades modernas, atribuye significado a enunciados preceptivos contenidos en documentos jurídicos. Sin embargo, en dichas sociedades se presentan diversos tipos de intérpretes u operadores de la interpretación dotados de propiedades específicas y, por ello, corresponde ahora identificarlos.

La interpretación-actividad puede ser llevada a cabo por cualquiera en las organizaciones jurídicas modernas. Sin embargo, cada interpretación-producto posee mayor o menor relevancia social e institucional según su forma y la posición del intérprete. Esta posición es determinada por las cualificaciones institucionales o tipificaciones desarrolladas por el derecho sobre un particular operador jurídico que, en virtud de ello, deviene en un operador de la interpretación que puede ser típico o atípico. (Tarello, 2013)

Un intérprete típico es un sujeto u operador jurídico individuado por el derecho según determinadas cualidades institucionales. La actividad interpretativa llevada a cabo por este operador es autoritativa, ya que aquel tiene alguna autoridad establecida por el derecho, y perdurable, pues es requerido reiteradamente por el derecho a manifestarse sobre la atribución de significado a documentos jurídicos autónomos (constitución, ley, código, etc.) (Tarello, 2013). Si bien al ser tipificados por el derecho, los intérpretes son típicos según cada particular derecho de una sociedad específica, la cultura de los juristas tradicionalmente ha clasificado a los intérpretes típicos en:

- a) Legislador u otra autoridad con potestad normativa: operador jurídico que lleva a cabo interpretación auténtica. Por «interpretación auténtica» se entiende la interpretación-actividad y la interpretación-producto efectuada por el mismo autor del documento jurídico sometido a interpretación de forma separada o posterior a la producción de dicho documento, esto es, una decisión sobre el significado de un documento jurídico cuyo propósito es que ese significado sea adoptado por otros ulteriormente (Tarello, 2013). Un ejemplo de tal interpretación es una ley interpretativa de otra ley, una ordenanza interpretativa a otra ordenanza, etc.
- b) Juez: operador jurídico perteneciente a un órgano jurisdiccional estatal que atribuye significado a enunciados preceptivos contenidos en documentos

jurídicos (generalmente autónomos) y materializa tal atribución en sentencias. La interpretación del juez, llamada «interpretación judicial», es una decisión de atribución de un particular significado a un enunciado preceptivo habitualmente preconstituido y producido por una autoridad con potestad normativa (Tarello, 2013).

- c) Funcionario administrativo: operador jurídico perteneciente a un órgano del aparato del Estado cuya actividad interpretativa (y su correspondiente producto), desarrollada en el ámbito del ejercicio de su función institucional, tiene por objeto un documento jurídico producido por un órgano estatal diferente y superior (Tarello, 2013). Al igual que en el caso del juez, la interpretación de este operador, denominada «interpretación oficial», es una decisión de atribuir un significado específico a un enunciado emitido previamente por una autoridad con potestad normativa. En el derecho ecuatoriano, son ejemplos las resoluciones sobre consultas a la administración tributaria referentes al régimen jurídico tributario aplicable a situaciones concretas, las prácticas interpretativas de los órganos de la administración pública, etc.
- d) Jurista: operador jurídico que procede a: (i) detecciones de los significados atribuidos anteriormente por otros intérpretes a los documentos jurídicos objeto de su actividad interpretativa (generalmente disposiciones constitucionales o legislativas); y, (ii) efectúa propuestas<sup>62</sup> (dirigidas a jueces, funcionarios administrativos u otros juristas) de una particular atribución de significado a dichos documentos. A diferencia de la interpretación de los otros operadores citados, la del jurista, llamada «interpretación doctrinal», no es una decisión propiamente dicha sino una sugerencia de atribuir en el futuro un determinado significado a un documento jurídico. Esta interpretación es peculiar pues si bien no está comúnmente tipificada por el derecho, ella se torna típica ya que tiene una considerable influencia en las decisiones de la magistratura y la burocracia. (Tarello, 2013)
- e) Abogado: operador jurídico que detecta previas atribuciones de significado a los documentos jurídicos objeto de su actividad interpretativa y propone particulares atribuciones de significado a estos que sean favorables al interés de su patrocinado en una determinada causa. Así como la interpretación doctrinal, la interpretación del abogado no es una decisión de atribución de significado como tal sino una propuesta dirigida al juez de interpretar de una determinada manera un particular documento jurídico en una específica causa (Tarello, 2013). En consecuencia, la característica que diferencia a la interpretación del abogado de las demás es la presencia de un interés ajeno que motiva su atribución de significado y, por ello, las interpretaciones de una misma disposición ofrecidas por los abogados de las partes procesales difieren.

Por otra parte, un intérprete atípico es un sujeto o grupo de sujetos no individuado por el derecho que, no obstante, atribuye habitualmente significado a enunciados preceptivos contenidos en documentos jurídicos en vista de asegurar sus propios intereses. Verbigracia, los aseguradores (i.e. las sociedades de seguros, sus

---

<sup>62</sup> Al proponer interpretaciones, los juristas deciden la atribución de significado a dar a los enunciados normativos. Por tanto, ellos efectúan política del derecho, es decir, proyectos de actividad de los órganos de aplicación en los cuales se acredita o favorece una particular interpretación de una disposición normativa (Tarello, 2002). Según Guastini (2014), el jurista hace política del derecho cuando "...intenta influir en las decisiones interpretativas de los órganos de aplicación (y especialmente de los jueces); su interpretación tiene el valor de una «propuesta» (típicamente: propuesta de *sententia ferenda*) dirigida a los órganos de aplicación." (p. 90).

consultores y accionistas) interpretan regularmente las disposiciones del derecho relacionadas a las actividades de aseguración en la forma más conveniente para ellos (Tarello, 2013). En suma, los intérpretes atípicos son individuos o grupos cuya interpretación está guiada por el objetivo de precautar y satisfacer sus intereses y expectativas.

Ahora bien, todas estas decisiones y propuestas interpretativas de los distintos operadores de la interpretación en las sociedades modernas se caracterizan por ser justificadas, según se indicará infra, mediante distintos tipos de argumentos.

### 1.4.5 Interpretación y argumentación

En las organizaciones jurídicas modernas, los intérpretes, al aplicar el derecho, están obligados a motivar y justificar sus atribuciones de significados a los enunciados preceptivos contenidos en documentos jurídicos. Numerosas disposiciones jurídicas prescriben tal obligación que es considerada, incluso, una garantía de las personas a través de la cual se asegura un debido proceso.<sup>63</sup>

En consecuencia, la motivación permite el control social sobre los razonamientos de los intérpretes que fundamentan una decisión o una propuesta sobre el significado de los documentos jurídicos. Esta motivación se manifiesta especialmente en las decisiones heterónomas de autoridades institucionales (jueces y funcionarios administrativos). Por ello, en las culturas jurídicas modernas se considera generalmente que existe una relación importante entre los modos de interpretación de los documentos jurídicos y las técnicas de motivación de las decisiones interpretativas en sede de aplicación del derecho. (Tarello, 2013)

Tanto las decisiones interpretativas de las autoridades institucionales como las propuestas de atribución de significado a documentos jurídicos preexistentes que intérpretes típicos y atípicos (jurista, abogado, titular de un interés) dirigen a dichos órganos de aplicación del derecho se sustentan en argumentos, es decir, son motivadas y justificadas en base a esquemas de razonamiento jurídico. Este «razonamiento jurídico» es un instrumento: a) mediante el cual la sociedad controla los procedimientos intelectuales del intérprete; b) históricamente mutable pues se origina en la cultura jurídica de cada sociedad; c) considerado corriente y aceptable, en mayor o menor grado, por un determinado ambiente sociocultural e histórico. (Tarello, 2013)

En definitiva, existe una relación estrecha entre la interpretación y la argumentación ya que las decisiones y propuestas de atribución de significado a los enunciados preceptivos de documentos jurídicos se motivan y justifican por medio de argumentos, los cuales son usualmente denominados interpretativos, como se apuntará a continuación.

### 1.4.6 Argumentos interpretativos

Un argumento interpretativo es un razonamiento formulado por un intérprete para acreditar una determinada atribución de significado a enunciados preceptivos contenidos en documentos jurídicos. Por «razonamiento» se entiende un procedimiento discursivo que conduce de premisas a conclusiones<sup>64</sup>; el cual, en el

---

<sup>63</sup> Art. 76, numeral I, de la CRE.

<sup>64</sup> A partir de Aristóteles (1982), el razonamiento fue concebido como “discurso (lógos) en el que, sentadas ciertas cosas, necesariamente se da a la vez, a través de lo establecido, algo distinto de lo

caso del derecho, se denomina «razonamiento jurídico» y se caracteriza por el carácter jurídico de premisas y conclusión, el uso de técnicas estandarizadas para fundamentar o justificar decisiones jurídicas, y la pretensión de suscitar un asentimiento práctico (Tarello, 1974).

Esta última característica está relacionada con la naturaleza retórica de los argumentos interpretativos. En efecto, los intérpretes expresan estos argumentos con la finalidad de persuadir sobre su decisión o propuesta de atribución de significado a un documento jurídico, esto es, provocar adhesión en otros sobre cómo se debe interpretar un determinado enunciado preceptivo. Así, los argumentos interpretativos son razonamientos útiles para convencer a un interlocutor disidente, así como para justificar o motivar el convencimiento propio (Tarello, 2013). En consecuencia, los argumentos interpretativos pueden ser más o menos persuasivos, aceptables, plausibles según el contexto (impuesto por la cultura jurídica) en que sean utilizados.

Los argumentos interpretativos usualmente también son denominados esquemas de argumentación. Esta denominación se debe a que un argumento interpretativo tiene una forma o estructura determinada que es independiente del contenido del mismo. Por tanto, un esquema de argumentación es una representación abstracta y general de las partes que componen un argumento. Al ser un razonamiento, la estructura de un argumento está compuesta de premisas y conclusión. Al ser abstracta y general, la representación no versa sobre el contenido de tal o cual argumento sino sobre su forma.

Ahora bien, existen diversos tipos de esquemas o argumentos interpretativos que son habitualmente usados por los operadores de la interpretación para proponer (esquemas de persuasión) y motivar (esquema de justificación) sus atribuciones de significado a enunciados preceptivos. Estos son los siguientes.

#### **1.4.6.1 Argumento *a contrario***

El argumento interpretativo *a contrario* es un procedimiento discursivo según el cual, dado un enunciado preceptivo que predica una cualificación normativa cualquiera (por ejemplo, un poder, una obligación, un estado) de un término incluido en tal enunciado que se refiere a un sujeto o una clase de sujetos, no se debe extender el significado de dicho término para que comprenda a sujetos o clases de sujetos no literal y estrictamente incluidos en él (Tarello, 2013).

El argumento *a contrario* sirve para justificar o proponer la llamada «interpretación literal», esto es, aquella según la cual debe atribuirse significado a los enunciados preceptivos y sus vocablos exclusivamente según las reglas sintácticas y semánticas de la lengua en que han sido formulados los documentos jurídicos. Por tanto, el uso de este argumento permite excluir interpretaciones que extiendan el significado común de los vocablos que componen un enunciado preceptivo.

Si una disposición (como el art. 95 de la CRE<sup>65</sup>) otorga un particular derecho X (participación en asuntos de interés público) a los «ciudadanos», entonces argumenta

---

establecido” (p. 90). Tales cosas sentadas son las premisas, mientras que ese algo distinto es la conclusión que deriva de dichas premisas. La influencia de tal noción se manifiesta en el citado concepto de razonamiento de Tarello.

<sup>65</sup> “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

a *contrario* el intérprete que decide (como en el caso del juez) o propone (como en el caso del abogado) que el significado de tal disposición es que el derecho X *solo* corresponde a los ciudadanos y no a los extranjeros.

El argumento sub examine posee una notable fuerza persuasiva en las culturas en que se atribuye gran valor a la interpretación literal de los documentos y se torna rígida la subordinación de los órganos de aplicación del derecho a los órganos de producción del mismo. Por ello, este argumento adquirió especial relevancia tras la codificación moderna, la cual estaba fuertemente inspirada por el dogma de la separación de poderes y la doctrina francesa de la Escuela de la Exégesis (que defendía la preminencia de la interpretación literal). (Tarello, 1974)

No obstante estar relacionado con usos conservadores o formalistas<sup>66</sup>, el argumento sub examine opera con distintos efectos según la estructura formal del enunciado preceptivo en que se aplica: a) el argumento a *contrario* con efecto represor: en enunciados que adscriben derechos, libertades y poderes, este argumento delimita el área de tales cualificaciones y expande el área de deberes, restricciones y obligaciones, circunstancia que se presenta comúnmente en el sector del derecho privado; b) el argumento a *contrario* con efecto liberal: en enunciados que asignan deberes y obligaciones e imponen restricciones, este argumento limita el área de tales cualificaciones y amplía el área de derechos, libertades y poderes, situación habitual en el sector del derecho penal. (Tarello, 2013)

#### 1.4.6.2 Argumento analógico

El argumento interpretativo analógico es un procedimiento discursivo por el cual, dado un enunciado preceptivo que predica una cualificación normativa cualquiera (verbigracia, un poder, una obligación, un estado) de un término incluido en tal enunciado que se refiere a un sujeto o una clase de sujetos, se debe extender el significado de dicho término de modo tal que comprenda sujetos o clase de sujetos que, aunque no literal y estrictamente incluidos, presentan con los sujetos literalmente incluidos una semejanza, similitud o analogía asumida como relevante para que a ambos sujetos o clases de sujetos (los literalmente comprendidos y los que no) les sea aplicable la misma disciplina jurídica. (Tarello, 1974)

Este argumento se opone al argumento a *contrario* y, por ende, es útil para motivar o sugerir la denominada «interpretación extensiva», es decir, aquella según la cual a los enunciados preceptivos y sus vocablos ha de atribuirse un significado más amplio que el común o literal con fundamento en razones de equidad. Así, en el mismo ejemplo citado para el argumento a *contrario*, formula un argumento analógico el intérprete que decide o propone atribuir a la disposición en cuestión el significado según el cual el derecho X corresponde a ciudadanos y extranjeros, en cuanto ambos son personas que gozan de protección constitucional de sus derechos fundamentales (como lo es el derecho X).

---

<sup>66</sup> «Formalismo interpretativo» alude a todos aquellos métodos que, para obtener un significado de una norma, se basan en elementos que se asumen intrínsecos de tal norma. Esto es, el significado se concibe como inherente a la norma y, en consecuencia, la labor del intérprete es comprender y descubrir (actividad de conocimiento o intelectual) tal significado mediante métodos que garanticen alcanzar una interpretación «verdadera» de la norma. El formalismo adquirió relevancia durante el siglo XIX por la influencia de la Escuela de la Exégesis en Francia y la Escuela Histórica en Alemania. (Tarello, 1974)



La analogía entre los sujetos considerados semejantes opera según el siguiente esquema:  $p$  es  $A$ ,  $q$  también es  $A$ ; de modo que si  $p$  es  $Z$  también  $q$  debe ser  $Z$  (Tarello, 2013). Lo que fundamenta la identidad de regulación jurídica para  $p$  y  $q$  es, entonces, la relación existente entre ambas establecida por la cualidad  $A$ . En su uso interpretativo, la analogía permite que en el enunciado « $p$  es  $Z$ » el significado del término  $p$  se extienda para comprender a  $q$ , de modo que a dicho enunciado preceptivo se le atribuya el significado según el cual  $p$  y  $q$  son  $Z$ .

La fuerza persuasiva de este argumento depende de: a) la predisposición de los interlocutores del intérprete a aceptar la relevancia de la similitud entre  $p$  y  $q$  que consienta disciplinarlos del mismo modo; b) la concurrencia con otros argumentos que le sirvan de soporte para justificar la relevancia de la analogía. (Tarello, 2013)

#### 1.4.6.3 Argumento *a fortiori*

El argumento interpretativo *a fortiori* es un procedimiento discursivo que, dado un enunciado preceptivo que predica una cualificación normativa cualquiera (p.ej. un poder, una obligación, un estado) de un término incluido en tal enunciado que se refiere a un sujeto o una clase de sujetos, o a un singular comportamiento o clase de comportamiento, hace que el significado de dicho término se extienda de modo tal que comprenda a otros sujetos o clase de sujetos, o a otros comportamientos u otras clases de comportamientos, en virtud de que los sujetos o clases de sujetos, o los comportamientos o clases de comportamientos, a incluir ameritan *con mayor razón* la cualificación normativa predicada por el enunciado en cuestión. (Tarello, 1974)

Al igual que el argumento analógico, el argumento en examen sirve para justificar o proponer una «interpretación extensiva». No obstante tal similitud, estos dos argumentos se diferencian en que el primero se funda en la semejanza, mientras el segundo se basa en la razón que originó el enunciado normativo (Tarello, 2013). Por ello, el sujeto o conducta a que se extiende el significado del enunciado preceptivo no es necesario que sea similar al sujeto o conducta ya comprendido, sino que merezca con mayor motivo la cualificación normativa.

Según la estructura formal de los enunciados preceptivos a los que se aplique, el argumento *a fortiori* puede ser: a) *a minori ad maius*: cuando se aplica a cualificaciones desventajosas (prohibiciones, deberes, obligaciones,); b) *a maiori ad minus*: cuando se aplica a cualificaciones ventajosas (libertades, derechos, poderes). (Tarello, 2013)

Por ejemplo, si una disposición prohíbe una conducta  $X$ , como torturar a cualquier persona (art. 66, numeral 6, de la CRE), argumenta *a minori* el intérprete que decide o propone que el significado atribuible a tal disposición incluye, *con mayor razón*, la prohibición de ejecutar legalmente (pena de muerte) a cualquier persona. Por otro lado, si una disposición permite una conducta  $X$  a determinada clase de sujetos, v. gr. los asambleístas están autorizados a ejercer la docencia universitaria (art. 127, numeral 1, de la CRE), argumenta *a maiori* el intérprete que motiva o sugiere que dicha disposición admite la interpretación según la cual los asesores de los asambleístas también pueden, *con mayor razón*, practicar la docencia en universidades.

La fuerza persuasiva del argumento *a fortiori*, al igual que en el argumento analógico, está sujeta a: a) la propensión de los interlocutores a admitir la razón que justifica la



regulación del enunciado interpretado y, por ende, la inclusión de una entidad en otra;  
b) la asociación con otros argumentos que fundamenten dicha razón.

#### 1.4.6.4 Argumento de la completitud de la disciplina jurídica

El argumento interpretativo de la completitud es un procedimiento discursivo por el cual, al no encontrar alguna norma (i.e. proposición preceptiva, significado atribuido a disposiciones, interpretación-producto) que adscriba una cualificación normativa a un comportamiento específico y a un determinado sujeto, se debe concluir que valga (que sea válida) una norma que adscriba a tal comportamiento no regulado alguna cualificación normativa (Tarello, 1974).

Este argumento es útil para excluir aquellas atribuciones de significado a los enunciados preceptivos por medio de las cuales el intérprete configure disposiciones que consideren un comportamiento cualquiera como «no regulado por el derecho» (esto es, no cualificado). El fundamento del argumento sub examine es el dogma de la completitud del derecho (o del sistema jurídico, o del ordenamiento jurídico), esto es, la creencia de que el derecho (en sentido objetivo) provee una regulación íntegra (sin lagunas) de todos los aspectos de la vida social.<sup>67</sup> Este dogma constituye una ideología jurídica que orienta la actividad de los intérpretes (como se indicó en 1.4.1). (Tarello, 2013)

La fuerza persuasiva del argumento de la completitud es bastante considerable ya que el dogma de la completitud es ampliamente aceptado por los operadores de la interpretación (especialmente los jueces) de todas las organizaciones jurídicas modernas. No obstante tal fuerza, es un argumento subsidiario, esto es, brinda soporte a otros argumentos pues no puede por sí solo resolver un problema interpretativo. (Tarello, 2013)

Así, en el ejemplo citado, el operador que utiliza el argumento *a maiori* para proponer la interpretación del art. 127, numeral 1, de la CRE según la cual el personal asesor de los asambleístas puede, *con mayor razón*, practicar la enseñanza universitaria, brinda soporte a tal propuesta al emplear el argumento de la completitud, esto es, al señalar que si bien no existe una disposición expresa que regule la conducta en cuestión, el derecho es completo y, por ende, debe atribuirse a la disposición indicada el significado de que los asesores de los asambleístas pueden enseñar en universidades.

#### 1.4.6.5 Argumento de la coherencia de la disciplina jurídica

El argumento interpretativo de la coherencia es un procedimiento discursivo por el cual, al existir dos normas (i.e. proposiciones preceptivas, significados atribuido a disposiciones, interpretaciones-producto) que adscriben cualificaciones normativas contradictorias a un mismo comportamiento específico respecto a un determinado sujeto, se debe concluir que una de las normas: a) no valga (que no sea válida) para cualquier caso; o, b) que no sea aplicable a un caso específico. (Tarello, 1974)

El argumento examinado sirve para impedir las interpretaciones de los enunciados preceptivos que configuren disposiciones cuyo resultado sea un conflicto de normas,

---

<sup>67</sup> El dogma de la completitud está íntimamente relacionado con el principio de certeza del derecho objetivo, el cual constituye la ideología fundamental del positivismo jurídico (Bobbio, 1993)

es decir, para motivar o sugerir una «interpretación correctiva»<sup>68</sup>. La base de este argumento es la ideología o creencia de que el derecho objetivo (o el sistema jurídico, o el ordenamiento jurídico) provee una disciplina coherente (sin contradicciones, incompatibilidades o antinomias) de la vida social (según se manifestó en 1.4.1). (Tarello, 2013)

La fuerza persuasiva del argumento de la coherencia es notable debido a que: a) la de la ideología de la coherencia es de aceptación generalizada por los diversos intérpretes (en especial los jueces) de todas las organizaciones jurídicas modernas; b) el uso de este argumento permite a los órganos judiciales justificar, por un lado, la preservación de la mayor cantidad posible de leyes (en sentido material) y, por otro, la eliminación por incompatibilidad del menor número posible. Sin embargo, este es un argumento auxiliar, es decir, no alcanza por sí solo para resolver una dificultad interpretativa sino que requiere de asociación con otros argumentos o de completación con un criterio de solución de antinomias. (Tarello, 2013)

Por ejemplo, un intérprete X demanda la inconstitucionalidad de una disposición (el art. 28 de la Ley de Minería) que, según un uso del argumento *a contrario*, permite a cualquier persona prospectar libremente en busca de minerales en cualquier lugar (excepto áreas protegidas y territorios concesionados para explotación minera), lo cual atentaría contra el derecho constitucional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a, también de acuerdo a la utilización del argumento *a contrario*, conservar la propiedad indivisible de sus tierras (art. 57, numeral 4, de la CRE). Por tanto, existiría contradicción entre dos disposiciones. Con el propósito de evitar la eliminación de la disposición legal, el órgano judicial emplea el argumento de la coherencia y atribuye al art. 28 de la Ley de Minería, según un uso del argumento *a minori*, el siguiente significado: cualquier persona puede prospectar libremente en busca de minerales en cualquier lugar, excepto áreas protegidas, territorios concesionados para explotación minera y tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

El argumento sub examine es ampliamente utilizado por la Corte Constitucional ecuatoriana cuando dicta «sentencias interpretativas», esto es, aquellas tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de una particular interpretación de una disposición para que esta última sea compatible con (también con una específica interpretación de) la Constitución.<sup>69</sup>

#### 1.4.6.6 Argumento psicológico

El argumento psicológico, o recurso a la voluntad del legislador concreto, es un procedimiento discursivo por el cual a un enunciado preceptivo se debe atribuir el significado que corresponde a la voluntad de su autor o emisor, esto es, el legislador concreto o histórico (Tarello, 1974). Por «legislador» se entiende cualquier autoridad por potestad normativa. La «voluntad» del autor se determina generalmente por medio del recurso a los trabajos o documentos preparatorios (como las actas de

---

<sup>68</sup> Según Bobbio (2002), la interpretación correctiva es aquella que “pretende conciliar dos normas aparentemente incompatibles para conservarlas ambas en el sistema jurídico, o sea para evitar el remedio extremo de la abrogación” (p. 200).

<sup>69</sup> Algunas sentencias interpretativas de la Corte Constitucional son: Sentencia No. 002-09-SAN-CC, Sentencia No. 001-10-SIN-CC, Sentencia No. 014-10-SCN-CC, Sentencia No. 004-13-SAN-CC.

debate de una ley, los preámbulos o exposiciones de motivos de una ley) pues proporcionan indicios para reconstruir tal voluntad.

Este argumento tiene dos usos: a) justificación directa de una decisión o propuesta de atribución de significado (interpretación como tal); b) exclusión y desacreditación de interpretaciones que son notoriamente contrarias a la voluntad del autor del documento jurídico. El fundamento del argumento en examen reside en: a) la doctrina imperativista del derecho<sup>70</sup>: el derecho consiste en órdenes o mandatos que el superior dirige a los inferiores, los cuales, por la necesidad de ser comunicados a estos últimos, se manifiestan en documentos (especialmente la ley) y, por ende, interpretar radica en atribuir significado al documento según la voluntad del superior; b) la doctrina de la separación de poderes por la que el juez, al aplicar el derecho, no debe recurrir a su propia voluntad sino a la del legislador. (Tarello, 2013)

Así, como en el ejemplo previo, si una disposición, como el art. 95 de la CRE, confiere el derecho de participación en asuntos de interés público a los «ciudadanos», entonces el intérprete que emplea el argumento psicológico propone que el significado de tal disposición es que el derecho es atribuible a ciudadanos y extranjeros pues la voluntad o intención del constituyente fue, según lo manifestado por los constituyentes A, B y C en las actas de debate, que los derechos consagrados en la Constitución protejan a las personas independientemente de su nacionalidad.

La fuerza persuasiva del argumento psicológico depende de: a) la adhesión a las doctrinas mencionadas ut supra por parte del intérprete que emplea este argumento y el destinatario del mismo; b) la distancia temporal entre el momento de la emisión del enunciado objeto de interpretación y el tiempo de la atribución de significado pues mientras más cercanos son, más eficaz es el argumento; c) la disponibilidad de los trabajos preparatorios que recogen la voluntad del legislador. (Tarello, 2013)

#### **1.4.6.7 Argumento histórico**

El argumento histórico, denominado también presunción de continuidad del sistema jurídico o hipótesis del legislador conservador, es un procedimiento discursivo por el cual a un enunciado preceptivo se debe atribuir, en ausencia de indicaciones contrarias expresas, el mismo significado tradicionalmente atribuido al: a) enunciado preceptivo precedente que regulaba la misma materia en la misma organización jurídica; o, b) enunciado preceptivo contenido en un documento jurídico modelo de otra organización (Tarello, 2013).

Por ejemplo: en el caso de a), un intérprete propone que al art. 207 del Código Orgánico Administrativo (expedido en 2017) se la atribuya el mismo significado tradicionalmente adscrito al art. 28 de la Ley de Modernización del Estado (expedido en 1993), según el cual la solicitud no resuelta por la autoridad pública en el respectivo término se debe entender aceptada, y fundamenta tal sugerencia en que ambas disposiciones disciplinan la misma situación y materia en el derecho ecuatoriano; en el caso de b), un intérprete decide atribuir al art. 1461 del Código Civil ecuatoriano el mismo significado tradicionalmente atribuido al art. 1108 del Código Civil francés, esto

---

<sup>70</sup> Uno de los principales expositores de esta doctrina es Pufendorf. Según este jurista alemán, el derecho es la voluntad de la autoridad suprema y, por tanto, es un conjunto de órdenes (predominantemente negativas, es decir, prohibiciones) dirigidas del superior al inferior. En consecuencia, el conocimiento del derecho es el conocimiento de la mente y la voluntad del legislador soberano que se plasma en los documentos preparativos, los cuales constituyen la principal guía al interpretar el derecho. (Tarello, 2002)

es, que los requisitos para la validez de un acuerdo son el consentimiento libre de vicios de la parte obligada, su capacidad para contratar, un objeto sobre el que versa el acuerdo y una causa lícita en la obligación, y motiva tal atribución en que el Código de Ecuador está inspirado en el Código de Francia.

El fundamento de este argumento es: a) la creencia de que el legislador, a través de la transformación de las fórmulas de los textos, mantiene a las normas reguladoras de una materia constantes, es decir, que aunque cambie la forma de los enunciados, las normas son las mismas; b) la ideología según la cual la legislación (o un particular sector de ella) no debe innovar en su parte esencial. Por un lado, esta creencia se justifica en la preexistencia de formulaciones preceptivas y en la imitación del legislador, como el Código Civil ecuatoriano que es fuertemente influenciado por el Código Civil francés de 1804 y el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Por otro, la ideología señalada tiene sus raíces en la doctrina de Domat<sup>71</sup>. (Tarello, 2013)

La fuerza persuasiva del argumento histórico depende de la adhesión de los interlocutores del intérprete a la creencia y a la ideología descrita, así como de la preexistencia de un enunciado prescriptivo (en la misma organización jurídica o en otra) que discipline la misma materia del enunciado que es objeto actual de interpretación.

#### 1.4.6.8 Argumento apagógico

El argumento apagógico (o *ab absurdo*, o hipótesis del legislador razonable) es un procedimiento discursivo mediante el cual un intérprete decide o propone excluir la atribución de significado a un enunciado preceptivo que origina una norma (i.e. interpretación-producto) «absurda» (Tarello, 2013).

Un ejemplo del uso del argumento apagógico se encuentra en la Sentencia N.º 002-10-SIC-CC, en la cual la Corte Constitucional ecuatoriana decidió que al art. 114 de la CRE no se debe atribuir el significado según el cual, en caso de que el Presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional o esta destituya a aquel, la elección popular inmediata de las autoridades destituidas (asambleístas o Presidente) por tal situación se considera una reelección que imposibilita otras futuras y el comienzo de una nuevo período regular ya que esta interpretación generaría el absurdo de que, al ser el inicio de un nuevo periodo, la Asamblea podría nuevamente destituir al Presidente o el Presidente disolver de nuevo la Asamblea.

El fundamento de este argumento es la creencia de que el derecho no contiene normas absurdas porque se considera que estas no pueden ser válidas o se supone que el legislador es razonable. Esta creencia es ampliamente difundida en las organizaciones jurídicas modernas, lo cual dota de notable fuerza persuasiva al argumento sub examine. No obstante, es un argumento auxiliar pues se utiliza para reforzar otro argumento: el enunciado X debe ser interpretado como x1, según el argumento sistemático, pues interpretarlo como x2, conforme el argumento a *contrario*, generaría un «absurdo». (Tarello, 2013)

---

<sup>71</sup> Según este jurista racionalista francés del siglo XVII, al derecho civil y privado de origen romano se debía excluir de la innovación legislativa pues la larga vigencia de este era un indicio de que era “natural”. (Tarello, 2002)

#### 1.4.6.9 Argumento teleológico

El argumento teleológico, o hipótesis del legislador provisto de fines, es un procedimiento discursivo por medio del que un intérprete decide o propone atribuir a un enunciado preceptivo un significado que corresponde al fin propio de la ley que contiene tal enunciado (Tarello, 2013). Por «ley» se entiende un documento jurídico autónomo expedido por una autoridad política, esto es, ley en sentido material (constitución, ley propiamente dicha, código, reglamento, etc.).

Este argumento es distinto del psicológico pues, aunque ambos sirven para argumentar una «interpretación extensiva», el primero reconstruye los fines de la ley o del legislador (entendido como una entidad abstracta, es decir, como sinónimo de «ley») a partir del texto mismo o de una clasificación de fines o intereses protegidos por el derecho, mientras el segundo reconstruye la voluntad o fin perseguido por el legislador desde documentos que proporcionan indicios de tal voluntad o fin (Tarello, 1974).

Así, como en el ejemplo citado en el argumento psicológico, si una disposición, como el art. 95 de la CRE, confiere el derecho de participación en asuntos de interés público a los «ciudadanos», entonces el intérprete que emplea el argumento teleológico propone que el significado de tal disposición es que el derecho de participación es atribuible a ciudadanos y extranjeros pues uno de los fines perseguidos por “la” Constitución, según se desprende de una lectura de su texto, es la máxima protección de la igualdad, esto es, que los derechos fundamentales consagrados en “ella” protejan a todas las personas, independientemente de su nacionalidad.<sup>72</sup>

#### 1.4.6.10 Argumento económico

El argumento económico, o hipótesis del legislador no redundante, es un procedimiento discursivo por el cual un intérprete decide o propone excluir la atribución a un enunciado preceptivo de un significado ya atribuido a otro enunciado preceptivo, el cual es preexistente, jerárquicamente superior o más general que el primero; exclusión que de no suceder originaría la existencia de un enunciado preceptivo superfluo (Tarello, 2013). Existe, por tanto, dos enunciados prescriptivos que, a pesar de (ser capaces de) expresar la misma norma (según una determinada interpretación), son interpretados de forma que expresan dos normas distintas.

Por ejemplo, el art. 113 de la CRE dispone que los jueces de la Función Judicial no podrán ser candidatos de elección popular, mientras el art. 174 del mismo documento jurídico prescribe que los jueces no podrán participar como candidatos en procesos de elección popular. En este caso, el intérprete que utiliza el argumento económico sostendrá que al art. 113 es atribuible el significado según el cual los jueces no pueden inscribirse ante el órgano competente y, por ende, participar como candidatos, interpretación que no es atribuible al art. 174 pues este debe entenderse, al ser más general, como una prohibición impuesta a los jueces para participar en todo el proceso para ser candidato, el cual incluye las elecciones primarias y demás procedimientos electorales internos del respectivo movimiento o partido político.

El argumento económico sirve para enlazar dos consecuencias jurídicas distintas a un mismo supuesto de hecho cuando dos enunciados distintos son susceptibles de

---

<sup>72</sup> Las comillas se han utilizado para mostrar que en este argumento se considera que la ley en sí misma, en cuanto documento, pretende satisfacer determinados fines.



ser interpretados de la misma manera: si los enunciados A y B pueden ser interpretados como expresivos de la misma norma (si  $p$  entonces  $q$ ), entonces se debe atribuir al enunciado B (que es sucesivo, especial o jerárquicamente diverso respecto a A) un significado distinto (si  $p$  entonces  $r$ ). El fundamento de este argumento es la creencia en un modelo de buen legislador que no es repetitivo, es decir, que no produce nuevos enunciados que expresan normas que ya eran válidas y eficaces. El argumento examinado es usado especialmente para atribuir significados distintos a enunciados contenidos en un mismo documento. (Tarello, 2013)

#### 1.4.6.11 Argumento autoritativo

El argumento autoritativo, o *ab exemplo*, es un procedimiento discursivo por medio del que un intérprete decide o propone atribuir a un enunciado preceptivo el significado ya atribuido a este por alguien, y por solo este hecho (Tarello, 2013). Esto es, el operador de la interpretación emplea el argumento autoritativo cuando invoca un criterio u opinión de otro (generalmente formulada por jueces y doctrinarios) para motivar o sugerir una determinada atribución de significado a un enunciado preceptivo.

Este argumento es útil para ajustar las actuales atribuciones de significado a interpretaciones-producto previamente emitidas por jueces («interpretación judicial»), funcionarios administrativos («interpretación oficial») o juristas («interpretación doctrinal»).<sup>73</sup> El fundamento del argumento sub examine es el principio de inercia propio de todos los agregados sociales, es decir, la tendencia a conservar los modelos de conducta, que en el campo del derecho se traduce en dos valores frecuentemente considerados esenciales: a) la certeza y previsibilidad de las futuras aplicaciones del derecho; y, b) la igualdad en el tratamiento de casos similares. (Tarello, 2013)

Una muestra de la utilización del argumento autoritativo se presenta cuando un intérprete propone o decide que una disposición, como el art. 86, numeral 3, de la CRE<sup>74</sup>, se debe interpretar tal como lo ha propuesto el doctrinario X, quien afirma que la expresión «suministre información» de dicho artículo significa que la entidad pública debe proporcionar no cualquier información sino aquella que: (i) reúna los requisitos formales exigidos por las leyes procesales para ser considerada prueba; y; (ii) pruebe lo contrario a lo alegado por el accionante.

El argumento autoritativo tiene una bastante considerable fuerza persuasiva. Esta fuerza depende principalmente de: a) el grado de prestigio que la autoridad invocada goza en la cultura jurídica en que se emplea este argumento; b) la estimación de los interlocutores del intérprete sobre la importancia de los valores de certeza e igualdad mencionados anteriormente en el derecho y, especialmente, en la interpretación.

#### 1.4.6.12 Argumento sistemático

El argumento sistemático, o hipótesis del derecho ordenadamente dispuesto o del derecho por sí ordenado, es un procedimiento discursivo por el cual un intérprete decide o propone atribuir a un enunciado preceptivo o a un conjunto de enunciados

---

<sup>73</sup> Cuando la adhesión al precedente o a la opinión doctrinal es impuesta por una fuente del derecho en sentido formal no se trata de un uso del argumento autoritativo sino de la aplicación normativa de enunciados ya interpretados (Tarello, 2013).

<sup>74</sup> “Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

preceptivos (que se consideran relacionados a los fines de la «interpretación sistemática»<sup>75</sup>) el significado prescrito, o bien excluir el significado impedido, por el «sistema jurídico» (Tarello, 2013).

El significado de «sistema jurídico» ha variado a lo largo del tiempo según el uso de este por los juristas, lo cual ha originado diversos tipos de argumentos que se fundamentan, precisamente, en la noción de «sistema»:

- a) El argumento sistemático *stricto sensu*: También llamado argumento sistemático como tal o, simplemente, argumento sistemático, es un procedimiento discursivo por el cual un intérprete, para decidir o proponer una atribución de significado a un enunciado preceptivo, recurre o apela a otro u otros enunciados preceptivos. Por «sistema» se entiende el contexto en el que se ubica una determinada disposición, ya sean otros incisos de un mismo artículo, otros artículos de un mismo o diferente documento, el conjunto de documentos que regulan una misma materia, o la totalidad de documentos que componen el derecho objetivo (Guastini, 2014). En este argumento, el intérprete considera que la disposición objeto de interpretación y la o las disposiciones utilizadas para justificar la atribución de significado a aquella están relacionadas<sup>76</sup>.

Un ejemplo del uso del argumento sistemático se encuentra en la Sentencia N.º 001-13-SCN-CC, en la cual la Corte Constitucional del Ecuador decidió que al art. 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se debe atribuir el significado según el cual la consulta de constitucionalidad de norma efectuada por los jueces debe ser motivada ya que el art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE prescribe que todo servidor público está obligado a motivar sus resoluciones.

- b) El argumento topográfico o de la *sedes materiae*: Procedimiento discursivo por el cual un intérprete decide o propone atribuir a un enunciado preceptivo el significado sugerido por la ubicación de este en el «sistema» del documento. Por «sistema» se entiende la disposición de los enunciados efectuada por el legislador, es decir, la ordenación de un documento jurídico en, por ejemplo, artículos, capítulos y títulos. Este argumento basa su notable fuerza persuasiva en la creencia de que la disposición de los enunciados constituye una expresión de la voluntad del legislador. (Tarello, 2013)

Ante una eventual propuesta de interpretar el art. 164 de la CRE de modo que la Asamblea Nacional goce de la potestad de decretar un estado de excepción ya que dicha disposición no menciona que aquella sea facultad exclusiva del Presidente de la República, el intérprete que emplea el argumento topográfico propone que a tal disposición se debe atribuir el significado según el cual la potestad en cuestión si es exclusiva del Presidente pues el artículo citado ha sido ubicado por el constituyente en el capítulo tercero, título segundo, de la CRE dedicado únicamente a la Función Ejecutiva.

- c) El argumento de la constancia terminológica: Procedimiento discursivo por el cual un intérprete decide o propone atribuir un significado determinado por el legislador a un cierto término de un enunciado preceptivo, y que este mismo significado se

---

<sup>75</sup> La «interpretación sistemática» es aquella según la cual a un enunciado preceptivo se debe atribuir el significado que se desprende de su contexto, es decir, de su relación con los otros enunciados que conforman el sistema de derecho.

<sup>76</sup> Esta relación puede fundarse en criterio como: la pertenencia de las disposiciones a un mismo documento jurídico, a una misma sección de este, a una misma materia; la identidad del objeto regulado por las disposiciones; etc.

atribuya a dicho término en todos los enunciados en que aparezca. Por «sistema» se entiende el conjunto de los conceptos que el legislador (en cuanto ente concreto o abstracto) utiliza. El fundamento de este argumento es la creencia de que el legislador utiliza un término con el mismo significado siempre. (Tarello, 2013)

Emplea este argumento, por ejemplo, el intérprete que propone que al término «niño» que aparece en el art. 45 de la CRE y en otras disposiciones constitucionales se debe atribuir el significado determinado a este término por el legislador en el art. 21 del Código Civil, según el cual se entiende por «niño» la persona que no ha cumplido siete años.

- d) El argumento sistemático-conceptual o dogmático: Procedimiento discursivo por el cual un intérprete decide o propone atribuir a un enunciado preceptivo el significado sugerido por el «sistema» de los conceptos y los principios del derecho. Por «sistema» se entiende “el conjunto orgánico de los conceptos del derecho, los cuales se componen para designar «partes del derecho», «institutos», «relaciones», entidades cada una de las cuales es precedida — para cada organización jurídica — de sus propios «principios»” (Tarello, 2013, p. 338). Estos conceptos son elaborados por la doctrina jurídica.<sup>77</sup>

En el mismo ejemplo citado para el argumento topográfico, utiliza el argumento sistemático-conceptual el intérprete que propone atribuir al art. 164 de la CRE el significado según el cual la facultad de decretar el estado de excepción es exclusiva del Presidente de la República pues la disposición señalada es de «Derecho Público», el cual se rige por el principio «Sólo se puede hacer lo expresamente permitido por el Derecho».<sup>78</sup>

#### 1.4.6.13 Argumento naturalista

El argumento interpretativo naturalista, o de la naturaleza de las cosas, es un procedimiento discursivo mediante el cual un intérprete decide o propone atribuciones de significados a singulares enunciados preceptivos o a combinaciones de estos que permitan identificar normas que se ajusten (o no sean contrarias) a (alguna concepción de) la «naturaleza»: naturaleza de la institución regulada, naturaleza de las relaciones disciplinarias, naturaleza del ser humano, naturaleza de la vida social, etc. (Tarello, 2013)

Este argumento tiene dos usos: a) justificación directa de una decisión o propuesta de atribución de significado que concuerda con la concepción de naturaleza invocada; b) exclusión y desacreditación de interpretaciones que son notablemente contrarias a la concepción de naturaleza invocada. El fundamento de este argumento es la creencia de que la interpretación de los enunciados y el derecho mismo no deben contrariar la naturaleza de las cosas.

El argumento naturalista es empleado, por ejemplo, cuando un intérprete propone que al inciso segundo del art. 67 de la CRE se debe atribuir el significado según el cual el

---

<sup>77</sup> Los doctrinarios o juristas realizan una actividad de elaboración conceptual: acuñan vocablos y expresiones técnicas; redefinen términos del lenguaje ordinario; reagrupan enunciados preceptivos; subdividen la clase de los enunciados en subclases que son recortadas por conceptos elaborados con este fin, esto es, subdividen el conjunto de documentos jurídicos en «partes» (como «derecho público» y «derecho privado»), «materias» («derecho constitucional», «civil», «administrativo», «penal», etc.), «instituciones» («garantías jurisdiccionales», «control de constitucionalidad», «matrimonio», «usufructo», etc.). (Tarello, 2011)

<sup>78</sup> Nótese que «Derecho Público» y el principio indicado son construcciones hechas por los doctrinarios.

matrimonio es, exclusivamente, la unión entre hombre y mujer ya que, según la «naturaleza» humana, solo pueden procrear personas de distinto sexo (considerado uno de los fines del matrimonio según el art. 81 del Código Civil).

#### 1.4.6.14 Argumento equitativo

El argumento equitativo es un procedimiento discursivo por el cual un intérprete decide o propone atribuir (o evitar atribuir) a un enunciado preceptivo un significado que concuerda (o que discrepa) con las ideas (compartidas por los operadores jurídicos y la sociedad) sobre el «buen» resultado de la aplicación del derecho en el caso concreto (Tarello, 2013).

Al igual que muchos otros, este argumento tiene dos funciones: por un lado, acreditar una interpretación, y, por otro, excluir una interpretación. Ambas funciones están supeditadas a la consecución de una decisión que, en un determinado ambiente sociocultural, genere un efecto que se considera «bueno», «equitativo» o «justo» para resolver la controversia jurídica.

Así, en el mismo ejemplo citado del argumento naturalista, emplea el argumento equitativo el intérprete que decide atribuir al inciso segundo del art. 67 de la CRE el significado según el cual el matrimonio es también la unión entre personas del mismo sexo ya que esta interpretación permite asegurar un trato «justo» y «equitativo», en cuanto «igualitario» y «no discriminatorio», a personas que, como cualquier otra, deben poder hacer efectivos sus derechos fundamentales.

La fuerza persuasiva del argumento equitativo depende de la existencia, en una organización jurídica específica, de formas generalizadas de sentir compartidas por los diversos operadores jurídicos y los demás miembros de la sociedad. Por ello, este argumento posee escasa eficacia para persuadir en las sociedades contemporáneas que son culturalmente fraccionadas, es decir, lo que es estimado como equitativo o justo para algunos también es considerado inequitativo o injusto por otros. (Tarello, 2013)

#### 1.4.6.15 Argumento a partir de los principios

El argumento interpretativo a partir de los principios es un procedimiento discursivo por el cual el intérprete decide o propone atribuir a un enunciado preceptivo un significado acorde a los «principios» del derecho (Tarello, 2013). En otros términos, el operador jurídico apela a un «principio» para motivar o sugerir una determinada interpretación de una disposición.

Un «principio» es un precepto o norma dotada de carácter fundamental y contenido indeterminado, ya sea porque posee un antecedente abierto, o es derrotable, o es genérica) (Guastini, 2014).<sup>79</sup> Un principio, al ser una formulación preceptiva que pretende dirigir el comportamiento humano, establece fines y directivas generales:

---

<sup>79</sup> Un principio es «fundamental» ya que: a) otorga justificación axiológica (ético-política) a otras normas, esto es, son valores, ideas de justicia o elecciones políticas que fundamentan a otras normas; b) es considerado en una determinada cultura jurídica como «justo» o «correcto». Posee un «antecedente abierto» pues no enumera exhaustivamente las circunstancias o situaciones en que es aplicable. Es «derrotable» porque admite excepciones no formuladas en el propio principio ni en otras normas. Es «genérica» ya que: a) requiere de la formulación de otras normas que concreten su aplicación a un caso particular; b) puede ser concretada de diferentes formas. (Guastini, 2014)

igualdad y no discriminación, seguridad jurídica, directa aplicación de los derechos, libertad contractual, libertad sindical, etc. (Tarello, 2013).

Una muestra del uso del argumento sub examine se presenta cuando un intérprete propone atribuir al art. 57, numeral 7, de la CRE el significado según el cual la consulta previa a pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas es vinculante pues, de conformidad con el principio pacta sunt servanda, el Ecuador debe cumplir lo dispuesto por el art. 32, numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, esto es, que el Estado debe no solo consultar a tales comunidades sino obtener su consentimiento para desarrollar cualquier actividad que afecte sus territorios.

### **1.5 Semejanzas y diferencias entre las concepciones y tipologías de argumentos interpretativos examinadas**

En lo referente a las concepciones sobre los argumentos interpretativos examinadas en el presente capítulo, cabe destacar que aquellas formuladas por Alexy y MacCormick se asemejan en que ambas se fundamentan en teorías de la interpretación que distinguen entre casos fáciles o simples y difíciles o complicados. Para los citados filósofos, la interpretación jurídica consiste en la resolución de dudas sobre el significado de una disposición jurídica mediante la elección de uno de sus posibles significados. En este sentido, existen «casos fáciles» o «casos simples», en los cuales el operador jurídico no interpreta las disposiciones jurídicas ya que no existen dudas sobre el significado de estas últimas, y «casos difíciles» o «casos complicados», en los cuales el operador interpreta las disposiciones ya que surgen incertidumbres sobre el significado de esta última que exigen al operador escoger uno de los posibles significados y justificarlo. En consecuencia, los argumentos interpretativos, a criterio de Alexy y MacCormick, son recursos a disponibilidad del intérprete para justificar una determinada interpretación de una norma jurídica cuando se presentan dudas sobre el significado de esta, o en términos similares, razonamientos que el intérprete ofrece en los casos difíciles para motivar una de las posibles interpretaciones de una norma jurídica que es escogida por aquel.

Así, la concepción de los argumentos interpretativos de Tarello se diferencia de aquella formulada por Alexy y MacCormick en virtud de la teoría de la interpretación en que se fundamenta. Según el primero, la interpretación jurídica (o «interpretación en el derecho» como él la denomina) es la operación mediante la cual los operadores jurídicos deciden atribuir un particular significado a una disposición cualquiera y, en consecuencia, siempre que el operador utiliza una disposición la interpreta, es decir, no hay significado sin interpretación. De esta manera, los argumentos interpretativos son razonamientos formulados por los intérpretes para acreditar una determinada atribución de significado a disposiciones jurídicas.

Respecto a las tipologías de argumentos interpretativos indicadas, corresponde señalar las siguientes semejanzas:

- El argumento semántico formulado por Alexy y los argumentos del significado ordinario y significado técnico enunciados por MacCormick son similares pues son empleados por el intérprete para justificar una interpretación de una norma jurídica según los usos que un determinado término o vocablo posee en un cierto lenguaje.



- El argumento genético expuesto por Alexy y el argumento psicológico expresado por Tarello se asemejan en que los operadores de la interpretación los utilizan para justificar una interpretación de una disposición jurídica de conformidad con la voluntad del legislador histórico, entendido este como la persona o grupo de personas que expidieron el documento objeto de interpretación.
- El argumento sistemático enunciado por Alexy, el argumento de la armonización contextual formulado por MacCormick y el argumento sistemático expuesto por Tarello son semejantes en que, al ser usados por los intérpretes, estos recurren al contexto de la disposición interpretada (es decir, a las relaciones existentes entre esta y otras disposiciones tales como: la pertenencia de las disposiciones a un mismo documento jurídico, a una misma sección de este, a una misma materia; la identidad del objeto regulado por las disposiciones; etc.) para justificar su interpretación de esta última.
- Los argumentos teleológicos, expresados bajo esta misma denominación por cada uno de los tres iusfilósofos en cuestión, se asemejan en que los intérpretes los emplean para motivar una interpretación de una disposición jurídica según los fines prescritos por el legislador, los cuales son suposiciones que se infieren del texto mismo de la ley.
- El argumento del precedente enunciado por MacCormick y el argumento autoritativo formulado por Tarello (cuando se funda en un criterio emitido anteriormente por un órgano jurisdiccional) son similares ya que son utilizados por los operadores de la interpretación para atribuir a una disposición jurídica un significado concedido previamente por otro tribunal.
- El argumento lógico-conceptual expresado por MacCormick y el argumento de la constancia terminológica expuesto por Tarello se asemejan en que los operadores jurídicos los usan para justificar la misma atribución de significado a un mismo término en diversos enunciados o documentos jurídicos.
- El argumento de los principios de los principios generales del derecho formulado por MacCormick y el argumento a partir de los principios enunciado por Tarello son semejantes pues son utilizados por los intérpretes para motivar una interpretación de una disposición jurídica conforme a los principios del derecho.
- El argumento de la historia expuesto por MacCormick y el argumento histórico expresado por Tarello se asemejan en que los operadores de la interpretación los emplean en la justificación de una atribución a una disposición jurídica del significado tradicionalmente atribuido a esta.

Finalmente, las tipologías de argumentos interpretativos se diferencian, principalmente, en la variedad de argumentos que cada una registra: Alexy formula 6, MacCormick enuncia 10 y Tarello expresa 18.

## CAPÍTULO II: REGLAS JURISPRUDENCIALES Y ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS

### 2.1 Constitución y reglas jurisprudenciales

La Constitución ecuatoriana de 2008 impuso una gran cantidad de cambios en el panorama jurídico del país, entre los cuales destacan: la calificación del Ecuador como un Estado Constitucional de derechos y justicia, el papel central de los derechos constitucionales en el desarrollo de la vida social, el reconocimiento de la eficacia directa e inmediata de los derechos constitucionales, la creación de garantías jurisdiccionales para proteger directamente los derechos, etc.

La intención del constituyente<sup>80</sup> al etiquetar al Ecuador como un Estado Constitucional fue que la Constitución, en cuanto documento jurídico, constituya el eje del conjunto de fuentes del derecho ecuatoriano. Para lograr tal propósito, el constituyente, primeramente, creó la Corte Constitucional<sup>81</sup>, esto es, un órgano dotado de la más alta posición jerárquica entre los órganos encargados del control, interpretación y administración de justicia constitucional; y, en segundo término, otorgó a este órgano un amplio elenco de atribuciones.

Entre tales potestades resaltan aquellas que otorgan carácter vinculante a las decisiones emitidas por la CC. El derecho (en sentido objetivo) del Ecuador, al pertenecer a la familia jurídica romano-germánica o *civil law*<sup>82</sup>, se ha caracterizado por la preminencia de la ley<sup>83</sup> sobre la jurisprudencia<sup>84</sup> como fuente principal del desarrollo de la práctica jurídica. Por ello, esta vinculación a las decisiones de un órgano jurisdiccional supuso una importante transformación de las fuentes del derecho ecuatoriano.

En efecto, el art. 436, núm. 1, de la CRE dispone que la CC es “la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante.”, mientras el núm. 6 de la misma disposición prescribe que dicho órgano está facultado a “expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión”.

Así, la CC, en cuanto máximo intérprete de la Constitución, ha considerado que los numerales del art. 436 citados en el párrafo anterior reconocen el principio *stare decisis*<sup>85</sup>, según el cual los jueces están obligados a adherirse: a) a sus propias

<sup>80</sup> Por «constituyente» se entiende el órgano (sea este unipersonal o pluripersonal) que expide una Constitución. En este caso, la Asamblea Nacional Constituyente 2007 – 2008.

<sup>81</sup> En adelante “CC” o “la Corte”.

<sup>82</sup> Por «familia jurídica» se entiende el conjunto de organizaciones jurídicas que comparten elementos institucionales, conceptos filosóficos y jerarquía de fuentes coincidentes **Fuente especificada no válida..**

<sup>83</sup> Entendida como un documento que ha sido expedido en aplicación de un procedimiento formal preestablecido por el órgano que detenta el Poder Legislativo en un Estado.

<sup>84</sup> Entendida como los documentos expedidos por los órganos judiciales de un Estado en ejercicio de su función de juzgar y decidir conflictos jurídicos.

<sup>85</sup> Según Ross (1994), la doctrina del *stare decisis* se resumen en los siguientes puntos: a) un tribunal está obligado por las decisiones de tribunales superiores, y en Inglaterra la Cámara de Lores y el

decisiones previas; b) a las decisiones de jueces superiores de la misma jurisdicción. Por tanto, la CC estima que es facultad exclusiva suya desarrollar jurisprudencia referente a los derechos y garantías constitucionales que sea vinculante en dos formas: a) vertical, es decir, que sus decisiones vinculen a todo órgano jurisdiccional inferior; b) horizontal, esto es, que sus decisiones la vinculen a ella misma. (Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, 2010)

La CC también ha señalado que la Constitución de 2008 reconoció, a través del principio mencionado, que la ley en sentido formal no es la única fuente de derecho pues existen otras manifestaciones que no provienen del parlamento y, no obstante, reúnen las condiciones para generar derecho objetivo. Así, la CC, mediante el desarrollo de jurisprudencia vinculante con efecto *erga omnes*, produce derecho objetivo con el propósito de asegurar: a) la constitucionalización de la justicia ecuatoriana; y, b) los derechos a la igualdad y seguridad jurídica de las personas. (Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, 2010)

En consecuencia, dicha jurisprudencia, según ha manifestado la CC, es fuente directa del derecho y por medio de ella el máximo órgano de justicia constitucional puede crear derecho objetivo y adecuar las disposiciones legislativas a los contenidos axiológicos de la Constitución. Esto se concreta en la aptitud de la Corte para: a) desarrollar reglas legislativas; b) interpretar el texto constitucional en caso de ambigüedad, insuficiencia de regulación o contradicciones entre disposiciones; c) regular directamente (i.e. sin acudir al órgano legislativo) una situación determinada en caso de vacío normativo. (Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, 2010)

La CC ha considerado que en el ejercicio de tales actividades está facultada a expedir reglas jurisprudenciales y fundamenta tal potestad en el art. 436, núm. 1 y 6, de la CRE (Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, 2010). Estas reglas son enunciados preceptivos emitidos por la CC que:

- a) Regulan una determinada situación o conducta relacionada a los derechos y garantías constitucionales. Este vínculo es relevante ya que circunscribe el ámbito de regulación de las reglas jurisprudenciales, es decir, enlaza el objeto de regulación de la regla a los derechos y garantías previstos en la Constitución. En el caso de derechos constitucionales, por ejemplo, la CC ha resuelto que si el empleador fundamenta la terminación de la relación laboral de una persona portadora de VIH en argumentos que se agoten en el rendimiento de las actividades laborales de esta, entonces aquel incurre en trato discriminatorio y vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación (Sentencia N.º 080-13-SEP-CC, 2013). En el caso de garantías constitucionales, verbigracia, la CC ha decidido que el recurso de apelación de las diversas garantías jurisdiccionales puede ser interpuesto por los intervinientes dentro de la misma audiencia o en el término de tres días después de notificada la sentencia (Sentencia N.º 045-13-SEP-CC, 2013).
- b) Son formulados de manera explícita. Cuando la CC dicta una regla jurisprudencial lo manifiesta expresamente en el texto de la sentencia y generalmente utiliza una

---

Tribunal de Apelaciones están obligados por sus propias decisiones; b) Toda decisión relevante emitida por cualquier tribunal es una fuerte razón para ser considerada por otros tribunales; c) solo la *ratio decidendi* de una decisión es obligatoria; d) los precedentes no pierden vigencia, aunque aquellos más antiguos no son en principio aplicables a situaciones modernas. Por tanto, el *stare decisis* posee una doble función pues “impone al juez la obligación de seguir los precedentes de casos previos similares, pero a la vez eleva a categoría de precedente sus propias sentencias” **Fuente especificada no válida.**

fórmula similar a la que sigue: “En ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional emite la siguiente regla jurisprudencial”.

- c) Poseen efectos generales (*erga omnes*). En virtud de ello, las reglas jurisprudenciales constituyen una fuente formal del derecho y vinculan a todos los operadores jurídicos en la organización jurídica ecuatoriana, en especial a jueces y servidores públicos, quienes están obligados a cumplir dichas reglas en el ejercicio de su actividad.
- d) Son de obligatorio cumplimiento. En relación con lo mencionado en c), la aplicación de las reglas jurisprudenciales a los casos previstos por ellas es un deber impuesto a todos los operadores jurídicos, particularmente a jueces y servidores públicos. Esta obligatoriedad está respaldada por la facultad de la CC para destituir a los servidores públicos en caso de incumplimiento de sentencias o resoluciones de garantías jurisdiccionales (arts. 86, núm. 4, y 436, núm. 9, de la CRE). Así, por ejemplo, en el caso N.º 0063-10-IS la CC aplicó a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 con sede en Portoviejo la sanción de destitución por inobservar la regla jurisprudencial contenida en la sentencia N.º 004-13-SAN-CC (Aguirre, 2016).

Un ejemplo de regla jurisprudencial que exhibe las características mencionadas es el siguiente:

“4. En ejercicio de la competencia atribuida a la Corte Constitucional en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución, en virtud del problema jurídico identificado en el caso, esta Corte Constitucional dicta la siguiente regla jurisprudencial de aplicación obligatoria con efecto *erga omnes* para todos los procesos en trámite y los que llegaren a presentarse con las mismas características:

No es causa justificada de inejecutabilidad de una sentencia, las omisiones en la aplicación y ejecución oportuna del fallo, atribuibles a quien, debiendo cumplir la sentencia íntegra y oportunamente ha dejado de hacerlo.” (Sentencia N.º 006-13-SIS-CC, 2013, p. 14).

Estas reglas jurisprudenciales están contenidas en distintas sentencias expedidas por la CC. El tipo de caso que dicho órgano jurisdiccional conoce y resuelve en ejercicio de sus potestades es indiferente para la emisión de una regla jurisprudencial pues aquel ha dictado reglas en diferentes procesos constitucionales sometidos a su decisión: acciones extraordinarias de protección, acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, consultas de constitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad, etc.

## 2.2 Reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional

Como se señaló *ut supra*, las reglas jurisprudenciales dictadas por la CC trasformaron el conjunto de las fuentes del derecho ecuatoriano. Por ello, el examen de las sentencias en que tales reglas fueron emitidas resulta relevante.

La presente investigación versa sobre las decisiones de la primera Corte Constitucional<sup>86</sup>, la cual ejerció sus funciones a partir del 06 de noviembre del 2012

---

<sup>86</sup> Esta primera Corte estuvo conformada por los magistrados: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana

hasta el 05 de noviembre de 2015. Durante este período, dicho órgano jurisdiccional emitió 20 sentencias que contienen reglas jurisprudenciales: 11 correspondientes a acciones extraordinarias de protección, 4 referentes a consultas de constitucionalidad de normas, 2 alusivas a acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, 1 concerniente a constitucionalidad de convocatoria a consulta popular, 1 correspondiente a acción por incumplimiento, 1 referente a precedente jurisprudencial obligatorio. (Ruiz, et al., 2016)

En estas decisiones, la primera CC atribuyó significado a diferentes disposiciones constitucionales y utilizó diversos argumentos interpretativos para justificar sus interpretaciones y fallos. A continuación se identificará dichos argumentos.

### 2.3 Análisis de sentencias e identificación de argumentos interpretativos

En la presente sección se procederá a identificar los argumentos interpretativos utilizados por la primera CC para justificar sus interpretaciones de las diversas disposiciones en las veinte sentencias en que dicho órgano jurisdiccional emitió reglas jurisprudenciales.

Para ello, se adoptará como marco teórico la concepción y tipología de los argumentos interpretativos de Giovanni Tarello desarrollada en el capítulo I de la presente investigación. Las razones de esta decisión metodológica son:

- a) La teoría de la interpretación de Tarello, en la cual se fundamenta su concepción de los argumentos interpretativos, es más amplia que la de Robert Alexy y Neil MacCormick. Según el primero, la interpretación jurídica es la operación por medio de la cual los operadores jurídicos deciden atribuir un particular significado a una disposición cualquiera y, en consecuencia, siempre que el operador utiliza una disposición la interpreta<sup>87</sup>, es decir, no hay significado sin interpretación. De conformidad con los otros filósofos mencionados, la interpretación jurídica consiste en la resolución de dudas sobre el significado de una disposición jurídica mediante la elección de uno de sus posibles significados<sup>88</sup> y, por tanto, existen «casos fáciles», en los cuales no se requiere que el operador jurídico interprete las disposiciones (pues no existen dudas sobre el significado de estas últimas), y «casos difíciles», en los cuales el operador interpreta las disposiciones (ya que surgen incertidumbres sobre el significado de esta última que exigen al operador

---

Sierra, Patricio Pazmiño Freire, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera. (Ruiz, et al., 2016)

<sup>87</sup> Guastini (2014), en base a Tarello (2013) y (1974), afirma que “constituye interpretación cualquier atribución de significado a un texto normativo independientemente de las dudas y controversias. Cualquier texto normativo, en cualquier situación, necesita interpretación. (...) Puede tratarse de una simple comprensión, es decir, de una atribución de significado del todo irreflexiva e intuitiva o, por el contrario de una decisión consciente, resultado de un proceso de análisis y reflexión (una elección entre varias alternativas oportunamente sopesadas). Sin embargo, en cualquier caso, siempre atribuir significado es interpretar: no hay significado sin interpretación” (pp. 342-343).

<sup>88</sup> A decir de Guastini (2014), esta teoría sostiene que “la interpretación es algo distinto de la comprensión irreflexiva: comprender o captar el significado de un texto no es interpretarlo.” (p. 338); no obstante, “a veces el intérprete se detiene en la interpretación literal o *prima facie* (mera «comprensión») y, más precisamente, en una interpretación que reitera el texto interpretado sin reformularlo en modo alguno; otras veces, el intérprete, después de una oportuna reflexión, llega a una interpretación «todo-considerado», no literal, cuyo resultado es una reformulación del texto interpretado. ¿Por qué decir que en un caso el texto ha sido meramente comprendido y en el otro interpretado, en vez de decir -más plausiblemente- que estarnos frente a dos interpretaciones distintas?” (pp. 339-340).



escoger uno de los posibles significados), esto es, hay significado sin interpretación.

En virtud de lo manifestado, adoptar la teoría de la interpretación de Tarello permite identificar los argumentos interpretativos que la CC utilizó para justificar sus atribuciones de significado a cualquiera de las diversas disposiciones que dicho órgano jurisdiccional invocó en cada sentencia; mientras que asumir las teorías de la interpretación de Alexy o MacCormick implica registrar solo los argumentos interpretativos que la CC empleó cuando resolvió dudas sobre el significado de una determinada disposición. En otras palabras, la primera teoría amplía el alcance de esta investigación, mientras las otras lo restringen.

- b) La tipología de los argumentos interpretativos de Tarello es más amplia que las ofrecidas por Alexy y MacCormick, lo cual permite examinar las sentencias de la CC con una cantidad mayor de instrumentos.
- c) La concepción y tipología de los argumentos interpretativos de Tarello ha tenido considerable influencia en la filosofía del derecho contemporánea. Como se manifestó en la introducción del capítulo I de esta investigación, filósofos como Perelman, Ezquiaga, Casanovas y Moreso han asumido el análisis de los argumentos interpretativos de Tarello.

En las sentencias que siguen se efectuará: primeramente, un breve resumen del caso; en segundo término, la identificación de la disposición o disposiciones interpretadas en la resolución de los problemas jurídicos determinados por la CC para decidir el caso y la correspondiente atribución de significado de dichas disposiciones; en tercer lugar, el registro de los argumentos interpretativos utilizados para motivar dicha atribución de significado.

Las sentencias que siguen están organizadas según la garantía jurisdiccional resuelta (acción extraordinaria de protección, acción por incumplimiento y acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales), el control de constitucionalidad que efectúa la Corte (consulta popular y consulta de norma) y el precedente jurisprudencial obligatorio que ella emite.<sup>89</sup>

### **2.3.1 Acción extraordinaria de protección**

#### **2.3.1.1 Sentencia N.º 0016-13-SEP-CC**

Cosme Efraín Ordoñez Japa, procurador común de los accionantes, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja dentro del proceso de apelación de una acción de protección, en el cual se resolvió rechazar el recurso y confirmar la sentencia subida en grado por el Juzgado Segundo de lo Civil de Loja. Los accionantes pretendían que el máximo órgano de justicia constitucional acepte la acción de protección ya que existió una injusta aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 813. La CC decidió negar la acción presentada pues consideró que no

---

<sup>89</sup> Según se manifestó en 2.2, las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales emitidas por la primera CC son 20. No obstante, a continuación se presenta el análisis de 19 fallos pues la Sentencia N.º 006-13-SIS-CC no contiene argumentos interpretativos identificables.

En dicho caso, el máximo órgano de justicia constitucional únicamente verificó si PETROECUADOR EP (parte accionada) cumplió con el reintegro de Patricia Verónica Carpio Becerra (parte accionante) a dicha entidad dispuesto por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Corte concluyó que existió incumplimiento por parte de la entidad accionada. (Sentencia N.º 006-13-SIS-CC, 2013)

existió vulneración de derechos constitucionales de los accionantes y que estos buscaban la resolución de un asunto de mera legalidad. (Sentencia N.º 016-13-SEP-CC, 2013).

Las disposiciones interpretadas por la Corte en el caso sub judice fueron:

- I) Art. 229, inciso segundo, de la CRE: La CC decidió atribuir a la frase “Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables” el significado según el cual los derechos laborales de los servidores públicos y sus actividades están sujetos a “parámetros reguladores para que los mejores funcionarios se desempeñen como servidores públicos” (p. 8), así como a lo que el Estado, sus instituciones y órganos decidan para “calificar, seleccionar, reclutar y mantener el personal idóneo en el servicio público.” (p. 9).
- Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional utilizó el argumento sistemático *stricto sensu*<sup>90</sup> en cuatro ocasiones:
- a) En virtud del art. 33 de la CRE, “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.” (p. 6).
  - b) El art. 325 de la CRE señala “que el Estado ecuatoriano garantizará el derecho al trabajo” (p. 7), lo cual implica que el Estado debe “procurar la satisfacción de este derecho, empero dentro de una configuración normativa que permita el pleno ejercicio de este derecho constitucional, así como de las obligaciones sociales que del mismo devienen, y en el caso del sector público aquella acometida adquiere una mayor relevancia dada la naturaleza de las actividades laborales asociadas al servicio público.” (p. 8).
  - c) De conformidad con el art. 227 de la CRE, “la administración pública constituye un **servicio a la colectividad** que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” (Énfasis fuera del texto), lo cual conlleva que “las actividades desempeñadas por los servidores públicos adquieren relevancia nacional, ya que son estos quienes representan, mediante sus labores, al Estado ecuatoriano.” (p. 8).
  - d) Según el art. 11, núm. 9, de la CRE, el Estado y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública “estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”, es decir, “una de las tareas esenciales del Estado es atender a los ciudadanos con la provisión oportuna de bienes y servicios públicos de calidad, los cuales deben ser proporcionados por servidores públicos competentes y probos, pues en caso de no hacerlo el Estado está expuesto a asumir responsabilidades e incluso a reparar los daños ocasionados por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos.” (p. 9).
- II) Art. 75 de la CRE: La CC resolvió interpretar a esta disposición de la siguiente manera: El derecho a la tutela judicial efectiva exige “la existencia de un órgano jurisdiccional”; “la presencia de jueces y juezas quienes, investidos de potestad jurisdiccional, deben velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, aplicándolos a un caso concreto para lograr de este modo la tan anhelada

---

<sup>90</sup> En adelante, simplemente, argumento sistemático.

justicia”; así como “ que los operadores judiciales realicen una labor diligente en donde se plasme la defensa de los derechos sin evidenciar sesgos o prerrogativas a favor de ninguna de las partes procesales, manteniéndose de este modo un justo equilibrio que a su vez garantiza la confianza de las personas de acudir a estos órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos.” (p. 11).

En la motivación de esta atribución de significado, la Corte empleó el argumento autoritativo en tres oportunidades:

- a) “La jurisprudencia constitucional española ha expresado: STS de 18 de junio de 1991 (RA 4473) F.J. 3º, “el contenido constitucional del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta no solamente en el derecho de acceso a la jurisdicción y en el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, sino que también, esencialmente, del derecho a obtener una resolución fundada jurídicamente”. (p. 11).
- b) De conformidad con el Tribunal Constitucional español, en STS de 18 de junio de 1991 (RA 4473), el derecho a la tutela judicial efectiva “no puede ser interpretado consagrando un derecho incondicional a la protección jurídica, sino como el derecho a obtenerla siempre que se ejerza por las vías procesales legalmente establecidas, sin que, por otra parte, pueda hablarse de indefensión, cuando el recurrente ha tenido abiertas todas las instancias y recursos, incluido el de casación, para hacer valer sus derechos” (p. 11).
- c) Hernando Devis Echandía señala: “La imparcialidad es una de las razones que exigen la independencia del órgano judicial [...]. Pero con ella se contempla, además, la ausencia de todo interés en su decisión, distinto del de la recta aplicación de la justicia. Al juez le está vedado conocer y resolver asuntos en que sus intereses personales se hallen en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. No se puede ser juez y parte a un mismo tiempo” (p. 12).

III) Art. 76 de la CRE<sup>91</sup>: La CC decidió que esta disposición debe ser entendida como “un derecho primordial que les asiste a las partes que se encuentran dentro de un litigio” por el cual “existen garantías que deben ser observadas con el objeto de que aquel constituya un medio para la realización de la justicia” (p. 10).

Para motivar esta interpretación, el máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional usó:

- a) El argumento sistemático: Según el art. 169 de la CRE, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia (p. 10).
- b) El argumento autoritativo: “Así, respecto a este derecho, el tratadista Mario Houed ha señalado lo siguiente: “La definición de 'debido proceso' tiene que observarse estrechamente vinculada con el respeto de las garantías y derechos fundamentales del individuo, de la tutela efectiva de las libertades e intereses legítimos de los ciudadanos, su tratamiento digno, justo y equitativo, dentro de un marco de referencia que pretende la satisfacción de los fines esenciales del derecho y del Estado (entre ellos la solución pacífica y sin dilaciones del conflicto) y la realización de la armonía o paz social, entre otras premisas que pueden darle el contenido necesario para su sustento”. (pp. 10-11).

---

<sup>91</sup> Nótese que la CC no interpreta la disposición en su totalidad sino que únicamente define el derecho al debido proceso.

- IV) Art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE: El máximo órgano de justicia constitucional resolvió que esta disposición debe entenderse como el principio que “configura el accionar conforme a la Constitución y derecho por parte de las diversas autoridades públicas” y “se articula simbióticamente con el derecho a una tutela judicial efectiva” (p. 12).

En la justificación de tal interpretación, la CC utilizó el argumento autoritativo dos veces:

- a) “El Tribunal Constitucional español en la Sentencia de 18 de junio de 1991 (RA 4473) F.J.3º, determina: “el contenido constitucional del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta no solamente en el derecho de acceso a la jurisdicción y en el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, sino que también, esencialmente, del derecho a obtener una resolución fundada jurídicamente”. (p. 12).
- b) “Para el tratadista Iñaki Esparza Leibar, “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de forma razonable y ajustada a las pretensiones ejercitadas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión [...]”. (p. 13).

- V) Art. 94 de la CRE: La CC consideró que dicha disposición debe entenderse de forma que “la acción extraordinaria de protección está direccionada hacia la protección de derechos constitucionales y normas del debido proceso respecto a una sentencia o auto definitivo y firme o ejecutoriado”, y, por tanto, esta garantía jurisdiccional no procede ante problemas de interpretación derivados de “conflictos normativos infraconstitucionales” (p. 14).

En la motivación de esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional usó:

- a) El argumento autoritativo dos veces:
  - i. La CC, en la Sentencia N.º 003-13-SIN-CC, ha señalado que “los conflictos normativos infraconstitucionales deben ser resueltos a través de las jurisdicciones legales, toda vez que se trata de un asunto de interpretación de normas infraconstitucionales” (p. 14).
  - ii. La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 0045-11-SEP-CC, señaló que: “Las garantías jurisdiccionales son mal utilizadas cuando se desechan acciones de raigambre constitucional argumentando que son cuestiones de legalidad, así como a asuntos de legalidad se le yuxtapone la justicia constitucional a la ordinaria” (p. 17).
- b) El argumento sistemático: El art. 76, núm. 3, de la CRE prescribe “el respeto al trámite correspondiente”, es decir, “existen los procedimientos que corresponden a cada una de las acciones, dependiendo la causa sobre la cual se litigue” (p. 16).
- c) El argumento naturalista: Se debe excluir la interpretación de la disposición en cuestión según la cual mediante esta garantía jurisdiccional es procedente que “se resuelva por los canales constitucionales asuntos de mera legalidad para las cuales la jurisdicción ordinaria ha establecido el trámite respectivo”, pues tal atribución de significado provoca la “desnaturalización de la acción extraordinaria de protección” (p. 16).
- d) El argumento teleológico: Las disposiciones constitucionales y legales denotan que el fin u objetivo de la acción extraordinaria de protección es “la tutela de los derechos constitucionales o garantías del debido proceso cuando existan circunstancias que denoten una violación de estos derechos.” (p. 16).

- VI) Art. 82 de la CRE: La Corte decidió que esta disposición debe interpretarse como el principio “sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos” (p. 15), el cual exige la observancia de “los procedimientos que corresponden a cada una de las acciones, dependiendo la causa sobre la cual se litigue” (p. 16).

Para acreditar tal atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional empleó:

- a) El argumento teleológico: La disposición en cuestión tiene como fin u objetivo “conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional.” (p. 15).
- b) El argumento sistemático: De conformidad con el art. 76, núm. 3, de la CRE, “el respeto al trámite correspondiente constituye uno de los ejes centrales que permite el cumplimiento de las normas del debido proceso, y fomentan la seguridad jurídica en el país” (p. 16).

- VII) Art. 88 de la CRE: La CC resolvió interpretar esta disposición de modo que “la acción de protección no procede cuando el titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad real de acceder a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en la vía ordinaria, especialmente para demandar actos de la administración pública” (pp. 18-19), y, por ello, “cuando se demande una presunta antinomia entre normas de rango infraconstitucional deberá acudir al recurso de anulación u objetivo como el mecanismo jurisdiccional ordinario pertinente e idóneo propio de la jurisdicción contencioso administrativa” (p. 23).

Para justificar esta interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional usó:

- a) El argumento autoritativo en tres oportunidades:
  - i. “La Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-1048/08 ha señalado lo siguiente: “La jurisprudencia de esta Corte ha estimado que la acción de tutela no es un medio alternativo que pueda ser empleado en reemplazo de las acciones judiciales ordinarias, pues conllevaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional del Estado. Así, esta acción tampoco resulta procedente cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado ha contado con la posibilidad de ejercer las acciones ordinarias o especiales ante las autoridades jurisdiccionales, creadas para conocer de los litigios originados en actos de la administración”.” (p. 19).<sup>92</sup>
  - ii. La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 0055-11-SEP-CC, ha señalado que: “Al ser observado el ordenamiento constitucional como un sistema coherente en el que el contenido de las diversas normas que lo integran se encuentran dotadas de unidad orgánica y finalista, identifica a la función jurisdiccional del país como la llamada a tutelar los derechos subjetivos de las personas, pues existen los recursos dirigidos a tal fin, en la especie, el recurso subjetivo de plena jurisdicción, de conocimiento de las judicaturas de lo contencioso administrativo. La interpretación sistemática de la Constitución exige que sean los recursos previstos por ella los llamados a tutelar los derechos en sus distintos ámbitos de competencia y que no ocurra una superposición de la justicia constitucional a ámbitos propios de la jurisdicción ordinaria” (p. 20).

---

<sup>92</sup> Nótese que la CC cita este criterio de la Corte Constitucional de Colombia pues aquella considera que la acción de protección regulada en la CRE es similar a la acción de tutela normada en el ordenamiento jurídico colombiano.



- iii. La CC, en la sentencia N.º 003-13-SIN-CC, manifestó: “Por consiguiente, la presunta vulneración al principio de jerarquía normativa, sustentado en un conflicto decreto-ley, no es materia de relevancia constitucional, sino de legalidad; en tal virtud, no es un asunto de competencia de la justicia constitucional. Por otro lado, se debe precisar que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos jurisdiccionales de protección pertinentes para la tutela de los derechos de las personas que puedan ser objeto de lesiones como consecuencia de una antinomia normativa de rango infra constitucional. Sostener lo contrario y permitir que la justicia constitucional, en este caso la Corte, incursione en esas competencias lesionaría el principio de interpretación integral de la Constitución y generaría como resultado que la justicia constitucional termine por absorber a la justicia ordinaria.” (p. 20).
- b) El argumento sistemático en cuatro ocasiones:
  - i. El art. 39 de la LOGJCC dispone que la acción de protección “tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por otras acciones constitucionales.” (p. 17).
  - ii. El art. 42 de la LOGJCC “establece que la acción de protección procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.” (p. 18).
  - iii. Según el art. 76, núm. 3, de la CRE, “solo se podrá juzgar a una persona ante el juez o autoridad competente y **con observancia del trámite propio para cada procedimiento**” (Énfasis fuera del texto) (p. 18).
  - iv. De conformidad con el art. 169 de la CRE, “el sistema procesal constituye un medio para la realización de la justicia y por tanto, las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.” (p. 18).
- c) El argumento a partir de los principios: El principio de seguridad jurídica exige “la observancia de la Constitución” y “la existencia de normas claras jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes” (p. 16), y, por ello, “la acción de protección no sustituye los demás medios judiciales, pues en dicho caso la justicia constitucional pasaría a asumir potestades que no le corresponden” (p. 18).

### 2.3.1.2 Sentencia N.º 045-13-SEP-CC

José Xavier Andrade Bravo presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto emitido por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en que inadmitió el recurso de apelación dentro de la acción de protección N.º 718-2010. Esta acción fue interpuesta por el señor Andrade y declarada sin lugar por el Juzgado Décimo Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas, decisión que fue notificada el 1 de octubre de 2010, ante lo cual el accionante presentó un recurso de aclaración que, tras ser resuelto, fue notificado el 7 de octubre del mismo año. Al conocer dicha aclaración, el accionante presentó el recurso de apelación el 11 de octubre de 2010, es decir, dentro del término de tres días prescrito por el art. 24 de la LOGJCC. No obstante, la Sala mencionada anteriormente inadmitió el recurso pues, a su criterio, dicho artículo dispone que la apelación debe ser presentada en los tres días siguientes a la notificación de la sentencia de primera instancia, indiferentemente

de la interposición de un recurso de aclaración. Ante ello, el señor Andrade presentó la acción extraordinaria señalada previamente pues consideró que se vulneró su derecho a la defensa en la garantía de recurrir el fallo o resolución. La CC resolvió aceptar la garantía jurisdiccional propuesta ya que existió vulneración al derecho mencionado cuando el juzgador de segunda instancia rechazó el recurso de apelación por extemporáneo, sin considerar para el cálculo del término el tiempo transcurrido por el recurso de aclaración presentado oportunamente por el accionante. (Sentencia N.º 045-13-SEP-CC, 2013)

En el caso sub judice, la Corte interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 76, núm. 7, lit. m, de la CRE: La CC decidió interpretar esta disposición de forma que el derecho a recurrir los fallos o resoluciones que decidan sobre los derechos u obligaciones de los ciudadanos comporta “la oportunidad que les asiste a las partes procesales para acudir ante un tribunal superior, con el propósito de impugnar la decisión del inferior” (p. 5).

En la justificación de esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional empleó el argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 001-11-SCN-CC, la CC señaló: “El concepto de recurrir se lo entiende como acudir otra vez ante un administrador de justicia distinto del anterior, con el propósito de que la decisión judicial primigenia, que ha sido contraria a los intereses del vencido, pueda ser revisada en función de argumentos y requisitos especificados por la ley para cada recurso; y carecería de sentido que quien obtuvo lo que quería de la administración de justicia, recurra la sentencia o el fallo; asimismo, cada recurso tiene especificidades propias que deben estar claramente contempladas en la Ley de la materia” (p. 6).

- II) Art. 162 de la LOGJCC: La Corte resolvió que esta disposición debe ser entendida de manera que en los procesos de garantías jurisdiccionales las partes pueden interponer “recursos horizontales, tales como la ampliación y aclaración de la sentencia”, los cuales procederán, respectivamente, “si la sentencia no resuelve todos los asuntos sometidos a la decisión del órgano competente” y “si el fallo fuere obscuro” (p. 8).

Para justificar esta interpretación, el órgano jurisdiccional mencionado usó:

- a) El argumento sistemático: “la aclaración y ampliación de las decisiones constitucionales tienen su fundamento en el derecho constitucional a la motivación, que contiene el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución” (p. 8), el cual prescribe que las personas tienen derecho a que las resoluciones de los juzgadores sean motivadas, esto es, que sean claras y resuelvan todas las cuestiones presentadas a conocimiento del juez.
- b) El argumento autoritativo: Según Ramiro Podetti, “la ampliación tiene por objeto “...la subsanación de omisiones de pronunciamiento...”; y la aclaración busca esclarecer “...conceptos oscuros.” (p. 6). En este sentido, “los recursos de ampliación y aclaración pueden ser concebidos como mecanismos de perfeccionamiento de las resoluciones o sentencias, pues tienen como finalidad que la misma no tenga puntos oscuros, y otros más, sin resolver.” (p. 6).

- III) Art. 24 de la LOGJCC: La CC decidió que esta disposición se debe interpretar manera que: En los procesos de garantías jurisdiccionales, “el recurso de apelación podrá ser interpuesto por los intervinientes dentro de la misma audiencia, o en el término de tres días después de haberse notificado la

sentencia. En el caso de haberse presentado un recurso de ampliación y/o aclaración de la sentencia de primera instancia, el término para interponer la apelación correrá desde la notificación del auto que conceda o niegue la aclaración y/o ampliación, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento conforme lo establecido en la Constitución y la ley.” (p. 10).

En la motivación de esta interpretación, la Corte utilizó:

- a) El argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 001-11-SCN-CC, la CC determinó: “...cuando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se refiere a “días hábiles” para presentar el recurso de apelación, lo asimila a TÉRMINO y no a PLAZO, pues para guardar concordancia con el mandato constitucional contenido en el artículo 76, numeral 7, literal m, debe procurar el acceso idóneo a los órganos jurisdiccionales, guardando siempre las garantías mínimas del debido proceso, entre ellas el derecho a una adecuada defensa” (p. 7).
- b) El argumento sistemático en tres ocasiones:
  - i. El art. 86, núm. 3, de la CRE, al referirse a los procesos de garantías jurisdiccionales, prescribe: “(...) Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial.” (p. 6). Esto es, reconoce “el derecho de los intervinientes en los procesos de garantías jurisdiccionales, para acceder adecuadamente a una segunda instancia” (p. 10).
  - ii. Según el art. 76, núm. 7, lit. m, de la CRE, las personas tienen derecho a: “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos” (p. 5).
  - iii. El art. 162 de la LOGJCC faculta a las partes que intervienen en procesos constitucionales a interponer “recursos horizontales, tales como la ampliación y aclaración de la sentencia” (p. 8).
- c) El argumento a partir de los principios tres veces:
  - i. En virtud del principio del “debido proceso” previsto en la LOGJCC, en el desarrollo de “todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, el cual “incluye la posibilidad de recurrir el fallo de primera instancia” (p. 9).
  - ii. El principio de “formalidad condicionada” establecido en la LOGJCC prescribe: “La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades.” (p. 9). Es decir, constituye un “deber de los operadores de justicia observar los aspectos formales **para garantizar el pleno ejercicio de los derechos.**” (Énfasis fuera del texto) (p. 9).
  - iii. El principio de “doble instancia” previsto en la LOGJCC dispone: “Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario.” (p. 9).
- d) El argumento de la coherencia: Interpretar la disposición en cuestión de forma “literal” y “restrictiva” (es decir, “la interposición del recurso de apelación” debe efectuarse “en el término de tres días, una vez que se haya notificado la sentencia” (p. 8), independientemente de que hayan sido interpuestos los recursos de ampliación y/o aclaración) contradice “el derecho de los intervinientes en los procesos de garantías jurisdiccionales, para acceder adecuadamente a una segunda instancia, en virtud del artículo 86 numeral 3 del texto constitucional” y “el mandato constitucional que contiene el artículo

76 numeral 7 literal m" (p. 10). Al originar una contradicción, dicha interpretación no es válida.

### 2.3.1.3 Sentencia N.º 080-13-SEP-CC

El señor NN presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.º 407-2010. El accionante fundamentó la garantía mencionada en que dicho fallo violentó sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía de la motivación y que, además, su caso reviste relevancia constitucional pues fue discriminado por los funcionarios de la Municipalidad de Samborondón y destituido de su cargo en dicha entidad pública por padecer la enfermedad de VIH. La CC decidió aceptar la garantía jurisdiccional presentada ya que las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro de la acción de protección citada vulneraron los derechos señalados anteriormente y a la igualdad y no discriminación. (Sentencia N.º 080-13-SEP-CC, 2013)

Las disposiciones interpretadas por la Corte en el caso sub judice fueron:

- I) Art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE: El máximo órgano de justicia constitucional decidió que esta disposición debe ser interpretada como la obligación impuesta a los juzgadores de asegurar a las partes procesales el ejercicio de sus derechos constitucionales, "comunicar de manera clara, coherente y razonable los fundamentos que sustentan una decisión" e "indagar a partir de los hechos presentados en el caso cómo estos se relacionan con las normas jurídicas a partir de un razonamiento, a más de explicativo, justificativo." (p. 8).  
Para justificar esta atribución de significado, la CC empleó:
  - a) El argumento topográfico o de la *sedes materiae*: La disposición en cuestión está ubicada en el Capítulo Octavo del Título Segundo de la CRE, referente a los "derechos de protección", los cuales imponen que "los juzgadores, en todo proceso, observen rigurosamente las garantías del debido proceso, dado que no se trata de cumplir con simples ritualidades, en las que interesa más la forma que el contenido, sino asegurar que efectivamente no se prive a los sujetos procesales del ejercicio de la eficacia de sus derechos constitucionales." (p. 8).
  - b) El argumento sistemático: Según el art. 4 de la LOGJCC, el juzgador "tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso" (p. 8).
- II) Art. 88 de la CRE: La CC consideró que esta disposición debe ser entendida de forma que la acción de protección es la garantía jurisdiccional "idónea y eficaz" cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, por lo que el deber de motivación "se refuerza cuando los juzgadores resuelven acciones de protección de los derechos", lo cual implica que el juzgador analice las particularidades del caso y justifique "si se verifica o no la vulneración de derechos, si el acto, hecho u omisión anula el ejercicio de los derechos constitucionales y la solución pertinente, en caso de existir vulneración de los derechos, la reparación integral pertinente, o caso contrario, la negativa de la acción." (p. 8).

En la motivación de esta interpretación, el órgano jurisdiccional mencionado usó:

- a) El argumento sistemático: De conformidad con el art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE, “la obligación de motivar va más allá de la mera enunciación de normas, sino que conlleva una obligación de indagar a partir de los hechos presentados en el caso cómo estos se relacionan con las normas jurídicas a partir de un razonamiento, a más de explicativo, justificativo.” (p. 8).
- b) El argumento autoritativo en dos ocasiones:
  - i. En la Sentencia N.º 0016-13-SEP-CC, la CC manifestó: “La acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía para la tutela de los derechos que no sean las garantías jurisdiccionales” (p. 9).
  - ii. La CC, en la Sentencia N.º 041-13-SEP-CC, determinó: “...el contenido de la norma del artículo 88 de la Carta Suprema tiene repercusiones medulares respecto del objetivo de la justicia constitucional de los hechos que configuran una vulneración de derechos constitucionales. Es así que la causal del numeral 4 del artículo 42 impone la obligación jurisdiccional de justificar en la motivación de su sentencia si se verifica la existencia de una violación constitucional y, en caso de no encontrarla, discurrir sobre la vía que considera adecuada y eficaz para satisfacer la pretensión.” (p. 9).

- III) Art. 75 de la CRE: La CC resolvió que esta disposición, referente al derecho a la tutela judicial efectiva, debe interpretarse como “un deber del Estado y específicamente de los jueces de garantizar el acceso a la justicia, un debido proceso y el cumplimiento de las decisiones que pongan fin a los procesos” (p. 11).

Para motivar esta interpretación, la Corte utilizó el argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 024-09-SEP-CC, la CC para el período de transición determinó sobre el derecho a la tutela judicial efectiva los siguiente: “(...) implica que cuando una persona pretende la defensa de sus derechos o intereses legítimos, debe ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas” (p. 11).

- IV) Art. 11, núm. 2, inciso primero, de la CRE: El máximo órgano de justicia constitucional consideró que el principio de igualdad recogido en esta disposición debe entenderse “como un enunciado según el cual los seres humanos diferentes deben ser tratados de forma diferente atendiendo a las circunstancias” (p. 19), esto es, “no implica un trato idéntico en todas las circunstancias; por el contrario, son justamente las diferencias las que convocan a un trato distinto en atención al caso” y, por tanto, “un trato diferente es justificado solo en la medida en la que la finalidad sea potenciar de mejor manera la vigencia de los derechos y no al contrario.” (p. 21).

Para justificar esta interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional utilizó el argumento autoritativo tres veces:

- a) Según Carlos Bernal Pulido, el principio de igualdad se concreta “en cuatro mandatos: a) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentran en situaciones idénticas; b) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún aspecto en común; e) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas circunstancias presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes son más relevantes que las



- diferencias (trato igual a pesar de la diferencia); d) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentran también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias son más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud)” (p. 21).
- b) A decir de Carlos Gaviria Díaz, al referirse al principio de igualdad, “si no hay una razón suficiente para la permisión de un trato desigual, entonces lo ordenado será un tratamiento igual; y por el contrario, si hay una razón suficiente para ordenar un trato desigual, entonces está permitido el trato desigual” (p. 21).
  - c) De acuerdo con Judith Salgado, “si el trato diferente es arbitrario, injusto e impone una desventaja que limita o anula el ejercicio de los derechos humanos de forma injustificada o irrazonable estamos frente a una discriminación; y si por el contrario, el trato diferente es proporcional, necesario y razonable que se justifica en la necesidad de garantizar justamente el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, estamos frente a una distinción.” (pp. 21-22).
- V) Art. 11, núm. 2, inciso segundo, de la CRE: La CC decidió atribuir a esta disposición los siguientes significados:
- a) Los criterios contenidos en ella (etnia, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, etc.) son “categorías o criterios sospechosos” (p. 15), esto es, “aquellas categorías utilizadas para realizar tratos “diferentes” respecto de ciertos grupos o personas vulnerables que no resultan razonables y proporcionales, cuyo uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a colocar en situaciones de desventaja o desprotección a grupos de personas generalmente marginados” (pp. 15-16), y, en consecuencia, todas las distinciones que se funden en dichos criterios “*prima facie* son inconstitucionales a menos que se demuestre lo contrario, dada la carga argumentativa y probatoria que implica justificar para quienes establecen un trato diferente que el mismo es razonable y proporcional” (p. 16).
  - b) Las personas portadoras de VIH y las personas enfermas de SIDA “gozan de un principio de estabilidad laboral reforzada, merecedoras de una especial protección dada la fuerte carga discriminatoria que socialmente han tenido que soportar en sus relaciones de trabajo” (p. 24), y, por tanto, “no podrán ser separados de sus labores en razón de su condición de salud.” (p. 30).
  - c) “Bajo ningún motivo el empleador podría justificar un despido o terminación de la relación laboral en argumentos que se agoten en el rendimiento de las actividades laborales del trabajador, pues el deterioro físico y psicológico que sin duda influye en el desempeño de las actividades laborales desempeñadas es propio de la enfermedad so pena de incurrir en un trato discriminatorio; en tal caso, el empleador deberá proceder a reubicar a su trabajador con la finalidad de que pueda desempeñar su trabajo en condiciones aceptables” (p. 25).
- En la justificación de a), la CC empleó:
- i. El argumento autoritativo en dos ocasiones:
    - a. La inclusión de los criterios en la disposición en cuestión “es lo que en doctrina se ha denominado las categorías o criterios sospechosos”, esto es, “criterios utilizados tanto por el Estado, como por los particulares con miras a realizar diferencias que nunca parecerían justificarse” (p. 15).

- b. Según Roberto Saba, “La calificación de una categoría como sospechosa no es una cuestión menor, desde que aquella deposita en aquel que realiza la distinción la carga de la demostración argumentativa de que existe un interés estatal urgente, si se trata del ámbito estatal, o de una excepción basada en lo que la jurisprudencia de los Estados Unidos ha denominado 'calificación ocupacional de buena fe', si la distinción se realizara en la actividad privada a fin de superar la presunción de inconstitucionalidad” (p. 15).
- ii. El argumento sistemático: El art. 66, núm. 4, de la CRE prevé “el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”, por lo cual “resulta difícil pensar que una actividad, sea laboral, política, académica o de otro tipo, pueda estar condicionada por el sexo, la edad, la nacionalidad, mucho menos por una enfermedad, dada la condición y las consecuencias propias que ello implica.” (p. 16).

Para motivar b), la CC usó el siguiente argumento autoritativo:

La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia de Tutela T-238/2008, consideró que los trabajadores que portan VIH/SIDA gozan de estabilidad laboral reforzada, principio que “tiene como objetivo “asegurar que las personas que ostentan una condición de debilidad, gocen del derecho a la igualdad real y efectiva, que se traduce en materia laboral, en la garantía de permanencia en un empleo como medida de protección especial ante actos de discriminación cuando ello sea del caso, y conforme con la capacidad laboral del trabajador”, de suerte que, a menos de que exista una razón objetiva que tiene como finalidad desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad a la que se encuentra sometida una decisión de terminación de la relación laboral cuando una trabajadora o trabajador sea portador de VIH o enfermo de SIDA, el despido intempestivo practicado bajo esta circunstancia deviene en inconstitucional por la fuerte carga que pesa el justificar que el término de la relación laboral no obedecía al estado de salud del trabajador.” (p. 24).

En la motivación de c), la Corte empleó:

- i. El argumento sistemático en cuatro ocasiones:
- a. El art. 23, lit. o, de la Ley Orgánica del Servicio Público, consagra como derecho de los servidores públicos la conservación de “su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto.” (pp. 22-23).
- b. Según el art. 174 del Código del Trabajo<sup>93</sup>, “se encuentra prohibido dar por terminado el contrato en caso de “Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no profesional del trabajador, mientras no exceda de un año.” (p. 23).
- c. El art. 175 del CT establece: “Caso de enfermedad no profesional del trabajador.- El empleador no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que éste padezca de

---

<sup>93</sup> En adelante CT.

- enfermedad no profesional que lo inhabilite para el trabajo, mientras aquélla no exceda de un año” (p. 23).
- d. La Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH-SIDA “establece con claridad meridiana que este grupo de personas tienen derecho al trabajo sin discriminación y en condiciones de igualdad, obligándole al empleador a prevenir el VIH-SIDA a través de información para sus trabajadores, (...) facilitando el cambio de funciones para proteger la salud de las personas portadoras de VIH y propiciar un mejor desempeño” (pp. 26-27).
- ii. El argumento autoritativo en el mismo sentido empleado para justificar la interpretación b), esto es, lo manifestado por la Corte Constitucional colombiana sobre el principio de estabilidad reforzada de las personas con VIH/SIDA.

### 2.3.1.4 Sentencia N.º 102-13-SEP-CC

Eliana Custodia Guillén Cordero presentó acción extraordinaria de protección contra la sentencia emitida por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la acción de protección N.º 033-10, el 11 de febrero de 2010. En esta sentencia dicho órgano jurisdiccional confirmó el auto de inadmisión expedido por la jueza de primera instancia en la acción de protección propuesta por la Sra. Guillén contra el IEES. La CC aceptó la acción extraordinaria por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía de la motivación. (Sentencia N.º 102-13-SEP-CC, 2013)

En el caso sub judice la CC interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 75 de la CRE: La CC decidió atribuir a esta disposición el significado según el cual el derecho a la tutela judicial efectiva supone “garantizar tanto el acceso a los órganos de justicia, como el derecho al debido proceso de la peticionaria, el que incluye que la decisión se encuentre debidamente motivada, así como la observancia de procedimientos mínimos” y “en el que prevalecen los principios sobre las reglas” (p. 14).  
Dicho órgano jurisdiccional empleó el argumento autoritativo en la motivación de esta interpretación: De acuerdo a la CC para el período de transición, en Sentencia N.º 024-09-SEP-CC, el derecho a la tutela judicial efectiva “(...) implica que cuando una persona pretende la defensa de sus derechos o intereses legítimos, debe ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas” (pp. 13-14).
- II) Art. 436, núm. 1, de la CRE: A decir de la CC, la frase “Sus decisiones tendrán carácter vinculante” de dicha disposición debe entenderse como la potestad de dicho órgano jurisdiccional para “establecer la interpretación jurídica final de la Constitución” que vincula a “todos los demás operadores de justicia” (p. 18).  
Para justificar tal atribución de significado, el órgano en cuestión utilizó:
- a) El argumento sistemático: “El artículo 429 de la Constitución de la República determina que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de la justicia en esta materia, lo hace en relación a todos los demás intérpretes existentes” (p. 17).
- b) El argumento autoritativo: De conformidad con lo establecido por la CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 045-11-SEP-CC, “el carácter constitucional de vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional se

fundamenta, por una parte, en asegurar la coherencia y consistencia en la aplicación de los mandatos constitucionales por parte de todos los operadores de justicia, y por otra parte como órgano de cierre en materia de interpretación constitucional” (p. 18).

III) Art. 436, núm. 3, de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe interpretarse como la posibilidad de dicho órgano para:

- a) “Efectuar control de la constitucionalidad sobre las normas infra constitucionales que tienen directa relación con la causa sometida a su conocimiento.” (p. 20)
- b) Utilizar “las sentencias interpretativas, dotando de validez legal la interpretación que más se ajuste a la Constitución e invalidando aquellas interpretaciones que devienen en inconstitucionales.” (p. 20)

Para justificar a), el máximo órgano de justicia constitucional empleó:

- i. El argumento autoritativo: Según la CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 002-09-SAN-CC: “La inconstitucionalidad de normas conexas podría inscribirse entre las llamadas garantías liberales que consisten en la invalidación o anulación de actos que violan derechos humanos. Su objeto es precautelar la efectiva vigencia de la supremacía constitucional y para su procedencia, se requiere que la Corte concluya, dentro de los casos sometidos a su conocimiento, que una o varias normas son contrarias a la Constitución” (p. 18).
- ii. El argumento teleológico: La disposición sub examine “revela la clara intención del Constituyente de permitir el control oficioso de la constitucionalidad por parte del máximo órgano de justicia constitucional ecuatoriano por diferentes vías, y ya no únicamente a través de las acciones dispositivas de inconstitucionalidad.” (p. 19).
- iii. El argumento *a fortiori a maiori ad minus*: “Si la Corte Constitucional (...) debe efectuar control de constitucionalidad sobre las disposiciones normativas que tienen relación directa con las causas sometidas a su conocimiento, este organismo, en su calidad de máximo garante de la Constitución, también debe efectuar dicho control, cuando detecte que en las causas sometidas a su conocimiento, existen normas jurídicas inconstitucionales conexas o relacionadas con dichas causas.” (p. 19).

Para motivar b), la CC usó el argumento a partir de los principios: De conformidad con “los principios de presunción de constitucionalidad de las normas, pro legislatore y de conservación del derecho”, el control constitucional debe “rescatar en la mayor medida posible la validez del ordenamiento infra constitucional” (pp. 19-20).

IV) Art. 10, último inciso, de la LOGJCC: La Corte decidió atribuir a esta disposición el significado según el cual “la inadmisión en la acción de protección (...) solo debe darse ante la imposibilidad del juez de subsanar los requisitos de contenido mínimo de la demanda” (p. 8).

En la motivación de esta atribución de significado dicho órgano jurisdiccional empleó el argumento naturalista pues la “naturaleza tutelar de las garantías jurisdiccionales de los derechos” obliga al juzgador a “efectuar una verdadera tutela judicial efectiva ante una aparente vulneración de los derechos constitucionales, para que únicamente, luego de la sustanciación del procedimiento respectivo se establezca si se verificó o no la vulneración.” (p. 8)

- V) Art. 42 de la LOGJCC: La CC decidió interpretar esta disposición de forma que los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 sean considerados causales de improcedencia de la acción de protección y, por ello, “deberán ser declaradas, mediante sentencia”; mientras los numerales 6 y 7 sean causales de inadmisibilidad y, en consecuencia, el momento procesal para su determinación “será al calificar la demanda mediante auto” (p. 23).

Para justificar esta atribución de significado dicho órgano empleó:

- a) El argumento sistemático cinco veces:
  - i. De acuerdo al art. 86 de la CRE, el procedimiento de las garantías jurisdiccionales es sencillo, rápido y eficaz, “destacando su carácter informal” (p. 6).
  - ii. El juzgador “debe proceder, conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, entendiendo que la admisión de la acción de protección debe realizarse con el fin de precautelar activamente el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva, por el que se pueda acceder a un procedimiento que les permita justificar sus alegaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos constitucionales” (p. 8).
  - iii. Según el art. 7 de la LOGJCC, el legislador “establece expresamente que “... La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar”, prohibiendo de esta forma al juzgador recurrir a dilaciones procesales que perjudiquen a las partes.” (p. 10)
  - iv. Conforme al art. 10 de la LOGJCC, si tras haber sido ordenado por el juzgador que se complete la demanda y esta “continúa incompleta, pero del relato de los hechos se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que están a su alcance, para inmediatamente convocar a audiencia, es decir, el procedimiento de garantías jurisdiccionales de los derechos se desarrolla con características propias que denotan una informalidad en su sustanciación.” (pp. 7-8).
  - v. De conformidad con el art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE, es decir, “en virtud del deber constitucional de motivar del juzgador, en caso que ocurra, al momento de inadmitir una acción de protección en su primer auto de calificación de la demanda, esta decisión debe estar debidamente motivada” (p. 15).
- b) El argumento a partir de los principios en dos ocasiones:
  - i. Según el “principio de tutela judicial efectiva”, se establece la sustanciación de las garantías jurisdiccionales mediante “el amparo de un recurso directo y eficaz” (p. 6).
  - ii. De conformidad con “el principio de efectividad de la acción”, el juzgador debe “verificar las situaciones fácticas a través de medios procesales a su alcance, y sobre todo de la existencia o no de vulneraciones a los derechos constitucionales, esto es, mediante la integración de la relación jurídico procesal, la cual se logra a partir de la notificación al accionado y a través de un mínimo recaudo probatorio, que le otorgue al operador de justicia el convencimiento necesario para fallar”. (p. 16)
- c) El argumento teleológico: Las reglas constitucionales referentes a las garantías jurisdiccionales denotan que su fin es “la tutela de los derechos



constitucionales sin el establecimiento de esquemas formales que tienden a entorpecer dicha tutela” (p. 9).

- d) El argumento sistemático-conceptual o dogmático: “resulta indispensable examinar los conceptos de admisión y de procedencia, a la luz de la doctrina jurídica procesal”. Según Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Manuel Osorio y Florit, a “la admisión se la ha conceptualizado dentro del derecho procesal como “...Autorizar la tramitación de un recurso o de una querella. Recibir. Dar entrada. Permitir, consentir, sufrir””, mientras “a la procedencia se la ha entendido como “Lo que es conforme a derecho. La procedencia en lo procesal se diferencia de la admisibilidad (v) simple oportunidad para que se oiga o se juzgue (aun no teniendo derecho ni razón), por ajustarse a normas de posible trámite”” (p. 9). “En el mismo sentido, José Alberto Garrone establece que la admisión es un “trámite previo en que se decide apreciando aspectos de forma o motivos de evidencia, si ha o no lugar a seguir sustancialmente ciertos recursos de procedimiento ante los tribunales supremos”, mientras que por procedencia se ha afirmado que “Se entiende por procedencia lo que es conforme a derecho. Fundamento legal, razón oportunidad de una demanda, petición recurso”” (p. 9). En suma, la admisión es la “simple verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un procedimiento, un primer acto que da cabida a las siguientes etapas procesales”, mientras la procedencia “implica una verificación material sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención de cierto pronunciamiento o para acceder a ciertos recursos” (p. 9).

Asimismo, para motivar que las causales 1, 2, 3, 4 y 5 son de improcedencia, la CC utilizó específicamente:

- e) El argumento naturalista: En virtud de la “naturaleza tutelar de las garantías jurisdiccionales de los derechos”, el juzgador, únicamente puede determinar la existencia de todas estas causales “luego del conocimiento de un proceso que permita determinar cuáles son las situaciones que esgriman las partes para ilustrar el criterio del juez”, “análisis argumentativo que debe constar en sentencia” (p. 21).
- f) El argumento autoritativo en la justificación de la causal 3: Según la CC, en la Sentencia N.º 055-10-SEP, esta causal “tiene su razón de ser en virtud de existir las vías pertinentes para conocer y resolver la legalidad de los actos y la constitucionalidad de los actos normativo” (p. 21)
- g) El argumento apagógico al acreditar la causal 4: “es importante anotar que si una persona presenta una acción de protección, es porque considera que las demás vías de resolución judicial del caso son inadecuadas o ineficaces, por lo que **carecería de sentido** establecer como requisito para la presentación de la acción, el que dicho particular conste expresamente en la demanda” (Énfasis fuera del texto) (p. 22).

- VI) Art. 40 de la LOGJCC: La CC decidió que tal disposición debe interpretarse de forma que los requisitos establecidos en este artículo “constituyen cuestiones que implican un análisis de fondo del asunto controvertido en la acción de protección, por lo tanto, podrán ser invocados por el juzgador únicamente a través de sentencia motivada” (p. 25).

Para justificar esta interpretación la CC usó:

- a) En los requisitos 1 y 2, el argumento naturalista: En virtud de la “naturaleza tutelar de las garantías jurisdiccionales de los derechos”, el juzgador “solo podrá asumir un criterio sobre la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales, por parte de una autoridad pública y violaciones por parte de particulares, únicamente luego de indagar mediante un procedimiento sencillo, rápido y eficaz.” (p. 24)
- b) En el requisito 3, dos distintos argumentos:
  - i. El argumento naturalista: Según la “naturaleza tutelar de las garantías jurisdiccionales de los derechos”, el juzgador puede invocar esta causal “únicamente luego del mínimo recaudo probatorio, que le permite el acceso a la sustanciación de la garantía jurisdiccional de los derechos” (p. 24).
  - ii. El argumento apagógico: “carecería de sentido” establecer como requisito para la presentación de la acción la manifestación de la inexistencia de otro mecanismo de defensa adecuado y eficaz pues si una persona presenta una acción de protección es porque considera que los demás mecanismos son inadecuados (p. 24).

### 2.3.1.5 Sentencia N.º 029-14-SEP-CC

Ángel Gerardo Arias Schuldt presentó acción extraordinaria de protección en contra de la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N.º 031-2011. Esta última garantía jurisdiccional fue propuesta por el señor Arias en contra de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social ante la jueza sexta de Tránsito de Pichincha, quien declaró el desistimiento tácito de la acción pues el accionante no compareció a la audiencia pública convocada para resolver aquella. Esta decisión fue apelada por el señor Arias y confirmada por la Sala mencionada ut supra. Ante ello, el accionante presentó la acción extraordinaria pues consideró que la decisión impugnada solamente se pronunció sobre la forma, mas no sobre el fondo, lo cual constituye una violación al derecho a la tutela judicial efectiva y obligatoriedad de administración de justicia. La CC decidió aceptar la garantía jurisdiccional ya que existió vulneración a los derechos a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, y el debido proceso, en la obligación de motivar cuando los juzgadores de primera y segunda instancia, al considerar solamente uno de los dos presupuestos exigidos por el art. 15, núm. 1, de la LOGJCC para declarar el desistimiento tácito, no resolvieron sobre las pretensiones del accionante. (Sentencia N.º 029-14-SEP-CC, 2014)

El máximo órgano de justicia constitucional interpretó las siguientes disposiciones en el presente caso:

- I) Art. 75 de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser interpretada de forma que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que “la parte que acude a solicitar protección por parte del organismo con potestad jurisdiccional debe conseguir un pronunciamiento sobre el fondo de sus pretensiones, una vez que la acción ha sido admitida a trámite” (p. 9).  
Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional utilizó el argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 006-13-SEP-CC, la CC determinó: “A la hora de definir e interpretar el alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos generales que este constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho, sobre las pretensiones propuestas” (p. 9).

- II) Art. 88 de la CRE: La Corte atribuyó a esta disposición el significado según el cual la acción de protección es un mecanismo o garantía “para tutelar de modo directo y eficaz los derechos constitucionales de las personas” (p. 9), “enmarcada en un proceso que debe desarrollarse en un marco informal, sencillo y rápido, por medio del impulso judicial, en lo que no esté expresamente prohibido” (pp. 10-11).

En la motivación de esta interpretación, la CC usó:

- a) El argumento sistemático: De conformidad con el art. 86, núm. 2, lit. a, de la CRE y el art. 8, núm. 1, de la LOGJCC, el procedimiento en las garantías jurisdiccionales “será sencillo, rápido y eficaz” (p. 9).
- b) El argumento autoritativo en dos ocasiones:
  - i. La CC, en la Sentencia N.º 056-11-SEP-CC, respecto a la acción de protección, estableció que “esta acción es un mecanismo exclusivo de protección del componente constitucional reconocido a las personas o colectivos, y por consiguiente requiere de un procedimiento sencillo, rápido y eficaz, autónomo, directo y sumario al que en ningún caso pueden aplicársele normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.” (pp. 9-10).
  - ii. En la Sentencia N.º 102-13-SEP-CC, la CC señaló que “la tutela de los derechos constitucionales exige que el modelo procedimental de la acción de protección -y de las garantías jurisdiccionales en general- se encuentre desprovisto de requisitos formales y ofrezca, de manera ágil y dinámica, una protección efectiva y oportuna al titular del derecho posiblemente afectado” (p. 11).
- c) El argumento a partir de los principios: En virtud del principio de “impulso de oficio” establecido en la LOGJCC, el juzgador “tiene el deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en esta ley.” (p. 10).

- III) Art. 15, núm. 1, de la LOGJCC: El máximo órgano de justicia constitucional consideró que esta disposición debe interpretarse de manera que existen dos supuestos que deben concurrir para configurar el desistimiento tácito, el primero, “cuando el afectado por la presunta violación a sus derechos constitucionales no compareciere a la audiencia sin justa causa”, y el segundo, “que su presencia fuere indispensable para demostrar el daño” (p. 11); en consecuencia, si se verifica “únicamente la inasistencia a la audiencia sin justa causa, pero no la indispensabilidad sobre su presencia, la jueza o juez continuará con el desarrollo de la audiencia y dictará sentencia”, mientras que “de hallarse frente a una inasistencia sobre la que se haya presentado una justa causa, y de considerar que la presencia de la persona afectada es indispensable, la jueza o juez, después de calificarla como tal, deberá fijar una vez más una nueva fecha y hora para su celebración” (p. 17).

En la justificación de esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional empleó:

- a) El argumento sistemático dos veces:
  - i. De conformidad con el art. 75 de la CRE, las personas tiene derecho a “a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad”, esto es, conseguir de las autoridades jurisdiccionales “un pronunciamiento sobre el fondo de sus pretensiones, una vez que la acción ha sido admitida a trámite” (p. 9), que

en el caso de las garantías jurisdiccionales es “determinar si existe o no vulneración de los derechos alegados por la parte accionante” (p. 12).

- ii. El art. 86, núm. 2, lit. a, de la CRE prescribe que el procedimiento en las garantías jurisdiccionales “será sencillo, rápido y eficaz” (p. 12).
- b) El argumento a partir de los principios: Según el principio de “impulso de oficio”, las juezas y jueces están obligados a “impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su conclusión” (p. 10).

- IV) Art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe entenderse de forma que la garantía de la motivación exige al juzgador “la enunciación de las disposiciones jurídicas que sirven de fundamento para la decisión; la expresión de su sentido prescriptivo extraído por medio de la interpretación jurídica de las mismas; la determinación de los hechos que corresponde resolver; y además, el ejercicio lógico de adecuación de las normas a dichos hechos” (p. 14), así como el cumplimiento de los requisitos de “razonabilidad, lógica y comprensibilidad” (p. 14), los cuales, respectivamente, consisten en “tomar en cuenta si la resolución se fundamentó en principios constitucionales” (p. 15), “evidenciar la ausencia de contradicciones, falacias, o incorrecciones en la formulación de las premisas y la conclusión del argumento” (p. 15), y, expresar la decisión del caso con “claridad en el lenguaje” (p. 14).

Para motivar esta interpretación, la Corte empleó:

- a) El argumento teleológico: El fin de esta disposición es permitir “a los ciudadanos conocer los fundamentos que llevan a determinada autoridad pública a tomar una decisión en el ámbito de sus competencias” (p. 14).
- b) El argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 227-12-SEP-CC, la CC determinó: “Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto” (p. 14).
- c) El argumento sistemático: “El artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “[l]as juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.” (p. 15).

### 2.3.1.6 Sentencia N.º 110-14-SEP-CC

Antonio Avilés Sanmartín, director regional de El Oro del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. El origen de dicha garantía jurisdiccional es el proceso de medida cautelar N.º 07121-2011-0188, en el cual Jorge Alex Serrano, representante de la Hacienda “Nueva Colonia”, presentó acción de medidas cautelares autónomas para evitar que el director del SRI de El Oro inicie cualquier procedimiento administrativo para ejecutar el cobro del anticipo de impuesto a la renta, previsto en el art. 41 de la

Ley de Régimen Tributario Interno, ya que había propuesto ante la CC una demanda de inconstitucionalidad con relación a dicha disposición. El juez de primera instancia que conoció el proceso de medidas cautelares decidió aceptarlas, decisión que fue confirmada por la Sala mencionada ut supra ante la apelación del director de la entidad pública. Ante ello, este último presentó acción extraordinaria pues consideró que se había vulnerado su derecho a la seguridad jurídica. La CC decidió aceptar la garantía jurisdiccional propuesta por dicho representante pues consideró que los jueces de primera y segunda instancia, al haber concedido una medida cautelar que pretendía dejar sin efecto una disposición jurídica vigente, dejaron de aplicar normas jurídicas previas, claras y públicas y ejercieron funciones y competencias (la suspensión de los efectos de una norma y la concesión de medidas cautelares relacionadas a la inaplicabilidad de una norma) que le corresponden exclusivamente a la CC. (Sentencia N.º 110-14-SEP-CC, 2014)

El máximo órgano de justicia constitucional interpretó las siguientes disposiciones en el caso sub examine:

- I) Art. 82 de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser entendida de forma que el derecho a la seguridad constituye “un derecho transversal a todo el ordenamiento jurídico, por cuanto implica el respeto a la Constitución como la norma jerárquicamente superior que consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Estado; prevé la existencia de normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, así como “el pilar donde reposa la confianza ciudadana en lo que respecta a las actuaciones de los poderes públicos, en tanto exige que los actos que estos poderes expidan dentro del marco de sus competencias, se sujeten a las condiciones y regulaciones que establece el ordenamiento jurídico.” (p. 9)  
Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional empleó:
  - a) El argumento teleológico: La disposición en cuestión tiene como fin brindar “seguridad, credibilidad, certeza y confianza a la ciudadanía de que en caso de efectuarse un hecho fáctico determinado, se aplicará una norma previa que dé solución a tal hecho.” (p. 9)
  - b) El argumento autoritativo en dos ocasiones:
    - i. La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 227-12-SEP-CC, determinó: “La no aplicación o aplicación defectuosa de normas contenidas en la Constitución de la República que contengan derechos constitucionales por parte de los organismos jurisdiccionales, trae ciertamente consigo la vulneración a la seguridad jurídica, a ser reparada por medio de la acción extraordinaria de protección” (p. 9).
    - ii. En la Sentencia N.º 100-13-SEP-CC, estableció: “En este sentido, este derecho no debe ser entendido de forma aislada a los demás derechos, ya que su esencia es la de brindar convicción a la ciudadanía de que sus derechos constitucionales serán respetados por todos los poderes públicos, a través de la existencia y aplicación de normativas jurídicas que hayan sido dictadas con anterioridad a la materialización de un caso concreto” (p. 9).
- II) Art. 87 de la CRE: La CC consideró que dicha disposición debe ser interpretada de forma que existe la posibilidad de interponer medidas cautelares autónomas, las cuales “tienen el carácter de urgentes e inmediatas, en tanto se busca la prevención y cese de la consumación o subsistencia de la vulneración de un



derecho” (p. 11), así como medidas cautelares conjuntas, las cuales, “al proceder dentro de conocimiento de una garantía, desempeñan su función una vez que ya se ha lesionado el derecho constitucional, bajo el supuesto de que dicha lesión y sus efectos se sigan efectuando” (p. 12); mecanismo constitucional que, en ambos casos, “no implica ni constituye un pronunciamiento de fondo acerca de la vulneración del derecho” (p. 12).

En la motivación de esta interpretación, la Corte utilizó:

- a) El argumento sistemático en dos ocasiones:
  - i. Según el art. 6 de la LOGJCC, “las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho.” (p. 11).
  - ii. El art. 26 de la LOGJCC prescribe: “Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.” (p. 11).
- b) El argumento autoritativo en dos oportunidades:
  - i. La CC, en la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, señaló que: “Las medidas cautelares pueden ser activadas cuando ocurren tanto amenazas como vulneraciones o violaciones de los derechos constitucionales, sin embargo, los efectos en uno u otro caso son distintos. En el primer supuesto, es decir en caso que concurren las amenazas, el objeto es prevenir una posible vulneración de los derechos, evitando que sucedan los hechos que se consideran atentatorios a derechos; en tanto que en el segundo supuesto, es decir en el caso de vulneraciones o violaciones a derechos constitucionales, el objeto es cesar dicha trasgresión” (p. 11).
  - ii. En la Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, la CC manifestó: “...la medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales, hasta que vía sentencia, se declare o no dicha vulneración. En otras palabras, la medida cautelar puede ser adoptada en primera providencia, cuando a criterio del juez existan presunciones de una posible vulneración de derechos constitucionales que no puedan esperar a la sentencia, pero aquello no implica un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no puede generar un efecto propio de una garantía de conocimiento” (p. 12).
- c) El argumento teleológico: La disposición tiene como fin “precautelar el efectivo goce de los derechos constitucionales.” (p. 12).

- III) Art. 26, inciso segundo, de la LOGJCC: La CC resolvió que la frase “Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener” significa que la medida cautelar es necesaria y “no podrá provocar bajo ningún supuesto, la vulneración a otros derechos constitucionales” (p. 13), lo cual implica que el principio de proporcionalidad “se constituye en el requisito indispensable, para que el operador de justicia establezca medidas cautelares razonables con respecto al objetivo que persiguen y a su vez, conforme con el ordenamiento constitucional.” (p. 14).

En la justificación de esta atribución de significado, la Corte usó:

- a) El argumento teleológico: El fin u objetivo de las disposiciones referentes a las medidas cautelares es “salvaguardar, garantizar y tutelar el máximo respeto a los derechos constitucionales en contra de acciones u omisiones que puedan vulnerarlos.” (p. 13).

- b) El argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 026-13-SCN-CC, la CC determinó que: “Las medidas cautelares por lo tanto, tienen como características principales el ser provisionales, instrumentales, urgentes, necesarias e inmediatas. Provisionales, en el sentido de que tendrán vigencia el tiempo de duración de la posible vulneración; **instrumentales, por cuanto establecen acciones tendientes a evitar o cesar una vulneración**; urgentes, en razón de que la gravedad o inminencia de un hecho requiere la adopción inmediata de una medida que disminuya o elimine sus efectos; **necesarias, ya que las medidas cautelares que se apliquen a un caso concreto deberán ser adecuadas con la violación**; e inmediatas, porque la jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que se recibió la petición” (Énfasis fuera del texto) (p. 13).
- c) El argumento sistemático: La CC, en la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, estableció la siguiente regla jurisprudencial con efecto *erga omnes*: “d) La concesión de medidas cautelares por parte de las juezas y jueces constitucionales debe siempre obedecer al principio de proporcionalidad, reconocido en el artículo 3 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual deberá formar parte de la motivación de la resolución por medio de la cual estas se otorguen (...)” (p. 14).<sup>94</sup>

- IV) Art. 436, núm. 2, de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser interpretada de forma que “la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto normativo es una facultad privativa de la Corte Constitucional” (p. 15); lo cual implica que “la posibilidad de suspender provisionalmente una disposición jurídica y por ende los efectos que su vigencia produce, o la concesión o revocatoria de medidas cautelares referentes a la aplicabilidad o inaplicabilidad de dicha norma, es una atribución privativa de la Corte Constitucional dentro del control de constitucionalidad”, y, por ello, “los jueces ordinarios cuando en conocimiento de una garantía jurisdiccional se convierten en jueces constitucionales, no tienen potestad ni competencia para suspender una disposición jurídica o sus efectos, que ha sido demandada como inconstitucional ante la Corte Constitucional” (p. 17).

Para motivar esta interpretación, la Corte utilizó:

- a) El argumento sistemático dos veces:
  - i. Según el art. 429 de la CRE, la CC es “el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.” (p. 15).
  - ii. El art. 79, núm. 6, de la LOGJCC, al referirse a la demanda de inconstitucionalidad, cuyo conocimiento compete a la CC, establece que esta debe contener: “La solicitud de suspensión provisional de la disposición demandada debidamente sustentada, cuando a ello hubiere lugar; sin perjuicio de la adopción de otras medidas cautelares conforme la Constitución y la ley” (p. 17).
- b) El argumento a partir de los principios en dos ocasiones:

---

<sup>94</sup> Este es un argumento sistemático ya que, como se indicó en la sección 2.1 del presente capítulo, las reglas jurisprudenciales son enunciados preceptivos que poseen efectos generales y son de obligatorio cumplimiento, al igual que los enunciados contenidos en las fuentes formales de derecho objetivo como la ley (en sentido material).

- i. De conformidad con el principio de “presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas”, “las disposiciones jurídicas vigentes gozan de la presunción de compatibilidad con el texto constitucional, hasta que sea el órgano competente -Corte Constitucional- el que declare la inconstitucionalidad de la norma, de haber lugar.” (p. 16).
  - ii. Según el principio “*indubio pro legislatore*”, “en caso de duda sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, se optará por no declarar la inconstitucionalidad” (p. 16).
  - c) El argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, señaló: “En un sistema de control concentrado de constitucionalidad como el ecuatoriano, dicho pronunciamiento [sobre la declaratoria de inconstitucionalidad] únicamente puede corresponder a la Corte Constitucional, órgano que ostenta la potestad privativa para, a través de los procesos de control constitucional y por medio de sus sentencias, destruir la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas del ordenamiento jurídico.” (pp. 16-17).
- V) Art. 76, núm. 2, de la LOGJCC: La CC resolvió que esta disposición debe ser entendida de manera que “las norma jurídicas se presumen válidas y por ende deben ser aplicadas, mientras la Corte Constitucional no determine lo contrario”, es decir, se presume que “el legislador expidió la disposición jurídica respetando los principios, valores y derechos constitucionales en el marco de la legitimidad democrática que ostenta” (p. 16).
- Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional empleó:
- a) El argumento a partir de los principios: En virtud del “principio *indubio pro legislatore*” establecido en la LOGJCC, si existe duda sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, “se optará por no declarar la inconstitucionalidad” (p. 16).
  - b) El argumento autoritativo: Víctor Ferreres Comella sostiene: “Que el legislador goza de una presunción de constitucionalidad significa que, en caso de duda, el juez debe decidir a favor de la constitucionalidad de la ley. Dicho de otra manera: el juez solo puede decidir a favor de la inconstitucionalidad si esta no resulta dudosa. Para entender destruida la presunción de constitucionalidad de la ley se exige de la aportación de elementos de juicio (argumentos) de suficiente peso que puedan justificar la creencia del juez de que se da una contradicción entre la interpretación correcta del texto legal impugnado y la interpretación correcta del texto constitucional” (p. 16).

### 2.3.1.7 Sentencia N.º 113-14-SEP-CC

Víctor Manuel Olivo Pallo presentó acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones adoptadas el 16 y 23 de mayo de 2010 por la justicia indígena del pueblo Panzaleo, nacionalidad Kichwa, de la provincia de Cotopaxi. Estas decisiones tienen como antecedente el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo, hermano del accionante, caso que fue conocido por las autoridades indígenas de las comunidades de La Cocha y Guantopolo, quienes, tras la solicitud de su intervención por parte de Víctor Olivo, establecieron la culpabilidad de cinco jóvenes indígenas de la comunidad de Guantopolo e impusieron las sanciones conforme a la justicia indígena en las fechas señaladas ut supra. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado intervino y procesó a los cinco jóvenes ante la jurisdicción ordinaria por el asesinato cometido. Ante estas circunstancias, el accionante presentó acción extraordinaria contra de las

decisiones de la justicia indígena y solicitó que la CC determine, en lo principal, si las autoridades de la comunidad de La Cocha eran competentes para solucionar el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo de conformidad al mandato constitucional del art. 171 y si era procedente que los cinco jóvenes hayan sido sometidos a un proceso penal en la justicia ordinaria. El máximo órgano de justicia constitucional decidió que no existieron vulneraciones de derechos constitucionales pues las autoridades indígenas actuaron en ejercicio de las funciones jurisdiccionales reconocidas por el art. 171 de la Constitución al sancionar el asesinato en función de los efectos sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad, mientras que la Fiscalía y la justicia penal ordinaria actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y juzgar, respectivamente, la responsabilidad individual de los presuntos implicados en la muerte. (Sentencia N.º 113-14-SEP-CC, 2014)

La Corte interpretó las siguientes disposiciones en el caso sub examine:

- I) Art. 66, núm. 1, de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser entendida de forma que el derecho a la inviolabilidad de la vida es un “derecho inherente de toda persona”, el cual impone al Estado la “obligación” de garantizar y proteger la vida “frente a cualquier posible amenaza” (pp. 25-26), esto es, “el Estado deberá sancionar toda agresión a la vida sin importar la raza, sexo, religión o pertenencia a una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena del agresor y/o del agredido” (p. 26).

Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional empleó:

- a) El argumento sistemático dos veces:
- i. El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” (p. 26).
  - ii. Según el *ius cogens*<sup>95</sup>, el derecho a la vida, al ser “una norma imperativa e inderogable del derecho internacional general, consagrada como un valor y un bien trascendental para la comunidad nacional e internacional”, exige “la activación de todos los medios y mecanismos nacionales e internacionales para su efectiva protección, incluyendo la obligación de todos los Estados de perseguir de modo efectivo toda conducta que atente contra este derecho y conseguir la sanción a sus autores, siempre con el fin de evitar la impunidad y prevenir y erradicar conductas contrarias al derecho a la vida.” (p. 27).
- b) El argumento autoritativo: Según Fernando Rey, “la protección jurídica de la vida implica dos dimensiones: la primera, una dimensión negativa mediante la cual el Estado tiene la prohibición de atentar contra la vida de las personas; y la segunda, una dimensión positiva que obliga a los poderes públicos a establecer un sistema de protección **que sancione cualquier agresión a la vida con independencia de su origen público o privado y sin distinción respecto de los involucrados**” (Énfasis fuera del texto) (p. 26).

---

<sup>95</sup> En este caso se trata de un argumento sistemático pues en lo manifestado por la CC subyace la consideración de que el *ius cogens* es, de conformidad con el art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un conjunto de normas de derecho internacional general, en el que cada una de estas normas se caracteriza por ser “aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter” (Sentencia N.º 113-14-SEP-CC, 2014, p. 27).

- II) Art. 171 de la CRE: La Corte decidió atribuir a esta disposición el significado según el cual la práctica de las funciones jurisdiccionales de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas está “sometida a la Constitución” y “condicionada a proteger los derechos en ella establecidos” (p. 27), de manera que “el conocimiento de todos los casos de muerte siempre le corresponderán al Estado” y, por tanto, “en caso de que ocurra un delito contra la vida dentro de una comunidad o territorio indígena, el Estado garantizará, al igual que en el resto del territorio nacional, que el mismo sea juzgado y sancionado de conformidad con las leyes propias del Derecho Penal Ordinario” (p. 28). En la justificación de esta interpretación el máximo órgano de justicia constitucional utilizó el argumento sistemático en cuatro ocasiones:
- a) De conformidad con el art. 8, núm. 2, del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, **siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos**. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio” (Énfasis fuera del texto) (p. 13).
  - b) El art. 9, núm. 1, del Convenio 169 de la OIT establece que: “**En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos**, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados [pueblos indígenas] recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” (Énfasis fuera del texto) (p. 13).
  - c) El art. 57, núm. 10, de la CRE prescribe que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a: “Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que **no podrá vulnerar derechos constitucionales**, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes” (Énfasis fuera del texto) (p. 14).
  - d) Según el art. 66, núm. 1, de la CRE, todas las personas tienen “derecho a la inviolabilidad de la vida” y, por tanto, el Estado tiene la obligación de “**sancionar toda agresión a la vida** sin importar la raza, sexo, religión o pertenencia a una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena del agresor y/o del agredido” (Énfasis fuera del texto) (p. 26).
- III) Art. 18 de la CRE: La CC resolvió que esta disposición debe interpretarse de forma que el derecho a la información conlleva que “cualquier medio de comunicación público, privado o comunitario, autoridades públicas o particulares, para ajustar su actuación a la normativa constitucional vigente, cuando se trate de emitir o difundir noticias, reportajes, documentales o mensajes relacionados con asuntos de justicia indígena, deberán (...) previa autorización de las autoridades indígenas concernidas, documentar y presentar los aspectos relevantes del procedimiento de administración de justicia indígena, de manera integral, y no solo difundir un aspecto aislado, como el ritual de sanción” (p. 35). Para motivar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional usó:
- a) El argumento teleológico: El fin de la disposición en cuestión es que “la información que se difunda o produzca en torno a un hecho, ya sea a través de los medios de comunicación o de cualquier autoridad pública o particular - y muy particularmente en torno a hechos que ocurren al interior de los pueblos



indígenas por su particular condición económica, social y cultural-, debe cumplir parámetros que garanticen la veracidad de la información, eviten la descontextualización o la tergiversación de su realidad, y que esa información que se difunda contribuya a la pedagogía social de respeto a la diferencia, como valor constitucional intrínseco atinente a una sociedad y estado plurinacional e intercultural, normativamente protegido.” (p. 31).

- b) El argumento autoritativo: Según el “Relator Especial sobre Ejecuciones, Philip Alston”, “los medios de comunicación y funcionarios confunden con demasiada frecuencia la cuestión de los linchamientos (denominada también justicia privada o popular) con la justicia indígena (...) La Justicia indígena es la justicia administrada con arreglo a las tradiciones indígenas. En marcado contraste con los casos de linchamiento, no implica la realización de actos de violencia arbitrarios o vengativos. La justicia indígena tiene por objetivo reintegrar a los delincuentes en la comunidad y es un proceso formal dirigido por líderes indígenas y miembros de la comunidad. (...) Los medios de comunicación y los funcionarios deberían tener cuidado de distinguir claramente entre los linchamientos y la justicia indígena. La justicia indígena está reconocida en la Constitución y es una parte importante del sistema jurídico del país” (p. 32).

### **2.3.1.8 Sentencia N.º 071-15-SEP-CC**

Esta sentencia tiene como antecedente dos acciones extraordinarias de protección: la primera, presentada por Mario Santiago Pinto Salazar, representante de la Corporación Aduanera Nacional (CAE) en contra del auto de calificación del incidente por daños y perjuicios planteado dictado por el juez quinto de Trabajo del Guayas; incidente que a su vez fue planteado dentro de la acción de protección N.º 2092-2009; la segunda, presentada por José Ángel Morales Torres, representante legal de la compañía MORALTORR S. A., en contra de la sentencia por el Juzgado Quinto de Trabajo del Guayas en el incidente por daños y perjuicios dentro de la acción de protección N.º 2092-2009. Esta acción de protección fue propuesta por el señor Torres, representante de MORALTORR S. A, en contra de la CAE por vulneración de su derecho a la defensa por falta de notificación acerca del destino de su mercadería y esta garantía fue resuelta por el juez quinto de Trabajo del Guayas, quien la declaró procedente y ordenó que la mercadería retenida por la CAE sea entregada inmediatamente a la compañía mencionada. Ante el incumplimiento de la entidad pública, el señor Morales planteó una demanda de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la sentencia de la acción de protección, según el art. 22, núm. 1, de la LOGJCC, contra la CAE ante el mismo juez quinto de Trabajo del Guayas, quien emitió el auto de calificación de dicha demanda con el cual la aceptó a trámite por vía verbal sumaria, declaró el incumplimiento de la sentencia por él expedida y, en consecuencia, con lugar la demanda. (Sentencia N.º 071-15-SEP-CC, 2015)

En virtud de estas circunstancias, el representante de la CAE fundamentó la acción extraordinaria señalada en el párrafo inicial en la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, en la garantía a ser juzgado con observancia al trámite propio de cada procedimiento, y a la seguridad jurídica pues el juzgador del caso debió declarar sin lugar la acción de daños y perjuicios al haber sido presentada en forma de demanda (esto es, como un proceso nuevo) y, en todo caso, tramitar la demanda en la vía sumaria (y no verbal sumaria como ocurrió); mientras el

representante de MORALTORR S.A. sustentó su acción extraordinaria en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva ya que el juez debía ordenar, a más del monto por daños y perjuicios, la reparación inmaterial como parte de la reparación integral. Ante ello, la CC decidió aceptar la acción presentada por la CAE pues se vulneraron los derechos alegados por ella cuando el juez quinto de Trabajo del Guayas declaró el incumplimiento de la sentencia de la acción de protección y aceptó a trámite el incidente de daños y perjuicios, atribuciones ambas que corresponden exclusivamente a la CC. (Sentencia N.º 071-15-SEP-CC, 2015)

En el caso sub judice, la Corte interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 75 de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser interpretada de forma que el derecho a la tutela judicial efectiva impone “el acceso gratuito a la justicia” y “una serie de actuaciones a los órganos jurisdiccionales, que permiten asegurar el efectivo goce y cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, a través del trámite idóneo en función de los distintos procedimientos”, es decir, obliga a los juzgadores a “sustanciar los procesos siguiendo el trámite establecido para cada procedimiento” (p. 14).  
Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional utilizó:
  - a) El argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 036-13-SEP-CC, manifestó: “La tutela judicial efectiva es aquel derecho que garantiza que todas las personas puedan acceder a los medios de justicia, sin que dicho acceso este limitado por trabas o condiciones que les impidan justiciar sus derechos constitucionales. En este sentido, se constituye en un deber de los operadores de justicia garantizar la sustanciación de procesos transparentes y eficientes en los cuales se respeten por igual los derechos de las partes procesales, sobre las sólidas bases de los principios de inmediación y celeridad. La Corte Constitucional sobre este derecho manifestó: A la hora de definir o interpretar el alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos generales que este constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, **para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho, sobre las pretensiones propuestas.**” (p. 13).
  - b) El argumento sistemático: El art. 76, núm. 3, de la CRE, prescribe: “...**Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento**” (pp. 13-14).
  - c) El argumento a partir de los principios: En virtud del principio de “interdependencia de los derechos constitucionales”, “la tutela judicial efectiva guarda estrecha relación con una de las garantías del derecho al debido proceso, específicamente la contenida en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República” (p. 13), esto es, la garantía de ser juzgado con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
- II) Art. 22, núm. 1, de la LOGJCC: La Corte resolvió que esta disposición debe entenderse de manera que:
  - a) La única y auténtica autoridad jurisdiccional competente para declarar “el incumplimiento de sentencias constitucionales” y “ordenar el inicio del regulado incidente de daños y perjuicios es la Corte Constitucional” (p. 18).
  - b) El momento procesal “en el cual se desenvuelve este incidente de daños y perjuicios es dentro de la fase de verificación o cumplimiento de las

sentencias constitucionales”, es decir, “en la etapa o fase de ejecución” (p. 19).

- c) El incidente de daños y perjuicios “es de carácter sancionatorio”, esto es, constituye “una sanción económica ante la inacción en el cumplimiento de una sentencia dictada por la Corte Constitucional” (p. 20).

En la justificación a), el máximo órgano de justicia constitucional usó:

- i. El argumento sistemático en tres ocasiones:
  - a. El art. 84 del Reglamento para la Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional<sup>96</sup> prescribe: “Ejecución de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional.- **Corresponde a la Corte Constitucional ejecutar de oficio o a petición de parte sus sentencias y dictámenes**; para lo cual adoptará todas las medidas que considere pertinentes para su cumplimiento, de conformidad con la Constitución y la Ley.  
**En caso de incumplimiento, el Pleno de la Corte Constitucional dispondrá que el legitimado pasivo demuestre documentadamente su cumplimiento** dentro de un término razonable bajo prevenciones de destitución. **De persistir el incumplimiento** el Pleno lo declarará y podrá disponer la destitución del servidor público que incumple, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República. En caso de tratarse de un particular quien incumple, **se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.**” (p. 16).
  - b. “La Constitución de la República, en su artículo 436 numeral 9, establece como una atribución exclusiva de la Corte Constitucional “Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.” (p. 25).
  - c. “La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala en su artículo 163 que las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que se hayan dictado, y subsidiariamente menciona que en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”, esto es, “el procedimiento a seguir por un juez constitucional cuando evidencia un incumplimiento de sentencia, es ante la Corte Constitucional” (p. 25).
- ii. El argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, la CC manifestó: “La Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, considerando que de por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, y sin necesidad de que comparezca exclusivamente el afectado, está en la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias constitucionales.” (p. 25).

En la motivación de b), la CC empleó el argumento sistemático en dos ocasiones:

- i. El art. 84 del RSPCCC, que hace referencia al incidente de daños y perjuicios, tiene como título “Ejecución de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional”, es decir, desarrolla “las posibles acciones y efectos jurídicos durante la ejecución de estas sentencias constitucionales” (p. 19).

---

<sup>96</sup> En adelante RSPCCC.

- ii. De conformidad con el art. 165 de la LOGJCC, “la Corte Constitucional podrá ejercer todas las facultades que la Constitución, esta Ley y el Código Orgánico de la Función Judicial le atribuyen a los jueces para la **ejecución de sus decisiones**, con el objeto de hacer efectiva la sentencia incumplida” (Énfasis fuera del texto) (p. 19).

Para motivar c), la Corte usó:

- i. El argumento sistemático: Según el encabezado del art. 22 de la LOGJCC, el incidente de daños y perjuicios “se constituye en una regla para **"sancionar a la persona o institución que incumple..."**” (p. 20).
- ii. El argumento teleológico: El fin u objeto de la disposición en cuestión es “el establecimiento de una responsabilidad o sanción económica como lógica consecuencia ante la inacción del sujeto obligado a cumplir con una sentencia constitucional que hubiere sido dictada por la Corte Constitucional” (p. 20).

### 2.3.1.9 Sentencia N.º 182-15-SEP-CC

Leandro Rufino Ullón Rodríguez y Walter Eduardo Armijos Orellana, en sus calidades de alcalde y procurador síndico del Gobierno Municipal del cantón Mocache, presentaron acción extraordinaria de protección contra la sentencia expedida por la Sala Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. El origen de dicha garantía jurisdiccional es el proceso de acción de hábeas data presentada por Emilio Vicente Díaz Terán en contra de la Municipalidad de Mocache, cuyo antecedente es el requerimiento de aquel a esta entidad pública de diversos documentos en los que se resolvió su separación como funcionario de dicha institución, solicitud que, al no ser atendida en los dos días siguientes a su presentación, llevó al señor Díaz a presentar la acción de hábeas data mencionada. Esta garantía jurisdiccional fue aceptada por la sentencia del juez de primera instancia y confirmada por el fallo de la Sala señalada ut supra. Ante esta situación, los representantes de la Municipalidad de Mocache presentaron acción extraordinaria pues consideraron que se había vulnerado su derecho a la seguridad jurídica. La CC decidió aceptar la garantía jurisdiccional propuesta por dichos representantes ya que se vulneró el derecho mencionado por estos cuando los jueces de primera y segunda instancia fallaron a favor del señor Díaz sin considerar, primeramente, que la acción de hábeas data fue propuesta tan solo dos días después de la solicitud de la información a la entidad pública y, en segundo lugar, que no existió negativa por parte de la entidad pública, requisito exigido por los arts. 92 de la CRE y 50 de la LOGJCC. (Sentencia N.º 182-15-SEP-CC, 2015)

En el caso sub judice, la Corte interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 82 de la CRE: El máximo órgano de justicia constitucional decidió que esta disposición debe ser interpretada de forma que el derecho a la seguridad jurídica consiste en que “las actuaciones de las diversas instituciones y autoridades se fundamenten en normas jurídicas previamente determinadas, aprobadas de manera legítima y pública, y por ende se enmarcan dentro de las normas constitucionales y legales, verificándose de esta manera la validez del actuar de la autoridad.” (p. 9).

Para justificar esta interpretación, la CC utilizó:

- a) El argumento teleológico: El fin de esta disposición es “brindar certeza y seguridad a los ciudadanos que la autoridad pública aplicará con respeto el ordenamiento jurídico.” (p. 8).
- b) El argumento autoritativo en dos ocasiones:

- i. La CC, en la Sentencia N.º 119-13-SEP-CC, manifestó: “Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos; en virtud de aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben contener un apego a los preceptos constitucionales, reconociendo la existencia de las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, las mismas que deben ser claras y precisas, sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano.” (p. 8).
  - ii. En la Sentencia N.º 115-13-SEP-CC, la CC “al referirse a la seguridad jurídica, ha señalado: (...) como certeza práctica del derecho y se traduce en la seguridad de que se conoce lo previsto como lo prohibido, lo permitido, y lo mandado por el poder público respecto de las relaciones entre particulares y de estos con el Estado, de lo que se colige que la seguridad jurídica es una garantía que el Estado reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela (...).” (p. 8).
- II) Art. 92 de la CRE: La Corte consideró que esta disposición debe ser entendida de la siguiente forma:
- a) La acción de hábeas data “es la garantía constitucional que le permite a la persona natural o jurídica, acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o banco de datos de carácter público o privado a fin de conocer el contenido de la misma y de ser el caso, exigir su actualización, rectificación, eliminación o anulación cuando aquella información le causa algún tipo de perjuicio a efectos de salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar.” (p. 14).
  - b) La acción de hábeas data protege, a más del derecho a la protección de datos personales, “el derecho al honor, a la buena reputación, a la buena imagen, a la intimidad personal y familiar” (p. 14); “puesto que no toda la información relativa a estos tiene el carácter de pública y por tanto de divulgable en forma libre”, esto es, “existen asuntos relativos a su familia, sus creencias religiosas y espirituales, su filiación política, su orientación sexual, entre otras, que en caso de ser divulgadas de forma inadecuada e inoportuna podrían ocasionarle serios perjuicios en la esfera personal.” (p. 15).
  - c) “La pretensión básica o esencial del hábeas data debe estar dirigida, únicamente a solicitar información personal”, así como “su actualización, rectificación o corrección, eliminación o anulación.” (p. 16).
- En la motivación de a), la CC empleó el argumento autoritativo tres veces:
- i. El hábeas data, según Carlos Salmon Alvear, “constituye una **acción** en virtud de la que materializan las diversas manifestaciones del derecho de petición consagrado constitucionalmente y requerido para la operatividad de las garantías jurisdiccionales, una **garantía** que le permite a una persona concurrir al órgano jurisdiccional a fin de que sus derechos sean protegidos; goza de **carácter autónomo**, por cuanto, posee un perfil propio regulado tanto en la Constitución como en la ley de la materia y **tutela datos o información inherente a una persona**, a fin de salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar.” (p. 13).



- ii. La CC, en la Sentencia N.º 032-15-SEP-CC, señaló que “las normas que consagran dicha acción constitucional “son claras al determinar la naturaleza y objeto de la acción de hábeas data”, los cuales se refieren al derecho que tiene toda persona para acceder a los documentos de datos personales que sobre sí misma posean personas naturales o jurídicas públicas o privadas, “así como la posibilidad de acudir ante el juez competente cuando se le imposibilite el ejercicio de su derecho”.” (p. 13)
- iii. En la Sentencia N.º 025-15-SEP-CC, la CC señaló sobre la naturaleza del hábeas data que esta “viene a estar considerada como un mecanismo de satisfacción urgente para que las personas puedan obtener el conocimiento de los datos a ellos referidos, y advertirse sobre su finalidad, sea que dicha información conste en el registro o banco de datos público o privado” (pp. 13-14).

En la justificación de b), el mencionado órgano jurisdiccional usó el argumento autoritativo en dos ocasiones:

- i. La CC, en la Sentencia N.º 01-14-PJO-CC, “ha señalado que “el derecho a la protección de datos personales tiene un contenido complejo y comporta diversas dimensiones relacionadas con la información personal” y en aquel sentido, sostuvo que “el derecho a la protección de datos” –y específicamente, su elemento denominado “autodeterminación informativa-” tiene como finalidad proteger otros derechos constitucionales que podrían verse afectados cuando se utilizan datos personales, tales como la intimidad, la honra, la integridad psicológica, entre otros.” (p. 14).
- ii. De acuerdo a Carlos Salmon Alvear, la autodeterminación informativa, como parte del derecho a la protección de datos personales, es la “potestad soberana que tiene toda persona a ser solo él quien determine qué información suya va permitir que pueda estar en contacto y conocimiento de terceros ajenos a él y extraños a su núcleo familiar” (p. 14).

Para motivar c), el máximo órgano de justicia constitucional empleó:

- i. El argumento sistemático: El art. 66, núm. 19, de la CRE prescribe que “el Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.” (p. 9).
- ii. El argumento autoritativo en dos ocasiones:
  - a. De conformidad con la Sentencia N.º 01-14-PJO-CC, el hábeas data “únicamente cubre o alcanza a aquellos datos que cumplan con una función informativa respecto de las personas y sus bienes, siempre que su comunicación, interpretación o tratamiento afecte en mayor o menor medida los derechos de aquel a quien se refieren. En virtud de ello, dicha persona tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de su información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.” (p. 15).
  - b. La CC, en la Sentencia N.º 025-15-SEP-CC, señaló lo siguiente sobre la facultad de la persona titular de la información a solicitar su actualización, rectificación o corrección, eliminación o anulación: “las “dimensiones utilitarias de esta garantía [hábeas data] acorde al objeto específico que puede perseguir serían”:

- a) Hábeas data informativo (derecho de acceso). Es la dimensión procesal que asume el hábeas data para recabar información acerca del qué, quién, cómo y para qué se obtuvo la información considerada personal.
- b) Hábeas data aditivo (derecho de modificación). Busca agregar más datos sobre aquellos que figuren en el registro respectivo, buscando actualizarlo o modificarlo según sea el caso.
- c) Hábeas data correctivo (derecho de corrección). Resuelve rectificar la información falsa, inexacta o imprecisa de un banco de datos.
- d) Hábeas data de reserva (derecho de confidencialidad). Persigue asegurar que la información recabada sea entregada única y exclusivamente a quien tenga autorización para ello.
- e) Hábeas data cancelatorio (derecho a la exclusión de información sensible). Busca que la información considerada sensible sea eliminada, por no ser susceptible de compilación.” (pp. 15-16).

III) Art. 436, núm. 3, de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser interpretada como la facultad de dicho órgano para:

- a) Efectuar “de manera oficiosa el control de disposiciones normativas que comporten una vulneración a los derechos constitucionales y a los demás contenidos de la Norma Fundamental”.
- b) Hacer uso de “las denominadas sentencias interpretativas, que permiten al máximo órgano de justicia constitucional efectuar un ejercicio hermenéutico que dote de validez a la interpretación de la norma que se ajuste a la Constitución, excluyendo otras interpretaciones transgresoras y vulneratorias de los derechos.”

Para justificar a), el mencionado órgano jurisdiccional utilizó el argumento autoritativo en dos ocasiones al referirse a la Sentencia N.º 102-13-SEP-CC, en la cual la CC se pronunció de la siguiente manera sobre la disposición en cuestión:

- i. “(...) esta competencia (la del control constitucional de normas conexas) revela la clara intención del Constituyente de permitir **el control oficioso de la constitucionalidad por parte del máximo órgano de justicia constitucional ecuatoriano por diferentes vías, y ya no únicamente a través de las acciones dispositivas de inconstitucionalidad**. En el Estado Constitucional de derechos y justicia se le otorga central importancia a la justicia constitucional de competencia de la Corte Constitucional; consecuentemente, se justifica materialmente el ejercicio de un control constitucional amplio y pleno, para dar efectiva vigencia a los derechos constitucionales y humanos ya la supremacía constitucional.” (pp. 20-21).
- ii. “En este orden de ideas, la competencia asignada a la Corte Constitucional, contenida en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de “Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución”, **debe entenderse como la posibilidad de efectuar control de la constitucionalidad sobre las normas infra constitucionales que tienen directa relación con la causa sometida a su conocimiento.**” (p. 21).

En la motivación de b), la Corte usó el argumento a partir de los principios: “en virtud de los principios in dubio pro legislatore, “interpretación conforme”, “preservación del derecho” y “declaratoria de inconstitucionalidad como último

recurso", el control de constitucionalidad ha de "preservar la vigencia de la normativa infraconstitucional" (p. 21).

- IV) Art. 50, núm. 1 y 2, de la LOGJCC: La CC consideró que la negativa a la que se refieren los numerales citados debe ser interpretada de la siguiente manera: "La persona natural o jurídica pública o privada requerida deberá responder a la solicitud efectuada por el titular de la información personal en un plazo razonable que permita de mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta de la persona natural o jurídica pública o privada que posea la administración de los datos requeridos.

La calificación de la razonabilidad de este plazo deberá ser realizada por el juez competente en la acción de Hábeas Data, al momento de la calificación de la demanda de esta garantía jurisdiccional.

La falta de contestación de la persona natural o jurídica pública o privada que tenga bajo su administración los datos de una persona, sobre la solicitud que su titular efectúe respecto del acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes en poder de éstas, o respecto de la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten los derechos de estos titulares, será considerada como negativa tácita" (p. 24).

En la justificación de esta interpretación, la Corte empleó:

- a) El argumento sistemático en dos oportunidades:
  - i. De conformidad con el art. 66, núm. 19, de la CRE, las personas tienen "derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley." (p. 23).
  - ii. Según el art. 86, núm. 2, lit. a, de la CRE, "los procedimientos de las garantías jurisdiccionales deben ser rápidos, sencillos y eficaces" (p. 23).
- b) El argumento a partir de los principios: En virtud del principio de "celeridad", "la entidad a cargo de la gestión de la información personal deberá responder a las solicitudes expedidas en ejercicio del derecho contenido en el artículo 66 numeral 19 de la Constitución de la República dentro de un plazo razonable que permita el ejercicio óptimo de este derecho constitucional." (p. 24)
- c) El argumento de la coherencia de la disciplina jurídica: Interpretar la disposición en cuestión de forma que la falta de respuesta de las entidades que tienen a cargo la gestión de datos personales no constituye negativa a la solicitud del titular de dichos datos contradice el derecho a la protección de datos personales, contenido en el art. 66, núm. 19, de la CRE, el cual faculta a sus titulares el acceso, decisión y utilización de los mencionados datos (p. 19 y 22). Al generar una contradicción, dicha interpretación no es válida.

### 2.3.1.10 Sentencia N.º 239-15-SEP-CC

Julio Diez Merino presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto emitido por la Sala de la Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia en que inadmitió la acción de hábeas corpus propuesta por el accionante pues consideró que no tenía competencia en razón de los grados para conocer dicha garantía

jurisdiccional. El señor Díez se encontraba privado de la libertad en virtud de la sentencia expedida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia que concedía su extradición a España. La CC resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección ya que, al existir un vacío legal sobre la interposición de la acción de hábeas corpus en procesos de extradición, el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante fue vulnerado. (Sentencia N.º 239-15-SEP-CC, 2015)

En el caso sub judice, el máximo órgano de justicia constitucional interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 75 de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser interpretada de forma que el derecho a la tutela judicial efectiva sea entendido como el derecho que “garantiza que todas las personas puedan acceder a los medios de justicia, sin que dicho acceso esté limitado por trabas o condiciones que les impidan justiciar sus derechos constitucionales” (p. 8), y, por tanto, “este derecho hace posible el ejercicio de todos los demás derechos constitucionales, así como de aquellos que están consagrados en normativas inferiores.” (p. 9).  
Para motivar esta atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional utilizó el siguiente argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 036-13-SEP-CC, manifestó que el derecho a la tutela judicial efectiva “...es aquel derecho que garantiza que todas las personas puedan acceder a los medios de justicia, sin que dicho acceso esté limitado por trabas o condiciones que les impidan justiciar sus derechos constitucionales. En este sentido, se constituye en un deber de los operadores de justicia garantizar la sustanciación de procesos transparentes y eficientes en los cuales se respeten por igual los derechos de las partes procesales, sobre las sólidas bases de los principios de inmediación y celeridad. La Corte Constitucional sobre este derecho manifestó: A la hora de definir o interpretar el alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos generales que este constituye en el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho, sobre las pretensiones propuestas.” (p. 8).
- II) Art. 89, inciso primero, de la CRE: La CC consideró que a dicha disposición es atribuible el significado según el cual la acción de hábeas corpus es una garantía jurisdiccional cuyo objeto es “recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima” y “proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad” (p. 9), para la cual es necesario que sea “efectiva y eficaz para resarcir las agresiones a los derechos humanos” en el menor tiempo posible (p. 11).  
En la justificación de esta interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional usó:
  - a) El argumento sistemático: Según el art. 43 de la LOGJCC, la acción de hábeas corpus tiene por objeto amparar “la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona.” (p. 9).
  - b) El argumento autoritativo en dos ocasiones:
    - i. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Vélez Loor vs. Panamá, señaló: “Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ya ha referido que estos recursos [acción de hábeas corpus] no solo deben existir formalmente en la legislación sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir

con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención.” (p. 11).

- ii. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual, correspondiente al año de 1998, estableció que: El recurso de hábeas corpus es la garantía tradicional que, en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio. Generalmente, el hábeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están privadas de libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las restricciones que han agravado su privación de libertad. La efectividad de la tutela que se busca ejercer con este recurso depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a efecto de que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible.” (p. 11).

III) Art. 89, inciso segundo, de la CRE: La Corte resolvió que esta disposición debe ser entendida de forma que la acción de hábeas corpus:

- a) “Debe ser conocida y resuelta por los jueces de primera instancia del lugar donde se presuma está privada de la libertad la persona, excepto cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta dentro de un proceso penal, en cuyo caso la acción se la presentará ante la Corte Provincial de Justicia” (pp. 11-12)
- b) Su apelación “deberá ser conocida por la Corte Provincial” (p. 12); “cuando la privación de libertad haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la presidenta o presidente de la Corte Nacional; y cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no haya sido la que ordenó la prisión preventiva” (p. 12).

Para justificar a), la CC empleó el argumento sistemático tres veces:

- i. El art. 7 de la LOGJCC, al referirse a la competencia en las garantías jurisdiccionales, establece: “Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos.” (p. 11).
- ii. El art. 44, núm. 1, de la LOGJCC prescribe: “La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales seguirá el siguiente trámite: 1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más de una sala, se sorteará entre ellas.” (p. 12).
- iii. El art. 167 de la LOGJCC señala: “Compete a las juezas y jueces de primer nivel conocer y resolver, en primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares; y ejercer control concreto en los términos establecidos en esta ley.” (p. 12).



En la motivación de b), el máximo órgano de justicia constitucional utilizó el argumento sistemático en cuatro ocasiones:

- i. Según el inciso primero del art. 24 de la LOGJCC, las partes procesales “podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada.” (p. 12).
- ii. El art. 44, núm. 4, de la LOGJCC, establece: “Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva.” (p. 12).
- iii. El art. 168 de la LOGJCC determina que “le corresponde a las Cortes Provinciales de Justicia conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las sentencias de los jueces de instancia” (p. 12), y “que las Cortes Provinciales serán competentes para conocer las acciones de hábeas corpus como jueces de primera instancia, en los casos de fuero y de órdenes de privación de libertad dictadas por un juez penal de primera instancia.” (p. 13).
- iv. De conformidad con el art. 169 de la LOGJCC, “le compete a la Corte Nacional de Justicia conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las Cortes Provinciales, así también las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero.” (p. 13).

- IV) Art. 169, núm. 2, de la LOGJCC: La CC decidió que esta disposición debe interpretarse de la siguiente manera: “cuando el presidente de la Corte Nacional de Justicia haya dictado una orden de detención dentro de un proceso de extradición y se presente una acción constitucional de hábeas corpus, esta deberá ser conocida por una de las salas de la Corte Nacional de Justicia y podrá ser apelada (...) ante otra Sala distinta a la que conoció originalmente la acción.” (p. 17).

Para justificar esta atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional empleó:

- a) El argumento a partir de los principios: El principio de jerarquía impone “la prevalencia del órgano con grado superior sobre los inferiores para dirigir y sustituir la voluntad de estos con el fin de alcanzar la necesaria unidad administrativa o judicial.” (p. 16).
- b) El argumento sistemático en cinco oportunidades:
  - i. Según el art. 8 de la Ley de Extradición, “el Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la detención del sujeto reclamado en extradición, como medida preventiva, de oficio o a solicitud expresa del Juez o Tribunal competente, funcionario diplomático o consular del Estado requirente...” (p. 15).
  - ii. Según el art. 44, núm. 4, de la LOGJCC, cuando la prisión preventiva sea ordenada por la Corte Nacional de Justicia, “se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva.” (p. 17).
  - iii. “El artículo 227 de la Constitución del Ecuador define que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y que esta se rige, entre otros principios, por el de jerarquía; es por este principio que se crea una estructura piramidal en los órganos del poder público, y en su cúspide

- encontramos órganos superiores que tienen mayores facultades y potestades que los demás.” (p. 15).
- iv. Conforme a los arts. 170 y 178 de la CRE, “la Corte Nacional de Justicia se encuentra en el más alto escaño de esta organización. Es decir, constituye el máximo órgano de justicia ordinaria y, por ende, sus decisiones priman sobre las de los órganos inferiores.” (p. 16).
  - v. “De conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, y el artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia representa a la Función Judicial, lo que lo ubica en el nivel más alto de dicha función del Estado, por lo que sus decisiones priman y son jerárquicamente superiores a las decisiones de aquellos jueces que se encuentran en los niveles inferiores; tal es el caso de los jueces de las cortes provinciales y jueces de primera instancia.” (p. 16).
- c) El argumento apagógico: Interpretar como competentes para conocer una acción de hábeas corpus propuesta por una persona reclamada en extradición a jueces inferiores al presidente de la Corte Nacional de Justicia **“no parece lógico** ni apropiado, pues deja de lado el principio de jerarquía de la administración pública, al someter a revisión de un juez de primera instancia la decisión tomada por una autoridad jerárquicamente superior como es el presidente de la Corte Nacional de Justicia” (Énfasis fuera del texto) (p. 15).
- d) El argumento de la completitud de la disciplina jurídica: Existe “un vacío legal” en el art. 169 de la LOGJCC, pues “este permite únicamente que la Corte Nacional de Justicia se pronuncie únicamente como órgano de primera instancia en casos de fuero” (p. 17). “De este modo, en aras de subsanar el vacío legal (...) el numeral segundo del artículo 169 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional deberá ser interpretado como además de conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero, conocerá aquellas acciones de hábeas corpus en los procesos de extradición en los que el presidente de la Corte Nacional de Justicia haya ordenado la detención del sujeto reclamado en extradición.” (p. 17).

### 2.3.1.11 Sentencia N.º 265-15-SEP-CC

Manuel Gonzalo Quillupangui Ninahualpa presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado (dentro del proceso penal por injurias calumniosas seguido en contra del accionante) por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que inadmitió por extemporáneo el recurso de casación que aquel interpuso. En el desarrollo del proceso, la Sala Penal mencionada y la Sala Especializada de la Corte Provincial de Pichincha consideraron que los recursos de aclaración y ampliación presentados por el señor Quillupangui contra la sentencia dictada por este último órgano jurisdiccional debían haber sido interpuestos, en aplicación de lo dispuesto en el art. 6 del Código de Procedimiento Penal<sup>97</sup> y en el art. 281 del CPC (norma supletoria del CPP), en el plazo de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia, y no en los tres días hábiles como sugirió el accionante. Ante ello, la CC decidió aceptar la acción extraordinaria de protección y declarar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa pues la interpretación del art. 6 del CPP efectuada

---

<sup>97</sup> En adelante CPP.

por las Salas mencionadas era restrictiva y contraria a los derechos señalados. (Sentencia N.º 265-15-SEP-CC, 2015)

En el presente caso, el máximo órgano de justicia constitucional interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 75 de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser entendida de forma que el derecho a la tutela judicial consiste en que “toda persona debe tener la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, para obtener, a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, una decisión sobre las pretensiones propuestas que esté fundada en derecho.” (p. 7).  
Para justificar esta atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional empleó el argumento autoritativo: En la sentencia N.º 110-13-SEP-CC, la CC expresó: “(...) la tutela judicial responde a la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual las personas encuentran consagrado su derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales para que [sic], a través de un debido procedimiento y en ejercicio de sus derechos y garantías, obtener respuestas en decisiones judiciales debidamente motivadas en derecho respecto de sus pretensiones e intereses sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la Ley (...)” (p. 7).
- II) Art. 76, núm. 7, de la CRE<sup>98</sup>: La CC consideró que la disposición en cuestión debe ser interpretada de forma que el derecho a la defensa es “una regla de carácter sustantivo y adjetivo, por medio de la cual toda persona debe tener acceso a ciertas garantías mínimas dentro de un proceso judicial o administrativo, para poder recibir una tutela efectiva y expedita de sus derechos e intereses”, y por el cual las partes procesales, en condiciones de igualdad, “deben tener la oportunidad de ser escuchadas y de hacer valer sus pretensiones ante el juez y nadie puede ser privado de los medios necesarios para reclamar y hacer valer sus derechos durante el desarrollo de un proceso legal.” (p. 8).  
En la motivación de esta interpretación, la Corte utilizó:
- a) El argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 0016-13-SEP-CC, señaló: “(...) El derecho de defensa se basa en la igualdad procesal en virtud de la cual las partes intervinientes en un proceso deben estar en igualdad de condiciones ante la administración de justicia.” (p. 8).
  - b) El argumento sistemático: Según el art. 75 de la CRE, “toda persona tiene derecho a una tutela imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, sin que en ningún caso pueda quedar en indefensión” (p. 7), lo cual muestra que “el derecho a la tutela judicial efectiva está íntimamente ligado al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa” (p. 8).
  - c) El argumento a partir de los principios: En virtud de los “principios de igualdad y seguridad jurídica”, el derecho a la defensa “garantiza un proceso judicial equitativo” (p. 8).
- III) Art. 11, núm. 5, de la CRE: La CC resolvió atribuir a esta disposición el significado según el cual “en caso de que hubiere dos normas aplicables para una misma situación y dos interpretaciones posibles para una misma norma, se ha de aplicar necesariamente aquella norma o interpretación que más favorezca efectivamente

---

<sup>98</sup> Nótese que la CC no interpreta la disposición en su totalidad sino que únicamente define el derecho a la defensa.

el ejercicio de derechos constitucionales”, es decir, “cuando se trate de derechos, los jueces acudirán a la norma más amplia o a una interpretación normativa extensiva y por el contrario, cuando se trate de establecer límites al ejercicio de tales derechos, acudirán a la norma o a la interpretación menos restrictiva.” (p. 12).

Para motivar esta interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional usó el argumento autoritativo: Según Ramiro Ávila Santamaría, esta disposición debe ser interpretada de la siguiente forma: “(...) (2) El principio pro homine nos indica la real posibilidad de encontrar antinomias en el sistema jurídico. (...) De existir duda en el alcance de una norma, y si quien debe interpretarla no está seguro si la regulación es restrictiva o no, por el principio pro homine deberá entenderse que la norma sospechosa de restringir derechos, no deberá ser aplicada.” (p. 13). Así, si existe una interpretación que restringe la vigencia de los derechos y otra que favorece dicha vigencia, “(...) Ante estas dos interpretaciones de una misma norma, debe preferirse la que más favorezca la vigencia de los derechos; en este caso, debe optarse por la segunda opción porque beneficiaría a la persona que está exigiendo un derecho y que busca la tutela efectiva de parte del estado” (p. 13).

- IV) Art. 6 del CPP: La Corte decidió que esta disposición (vigente al tiempo de la presentación de la acción extraordinaria de protección) debe interpretarse de forma que “todos los recursos -sean estos horizontales, verticales, ordinarios o extraordinarios- se deben contabilizar en días hábiles” (p. 14).

En la justificación de esta atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional empleó:

- a) El argumento a partir de los principios en dos ocasiones:
  - i. Según el principio “*in dubio pro reo*”, “en el ámbito penal, la duda debe resultar siempre a favor del reo, principio de favorabilidad que, entre otros, supone que hay dos normas aplicables para una misma situación o caso, y que existen dos interpretaciones posibles para una misma norma, ante lo cual se aplicará aquella norma o interpretación que más favorezca el ejercicio de los derechos” (p. 13).
  - ii. De conformidad con el principio “*pro homine*”, si existen dos interpretaciones posibles de una misma norma, entonces necesariamente se debe aplicar “la interpretación que más favorezca efectivamente el ejercicio de los derechos constitucionales.” (p. 12).
- b) El argumento teleológico: Uno de los fines perseguidos por la Constitución y las disposiciones en materia penal es que las partes procesales cuenten “con todas las garantías necesarias para asegurar que dentro del proceso se hayan agotado todos los recursos, pruebas y alegaciones necesarias y por tanto la decisión final pueda ser considerada justa y absolutamente fundada en derecho.” (p. 14).
- c) El argumento sistemático: El artículo 76, núm. 7, lit. b, de la CRE establece: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...) b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.” (p. 15).
- d) El argumento de la coherencia de la disciplina jurídica: Interpretar la disposición en cuestión como que únicamente para los recursos previstos

expresamente en el CPP correrán los días hábiles y, por tanto, para los recursos de ampliación y aclaración previstos en el CPC (fuente supletoria del CPP) correrán todos los días, contradice “el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso en cuanto a la garantía del derecho a la defensa respecto a contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa” pues impide a las personas “acceder efectivamente a los órganos de justicia para recurrir y obtener de ellos una sentencia fundada en derecho.” (p. 15). En consecuencia, tal interpretación no es válida.

- V) Art. 573 del COIP: La CC consideró que a esta disposición (vigente al momento de la emisión de la sentencia) se debe atribuir el siguiente significado: “Para la contabilización del tiempo para la presentación y fundamentación del recurso de aclaración y/o ampliación en el ámbito penal, correrá solo los días hábiles.” (p. 17).

Debido a la similitud del art. 6 del CPP mencionado ut supra y la disposición sub examine, el máximo órgano de justicia constitucional consideró que los argumentos utilizados para justificar la interpretación de la primera disposición son también aplicables para motivar la interpretación de la segunda (Sentencia N.º 265-15-SEP-CC, 2015).

## 2.3.2 Acción por incumplimiento

### 2.3.2.1 Sentencia N.º 004-13-SAN-CC

Claudio Demetrio Masabanda Espín presentó acción por incumplimiento en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por incumplir con los arts. 60 y 65 del Convenio entre Ecuador y Colombia sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, y el art. 64 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior. El accionante, en virtud de las disposiciones señaladas, solicitó a dicho ministerio la entrega de un vehículo de su propiedad que se encontraba en el Consulado de Ecuador en Ipiales, Colombia. Esta entidad pública no cumplió lo solicitado pues, por negligencia de un funcionario público de aquella, el vehículo había sido entregado a otra persona. La CC decidió aceptar parcialmente la acción por incumplimiento ya que únicamente el art. 65 del Convenio señalado, el cual prescribe la obligación del cónsul de entregar el vehículo a su correspondiente dueño, no fue aplicado; y, además, el órgano jurisdiccional mencionado dispuso como medida de reparación integral el pago del valor del vehículo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Sentencia N.º 004-13-SAN-CC, 2013)

En el presente caso, la Corte interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 93 de la CRE: El máximo órgano de justicia constitucional decidió que esta disposición debe entenderse de manera que existe incumplimiento de una norma que contiene una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible cuando los servidores públicos actúan “con negligencia al momento de dar cumplimiento una disposición normativa” (p. 19).
- Para justificar esta interpretación, la CC empleó el argumento sistemático en cuatro ocasiones:
- a) El art. 226 de la CRE determina que “es un imperativo de las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, el cumplimiento



de los fines que persiguen las normas para hacer efectivos los derechos de las personas.” (p. 20).

- b) De conformidad con los incisos primero y segundo del art. 11, núm. 9, de la CRE, el deber más alto del Estado “consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” y, por ello, “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, **estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.**” (p. 20). Así, “al ser el más alto deber del Estado ecuatoriano el respeto de los derechos que asisten a las personas, los funcionarios y funcionarias públicos deben actuar con probidad y diligencia al momento de ejercer sus funciones.” (p. 20).
- c) Según el art. 3, núm. 1, de la CRE, un deber primordial del Estado ecuatoriano constituye “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales [...]” (p. 20).
- d) El art. 227 de la CRE prescribe: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” (p. 21). En virtud de ello, “dentro de los deberes de los funcionarios públicos se encuentra ejercer su trabajo con la debida diligencia” (p. 21).

- II) Art. 86, núm. 3, segundo inciso, de la CRE: La CC consideró que la frase “Los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución” debe ser entendida de forma que “las decisiones que resuelvan las acciones planteadas en protección de los derechos constitucionales, que declaren la vulneración de un derecho, deben necesariamente contener la disposición de reparación integral en la parte resolutive de la decisión constitucional.” (p. 25).

En la justificación de esta interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional usó el argumento naturalista: en función de “la naturaleza interdependiente de los derechos constitucionales”, “se espera que la reparación de los daños causados consiga un sentido integral” (p. 24).

- III) Art. 19 de la LOGJCC: La CC resolvió atribuir a esta disposición el significado según el cual la determinación del monto de la reparación económica, como parte de la reparación integral por vulneración de un derecho constitucional, se determinará en juicio verbal sumario, si fuere contra particulares, y en juicio contencioso administrativo, si fuere contra el Estado, los cuales son “procesos de ejecución, en los que no se discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos.” (p. 27).

En la motivación de esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional utilizó:

- a) El argumento teleológico: El fin que persigue la disposición en cuestión es “controlar los excesos en los que el juez constitucional puede incurrir al determinar los montos concernientes a la reparación económica y tutelar de los derechos constitucionales de la contraparte, para que esta pueda ejercerlos dentro del marco del debido proceso.” (p. 25).

- b) El argumento naturalista: En virtud de “la naturaleza sencilla, rápida y eficaz de las garantías jurisdiccionales”, “se debe cuantificar el monto por parte de la jurisdicción civil o contencioso administrativa, según el caso, sin que ello implique un nuevo conocimiento acerca del fondo del asunto, sino más bien un trámite que determina un monto económico dentro de la fase de ejecución de la sentencia constitucional” (p. 27).
- c) El argumento a partir de los principios: De conformidad con “el principio de celeridad en materia constitucional”, el proceso constitucional “debe ser ágil, para lo cual se debe emplear todos los medios necesarios” (p. 27).

### **2.3.3 Acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales**

#### **2.3.3.1 Sentencia N.º 024-15-SIS-CC**

Nancy del Rocío Pinos Goyes y Mariana de Jesús Galarraga Lucio presentaron acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales para que la CC disponga el cumplimiento del acuerdo transaccional y resolución judicial contenidos en providencia del 16 de mayo de 2011, dictada por el juez primero de lo civil de Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de la acción de protección N.º 23301-2011-0252. La CC decidió no aceptar la acción planteada ya que el juez no motivó debidamente su decisión y se limitó a “homologar” el acuerdo de las partes, término jurídicamente inexistente en los procesos constitucionales, lo cual implica que el juzgador no dictó el auto definitivo que aceptaba el acuerdo reparatorio en los términos exigidos por el art. 15, núm. 2, de la LOGJCC. (Sentencia N.º 024-15-SIS-CC, 2015)

La disposición interpretada en este caso fue el art. 15, núm. 2, de la LOGJCC. La CC decidió atribuir a esta disposición el significado según el cual cuando se alcance un acuerdo reparatorio entre las partes, el juzgador “necesariamente debe aprobar dicho acuerdo mediante un auto definitivo”, el cual “deberá ser motivado, por lo que el juez debe justificar y explicar porqué ese acuerdo no viola derechos irrenunciables o que no es manifiestamente injusto” (p. 16).

En la justificación de dicha interpretación, el órgano jurisdiccional mencionado empleó:

- a) El argumento sistemático en dos ocasiones:
  - i. Según el art. 21 de la LOGJCC, el juzgador “deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional”, y, por tanto, “un acuerdo celebrado en las condiciones previstas en la Ley tiene la misma validez jurídica que una sentencia constitucional y debe ser cumplido cabalmente” (p. 14).
  - ii. De conformidad con el art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE, el juez está obligado a motivar sus resoluciones y, por ende, debe justificar que “el acuerdo se ha suscrito dentro del marco constitucional y legal aplicable a los hechos del caso y, en particular, que reúna las condiciones indicadas”, esto es, que “el acuerdo no implique afectación a derechos irrenunciables o que sea manifiestamente injusto” (p. 26).
- b) El argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 002-15-SIS-CC, manifestó que “las decisiones adoptadas por las juezas y jueces que se encuentren en

conocimiento de garantías jurisdiccionales serán ejecutables siempre y cuando las mismas sean dictadas en observancia a la integralidad del texto constitucional, así como también al resto de disposiciones normativas integrantes del ordenamiento jurídico” (pp. 26-27).

### 2.3.4 Consulta popular

#### 2.3.4.1 Dictamen N.º 001-13-DCP-CC

Omar Simon Campaña, presidente del Consejo Nacional Electoral, solicitó a la CC la emisión del dictamen de constitucionalidad de las preguntas contenidas en la propuesta de consulta popular formulada por el asambleísta Galo Lara acerca de la regulación del uso, tiempo de duración, frecuencia y transmisión de las cadenas presidenciales y demás organismos públicos. El máximo órgano de justicia constitucional resolvió no emitir el dictamen requerido pues la propuesta, al tener carácter nacional, no contó con el respaldo mínimo del 5% de las personas inscritas en el registro electoral nacional. (Dictamen N.º 001-13-DCP-CC, 2013)

En este caso la CC atribuyó al art. 104 de la CRE el significado según el cual “para la emisión del dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular provenientes de la iniciativa ciudadana, el Consejo Nacional Electoral deberá remitir a la Corte Constitucional, junto con la petición de consulta, el informe favorable del cumplimiento de la legitimación democrática” (p. 11).

Para justificar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional empleó:

- a) El argumento sistemático en tres ocasiones:
  - i. De conformidad con el art. 95 de la CRE, “la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público constituye un derecho de las personas y un proceso permanente de construcción del poder ciudadano” (p. 6).
  - ii. Según el art. 1 de la CRE, “la soberanía radica en el pueblo” y su voluntad es “el fundamento de la autoridad”, es decir, “la esencia de la democracia se fundamenta justamente en la posibilidad de que la ciudadanía exprese su voluntad soberana sobre los asuntos de la vida pública”. (p. 6)
  - iii. De acuerdo a los arts. 182, 183 y 184 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, “la petición de la consulta popular de iniciativa ciudadana se realiza ante el Consejo Nacional Electoral, adjuntando a dicho petitorio las firmas que acreditan la legitimación democrática, luego de lo cual el Consejo debe enviar la propuesta a la Corte Constitucional para que se realice el control correspondiente” (p. 9).
- b) El argumento autoritativo: La CC para el período de transición, en el dictamen N.º 0001-10-DCP-CC, señaló que “la forma más acertada del desarrollo de la democracia de un país se obtiene con la participación de los ciudadanos de manera directa en la toma de decisiones sobre asuntos trascendentales, debido a que precisamente esa es la esencia de la democracia.” (p. 6).
- c) El argumento a partir de los principios: De acuerdo al “principio de legitimidad democrática” establecido por la CRE, la consulta popular convocada por la iniciativa ciudadana debe contar con un respaldo de un porcentaje determinado de personas inscritas en el registro electoral (p. 6).
- d) El argumento *a contrario*: El art. 104 prescribe que “...el petitorio contará con el respaldo...”, esto es, “el documento que se presente como petitorio de consulta popular debe necesariamente estar acompañado de los documentos que

acrediten la legitimación democrática, para convocar a una consulta popular por iniciativa ciudadana” (p. 8). El término «petitorio» indica que el momento de acompañar el respaldo es al presentar la solicitud de consulta popular y, por tanto, debe excluirse la interpretación según la cual la CC debe admitir “solicitudes de control de constitucionalidad acerca de las preguntas que eventualmente puedan plantearse en consultas populares de iniciativa ciudadana” (p. 10).

- e) El argumento de la coherencia de la disciplina jurídica: Interpretar la disposición en cuestión como que el control de constitucionalidad de la CC procede “si no se verifica previamente la legitimidad democrática (...), anularía el requisito de legitimación democrática establecida para el ejercicio de la participación ciudadana, en tanto derecho constitucional” (p. 8). Al generar una contradicción, esta interpretación no es válida.

### 2.3.5 Consulta de norma

#### 2.3.5.1 Sentencia N.º 001-13-SCN-CC

Los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 3, con sede en Cuenca, efectuó consulta de constitucionalidad de norma dentro de un juicio de excepciones al proceso coactivo para que la CC se pronuncie sobre la constitucionalidad y aplicación del procedimiento judicial a dicho juicio. Dicho Tribunal fundamentó su consulta en la existencia dos procedimientos judiciales aplicables al juicio de excepciones a la coactiva regulados, respectivamente, en el Código de Procedimiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La CC negó la consulta pues consideró que el Tribunal mencionado no motivó su duda al no establecer claramente la norma presuntamente inconstitucional, los principios o derechos que esta vulnera, ni las razones fácticas y jurídicas que ocasionarían una posible inconstitucionalidad. (Sentencia N.º 001-13-SCN-CC, 2013)

La disposición interpretada en el presente caso fue el segundo inciso del art. 142 de la LOGJCC. La CC decidió atribuir a dicha disposición el significado según el cual:

- a) Los juzgadores “que consideren que una norma es contraria a la Constitución, deberán suspender la causa y remitir en consulta a la Corte Constitucional el expediente del proceso que contenga la disposición normativa presuntamente contraria a la Constitución.” (p. 8)
- b) “La consulta de norma efectuada dentro del control concreto de constitucionalidad deberá contener:
  - ii. Identificación del enunciado normativo pertinente cuya constitucionalidad se consulta.
  - iii. Identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos, y las circunstancias, motivos y razones por las cuales dichos principios resultarían infringidos.
  - iv. Explicación y fundamentación clara y precisa de la relevancia de la disposición normativa cuya constitucionalidad se consulta, respecto de la decisión definitiva de un caso concreto, o la imposibilidad de continuar con el procedimiento de aplicar dicho enunciado” (pp. 8-9).

En la justificación de a), la CC utilizó el argumento autoritativo en dos ocasiones:

- i. “En palabras de Zúñiga Urbina: “cuando surge ante el juez la duda de que la ley a aplicar sea ilegítima, el juicio sobre el caso particular se detiene, y la cuestión se deja a la Corte Constitucional a fin de que decida, en vía general”” (p. 4).

- ii. “...la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en la sentencia N.º 55-10-SEP-CC señaló que: (...) En definitiva, esta Corte deja en claro que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 de la Constitución de la República vigente, y a diferencia del control constitucional difuso previsto en la Constitución Política de 1998, los jueces están vedados para inaplicar normas jurídicas y continuar con la sustanciación de la causa, circunstancia que se ha generado en el caso sub judice” (p. 5).

Para acreditar b), la CC empleó el argumento sistemático: “para elevar la consulta a la Corte Constitucional, deberá plantearla bajo los parámetros establecidos en el artículo 76, numeral 7 literal I de la Constitución de la República”, esto es, la consulta “debe justificar de manera suficiente, razonada y coherente que la norma no cumple con los principios constitucionales y por tal no puede ser aplicada al caso concreto” (p. 5).

### 2.3.5 2 Sentencia N.º 034-13-SCN-CC

Augusto Posligua Galarza, juez cuarto de Trabajo del Guayas, efectuó consulta de constitucionalidad dentro de un proceso de medidas cautelares autónomas para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de los arts. 27 y 42, núm. 6, de la LOGJCC. La accionante del proceso constitucional mencionado, María Delia Aguirre Medina, en calidad de representante de la compañía Exportadora Bananera Noboa S.A., planteó las medidas cautelares en contra de un auto dictado por la Corte Nacional de Justicia que disponía el cobro de una deuda tributaria de 50 millones de dólares, solicitud que fue aceptada parcialmente por el juez mencionado y ordenó que no se ejecute el mencionado cobro hasta que la CC se pronuncie sobre la acción extraordinaria de protección presentada por la accionante. El máximo órgano de justicia constitucional negó la consulta planteada pues no cumplió con los presupuestos determinados en la Sentencia N.º 001-13-SCN-CC, y, además, realizó diversas puntualizaciones sobre las medidas cautelares constitucionales ya que, a su criterio, existía una confusión generalizada entre los juzgadores sobre la tramitación de las mismas. (Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, 2013)

La Corte interpretó las siguientes disposiciones en el caso sub judice:

- I) Art. 142, inciso segundo, de la LOGJCC: El máximo órgano de justicia constitucional resolvió atribuir a esta disposición los siguientes significados:
- a) La consulta de norma “procede cuando exista una duda razonable y motivada” (p. 7); y esto implica que el juzgador debe “explicitar de manera motivada y con una justificación clara que no existe posibilidad de recurrir a una interpretación conforme del enunciado normativo a la luz de lo dispuesto en la Constitución” y elevar un expediente en consulta “por una convicción propia respecto de la incompatibilidad normativa con la Norma Fundamental, la que debe estar expresada por medio de razonamientos expresados en la consulta.” (p. 8).
  - b) La consulta que “inicia un proceso de control concreto de constitucionalidad deberá ser planteada de manera previa a la resolución final dictada por el juez” (p. 10), y, por tanto, “el juez o jueza que encuentre una norma que considere podría vulnerar un precepto constitucional, no tiene facultad para inaplicarla.” (p. 11).

Para justificar a), el órgano jurisdiccional mencionado utilizó:

- i. El argumento sistemático: De conformidad con el art. 76, núm. 7, lit. I, de la CRE, los juzgadores están obligados a motivar sus decisiones, como, en este



caso, la suspensión del proceso jurisdiccional para consultar la constitucionalidad de la norma (p. 8).

- ii. El argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 014-13-SCN-CC, la CC manifestó: "...la consulta de norma no puede tener como único fundamento la opinión de una de las partes sobre la constitucionalidad de la norma jurídica, sino la coherente y exhaustiva exposición de las razones que llevan al juez o jueza a no encontrar una interpretación de la norma o su aplicación al caso que sea compatible con la Constitución; es decir, la consulta debe ser adecuadamente motivada". (p. 9).

En la motivación de b), la CC empleó:

- i. El argumento sistemático: Según el art. 141 de la LOJCC, "el control concreto de constitucionalidad tiene como finalidad "garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas **dentro de los procesos judiciales**" (Énfasis fuera del texto) (p. 11), esto es, verificar la compatibilidad de una norma legal con la Constitución antes de emitir la resolución final del caso.
- ii. El argumento autoritativo: En la Sentencia N.º 55-10-SEP-CC, la CC para el período de transición determinó: "[...] En definitiva, esta Corte deja en claro que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 de la Constitución de la República vigente, y a diferencia del control constitucional difuso previsto en la Constitución Política de 1998, los jueces están vedados para inaplicar normas jurídicas y continuar con la sustanciación de la causa, circunstancia que se ha generado en el caso sub iudice." (p. 11).

- II) Art. 87 de la CRE: La CC decidió atribuir a esta disposición el siguiente significado: "La concesión de medidas cautelares procede en caso de amenazas o violaciones a derechos reconocidos en la Constitución, con diferencia de objeto entre uno y otro supuesto:

- i. En caso de amenazas, el objeto de las medidas será prevenir la ocurrencia de hechos que se consideren atentatorios a derechos reconocidos en la Constitución. La amenaza se da cuando un bien jurídico no se encuentra afectado o lesionado, sino, en camino de sufrir un daño grave y la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de que la vulneración se verifique. En este caso, por no verificarse todavía una vulneración del derecho constitucional, procederá la presentación de las medidas cautelares como garantías jurisdiccionales de manera autónoma.

- ii. En caso de violaciones a derechos reconocidos en la Constitución, el objeto será cesar dicha situación. Se consideran como tales, aquellas situaciones en las que el ejercicio pleno de un derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos es impracticable, o cuando el bien jurídico es lesionado, es decir, cuando la persona ya ha sido víctima de una intervención ilícita. En dicho caso, las medidas cautelares deberán ser necesariamente solicitadas en conjunto con una garantía jurisdiccional de conocimiento, se deberá condicionar la concesión de la medida cautelar a la constatación de un daño grave que pueda provocar efectos irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación." (pp. 21-22).

Para motivar esta interpretación, dicho órgano jurisdiccional usó:

- a) El argumento teleológico: La disposición en cuestión tiene como fin, en caso de amenazas a los derechos, "prevenir una posible vulneración de los derechos, evitando que sucedan los hechos que se consideran atentatorios a

derechos”, y, en “caso de vulneraciones o violaciones a derechos constitucionales”, “cesar dicha transgresión.” (p. 13).

- b) El argumento sistemático en cuatro ocasiones:
  - i. El art. 6 de la LOGJCC prescribe: “Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho...” (p. 13).
  - ii. El art. 26 de la LOGJCC establece que “las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución o en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.” (p. 13).
  - iii. De conformidad con el art. 86, núm. 2, lit. a, de la CRE, las garantías jurisdiccionales contarán con “un procedimiento sencillo, rápido y eficaz” (p. 17).
  - iv. Según el art. 32 de la LOGJCC, las medidas cautelares pueden ser interpuestas “en conjunto con acciones constitucionales destinadas a la protección de derechos, “...cuando tenga por objeto detener la violación del derecho...”” (p. 17).
- c) El argumento autoritativo: Según Ernesto Rey Cantor y Ángela Rey Anaya, “el objeto de las medidas cautelares es proteger los derechos constitucionales y humanos ante las amenazas o violaciones” (p. 12). Ambos supuestos son distintos pues la violación de un derecho se produce “cuando el bien jurídico es lesionado, es decir, la persona ha sido ya víctima de una intervención vulneratoria”, mientras la amenaza de violación se presenta “cuando un bien jurídico que, sin ser necesariamente afectado o lesionado, se encuentra en tránsito de sufrir un daño grave y la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de que la vulneración suceda” (p. 13).

- III) Art. 26, inciso segundo, de la LOGJCC: La Corte resolvió que esta disposición debe ser interpretada de forma que la medida cautelar dispuesta “deberá ser siempre proporcional y necesaria en relación al fin que se persigue (una relación proporcional medio y fin)” (p. 14).

En la justificación de esta interpretación, la CC utilizó:

- a) El argumento a partir de los principios: Según el “principio de proporcionalidad”, reconocido en la LOGJCC, las medidas referentes a los derechos constitucionales deben proteger un fin constitucionalmente válido, ser idóneas y necesarias para garantizarlo, y mantener un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional (p. 22).
- b) El argumento autoritativo: Según Carlos Bernal Pulido, la proporcionalidad exige que “la importancia de la intervención deba estar justificada en la importancia de la realización o satisfacción de un fin”; y, por ello, las medidas dependerán “de la gravedad del caso y las circunstancias particulares del mismo, sin que en ningún caso puedan ser excesivas o desproporcionadas” (p. 14).

- IV) Art. 27 de la LOGJCC: El máximo órgano de justicia constitucional consideró que esta disposición debe ser entendida de la siguiente manera:

- a) Es presupuesto de concesión de las medidas cautelares el peligro en la demora, “determinado en cada caso en razón de las circunstancias que justifiquen una acción urgente por la inminencia de un daño grave a uno o más derechos reconocidos en la Constitución; sea dicha gravedad causada

por la imposibilidad de revertido, o porque su intensidad o frecuencia, justifiquen una actuación rápida, que no pueda ser conseguida de forma oportuna por medio de una garantía de conocimiento, sin perjuicio de la decisión definitiva que se adopte en esta última.” (p. 22).

- b) Es presupuesto de concesión de las medidas cautelares la verosimilitud fundada de la pretensión, “entendida como una presunción razonable respecto de la verdad de los hechos relatados en la solicitud.” (p. 22).

Para justificar a), la CC usó:

- i. El argumento autoritativo: “Conforme lo ha desarrollado la propia doctrina y lo entiende la Corte Constitucional, los presupuestos de concesión de las medidas cautelares en materia constitucional son los siguientes: i. Peligro en la demora; y, ii. Verosimilitud fundada de la pretensión.” (p. 14). El peligro en la demora “resulta relevante por cuanto la generalidad de los procesos conlleva un tiempo considerable que no puede ser tolerado bajo ningún supuesto, cuando de por medio se encuentran derechos constitucionales en juego, no obstante, este peligro en la demora, como se lo ha denominado, tampoco puede ser un criterio arbitrario o una evaluación abstracta; ella se desprende del caso en concreto atendiendo las especiales circunstancias del mismo que justifiquen una acción urgente” (pp. 14-15). “Así, en relación con el presupuesto del peligro en la demora, no basta o no es suficiente un simple temor, sino la inminencia de que el daño se producirá conculcando los derechos” (p. 15).
- ii. El argumento sistemático: Según el art. 29 de la LOGJCC, “la jueza o el juez deberá ordenar las medidas que considere necesarias en el tiempo más breve posible, de forma inmediata y urgente desde que se recibió la petición de medida cautelar, de ser procedente en el caso concreto” (p. 15).

En la motivación de b), la Corte empleó:

- i. El argumento autoritativo: “Conforme lo ha desarrollado la propia doctrina y lo entiende la Corte Constitucional, los presupuestos de concesión de las medidas cautelares en materia constitucional son los siguientes: i. Peligro en la demora; y, ii. Verosimilitud fundada de la pretensión.” (p. 14). La verosimilitud fundada de la pretensión es “una presunción razonable de que los hechos denunciados como violatorios o de inminente violación de los derechos constitucionales, así como de los previstos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, son verdaderos.” (p. 16). Giovanni Posada, al referirse a la pretensión de que las medidas cautelares sean concedidas, señala que “el análisis sobre la fundabilidad de la pretensión no puede ser entonces un juicio de certeza como aquel que se hace en el proceso principal y que resulta necesario para el dictado de una sentencia, sino que debe ser un análisis basado en la probabilidad de que se obtenga una sentencia que ampare la pretensión planteada” (p. 16).
- ii. El argumento sistemático: “La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 33, determina que “...una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, **otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas...**” (Énfasis fuera del texto) (p. 16).

V) Art. 32 de la LOGJCC: La CC decidió interpretar esta disposición de forma que:

- a) Cuando las medidas cautelares son solicitadas de manera autónoma, “de ser procedentes, deben ser ordenadas en la primera providencia.” (p. 23).
- b) Cuando se plantean las medidas cautelares conjuntamente con una garantía constitucional, “su concesión se realizará, de considerarlo procedente, en la providencia que declare la admisibilidad de la acción de conocimiento” (pp. 22-23)

En la justificación de a) y b), dicho órgano jurisdiccional usó:

- i. El argumento sistemático en dos ocasiones:
  - a. Según el art. 86, núm. 2, lit. a, de la CRE, las garantías jurisdiccionales contarán con “un procedimiento sencillo, rápido y eficaz” (p. 17).
  - b. “Conforme lo disponen los artículos 27, primer inciso, y 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares, en caso de ser procedentes, deben ser ordenadas de manera inmediata y urgente, una vez que los hechos se han puesto en conocimiento de la jueza o juez constitucional.” (p. 17)
- ii. El argumento autoritativo: Las medidas cautelares, según la doctrina, se conceden “*inaudita parte*”, esto es, “se ordenan y luego se comunican al destinatario” (p. 18).

Además, para motivar a), la CC utilizó el argumento sistemático: De conformidad con el primer inciso del art. 33 de la LOGJCC determina que si “la jueza o juez constitucional “verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes”, sin que para ello se deban exigir pruebas” (p. 18).

Asimismo, para justificar b), la Corte también empleó:

- i. El argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, señaló: “La medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales, hasta que vía sentencia, se declare o no dicha vulneración. En otras palabras, la medida cautelar puede ser adoptada en primera providencia, cuando a criterio del juez existan presunciones de una posible vulneración de derechos constitucionales que no pueda esperar a la sentencia, pero aquello no implica un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no puede generar un efecto propio de una garantía de conocimiento, como en efecto es la acción de protección...” (p. 17).
- ii. El argumento sistemático: Según el art. 13, núm. 5, de la LOGJCC, las medidas cautelares, “cuando se plantean dentro de garantía constitucional, estas se ordenan en la primera providencia” (p. 18).

- VI) Art. 35 de la LOGJCC: La CC resolvió que dicha disposición debe ser entendida de forma que las medidas cautelares autónomas “son revocables por causas sobrevinientes que merecen ser justificadas por quien solicita la revocatoria de ellas y razonadas por el juzgador que las adopta” (p. 19), por lo que este último “debe dictar el correspondiente auto por el que confirma o revoca, motivadamente, las medidas cautelares, el cual es susceptible de ser apelado, conforme con lo establecido en la Ley” (p. 20).

En la justificación de esta interpretación, el mencionado órgano jurisdiccional usó:

- a) El argumento naturalista dos veces:
  - i. En virtud de la naturaleza “preventiva” de las medidas cautelares autónomas, estas pretenden “evitar las consecuencias gravosas” y, por tanto, “no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho amenazado” (p. 18)

- ii. De conformidad con la naturaleza o “carácter provisional” de las medidas cautelares, estas subsisten mientras persistan las circunstancias que las justifiquen, y, por tanto, “se agotan una vez que se haya verificado el cese de la amenaza o violación y cuando ya no es probable que ocurra” (p. 19).
- b) El argumento sistemático: Según el art. 28 de la LOGJCC, las medidas cautelares autónomas constituyen una acción que no resuelve el fondo de la controversia constitucional pues su otorgamiento “no constituye un prejuzgamiento, peor aún cosa juzgada, carente de valor probatorio en el caso de existir una garantía jurisdiccional por violación de derechos” (p. 19).

### 2.3.5.3 Sentencia N.º 002-14-SCN-CC

Olga Campos, jueza cuarta de lo Laboral del Guayas, dentro de un proceso de medidas cautelares, en un primero momento, aceptó el pedido de dichas medidas y, posteriormente, lo revocó. Ante esta revocatoria, la accionante apeló la decisión de dicha juzgadora y solicitó que el proceso sea remitido a la CC. La jueza presentó consulta de constitucionalidad del art. 35, inciso segundo, de la LOGJCC ante el máximo órgano de justicia constitucional, el cual resolvió negar la consulta de constitucionalidad pues el consultante no cumplió con los requisitos establecidos en la Sentencia N.º 001-13-SCN-CC. (Sentencia N.º 002-14-SCN-CC, 2014)

En este caso la Corte interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 142, inciso segundo, de la LOGJCC: La CC consideró que esta disposición debe ser interpretada de forma que “las juezas y jueces que en la sustanciación de una causa reciban, a petición de parte, una solicitud de consulta de norma para ante la Corte Constitucional, están en la obligación de analizar el contenido de dicho pedido, y solo luego de verificar la existencia de una duda razonable y motivada respecto a la inconstitucionalidad de una norma, remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional” (p. 12).  
Para justificar esta atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional empleó:
  - a) El argumento teleológico: Las disposiciones referentes al control concreto de constitucionalidad tienen como fin “garantizar la supremacía de la Constitución cuando existe en los juzgadores dudas razonables y motivadas sobre la aplicación de determinada norma jurídica en aquellos casos sometidos a su jurisdicción.” (p. 6).
  - b) El argumento a partir de los principios en dos ocasiones:
    - i. El principio de eficacia exige “la coherencia del ordenamiento jurídico y la posibilidad de contar con elementos que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y normativas” (p. 5).
    - ii. Según el principio *iura novit curia*, el juzgador conoce el derecho y, por ende, está facultado a “aplicar una norma distinta a la invocada por las partes en un proceso constitucional.” (p. 9).
  - c) El argumento autoritativo: La CC, en la Sentencia N.º 014-13-SCN-CC, señaló que en la consulta de constitucionalidad debe existir “una coherente y exhaustiva exposición de las razones que llevaron a la jueza a no encontrar una interpretación de la norma o su aplicación al caso que sea compatible con la Constitución.” (pp. 9-10).
  - d) El argumento sistemático: De conformidad con el art. 75 de la CRE, referente al derecho a la tutela judicial efectiva, los juzgadores no deben en la sustanciación de una causa “suspender la tramitación de la misma sin ningún sustento constitucional.” (p. 12).



- II) Art. 35, inciso segundo, de la LOGJCC: La CC decidió atribuir a esta disposición el significado según el cual “el auto que confirma o revoca las medidas cautelares” es susceptible de ser apelado (p. 10).  
En la justificación de tal interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional utilizó:
- a) El argumento autoritativo: “La Corte Constitucional, en su sentencia N.º 034-13-SCN-CC ha sabido señalar que el auto que confirma o revoca las medidas cautelares es susceptible de recurso de apelación conforme lo establece la ley” (p. 10).
  - b) El argumento sistemático dos veces:
    - i. “Así, el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la República, expresamente dispone que: “(...) las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial”” (p. 10).
    - ii. El art. 24 de la LOGJCC “establece claramente: “(...) Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo...”” (p. 10)

#### 2.3.5.4 Sentencia N.º 003-15-SCN-CC

El juez temporal del Juzgado Noveno de lo Civil y Mercantil de Guayaquil, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas realizó consulta de constitucionalidad de norma dentro del proceso N.º 1041-2010-A (juicio ejecutivo) para que la CC resuelva sobre la constitucionalidad del art. 327, inciso segundo, del Código Orgánico de la Función Judicial<sup>99</sup>. Según el juez consultante, existiría una aparente contradicción entre la disposición citada y los arts. 75; 76, núm. 7, lit. a y c; 169; y 11, núm. 4, de la CRE. La CC decidió declarar la constitucionalidad condicionada de la disposición objeto de consulta porque consideró que la firma de abogado es un requisito de forma no sustancial y, en consecuencia, la interpretación literal-textual del inciso segundo del art. 327 del COFJ vulneraría los derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, debido proceso y a la defensa. (Sentencia N.º 003-15-SCN-CC, 2015)

En el caso sub judice la CC interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 75 de la CRE: El máximo órgano de justicia constitucional resolvió que el derecho a la tutela judicial efectiva debe entenderse como “el derecho de toda persona, no solo a acudir a los órganos jurisdiccionales, sino, además de que a través de los debidos cauces procesales y con mínimas garantías, obtenga una decisión fundada en derecho respecto de sus pretensiones.” (p. 19)  
Para justificar esta atribución de significado la CC usó:
- a) El argumento autoritativo en cuatro ocasiones:
    - i. Según Jesús González Pérez, “el derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le “haga justicia”, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas.” (p. 19).
    - ii. A decir de Joaquín García Morillo, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye “el derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en derecho -y por tanto motivada- que puede ser de inadmisión cuando concurre una causa

---

<sup>99</sup> En adelante COFJ.

- legalmente prevista. A ello hay que añadir el derecho a no sufrir indefensión, es decir, a poder ejercer en el proceso, en apoyo de la propia posición, todas las facultades legalmente reconocidas” (pp. 19-20).
- iii. Javier Pérez Royo señala que el derecho sub examine exige que el Estado “(...) cree los instrumentos para que el despacho pueda ser ejercido y la justicia prestada” (p. 20).
  - iv. En la Sentencia N.º 080-13-SEP-CC, la CC “respecto de la tutela judicial efectiva instituyó: La tutela de las garantías del debido proceso previstas en la Constitución (...) conlleva a que los juzgadores, en todo proceso, observen rigurosamente las garantías del debido proceso, dado que no se trata de cumplir con simples ritualidades, en las que interesa más la forma que el contenido, sino asegurar que efectivamente no se prive a los sujetos procesales del ejercicio de la eficacia de sus derechos constitucionales.” (p. 25).
- b) El argumento sistemático en dos oportunidades:
- i. El art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos<sup>100</sup> establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (p. 20).
  - ii. El art. 25.1 de la CADH señala: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” (p. 20).
- c) El argumento teleológico: De acuerdo con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la disposición sub examine “tiene como objetivo una justicia efectiva, en tanto permite que las personas puedan acceder al sistema judicial del país, que en la tramitación de la causa se cumplan reglas del debido proceso y que puedan obtener una sentencia basada en derecho, es decir, libre de arbitrariedad.” (p. 20).
- II) Art. 76, núm. 7, de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser entendida como el “principio jurídico procesal y sustantivo mediante el cual se le garantiza a toda persona el derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un determinado proceso, que incluye la oportunidad de ser escuchado para hacer valer sus pretensiones frente al juez.” (pp. 14-15). En la justificación de esta interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional empleó el argumento teleológico: Las disposiciones sobre el “derecho a la defensa en el ámbito constitucional y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos” tienen como fin u objetivo “garantizar que ninguna persona debe ser privada de los medios necesarios para reclamar y hacer respetar sus derechos dentro de un proceso judicial, administrativo o de cualquier otra índole, a efectos de equilibrar en lo posible las facultades que tiene el sujeto procesal accionante como el defensivo,

---

<sup>100</sup> En adelante CADH

básicamente para contradecir la prueba de cargo, aportar medios de prueba que consoliden su condición y a impugnar las decisiones legales que le sean contrarias” (p. 15).

- III) Art. 169 de la CRE: La CC decidió que dicha disposición debe ser interpretada de forma que “toda enajenación del principio de administración de justicia que se fundamente en la sola omisión de formalidades” es “inconsecuente” (p. 24). Para motivar esta interpretación dicho órgano jurisdiccional utilizó:
- a) El argumento teleológico: Según “la Constitución de la República (...) y las disposiciones establecidas a través de las cartas e instrumentos de derechos internacionales ratificados por el Ecuador”, el fin de esta disposición es que el sistema procesal permita “el efectivo acceso a la justicia de las personas, en el marco del debido proceso, que deberá concebir a las formalidades como medidas de garantía, mas no de regresión del ámbito de protección de los derechos.” (p. 24).
  - b) El argumento autoritativo: La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 0108-12-SEP-CC, “sobre la naturaleza de las formalidades, estableció: En el ordenamiento jurídico del país existe, como parte del mismo, el sistema procesal, esto es, el conjunto de reglas que sirven para toda la tramitación de una controversia judicial, que permita hacer realidad la justicia. En este sentido, para el cumplimiento de este objetivo, las normas procedimentales han establecido una serie de principios que permiten optimizar este servicio que proporciona el Estado a las personas, para resolver los conflictos, desterrar las iniquidades e injusticias, equilibrar las fuerzas sociales, todo ello con el fin de lograr la paz, que permita el desarrollo y progreso de todos. Dentro de estos principios está aquel que dispone que: “No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. La norma, en toda la extensión de su contenido, debe ser observada, antes que cualquiera otra secundaria, por todo juzgador, incluido aquel que, ejerciendo jurisdicción común, también lo hace constitucionalmente, dentro del control difuso que contiene la Constitución...” (p. 17).
- IV) Art. 76, núm. 6, de la LOGJCC: La CC decidió atribuir a esta disposición el significado según el cual la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma debe ser resultado del “convencimiento pleno y absoluto de los jueces de la Corte Constitucional de que la norma de rango legal es contraria a los principios constitucionales, debiendo adecuarse su interpretación a principios y reglas, a fin de orientarse de acuerdo a las necesidades del texto constitucional” (p. 24). En la motivación de tal interpretación, el máximo órgano de justicia constitucional usó el argumento a partir de los principios: De conformidad con “el principio indubio pro legislatore”, “en todo caso de duda sobre la inconstitucionalidad de una disposición jurídica, debe optarse por no declarar la inconstitucionalidad” (p. 24).
- V) Art. 327, inciso segundo, de la COFJ: La CC decidió que esta disposición debe interpretarse de la siguiente forma: “En todos los procesos e instancias, para los escritos que se ingresen sin firma de abogado o en los escritos en los que se haya omitido la firma del abogado, el juez de la causa requerirá mediante providencia que en el término de cinco días” el abogado firme el escrito correspondiente “a fin de procurar el saneamiento procesal” (pp. 25-26).

Para justificar esta atribución de significado, el órgano jurisdiccional mencionado empleó:

- a) El argumento a partir de los principios tres veces:
  - i. Según el “principio jurídico procesal y sustantivo” del derecho a la defensa, toda persona tiene “derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un determinado proceso, que incluye la oportunidad de ser escuchado para hacer valer sus pretensiones frente al juez” (pp. 14-15).
  - ii. De conformidad con el principio de no sacrificio de la justicia por la omisión de formalidades, existe una prevalencia “de lo sustancial sobre lo formal” (p. 16). Es decir, garantizar los derechos de las personas (a la tutela judicial efectiva y a la defensa en este caso) prevalece sobre el cumplimiento de la formalidad no esencial de exigir la firma de un abogado en todo escrito.
  - iii. De acuerdo al “principio de favorabilidad”, “los defectos de forma en la demanda o la contestación a la demanda o en los recursos, pueden ser subsanados por el demandante o recurrente” (pp. 16-17).
- b) El argumento autoritativo en tres ocasiones:
  - i. La CC “dictó la sentencia N.º 038-14-SEP-CC del 12 de marzo de 2014, en la que sobre el derecho al debido proceso determinó: La finalidad del debido proceso no es el proceso en sí mismo, sino la garantía de los derechos de los ciudadanos expresada en la observancia de normas procedimentales. Se viola el debido proceso cuando a través de la inobservancia de procedimiento se afecta derechos fundamentales y no viceversa, es decir, no se produce violación al debido proceso cuando se ha puesto en primer lugar el respeto de los derechos humanos como más alto deber del Estado. (...) conforme se ha indicado por el Pleno de esta Corte, que en la medida en que los jueces tengan “la potestad judicial” de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en respeto de lo señalado en el artículo 76 de la Constitución, es evidente que su misión consiste en realizar en sus juicios no solo el sentido literal de las leyes, sino en un sentido capaz de materializar las finalidades y los valores del orden jurídico” (p. 15).
  - ii. La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 020-09-SEP-CC, al referirse a la seguridad jurídica y a los requisitos formales señaló: “Es la necesidad de certeza y seguridad jurídica uno de los principios que alimentan el núcleo duro del deber ser de las formalidades y solemnidades que caracterizan a los procesos en derecho; sin embargo, la seguridad jurídica no se agota en las meras formas, pues en muchos casos dichas formalidades y solemnidades podrían ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un sinrazón jurídico. (...) De esta manera, la seguridad jurídica es uno de los resultados de la certeza que otorga el cumplimiento de las formalidades jurídicas en el tiempo y a lo largo del proceso, siempre y cuando dichas formalidades sean justas y provoquen desenlaces justos y cuya inobservancia sea la razón y esencia misma de una sentencia, pues lo contrario configuraría una situación jurídica injusta, írrita o fraudulenta.” (p. 16).
  - iii. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-268/10, afirmó: “6.3. En este orden de ideas, cuando una autoridad judicial, renunciando conscientemente a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, decide que un memorial no es auténtico porque carece de firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permiten identificar a la persona que

lo elaboró, incurre: (i) En un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” al aplicar una formalidad eminentemente procesal renunciando de manera consciente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, en detrimento de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, ignorado en esa forma el artículo 228 de la Constitución Política que consagra como principio de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la connotación de fundamental; y desnaturalizando a la vez las normas procesales cuyo fin es servir de medio para la efectiva realización del derecho material.” (p. 23).

- c) El argumento sistemático en cuatro oportunidades:
- “El artículo 169, parte final de la Constitución de la República estatuye: “No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. ” (p. 16).
  - De conformidad con los arts. 69 y 102 del Código de Procedimiento Civil<sup>101</sup>, la exigencia de que todo escrito lleve la firma de abogado no es sustancial al no constar “como uno de los requisitos para que la demanda sea admitida, ni se exige como elemento de la contestación de la demanda” (p. 16).
  - “La Constitución de la República, en su artículo 172, en concordancia con el artículo 11 numerales 3, 4 y 5 ibídem, y los artículos 69 y 102 inciso final del Código de Procedimiento Civil, obligan a los jueces y tribunales a cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios que puedan significar su nulidad” (p. 17).
  - Según “los artículos 69 y 102 inciso final del Código de Procedimiento Civil, se debe revisar los escritos antes de admitir, y ante la presencia de vicios o defectos formales, ordenar que sean subsanados por la parte, otorgando para ello un plazo prudencial bajo apercibimiento de tenérsela por no presentada. Esto significa que el juez no tiene facultades para rechazar un escrito ante la presencia de un vicio o defecto de carácter formal.” (p. 17).
- d) El argumento de la coherencia de la disciplina jurídica dos veces:
- Interpretar de forma “literal-textual” la disposición en cuestión como que el juzgador debe rechazar “el escrito de contestación a la demanda ejecutiva por carecer de firma del abogado sin habersele dado al justiciable la oportunidad de subsanar el defecto” contradice “el derecho a la defensa consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República, que dice: “El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: ...a). Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento...” (p. 18); y, por ello, dicha interpretación es inválida.
  - Atribuir al art. 327, inciso segundo, del COFJ un significado “literal-textual” según el cual los juzgadores no admitirán cualquier escrito en que no conste la firma de un abogado contraría a “los derechos de los justiciables a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia consagrada en el artículo 75 de la Constitución” (p. 21); y, en consecuencia, tal atribución no es válida.

---

<sup>101</sup> En adelante CPC.



## 2.3.6 Precedente jurisprudencial obligatorio

### 2.3.6.1 Sentencia N.º 001-14-PJO-CC

La Sala de Selección de la CC para el período de transición seleccionó el caso N.º 0067-11-JD para emitir precedente con carácter *erga omnes* en ejercicio del art. 436, núm. 6, de la CRE. Este proceso trató sobre la presentación de una acción de hábeas data por parte de la representante legal de la persona jurídica “TACURI YANZA S.A.”, compañía de transporte mixto, para exigir que los miembros de la directiva saliente de la compañía le entreguen una memoria de la situación de esta última, el balance de los inventarios y los libros de la compañía; acción que en las sentencias de primera y segunda instancia no fue aceptada, principalmente, por considerar que la accionante debía haber procedido con la legitimación de los socios de la compañía. Tras la revisión del proceso, la CC determinó que este era construccionalmente relevante porque debía resolver las confusiones presentadas en su desarrollo sobre el derecho protegido por la acción de hábeas data, la titularidad de este derecho y la legitimación activa para activar dicha garantía jurisdiccional. Por ello, dicho órgano jurisdiccional decidió emitir la presente sentencia como jurisprudencia vinculante con efectos generales para casos futuros. (Sentencia N.º 001-14-PJO-CC, 2014)

En el presente caso, el máximo órgano de justicia constitucional interpretó las siguientes disposiciones:

- I) Art. 10 de la CRE: La CC decidió que esta disposición debe ser entendida de manera que las personas jurídicas son titulares de derechos constitucionales y, en consecuencia, “la determinación respecto de si una persona jurídica puede beneficiarse de una provisión constitucional que contenga un derecho constitucional, debe hacerse caso por caso, en consideración de las posibilidades derivadas de su naturaleza social, así como de los términos en los que está formulado el derecho en la Constitución de la República.” (p. 14).
- Para justificar esta atribución de significado, dicho órgano jurisdiccional utilizó:
- a) El argumento a partir de los principios: Según el “principio de universalidad de los derechos constitucionales”, estos “corresponden a todas las personas en la misma medida” (p. 9).
  - b) El argumento autoritativo en dos ocasiones:
    - i. Luigi Ferrajoli señala que: “los derechos fundamentales constituyen la base de la moderna igualdad, que es precisamente una igualdad en *droits*, en cuanto hacen visibles (...) características estructurales que los diferencian de todos los demás derechos, a empezar por el de propiedad: sobre todo su universalidad, es decir, el hecho de que corresponden a todos y en la misma medida, al contrario de lo que sucede con los derechos patrimoniales, que son derechos *excludendi alios*, de los que un sujeto puede ser o no titular y de los que para uno es titular con exclusión de los demás.” (p. 9).
    - ii. La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 068-10-SEP-CC, señaló: “En torno a esta apreciación realizada por la parte recurrida (que las personas jurídicas no son titulares de los derechos constitucionales), esta Corte reitera que pese a que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales fundamentales, sí lo son de aquellos que les correspondan, según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de los que se trate.” (p. 10).

II) Art. 66, núm. 19, de la CRE: A decir de la CC, esta disposición debe ser interpretada así:

- a) El derecho a la protección de datos personales es de “carácter instrumental” y tiene como componente la “autodeterminación informativa”, la cual “implica la necesidad de garantizar la protección de la esfera íntima de las personas, así como la posibilidad de ejercer control sobre los datos personales del sujeto, aunque no se encuentren en su poder.” (p. 14).
- b) Las personas jurídicas tienen derecho a la protección de datos personales, “sin embargo, la información personal de dichos sujetos únicamente se extiende a las personas asociadas o a sus representantes legales, en tanto a la calidad que ostentan respecto de la persona jurídica” (p. 14).

En la motivación de a), la Corte empleó el argumento autoritativo dos veces

- i. En la doctrina, Óscar Puccinelli señala: “[P]or 'derecho a la protección de datos' se propone entender la suma de principios, derechos y garantías establecidos en favor de las personas que pudieran verse perjudicadas por el tratamiento de los datos nominativos a ella referidos” (p. 12). Así, según dicho autor, “el derecho a la protección de datos –y específicamente, su elemento denominado “autodeterminación informativa-”, tiene un carácter instrumental, supeditado a la protección de otros derechos constitucionales que se pueden ver afectados cuando se utilizan datos personales, como puede ser la intimidad, la honra, la integridad psicológica, etc.” (p. 12).
- ii. La CC para el período de transición, en la Sentencia N.º 0009-09-HD, señaló que el contenido del componente del derecho a la protección de datos personales denominado “autodeterminación informativa” es “... mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar” (p. 12).

En la justificación de b), dicho órgano jurisdiccional usó el argumento sistemático: El primer inciso del art. 568 del Código Civil prescribe: “Lo que pertenece a una corporación, no pertenece, ni en todo ni en parte, a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o en parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.” (p. 13). Esto es, “las personas jurídicas, así como los derechos y obligaciones de las que son titulares son distintos de los [individuos o personas naturales] que la conforman” (p. 13).

III) Art. 92 de la CRE: La Corte decidió atribuir a esta disposición los siguientes significados:

- a) “La legitimación activa para la presentación de la acción de hábeas data requerirá que quien lo haga sea el titular del derecho a la protección de datos personales que se alegue vulnerada, o su representante legitimado para el efecto.” (p. 17)
- b) “Para acreditar la representación de las personas jurídicas, será suficiente la entrega del documento que la Ley que regule la materia determine como suficiente para considerar iniciadas sus funciones como representante. El juez constitucional, una vez acreditada la representación, deberá tramitar la acción sin que medie excepción sobre el cumplimiento de los requisitos de

ley respecto del documento entregado, la que deberá ser dilucidada por los organismos competentes en sede ordinaria.” (p. 17).

- c) El hábeas data protege los datos “siempre que cumplan con una función informativa respecto de las personas y sus bienes y por ende, su comunicación, interpretación o tratamiento afecta en mayor o menor medida los derechos de aquel a quien se refieren” (p. 19); y, en consecuencia, dicho mecanismo de protección “no podrá ser incoado como medio para requerir la entrega física del soporte material o electrónico de los documentos en los que se alegue está contenida la información personal del titular sino para conocer su existencia, tener acceso a él y ejercer los actos previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República.” (p. 20).

Para motivar a), la CC utilizó:

- i. El argumento sistemático en tres ocasiones:
- a. Según el art. 66, núm. 19, de la CRE, las personas, sean naturales o jurídicas, tiene “derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley” (pp. 11-12).
  - b. El art. 11, núm. 1, de la CRE dispone que “los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”; y este ejercicio se efectúa “por medio de la interposición de acciones y recursos ante los organismos con potestad jurisdiccional, entre las que se encuentran las garantías jurisdiccionales, el hábeas data inclusive.” (p. 15).
  - c. De conformidad con el art. 51 de la LOGJCC, “la acción de hábeas data puede ser interpuesta por “[t]oda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto...”” (p. 15).
- ii. El argumento naturalista: En virtud de su “naturaleza de ficción jurídica”, en las personas jurídicas “la única forma de ejercer el derecho de acción es por medio de la figura de la representación.” (pp. 15-16).

Para justificar b), el máximo órgano de justicia constitucional usó el argumento autoritativo: En la sentencia N.º 001-10-PJO-CC, la CC para el período de transición señaló lo siguiente sobre la acción de protección, lo cual “es totalmente extensible a las demás garantías jurisdiccionales, como en este caso, el hábeas data”: “60.- Si en ese proceso (una garantía jurisdiccional de los derechos constitucionales) se verifica un conflicto de índole societari[a] entre los socios (...) que se relaciona con la designación de sus representantes, es claro que se trata de actos procedimentales regulados por la Ley de Compañías, y es natural que su controversia siga los procesos establecidos en dicha Ley (...). Si vía acción de protección se impugna de manera exclusiva la legalidad del acto, sin que conlleve vulneración de derechos constitucionales, el asunto debe decidirse en los mecanismos judiciales ordinarios competentes, pero no a través de una garantía jurisdiccional” (pp. 16-17).

En la motivación de c), la CC empleó el argumento dogmático: “se ha identificado en la doctrina sobre la protección de datos una distinción entre los conceptos “dato” e “información” a la que se adscribe esta Corte, como lo relata Osvaldo Gonzáini: Algunos entienden ‘datos’ a la representación de hechos, conceptos o instrucciones bajo una forma adaptada a la comunicación, a la interpretación o al



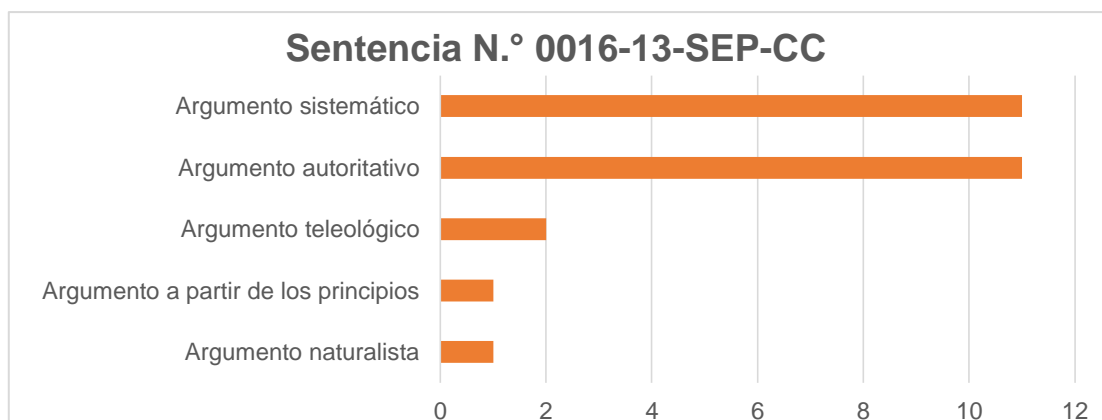
tratamiento por seres humanos o máquinas, y por 'informaciones' al significado que toman los datos de acuerdo con convenciones vinculadas a éstos.” (p. 18). “Por lo tanto, el dato solamente es relevante para la protección por medio del hábeas data, en la medida en que sea susceptible de cumplir una función informativa.” (p. 18). En este sentido, “si el dato es una representación de determinado fenómeno y la información es el significado de dicha representación adecuada a determinado fin en el proceso comunicativo, el "documento" funge como uno de varios medios en los que es posible impregnar o "imprimir" tal representación por medio de símbolos, a fin de lograr la preservación del dato y la información que se puede extraer de él. Por ende, no interesa para el hábeas data, como garantía, (...) cualquier forma ideada por el ingenio humano para su preservación [de los datos], sino que, como la expresión lo señala, el derecho tutelado recae sobre el dato mismo y el uso informativo que se le dé.” (p. 19).

## CAPÍTULO III: ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS: FRECUENCIA Y SIMILITUDES

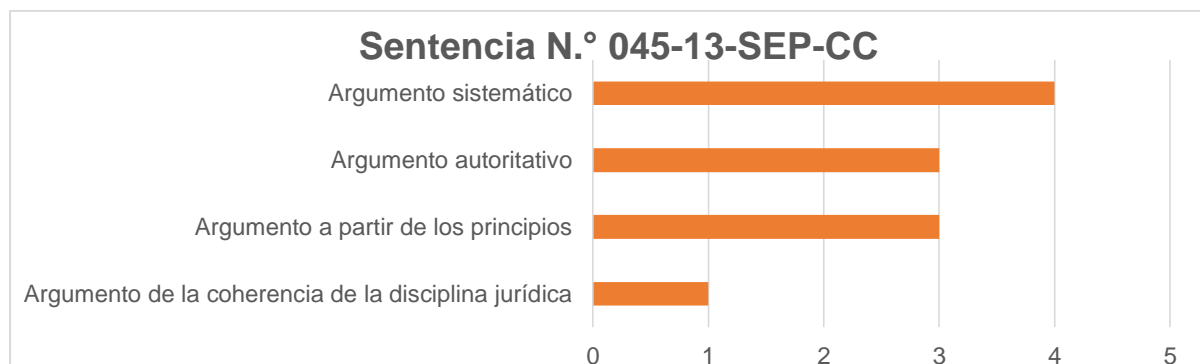
### 3.1 Sentencias que contienen reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional y sus argumentos interpretativos

En el capítulo previo de la presente investigación se identificaron los argumentos interpretativos que la CC utilizó para justificar sus atribuciones de significado a distintas disposiciones en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales. A continuación se presentará mediante gráficos el uso de tales argumentos interpretativos en cada una de las mencionadas sentencias.

En la Sentencia N.º 0016-13-SEP-CC, la Corte empleó un total de 26 argumentos de la siguiente manera: el argumento sistemático y el argumento autoritativo en 11 ocasiones cada uno; el argumento teleológico en 2 oportunidades; y, el argumento a partir de los principios y naturalista 1 vez cada uno.

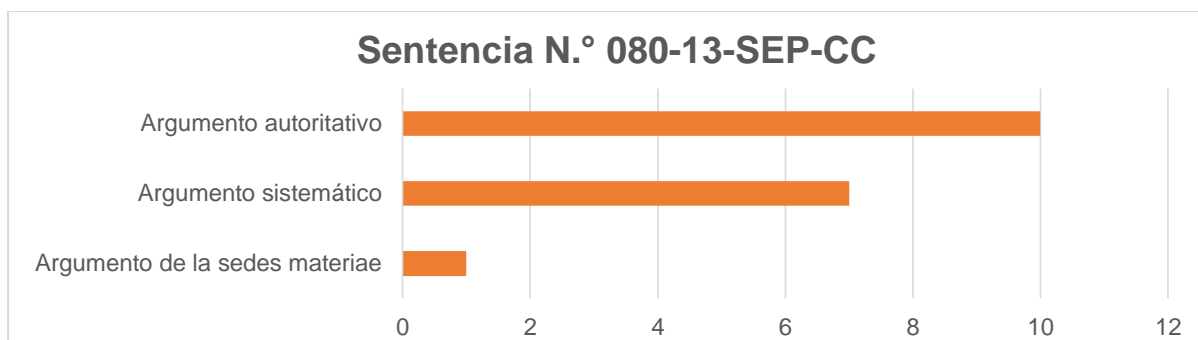


El máximo órgano de justicia constitucional usó en la Sentencia N.º 045-13-SEP-CC los siguientes argumentos: el argumento sistemático en 4 oportunidades; el argumento autoritativo y a partir de los principios 3 veces cada uno; y el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica en 1 ocasión. En total, dicho órgano jurisdiccional utilizó 11 argumentos.

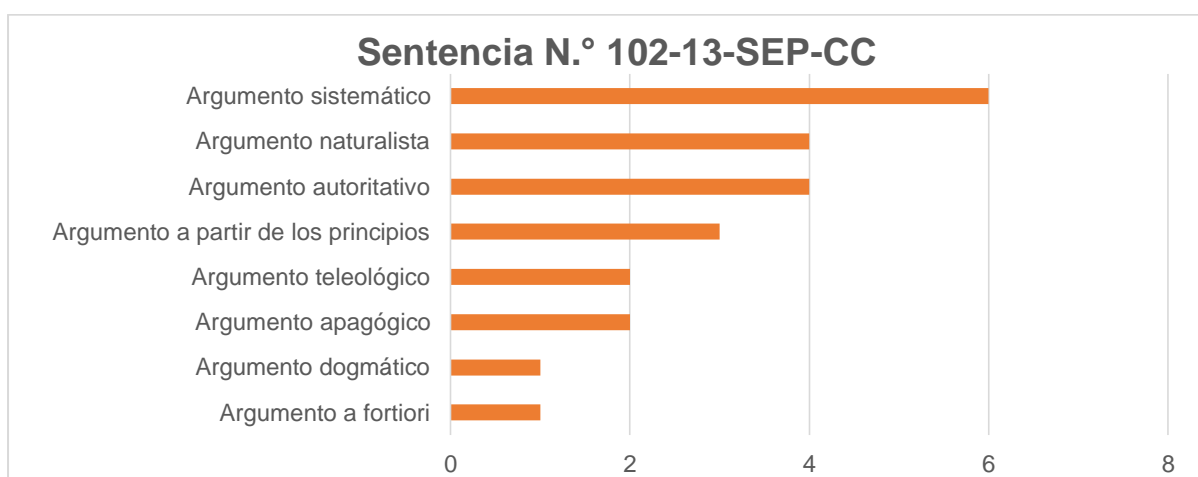


La Sentencia N.º 080-13-SEP-CC está compuesta por 18 argumentos que la CC empleó para justificar sus interpretaciones: 10 argumentos autoritativos, 7 argumentos sistemáticos y 1 argumento de la *sedes materiae*.

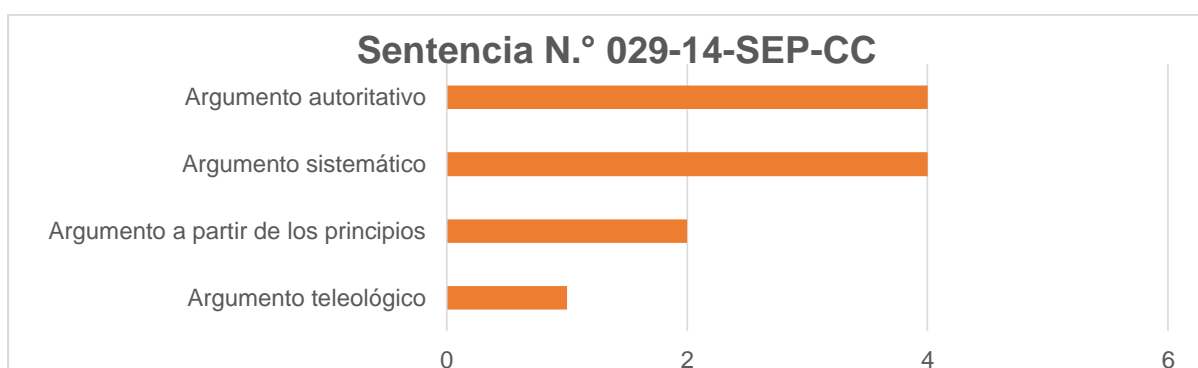




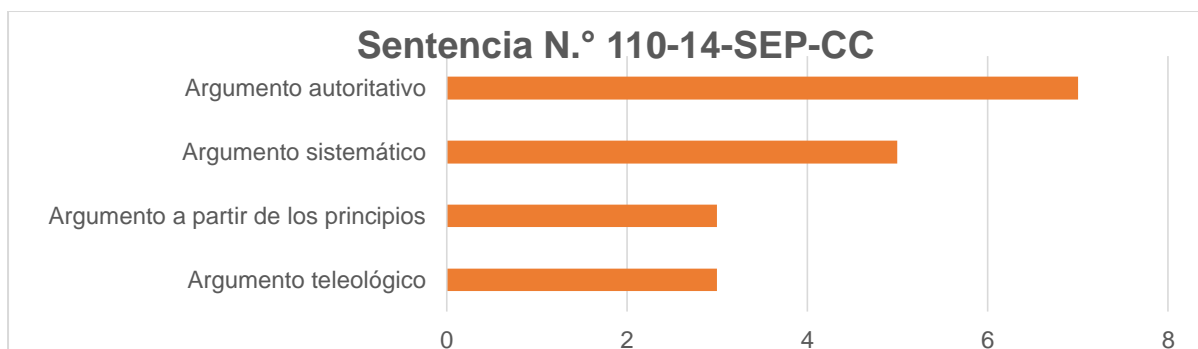
En la Sentencia N.° 102-13-SEP-CC, la Corte usó el argumento sistemático en 6 ocasiones; el argumento naturalista y autoritativo 4 veces cada uno; el argumento a partir de los principios en 3 oportunidades; el argumento teleológico y apagógico en 2 ocasiones cada uno; y, el argumento dogmático y *a fortiori* 1 vez cada uno. En suma, dicho órgano jurisdiccional empleó 23 argumentos interpretativos.



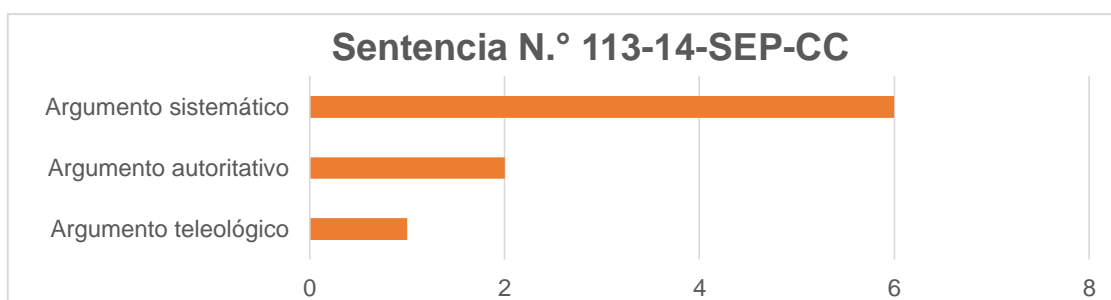
La CC, en la Sentencia N.° 029-14-SEP-CC, utilizó 11 argumentos interpretativos: 4 argumentos autoritativos, 4 argumentos sistemáticos, 2 argumentos a partir de los principios y 1 argumento teleológico.



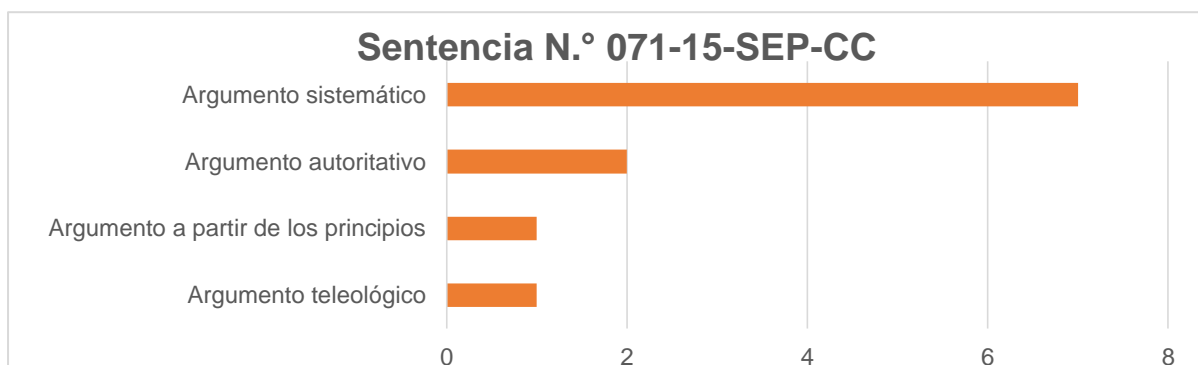
La Sentencia N.° 110-14-SEP-CC está conformada por: 7 argumentos autoritativos, 5 argumentos sistemáticos, 3 argumentos a partir de los principios y 3 argumentos teleológicos. En total, el máximo órgano de justicia constitucional usó 18 argumentos para motivar sus interpretaciones.



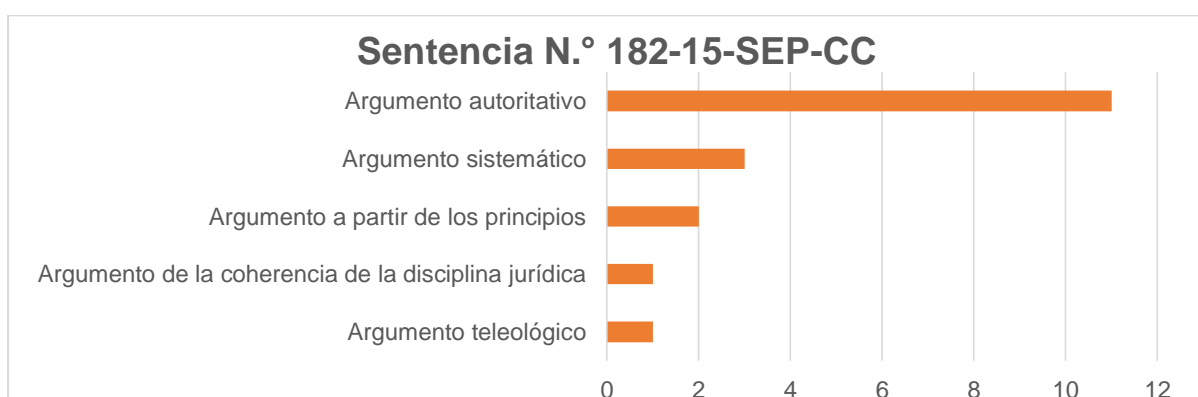
En la Sentencia N.º 113-14-SEP-CC la Corte empleó un total de 9 argumentos: el argumento sistemático en 6 ocasiones, el argumento autoritativo en 2 oportunidades y el argumento teleológico 1 vez.



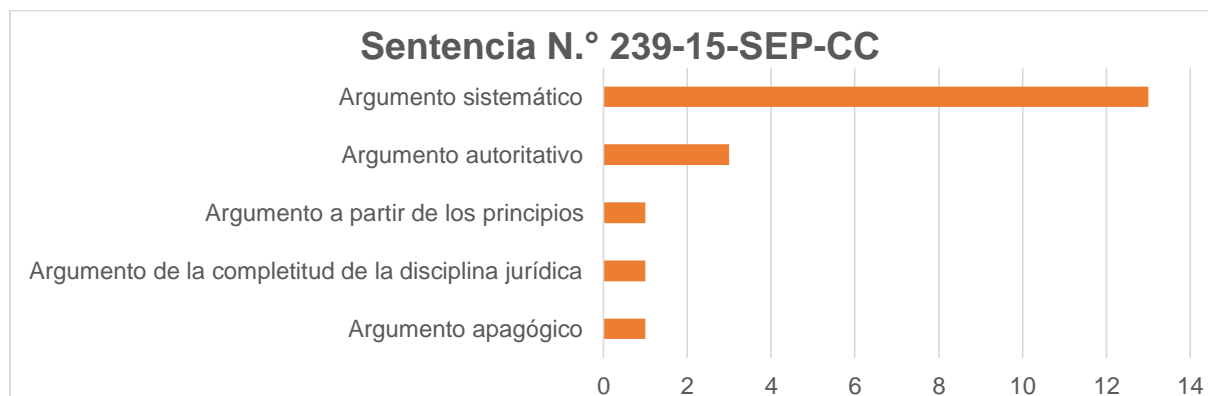
La Corte recurrió a 11 argumento interpretativos en la Sentencia N.º 071-15-SEP-CC: 7 veces al argumento sistemático, 2 ocasiones al argumento autoritativo, 1 oportunidad al argumento a partir de los principios y 1 vez al argumento teleológico.



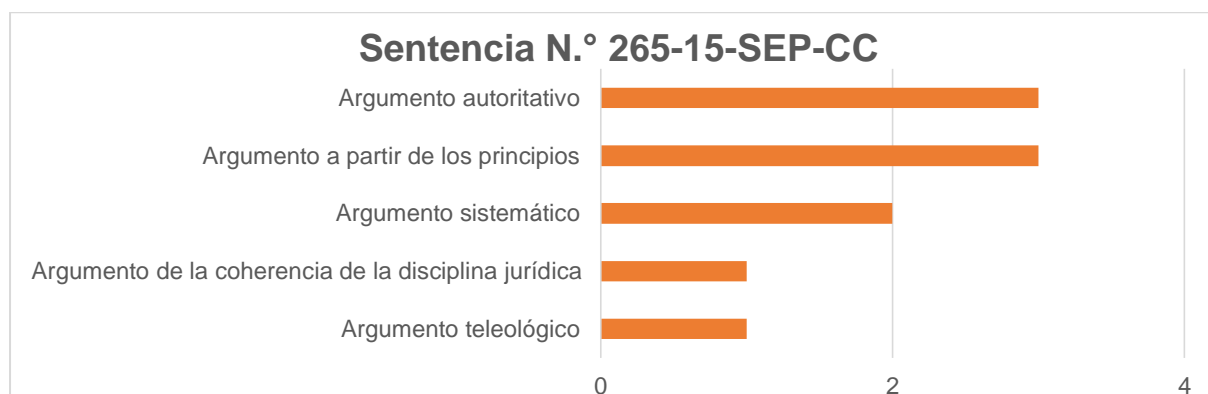
La Sentencia N.º 182-15-SEP-CC está compuesta de 18 argumentos: 11 argumentos autoritativos, 3 argumentos sistemáticos, 2 argumentos a partir de los principios, 1 argumento de la coherencia de la disciplina jurídica y 1 argumento teleológico.



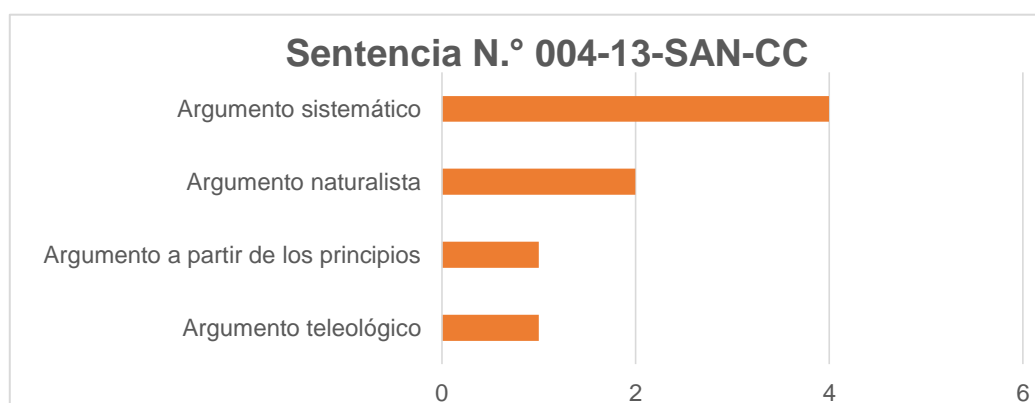
En la Sentencia N.º 239-15-SEP-CC la CC utilizó los siguientes argumentos: en 13 ocasiones el argumento sistemático, en 3 oportunidades el argumento autoritativo, 1 vez el argumento a partir de los principios, el argumento de la completitud de la disciplina jurídica y el argumento apagógico cada uno. En total, 19 argumentos fueron empleados por dicho órgano jurisdiccional.



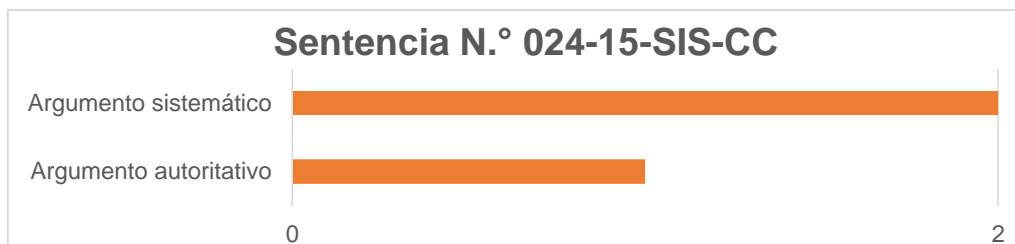
El máximo órgano de justicia constitucional usó 10 argumentos en la Sentencia N.º 265-15-SEP-CC: el argumento autoritativo y el argumento a partir de los principios en 3 ocasiones cada uno; el argumento sistemático en 2 oportunidades; y, el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica y el argumento teleológico 1 vez cada uno.



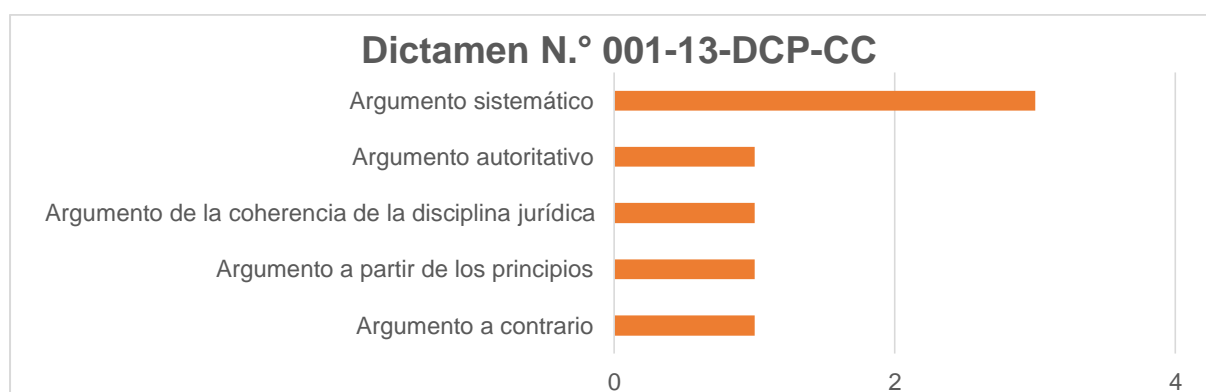
La Sentencia N.º 004-13-SAN-CC está constituida por 4 argumentos sistemáticos, 2 argumentos naturalistas, 1 argumento a partir de los principios y 1 argumento teleológico. En suma, la Corte empleó 8 argumentos para justificar sus atribuciones de significado a disposiciones.



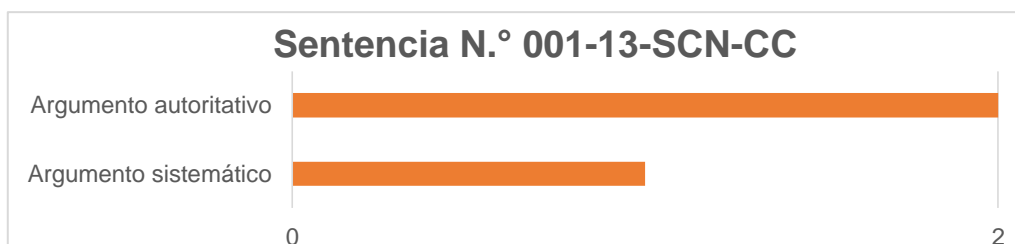
En la Sentencia N.º 024-15-SIS-CC la CC usó un total de 3 argumentos: 2 argumentos sistemáticos y 1 argumento autoritativo.



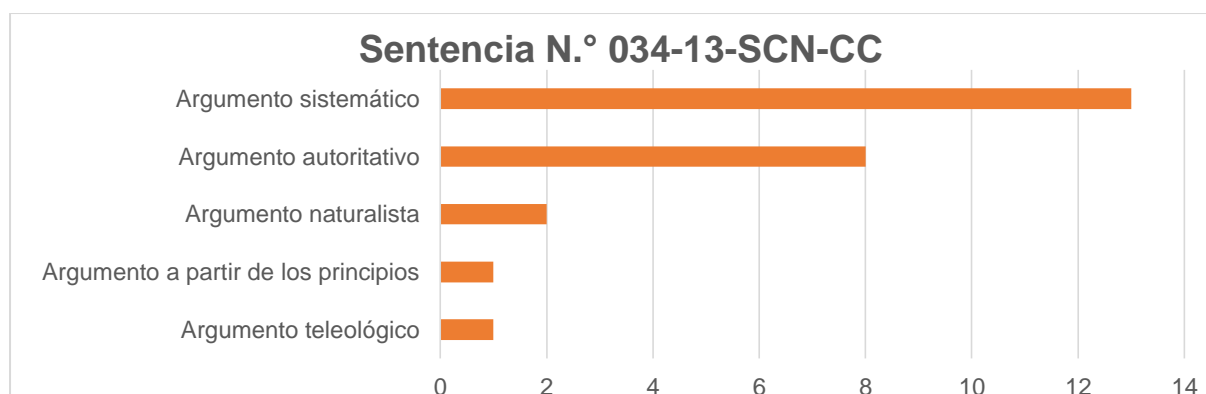
La Corte recurrió a 7 argumentos en el Dictamen N.º 001-13-DCP-CC: al argumento sistemático en 3 ocasiones; al argumento autoritativo, argumento de la coherencia de la disciplina jurídica, argumento a partir de los principios y argumento *a contrario* en 1 oportunidad cada uno.



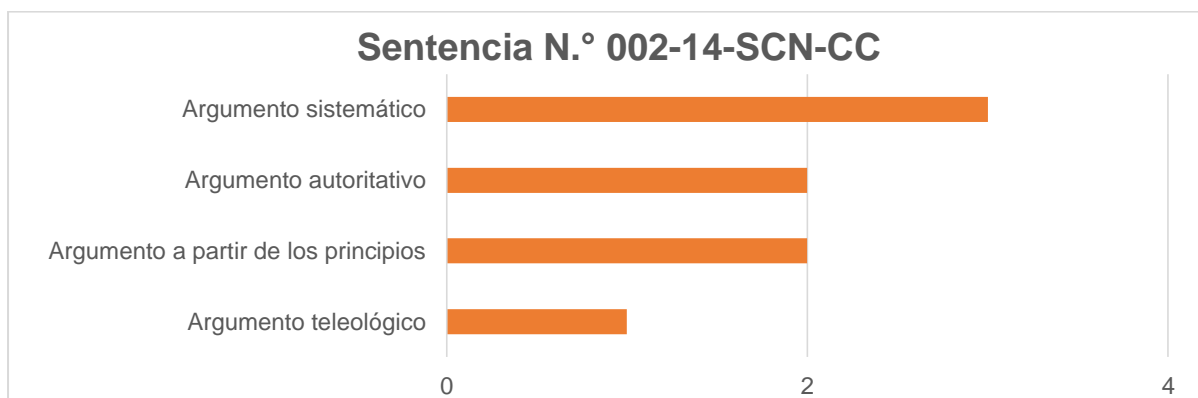
La Sentencia N.º 001-13-SCN-CC está conformada por 3 argumentos: 2 argumentos autoritativos y 1 argumento sistemático.



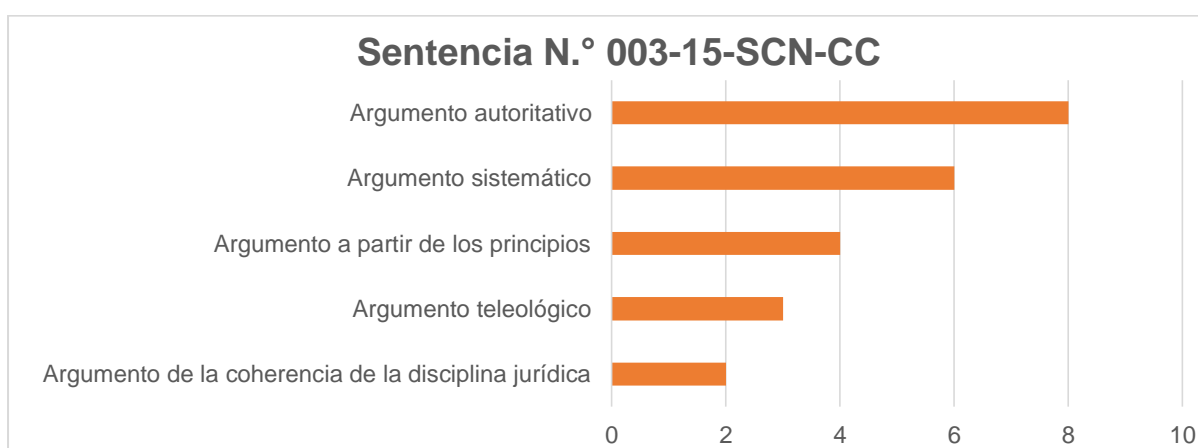
En la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC el máximo órgano de justicia constitucional empleó 25 argumentos: el argumento sistemático 13 veces; el argumento autoritativo en 8 ocasiones; el argumento naturalista en 2 oportunidades; y, el argumento a partir de los principios y teleológico 1 vez cada uno.



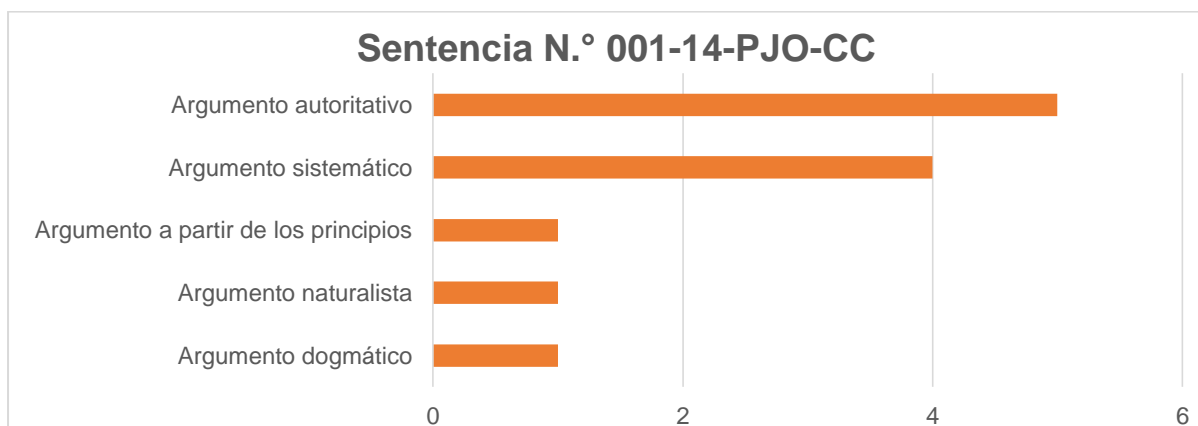
La CC utilizó en la Sentencia N.º 002-14-SCN-CC los siguientes argumentos: el argumento sistemático en 3 ocasiones; el argumento autoritativo y a partir de los principios 2 veces cada uno; y, el argumento teleológico en 1 oportunidad. En total, dicho órgano jurisdiccional usó 8 argumentos.



La Sentencia N.º 003-15-SCN-CC está constituida por 23 argumentos: 8 argumentos autoritativos, 6 argumentos sistemáticos, 4 argumentos a partir de los principios, 3 argumentos teleológicos y 2 argumentos de la coherencia de la disciplina jurídica.



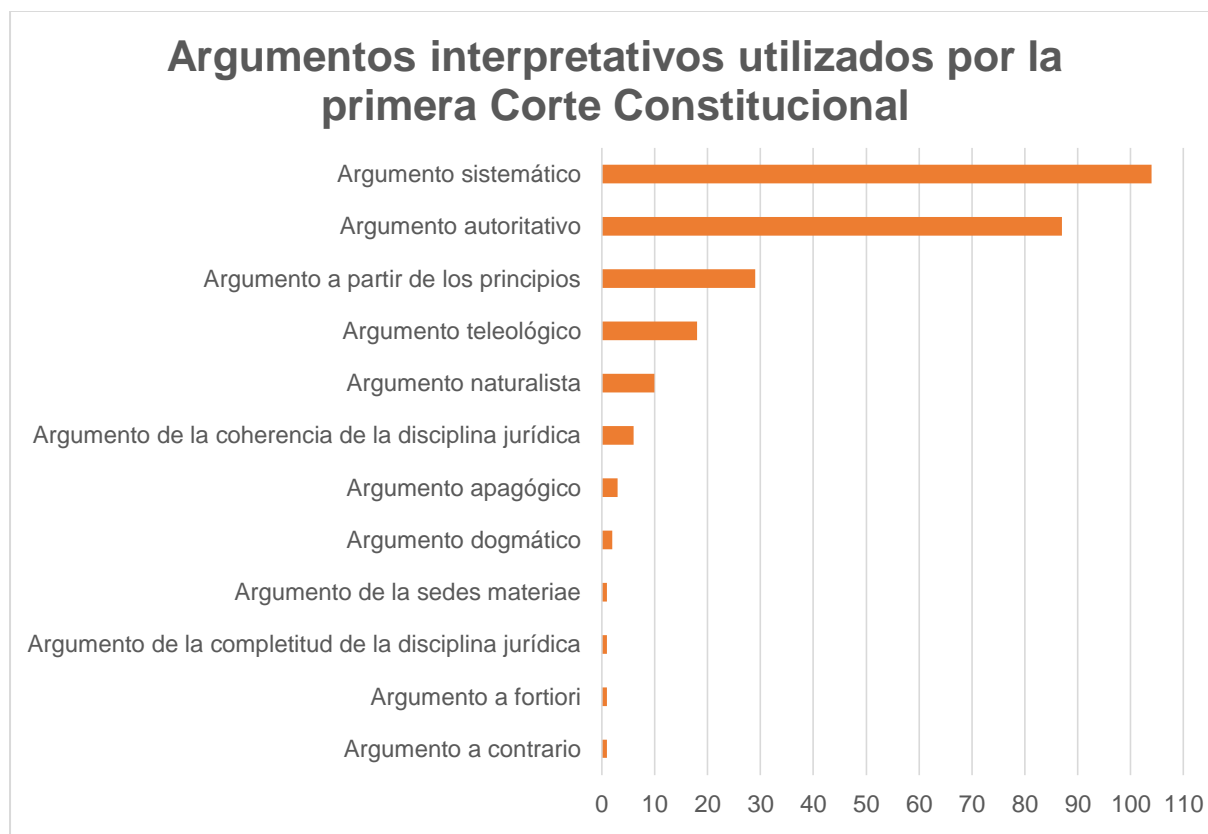
En la Sentencia N.º 001-14-PJO-CC la Corte recurrió a: el argumento autoritativo en 5 ocasiones; el argumento sistemático 4 veces; y, el argumento a partir de los principios, naturalista y dogmático en 1 oportunidad. En suma, el máximo órgano de justicia constitucional empleó un total de 12 argumentos.





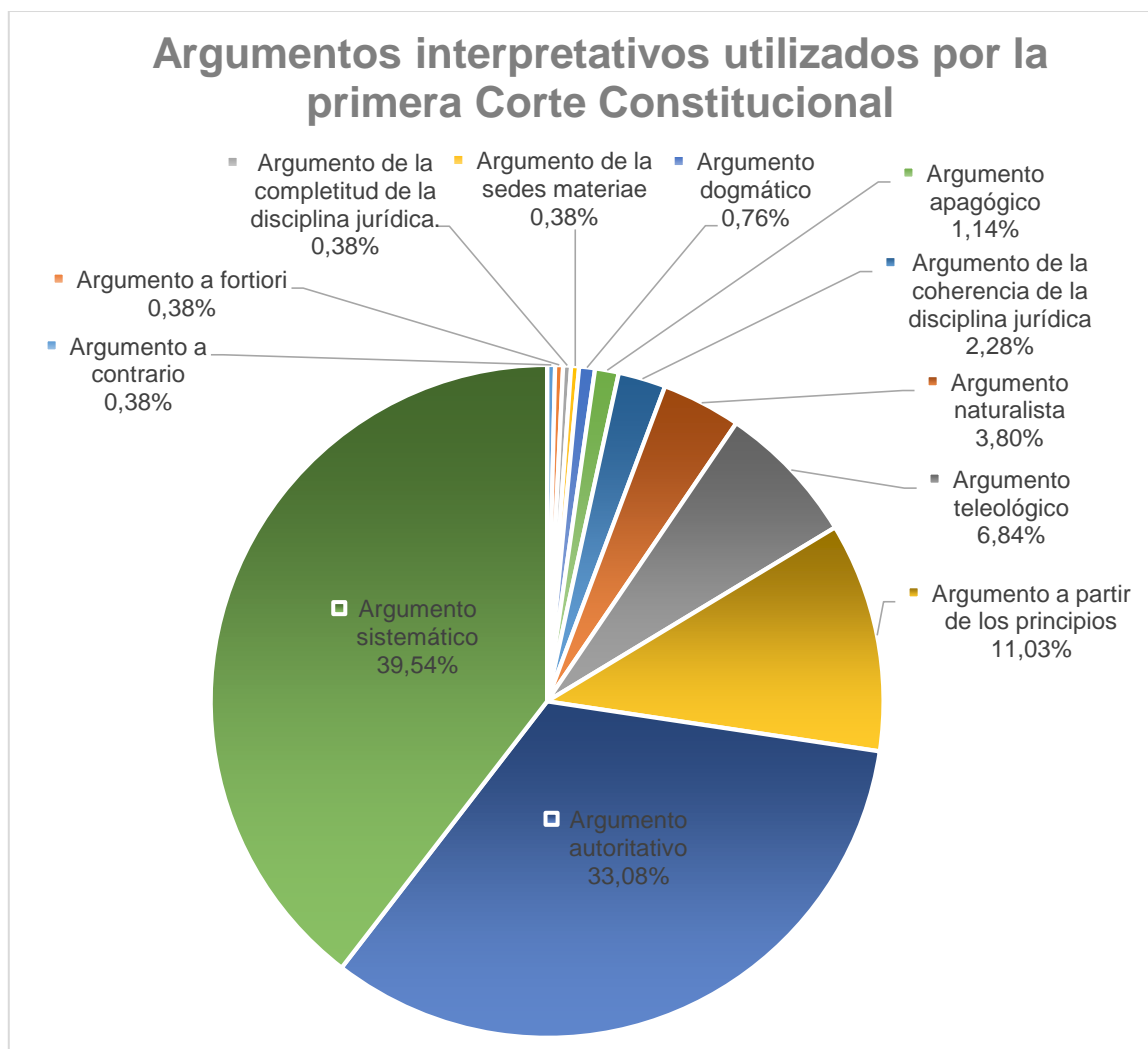
### 3.2 Frecuencia de uso de los argumentos interpretativos

En la sección anterior se identificó un total de 263 argumentos interpretativos utilizados por la CC en las 19 sentencias examinadas de conformidad con el siguiente gráfico:



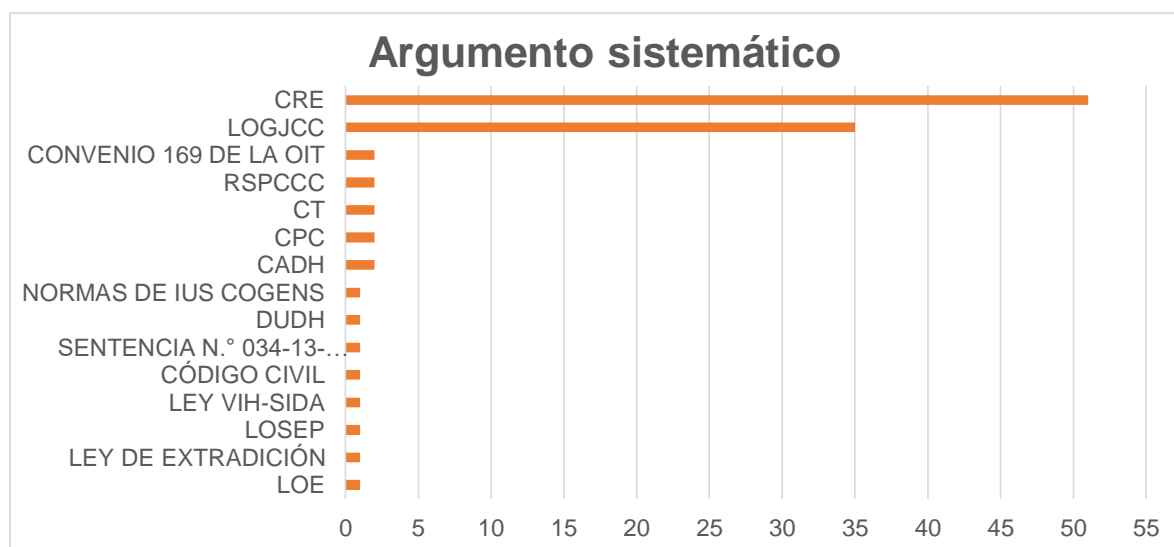
De la tipología de argumentos interpretativos adoptada, se identificó en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales el uso de 12 argumentos por parte del máximo órgano de justicia constitucional con la frecuencia siguiente: el argumento sistemático en 104 ocasiones, el argumento autoritativo 87 veces, el argumento a partir de los principios en 29 oportunidades, el argumento teleológico en 18 ocasiones, el argumento naturalista 10 veces, el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica en 6 oportunidades, el argumento apagógico 3 veces, el argumento dogmático en 2 ocasiones, el argumento de la *sedes materiae* en 1 ocasión, el argumento de la completitud de la disciplina jurídica 1 vez, el argumento *a fortiori* en 1 oportunidad y el argumento *a contrario* en 1 ocasión.

En el total de argumentos interpretativos registrados, el argumento sistemático representa el 39,54%; el argumento autoritativo el 33,08%; el argumento a partir de los principios el 11,03%; el argumento teleológico el 6,84%; el argumento naturalista 3,80%; el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica el 2,28%; el argumento apagógico el 1,14%; el argumento dogmático el 0,76%; el argumento de la *sedes materiae* el 0,38%; el argumento de la completitud de la disciplina jurídica el 0,38%; el argumento *a fortiori* el 0,38%; y, el argumento *a contrario* el 0,38%.



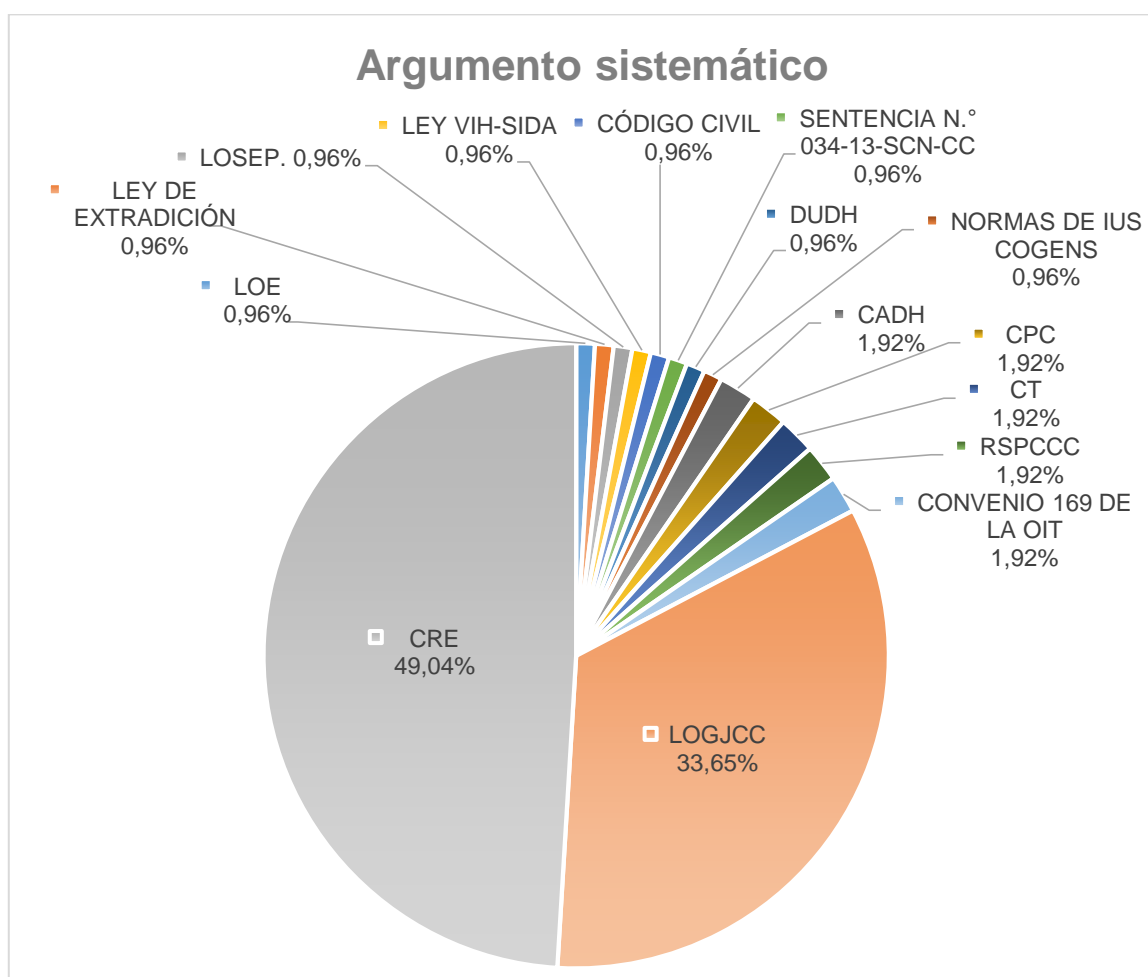
De conformidad con los gráficos expuestos, los argumentos interpretativos más usados por la CC son el sistemático, el autoritativo y el de a partir de los principios. Estos tres tipos de argumentos fueron empleados 220 veces, esto es, representan el 83,65% del total de argumentos identificados.

En primer lugar, la Corte empleó el argumento sistemático según el siguiente gráfico:



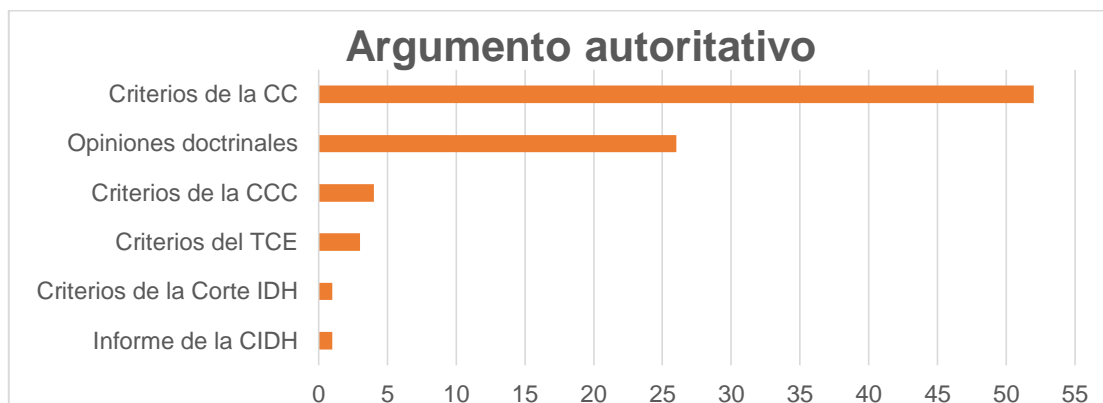
De las 104 ocasiones que la CC utilizó el argumento sub examine, en 51 oportunidades recurrió a la Constitución (CRE); 35 ocasiones a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); 2 veces al Convenio 169 de la OIT, Reglamento para la Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (RSPCCC), Código del Trabajo (CT), Código de Procedimiento Civil (CPC) y Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 1 ocasión a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), normas de *ius cogens*, regla jurisprudencial expresada en la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, Código Civil, Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH-SIDA (LEY VIH-SIDA), Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), Ley de Extradición y Ley Orgánica Electoral (LOE).

Así, la referencia a la CRE representa el 49,04% del total de argumentos sistemáticos registrados; a la LOGJCC el 33,65%; al Convenio 169 de la OIT, RSPCCC, CT, CPC y CADH el 1,92% cada una; a la DUDH, normas de *ius cogens*, regla jurisprudencial expresada en la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, Código Civil, LEY VIH-SIDA, LOSEP, Ley de Extradición y LOE el 0,96% cada una.

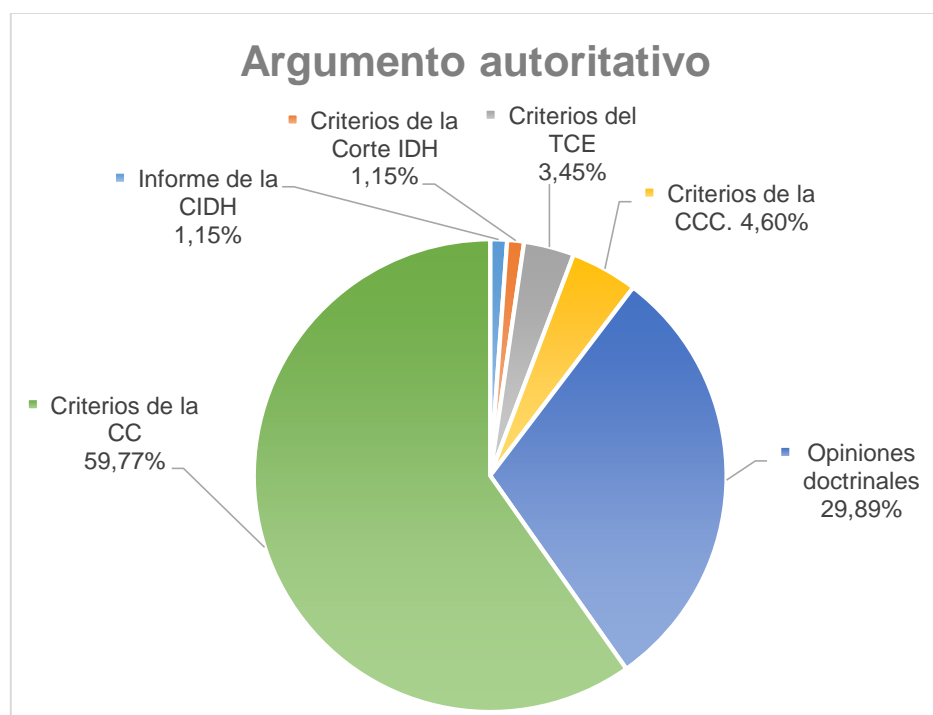


En segundo término, el máximo órgano de justicia constitucional usó el argumento autoritativo de la siguiente forma: 52 veces recurrió a criterios jurisprudenciales emitidos por la misma Corte en sentencias previas (CC), 26 ocasiones a opiniones o criterios doctrinales, 4 oportunidades a criterios de la Corte Constitucional de Colombia (CCC), 3 veces a criterios expresados por el Tribunal Constitucional

Español (TCE), 1 ocasión a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y 1 oportunidad a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



De esta manera, el recurso a criterios de la CC representa el 59,77% del total de argumentos autoritativos, a opiniones doctrinales el 29,89%, a criterios de la CCC el 4,60%, a criterios del TCE el 3,45%, a criterios de la Corte IDH el 1,15%, y, al informe de la CIDH el 1,15%.

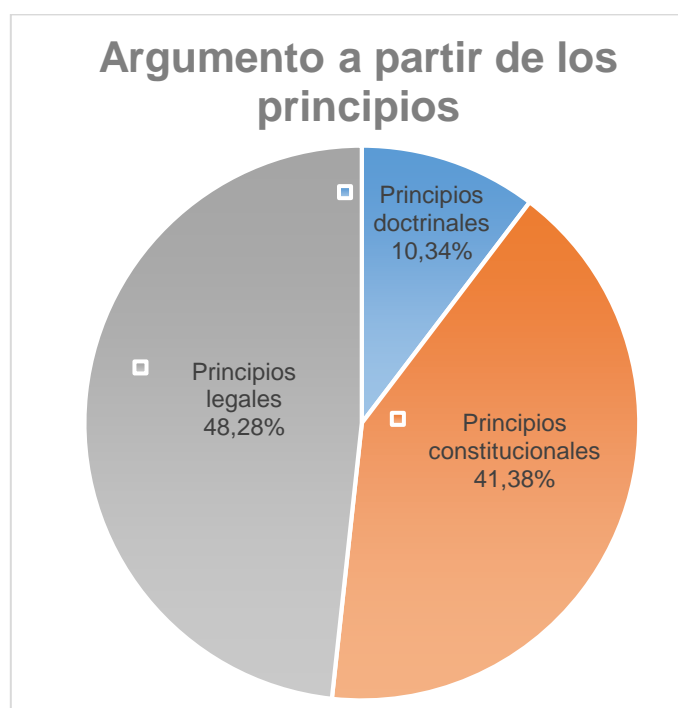


En tercer lugar, la Corte empleó el argumento a partir de los principios de conformidad con el siguiente gráfico:



De las 29 veces que la CC empleó el argumento a partir de los principios, en 14 oportunidades recurrió a principios positivizados en la LOGJCC, en 12 ocasiones a principios regulados en la CRE, y, 3 veces a principios de elaboración doctrinal que no se encuentran positivizados en documento jurídico alguno.

Así, la referencia de la Corte a principios legales constituye el 48,28% del total de argumentos a partir de los principios utilizados, a principios constitucionales el 41,38% y a principios de elaboración doctrinal el 10,34%. El gráfico que sigue demuestra lo manifestado.



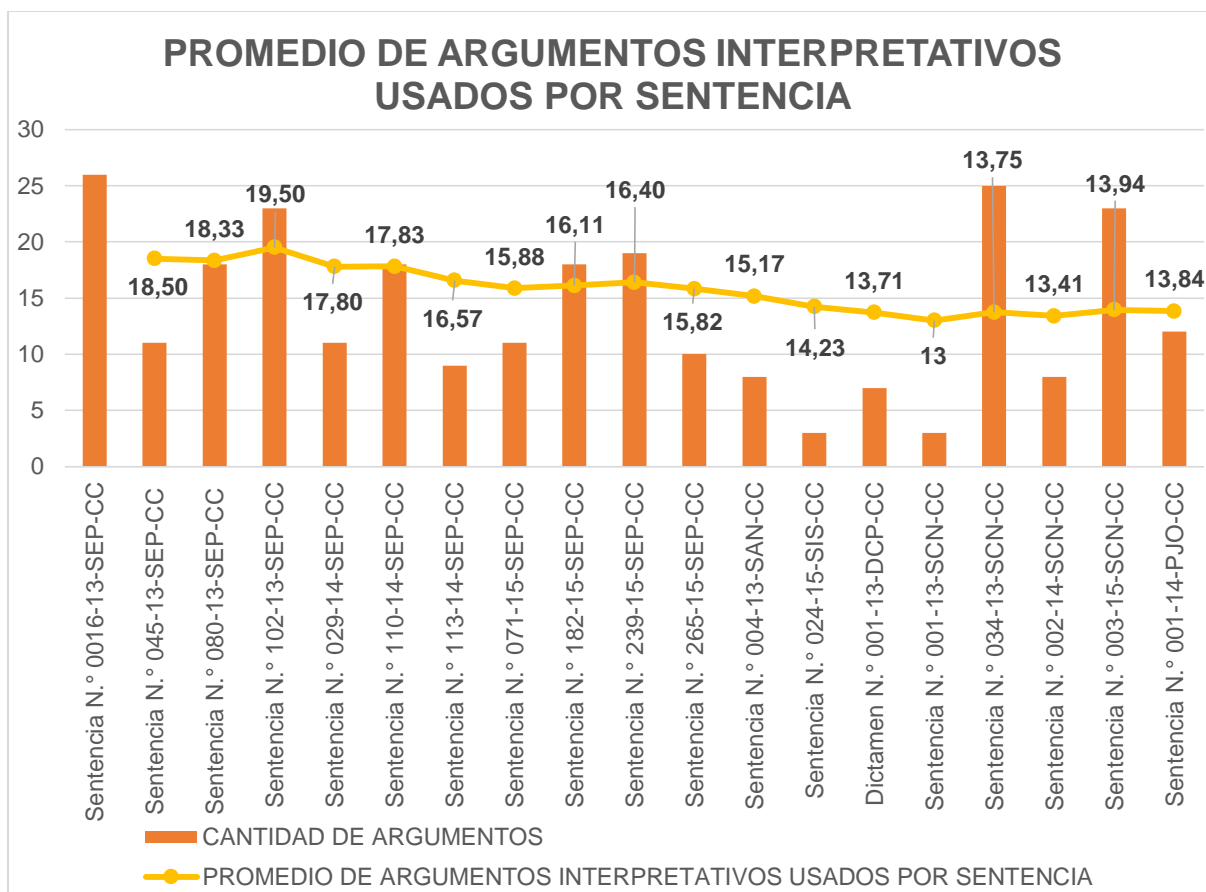
Finalmente, en virtud de los datos obtenidos es posible aseverar lo siguiente:

- La primera CC recurrió principalmente al argumento sistemático, autoritativo y a partir de los principios para justificar sus interpretaciones en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales.
- Cuando dicho órgano jurisdiccional usó el argumento sistemático, la CRE y la LOGJCC fueron los documentos jurídicos o fuentes del derecho más requeridas.
- Al emplear el argumento autoritativo, la CC fundamentó sus interpretaciones mayoritariamente en criterios jurisprudenciales emitidos previamente por la misma Corte y en opiniones doctrinales.
- Cuando el máximo órgano de justicia constitucional utilizó el argumento a partir de los principios, los principios positivizados en documentos jurídicos, esto es, los principios constitucionales y legales, fueron los más usados para justificar las distintas interpretaciones.

### 3.3 Promedios sobre el uso de los argumentos interpretativos

Los datos hallados en las secciones previas permiten determinar el promedio de argumentos interpretativos utilizados por la primera CC en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales.





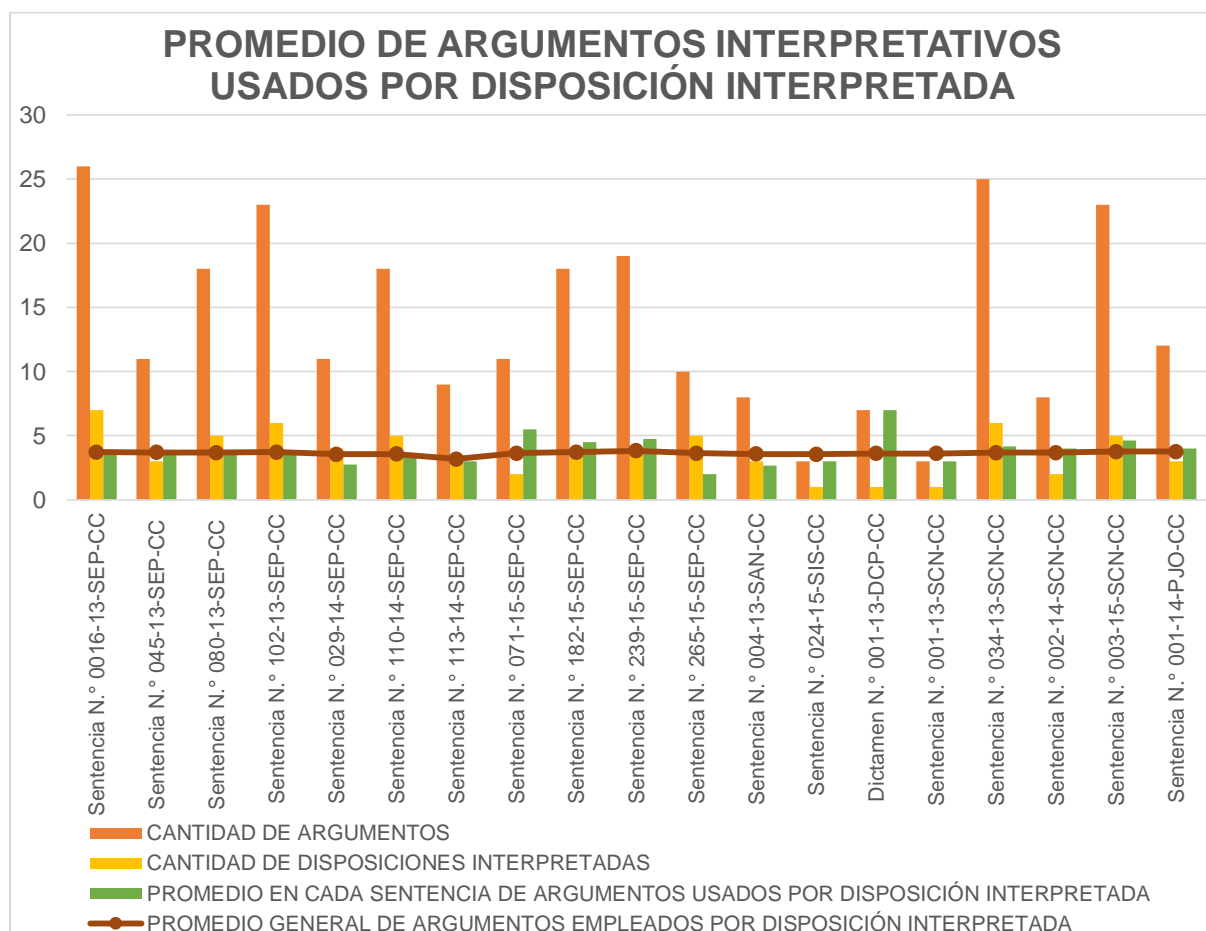
Como se manifestó anteriormente, en el capítulo segundo de la presente investigación se identificaron un total de 263 argumentos interpretativos en las 19 sentencias que contienen reglas jurisprudenciales emitidas por la primera CC. En el gráfico que antecede, las barras muestran la cantidad de argumentos empleados en cada sentencia, mientras la línea expone el flujo del promedio de argumentos utilizados por sentencia, dato que se obtiene en virtud de la sumatoria de los argumentos usados en cada sentencia dividida por el número de sentencias. Este promedio exhibe un descenso pues en la Sentencia N.º 045-13-SEP-CC aquel es 18,50 y disminuye a 13,84 en la Sentencia N.º 001-14-PJO-CC. Por tanto, cabe afirmar que la primera CC empleó un promedio de 13,84 argumentos interpretativos en cada sentencia que contiene reglas jurisprudenciales.

En cada una de las mencionadas sentencias el máximo órgano de justicia constitucional usó los citados argumentos interpretativos para motivar sus interpretaciones de diferentes disposiciones. Por ello, otro dato relevante a determinar es el promedio de argumentos interpretativos utilizados por disposición interpretada, tanto en cada una de las sentencias como en el conjunto de todas ellas. En el capítulo previo se identificaron los argumentos interpretativos y las disposiciones interpretadas por la CC de conformidad con la siguiente tabla:

SENTENCIAS QUE CONTIENEN REGLAS JURISPRUDENCIALES EMITIDAS POR LA PRIMERA CC	CANTIDAD DE ARGUMENTOS	CANTIDAD DE DISPOSICIONES INTERPRETADAS	PROMEDIO EN CADA SENTENCIA DE ARGUMENTOS USADOS POR DISPOSICIÓN INTERPRETADA	PROMEDIO GENERAL DE ARGUMENTOS EMPLEADOS POR DISPOSICIÓN INTERPRETADA
Sentencia N.º 0016-13-SEP-CC	26	7	3,71	3,71

Sentencia N.º 045-13-SEP-CC	11	3	3,67	3,70
Sentencia N.º 080-13-SEP-CC	18	5	3,60	3,67
Sentencia N.º 102-13-SEP-CC	23	6	3,83	3,71
Sentencia N.º 029-14-SEP-CC	11	4	2,75	3,56
Sentencia N.º 110-14-SEP-CC	18	5	3,60	3,57
Sentencia N.º 113-14-SEP-CC	9	3	3	3,17
Sentencia N.º 071-15-SEP-CC	11	2	5,50	3,63
Sentencia N.º 182-15-SEP-CC	18	4	4,50	3,72
Sentencia N.º 239-15-SEP-CC	19	4	4,75	3,81
Sentencia N.º 265-15-SEP-CC	10	5	2	3,63
Sentencia N.º 004-13-SAN-CC	8	3	2,67	3,57
Sentencia N.º 024-15-SIS-CC	3	1	3	3,56
Dictamen N.º 001-13-DCP-CC	7	1	7	3,62
Sentencia N.º 001-13-SCN-CC	3	1	3	3,61
Sentencia N.º 034-13-SCN-CC	25	6	4,17	3,67
Sentencia N.º 002-14-SCN-CC	8	2	4	3,68
Sentencia N.º 003-15-SCN-CC	23	5	4,60	3,75
Sentencia N.º 001-14-PJO-CC	12	3	4	3,76

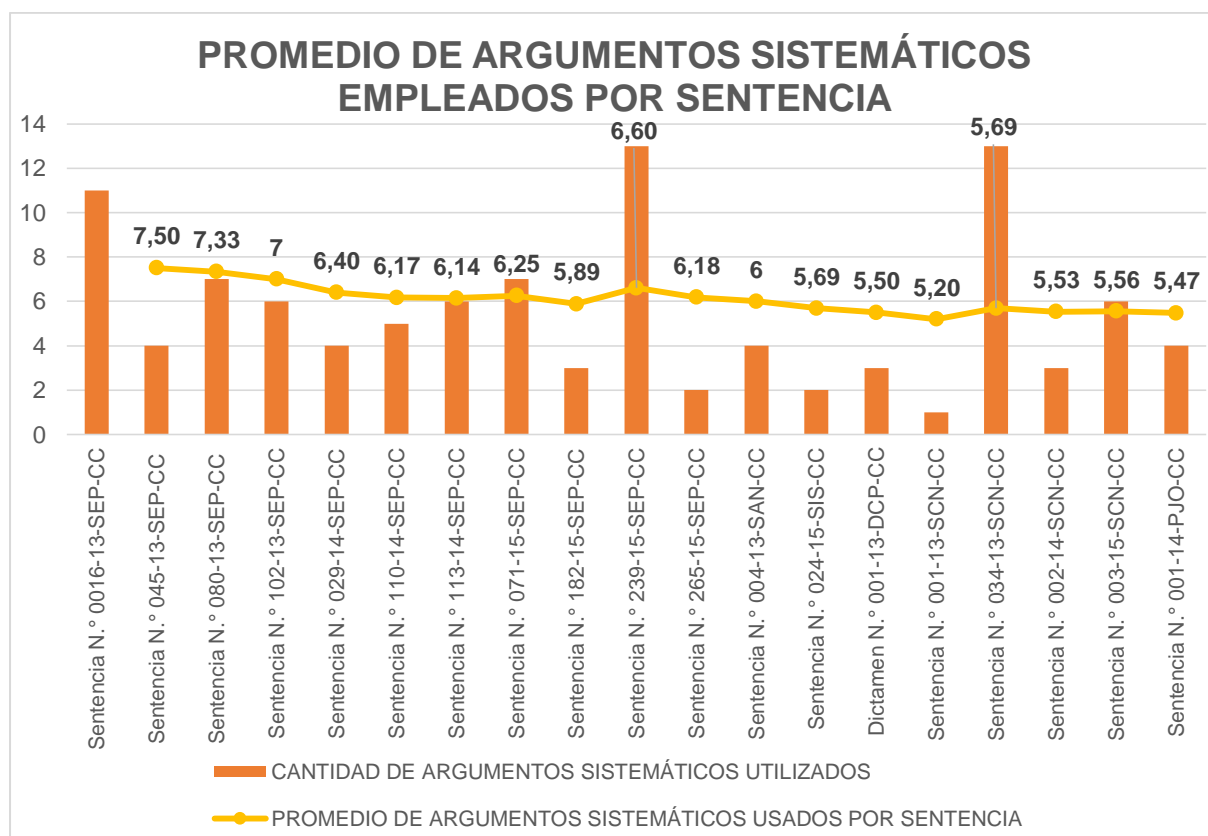
Estos datos son representados en el gráfico que se expone a continuación:



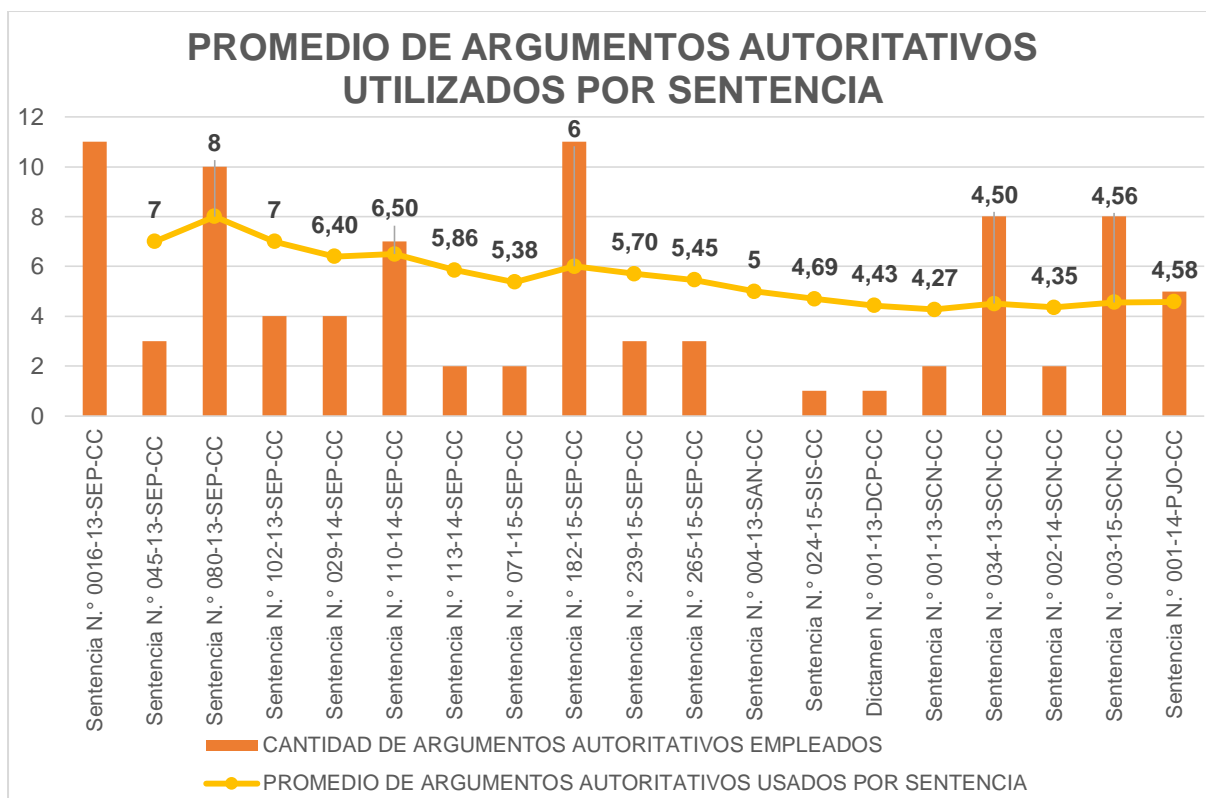
Como es posible advertir en el gráfico, el promedio general de argumentos empleados por disposición interpretada permanece prácticamente invariable pues en la Sentencia N.º 0016-13-SEP-CC dicho promedio es 3,71 y en la Sentencia 001-14-PJO-CC es 3,76. En suma, la primera CC empleó un promedio de 3,76 argumentos interpretativos por cada disposición interpretada en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales.

Por otra parte, según se advirtió en la sección previa, los argumentos interpretativos más utilizados en las sentencias sub examine fueron el argumento sistemático, autoritativo y a partir de los principios. Por ello, corresponde establecer el promedio de uso de cada uno de dichos argumentos por sentencia.

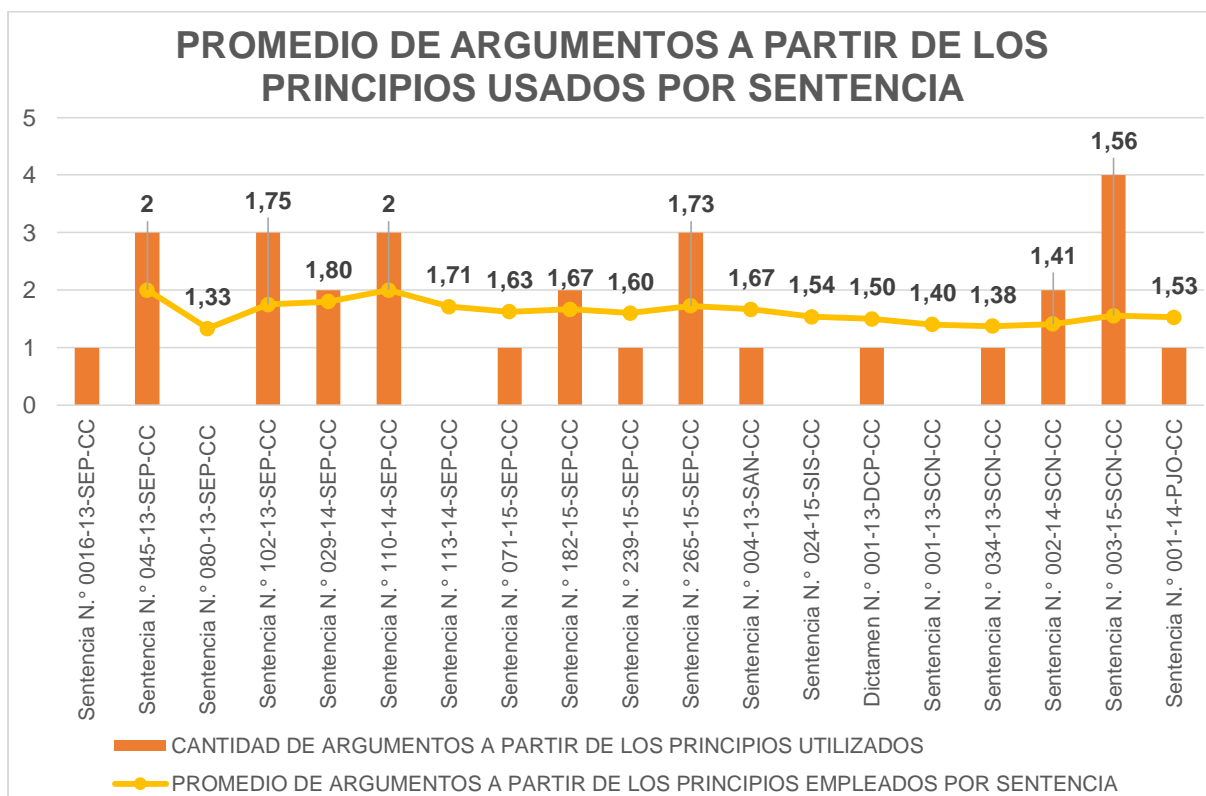
En primer lugar, el argumento sistemático fue utilizado 104 veces en las 19 sentencias citadas. De conformidad con el gráfico que sigue, el promedio de argumentos sistemáticos empleados por sentencia presenta un descenso ya que en la Sentencia N.º 045-13-SEP-CC dicho promedio es 7,50 y varía hasta disminuir a 5,47 en la Sentencia N.º 001-14-PJO-CC. Así, cabe señalar que la primera CC usó un promedio de 5,47 argumentos sistemáticos por sentencia.



En segundo término, el argumento autoritativo fue empleado 87 ocasiones en las 19 sentencias objeto de examen. Según el gráfico siguiente, el promedio de argumentos autoritativos usados por sentencia desciende de 7 en la Sentencia N.º 045-13-SEP-CC hasta 4,58 en la Sentencia N.º 001-14-PJO-CC. En consecuencia, es posible afirmar que la primera CC utilizó un promedio de 4,58 argumentos autoritativos por sentencia.



En tercer lugar, el argumento a partir de los principios fue usado 29 oportunidades en las 19 sentencias examinadas. De conformidad con el gráfico que sigue, el promedio de argumentos a partir de los principios usados por sentencia desciende ligeramente de 2 en la Sentencia N.º 045-13-SEP-CC hasta 1,53 en la Sentencia N.º 001-14-PJO-CC. Por tanto, cabe aseverar que la primera CC utilizó un promedio de 1,53 argumentos a partir de los principios por sentencia.



### 3.4 Similitudes entre las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales según los argumentos interpretativos usados

A partir de los datos recabados en el capítulo anterior y en las secciones previas es factible determinar ciertas similitudes entre las sentencias examinadas según el uso de los argumentos interpretativos en ellas.

Una primera semejanza a destacar se basa en la cantidad de argumentos interpretativos utilizados en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales. Según una escala en la cual dichas sentencias pueden considerarse que poseen una escasa (1-7), mediana (8-18) o abundante (19-26) cantidad de argumentos interpretativos, es posible señalar lo siguiente:

- Las Sentencias N.º 024-15-SIS-CC, 001-13-DCP-CC y 001-13-SCN-CC se asemejan en que tienen una escasa cantidad de argumentos.
- Las Sentencias N.º 045-13-SEP-CC, 080-13-SEP-CC, 029-14-SEP-CC, 110-14-SEP-CC, 113-14-SEP-CC, 071-15-SEP-CC, 182-15-SEP-CC, 265-15-SEP-CC, 004-13-SAN-CC, 002-14-SCN-CC y 001-14-PJO-CC tienen en común que poseen una mediana cantidad de argumentos.
- Las Sentencias N.º 0016-13-SEP-CC, 102-13-SEP-CC, 239-15-SEP-CC, 034-13-SCN-CC y 003-15-SCN-CC se asemejan en que tienen una abundante cantidad de argumentos.

Otra similitud relevante se fundamenta en el promedio en cada sentencia de argumentos interpretativos utilizados por disposición interpretada. De conformidad con una escala en la que las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales poseen un bajo (1-3), moderado (3,01-4,5) o alto (4,51-7) promedio de argumentos empleados por disposición interpretada, cabe afirmar que:

- Las Sentencias N.º 029-14-SEP-CC, 113-14-SEP-CC, 265-15-SEP-CC, 004-13-SAN-CC, 024-15-SIS-CC y 001-13-SCN-CC son similares en que poseen un bajo promedio.
- Las Sentencias N.º 0016-13-SEP-CC, 045-13-SEP-CC, 080-13-SEP-CC, 102-13-SEP-CC, 110-14-SEP-CC, 182-15-SEP-CC, 034-13-SCN-CC, 002-14-SCN-CC y 001-14-PJO-CC se asemejan en que tienen un moderado promedio.
- Las Sentencias N.º 182-15-SEP-CC, 239-15-SEP-CC, 001-13-DCP-CC y 003-15-SCN-CC tienen en común que poseen un alto promedio.

Una tercera semejanza se funda en el empleo de determinados argumentos en la resolución de una garantía jurisdiccional sometida a decisión de la CC. En virtud de este, corresponde indicar que:

- Las 11 sentencias de acciones extraordinarias de protección se asemejan en que en todas ellas el mencionado órgano jurisdiccional utilizó el argumento sistemático y autoritativo. Además, de este grupo sentencias, 7 de ellas (Sentencias N.º 0016-13-SEP-CC, 102-13-SEP-CC, 029-14-SEP-CC, 110-14-SEP-CC, 071-15-SEP-CC, 182-15-SEP-CC y 265-15-SEP-CC) tienen en común que, a más de los dos argumentos mencionados, el máximo órgano de justicia constitucional usó también el argumento teleológico y a partir de los principios.
- Al igual que en el grupo de sentencias señaladas anteriormente, las 4 sentencias de consultas de constitucionalidad de normas se asemejan en la utilización del argumento sistemático y autoritativo por parte de la primera CC en todas ellas.



Asimismo, en este conjunto de fallos, 3 de ellos (Sentencias N.º 034-13-SCN-CC, 002-14-SCN-CC y 003-15-SCN-CC) son semejantes en el empleo de los mismos tipos de argumentos para motivar interpretaciones: teleológico, sistemático, autoritativo y a partir de los principios.

- Las sentencias referentes a la acción de incumplimiento (Sentencia N.º 004-13-SAN-CC), control de constitucionalidad de la consulta popular (Sentencia N.º 024-15-SIS-CC) y precedente jurisprudencial obligatorio (Sentencia N.º 001-14-PJO-CC) se asemejan únicamente en el uso del argumento sistemático y autoritativo en todas ellas.

Finalmente, y según se colige de lo manifestado en los párrafos previos, cabe advertir las siguientes similitudes:

- Las 19 sentencias que contienen reglas jurisprudenciales se asemejan en que el argumento sistemático fue empleado por la primera CC en todas ellas.
- 18 de las 19 sentencias sub examine (es decir, todas excepto la Sentencia N.º 004-13-SAN-CC) tienen en común que el mencionado órgano jurisdiccional utilizó en ellas el argumento sistemático y autoritativo para justificar sus interpretaciones.
- 10 de las 19 sentencias son similares en cuanto su estructura formal, es decir, en dichos fallos el máximo órgano de justicia constitucional utilizó los mismos tipos de argumentos: teleológico, sistemático, autoritativo y a partir de los principios.

## CONCLUSIONES

En virtud de lo señalado en la presente investigación, cabe concluir que:

- Las concepciones de los argumentos interpretativos de Alexy y MacCormick se caracterizan por fundamentarse en teorías de la interpretación que distinguen entre casos fáciles y difíciles. Para dichos iusfilósofos, la interpretación jurídica consiste en la resolución de dudas sobre el significado de una disposición jurídica mediante la elección de uno de sus posibles significados y, en consecuencia, existen «casos fáciles», en los cuales no se requiere que el operador jurídico interprete las disposiciones (pues no existen dudas sobre el significado de estas últimas), y «casos difíciles», en los cuales el operador interpreta las disposiciones (ya que surgen incertidumbres sobre el significado de esta última que exigen al operador escoger uno de los posibles significados y justificarlo), esto es, hay significado sin interpretación.  
En este sentido, los argumentos interpretativos son recursos a disponibilidad del intérprete para justificar una determinada interpretación de una norma jurídica cuando se presentan dudas sobre el significado de esta en los casos difíciles, es decir, razonamientos que el intérprete ofrece para fundamentar una de las posibles interpretaciones de una norma jurídica que es considerada correcta por aquel. En suma, los operadores jurídicos emplean argumentos interpretativos cuando solventan dudas sobre el significado de una disposición jurídica.
- La concepción de los argumentos interpretativos de Tarello se fundamenta en una teoría de la interpretación distinta a la formulada por Alexy y MacCormick. Según el primero, la interpretación jurídica es la operación por medio de la cual los operadores jurídicos deciden atribuir un particular significado a una disposición cualquiera y, en consecuencia, siempre que el operador utiliza una disposición la interpreta, es decir, no hay significado sin interpretación.  
De esta manera, los argumentos interpretativos son razonamientos formulados por los intérpretes para acreditar una determinada atribución de significado a disposiciones jurídicas. En definitiva, los operadores jurídicos usan argumentos interpretativos cuando motivan su interpretación de (o atribución de significado a) cualquier disposición jurídica.
- La primera Corte Constitucional del Ecuador utilizó 263 argumentos interpretativos en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales: el argumento sistemático en 104 ocasiones, el argumento autoritativo 87 veces, el argumento a partir de los principios en 29 oportunidades, el argumento teleológico en 18 ocasiones, el argumento naturalista 10 veces, el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica en 6 oportunidades, el argumento apagógico 3 veces, el argumento dogmático en 2 ocasiones, el argumento de la *sedes materiae* en 1 ocasión, el argumento de la completitud de la disciplina jurídica 1 vez, el argumento *a fortiori* en 1 oportunidad y el argumento *a contrario* en 1 ocasión.
- El argumento interpretativo utilizado con mayor frecuencia en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales emitidas por la primera Corte Constitucional fue el argumento sistemático. De las 104 ocasiones en que dicho órgano jurisdiccional empleó el argumento mencionado, en 51 oportunidades recurrió a la Constitución; 35 ocasiones a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 2 veces al Convenio 169 de la OIT, Reglamento para la Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, Código

del Trabajo, Código de Procedimiento Civil y Convención Americana de Derechos Humanos; 1 ocasión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, normas de *ius cogens*, regla jurisprudencial expresada en la Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, Código Civil, Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH-SIDA, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de Extradición y Ley Orgánica Electoral.

Este amplio uso del argumento sistemático se debió, probablemente, a dos motivos: a) la aplicación de los arts. 427 de la Constitución y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, b) la ideología ampliamente difundida en la cultura jurídica ecuatoriana según la cual el derecho objetivo es considerado un sistema.

En lo que respecta a a), ambos artículos prescriben que las disposiciones jurídicas en materia constitucional deben interpretarse en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Además, el art. 3, núm. 5, de la ley citada dispone que las normas jurídicas “deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo”. Así, el recurso a disposiciones de la Constitución o de la ley señalada para justificar las interpretaciones identificadas en el segundo capítulo de esta investigación representa el 82,69% del total de veces en que el argumento sistemático fue usado. En suma, existieron enunciados emitidos por los constituyentes y legisladores que prescribieron la forma de interpretar las disposiciones constitucionales, preceptos que fueron acatados considerablemente por los jueces de la primera Corte Constitucional del Ecuador al emplear constantemente el argumento sistemático.

En lo que corresponde a b), se manifestó previamente (en la sección 1.4.2) que la ideología en cuestión considera que el derecho objetivo es un sistema, esto es, un todo ordenado que presenta una unidad orgánica. Los artículos citados ut supra son una muestra de dicha ideología. Asimismo, esta es impartida ampliamente en las cátedras universitarias de las escuelas de derecho del país, basadas principalmente en el estudio de los disposiciones jurídicas y las relaciones que existen entre estas (como la pertenencia de las disposiciones a un mismo documento jurídico, a una misma sección de este, a una misma materia; la identidad del objeto regulado por las disposiciones; etc.)

- El segundo argumento interpretativo utilizado con mayor frecuencia por la primera Corte Constitucional en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales fue el argumento autoritativo. De las 87 ocasiones en que este fue usado, el máximo órgano de justicia constitucional recurrió 52 veces a criterios jurisprudenciales emitidos por la misma Corte en sentencias anteriores, 26 ocasiones a opiniones o criterios doctrinales, 4 oportunidades a criterios de la Corte Constitucional de Colombia, 3 veces a criterios expresados por el Tribunal Constitucional Español, 1 ocasión a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 1 vez a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La principal causa de la considerable utilización del argumento autoritativo fue la vigencia en el ordenamiento jurídico y en la cultura jurídica ecuatoriana de dos valores frecuentemente considerados esenciales en el derecho: a) la certeza y previsibilidad de las futuras aplicaciones del derecho; y, b) la igualdad en el tratamiento de casos similares. Estos valores fueron positivizados por el constituyente en el art. 82 de la Constitución, disposición que regula el derecho de las personas a la seguridad jurídica. Así, para garantizar los citados valores y en aplicación de lo prescrito por el mencionado artículo, los jueces de la primera Corte Constitucional recurrieron en 52 ocasiones a criterios emitidos previamente

por la propia Corte, lo cual representa el 59,77% del total de argumentos autoritativos.

- El tercer argumento interpretativo empleado con mayor frecuencia por la primera Corte Constitucional en las sentencias que contienen reglas jurisprudenciales fue el argumento a partir de los principios. De las 29 ocasiones en que dicho órgano jurisdiccional usó el mencionado argumento, en 14 oportunidades recurrió a principios positivizados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en 12 ocasiones a principios regulados en la Constitución, y, 3 veces a principios de elaboración doctrinal que no se encuentran positivizados en documento jurídico alguno.

El motivo principal del uso del argumento a partir de los principios fue el auge del neoconstitucionalismo y su incorporación a la Constitución de 2008. Una de las características primordiales del neoconstitucionalismo es la distinción entre dos tipos de normas: principios y reglas. Los primeros son normas fundamentales, genéricas, derrotables y con un antecedente abierto, mientras las segundas son normas precisas, inderrotables y con un supuesto de hecho cerrado. Esta distinción conceptual fue incorporada por los constituyentes y, posteriormente, por los legisladores en leyes, códigos, reglamentos, etc. Al ser los principios normas que otorgan fundamento ético-político a las reglas, estos permiten a los operadores jurídicos justificar sus interpretaciones de disposiciones jurídicas que consideran ajustadas a estos principios. Así, al existir una amplia variedad de principios positivizados en los documentos jurídicos, los jueces de la primera Corte Constitucional dispusieron de una pluralidad de instrumentos para desarrollar su actividad interpretativa y, por ello, el recurso a principios para justificar sus atribuciones de significado representó el 11,03% del total de argumentos interpretativos empleados.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, P. (2016). *La transformación de las fuentes del ordenamiento ecuatoriano: El precedente constitucional (Tesis doctoral)*. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
- Alchourrón, C., & Bulygin, E. (1998). *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- Alexy, R. (1995). *Teoría del discurso y derechos humanos*. (L. Villar, Trad.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2007). *Teoría de la Argumentación Jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*. (M. Atienza, & I. Espejo, Trads.) Lima: Palestra Editores.
- Aristóteles. (1982). *Tratados de Lógica (Órganon) (Vol. I)*. (M. Candel, Trad.) Madrid: Editorial Gredos.
- Atienza, M. (2005). *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Atienza, M. (2007). Argumentación y Constitución. En J. Aguiló, M. Atienza, & J. Ruiz Manero, *Fragmentos para una Teoría de la Constitución* (págs. 113-182). Madrid: lustel.
- Atienza, M. (2013). *Curso de argumentación jurídica*. Madrid: Editorial Trotta.
- Austin, J. L. (1975). *Ensayos filosóficos*. (A. García, Trad.) Madrid: Revista de Occidente.
- Bobbio, N. (1993). *El positivismo jurídico*. (R. De Asís, & A. Greppi, Trads.) Madrid: Editorial Debate.
- Bobbio, N. (2002). *Teoría General del Derecho* (Segunda ed.). Bogotá: Editorial Temis.
- Carrió, G. (1986). *Notas sobre derecho y lenguaje* (Tercera ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Chiassoni, P. (2016). *El discreto placer del positivismo jurídico*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Chiassoni, P. (2018). *La tradición analítica en la Filosofía del Derecho. De Bentham a Kelsen*. (F. Morales, Trad.) Lima: Palestra Editores.
- Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Registro Oficial 449. Quito: Asamblea Nacional Constituyente 2007-2008.
- Dictamen N.º 001-13-DCP-CC, Caso N.º 0002-10-CP (Corte Constitucional del Ecuador, 25 de Septiembre de 2013).
- Fassò, G. (1996). *Historia de la Filosofía del Derecho 3. Siglos XIX y XX*. (J. Lorca, Trad.) Ediciones Pirámide: Madrid.
- Ferrater Mora, J. (1965). *Diccionario de filosofía* (Quinta edición ed., Vol. II). Buenos Aires: Editorial Sudamericana.



- Frege, G. (1973). *Estudios sobre semántica*. Barcelona: Ediciones Ariel.
- García Suárez, A. (1997). *Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Guastini, R. (2014). *Interpretar y argumentar*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Guastini, R. (2016). *La sintaxis del derecho*. (Á. Nuñez Vaquero, Trad.) Madrid: Marcial Pons.
- Guastini, R., & Rebuffa, G. (2002). Introducción. En G. Tarello, *Cultura jurídica y política del derecho* (págs. 1-36). Granada: Editorial Comares.
- Kelsen, H. (1982). *Teoría pura del derecho*. (R. Vernengo, Trad.) Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Kelsen, H. (2012). Prefacio. Sobre la Interpretación. (A. Nuñez Vaquero, Trad.). *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 180-184.
- Klatt, M. (2017). *Hacer el derecho explícito. Normatividad semántica en la argumentación jurídica*. (F. Campos, Trad.) Madrid: Marcial Pons.
- Larenz, K. (1980). *Metodología de la ciencia del derecho*. (M. Rodríguez, Trad.) Barcelona: Editorial Ariel.
- Lifante, I. (2015). Interpretación jurídica. En J. L. Fabra, & V. Rodríguez (Edits.), *Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho* (Vol. II, págs. 1348-1387). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MacCormick, N. (2010). Argumentación e Interpretación en el Derecho. *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 33, 65-78.
- MacCormick, N. (2016). *Retórica y Estado de Derecho: Una teoría del razonamiento jurídico*. Lima: Palestra Editores.
- MacCormick, N. (2018). *Razonamiento jurídico y teoría del derecho*. (J. Gascón, Trad.) Lima: Palestra Editores.
- Ross, A. (1994). *Sobre el derecho y la justicia* (Quinta ed.). Buenos Aires: Eudeba.
- Ross, A. (2007). *Teoría de las fuentes del derecho. Una contribución a la teoría del derecho positivo sobre la base de investigaciones histórico-dogmáticas*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Ruiz, A., Aguirre, P., & Ávila, D. (Edits.). (2016). *Desarrollo jurisprudencial de la primera Corte Constitucional (Periodo noviembre de 2012 – noviembre de 2015)*. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.
- Savigny, F. C. (1878). *Sistema del derecho romano actual* (Vol. I). Madrid: F. Góngora y Compañía.
- Sentencia N.º 001-10-PJO-CC, Caso N.º 0999-09-JP (Corte Constitucional del Ecuador, 22 de Diciembre de 2010).
- Sentencia N.º 001-13-SCN-CC, Caso N.º 0535-12-CN (Corte Constitucional del Ecuador, 06 de Febrero de 2013).

- Sentencia N.º 001-14-PJO-CC, Caso N.º 0067-11-JD (Corte Constitucional del Ecuador, 23 de Abril de 2014).
- Sentencia N.º 002-14-SCN-CC, Caso N.º 022-11-CN (Corte Constitucional del Ecuador, 15 de Enero de 2014).
- Sentencia N.º 003-15-SCN-CC, Caso N.º 0460-12-CN (Corte Constitucional del Ecuador, 11 de Marzo de 2015).
- Sentencia N.º 004-13-SAN-CC, Caso N.º 0015-10-AN (Corte Constitucional del Ecuador, 13 de Junio de 2013).
- Sentencia N.º 006-13-SIS-CC, Caso N.º 0053-12-IS (Corte Constitucional del Ecuador, 19 de Diciembre de 2013).
- Sentencia N.º 016-13-SEP-CC, Caso N.º 1000-12-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 16 de Mayo de 2013).
- Sentencia N.º 024-15-SIS-CC, Caso N.º 0070-11-IS (Corte Constitucional del Ecuador, 08 de Abril de 2015).
- Sentencia N.º 029-14-SEP-CC, Caso N.º 1118-11-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 06 de Marzo de 2014).
- Sentencia N.º 034-13-SCN-CC, Caso N.º 0561-12-CN (Corte Constitucional del Ecuador, 30 de Mayo de 2013).
- Sentencia N.º 045-13-SEP-CC, Caso N.º 0499-11-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 31 de Julio de 2013).
- Sentencia N.º 071-15-SEP-CC, Caso N.º 1687-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 18 de Marzo de 2015).
- Sentencia N.º 080-13-SEP-CC, Caso N.º 0445-11-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 09 de Octubre de 2013).
- Sentencia N.º 102-13-SEP-CC, Caso N.º 0380-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 04 de Diciembre de 2013).
- Sentencia N.º 110-14-SEP-CC, Caso N.º 1733-11-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 23 de Julio de 2014).
- Sentencia N.º 113-14-SEP-CC, Caso N.º 0731-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 30 de Julio de 2014).
- Sentencia N.º 182-15-SEP-CC, Caso N.º 1493-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 03 de Junio de 2015).
- Sentencia N.º 239-15-SEP-CC, Caso N.º 0782-13-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 22 de Julio de 2015).
- Sentencia N.º 265-15-SEP-CC, Caso N.º 1204-12-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 12 de Agosto de 2015).
- Tarello, G. (1965). Osservazioni sulla individuazione dei precetti. La semantica del neustico. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (XIX), 405-435.



- Tarello, G. (1974). *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Tarello, G. (2002). *Cultura jurídica y política del derecho*. Granada: Editorial Comares.
- Tarello, G. (2011). El “problema” de la interpretación: una formulación ambigua. En S. Pozzolo, & R. Escudero (Edits.), *Disposición vs. Norma* (págs. 70-79). Lima: Palestra Editores.
- Tarello, G. (2011). La semántica del neústico. Observaciones sobre la «parte descriptiva» de los enunciados prescriptivos. En J. Ferrer, & G. B. Ratti (Edits.), *El realismo jurídico genovés* (págs. 15-39). Madrid: Marcial Pons.
- Tarello, G. (2013). *La interpretación de la Ley*. (D. Dei Vecchi, Trad.) Lima: Palestra Editores.
- Von Wright, G. H. (1970). *Norma y acción: una investigación lógica*. Madrid: Editorial Tecnos.